



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Sociales

Unidad de Posgrado

¿De qué hablamos cuando hablamos de populismos?

Populismos y populistas en el Perú. Siglos XIX – XX

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Sociología con
mención en Estudios Políticos

AUTOR

Javier Iván SARAVIA SALAZAR

ASESOR

Manuel Enrique CASTILLO OCHOA

Lima, Perú

2017



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Saravia, J. (2017). *¿De qué hablamos cuando hablamos de populismos? Populismos y populistas en el Perú. Siglos XIX - XX*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

1532

10P
327

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE POSGRADO

**ACTA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA,
MENCION EN ESTUDIOS POLÍTICOS**

En Lima, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Grados de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a horas 1:30 p.m., bajo la Presidencia del Dr. FRANCISCO FELIPE QUIROZ CHUECA y con la concurrencia de los demás Miembros del Jurado Examinador, se inició el acto académico invitando al graduando **JAVIER IVÁN SARAVIA SALAZAR** para que realice la sustentación de su Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Sociología, mención en Estudios Políticos, titulada:

**“¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE POPULISMOS?
POPULISMOS Y POPULISTAS EN EL PERÚ. SIGLOS XIX-XX”**

A continuación fue sometido a las objeciones por parte del Jurado. Terminada esta prueba y verificada la votación; se consignó la calificación correspondiente a:

..... 3 muy bueno 17

Por cuanto, el Jurado, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el Grado Académico de Magíster en Sociología, mención en Estudios Políticos, al Bachiller **JAVIER IVÁN SARAVIA SALAZAR**. Siendo las 2:30 p.m. y para constancia dispuso se extendiera la presente Acta y firmaron:

Dr. Francisco Felipe Quiroz Chueca.
PRESIDENTE

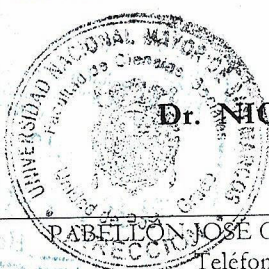
Mg. Enrique Marino Jaramillo García.
MIEMBRO

Dr. Jaime Rodolfo Ríos Burga.
MIEMBRO

Dr. César Armando Germaná Cavero.
MIEMBRO

Mg. Manuel Enrique Castillo Ochoa.
ASESOR

Dr. NICOLÁS JAVIER LYNCH GAMERO
DIRECTOR



PABELLÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - CIUDAD UNIVERSITARIA

Teléfono: 6197000 Anexo 4003, 4004. Lima - Perú.

Correo: upg.sociales@unmsm.edu.pe, upgccss@yahoo.es,

Web: <http://sociales.unmsm.edu.pe/>

Página de aceptación de tesis

A mi madre, Rufina Salazar Yataco

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se ideó y gestó en las clases de maestría, por ello mi agradecimiento a mis compañeros y profesores, quienes con sus comentarios y sugerencias, enriquecieron significativamente las ideas que el populismo como problema político y académico me suscitaba y me llevaron a plantearlo como proyecto de tesis. Un agradecimiento a los profesores Max Meneses Rivas (†), Carlos Fernández Fontenoy y Manuel Castillo Ochoa. Un especial agradecimiento para Manuel Castillo, qué aceptó ser mi asesor, y revisó con rigor los avances. Para Francisco Quiroz, profesor principal de la Escuela de historia de la UNMSM, con quién conversé capítulos de la tesis, quedo muy agradecido por todas sus observaciones, pero sobre todo por su amistad. Mis compañeros: Rubén Ticona, Carlos, Clay Quicaño, Paul Munguía, Olga Trujillo, Paloma Fujishima. Raquel Flores, y Manuel Súnico; desde sus diferentes campos profesionales contribuyeron con sus ideas, comentarios, apoyo y amistad para continuar con este proyecto.

En el plano más íntimo, mi familia fue el gran motor para seguir avanzando así como mi principal pilar en los momentos adversos. Gracias por todo el apoyo a mis hermanos Sara, Silvia y Antonio, mi cuñado José y mi sobrino Diego, quienes con su confianza en mis capacidades, me dieron el estímulo suficiente para seguir adelante.

El agradecimiento mayor se lo debo a mis padres Rufina Salazar Yataco y Antonio Saravia Castilla, quienes físicamente ya no me acompañan, pero que son parte fundamental e inspiración de cada uno de mis actos y proyectos.

Gracias a todos.

Lima, diciembre de 2017

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....	16
1.1. Situación problemática	
1.2. Formulación del problema	
1.3. Justificación teórica	
1.4. Justificación práctica	
1.5. Objetivos	
1.5.1. Objetivo general	
1.5.2. Objetivos específicos	
1.6. Hipótesis	
1.6.1. Hipótesis general	
 Capítulo 2. MARCO TEÓRICO.....	 29
2.1. Marco filosófico de la investigación	
2.2. Antecedentes de investigación ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? Orígenes e historiografía del populismo	
2.1.1. Los orígenes Los orígenes del populismo: pragmatismo político, modernización y simpatía por el pueblo	
2.1.1.1. El Bonapartismo	
2.1.1.2. El partido del pueblo	
2.1.1.3. El populismo ruso	
2.1.1.4. Valoración de estos antecedentes del populismo por la crítica	
2.3. Bases teóricas. La preocupación intelectual por el populismo	
2.3.1. La polisemia conceptual	
2.3.2. Intentos de síntesis	
2.3.2.1. Un populismo singular: América Latina	
2.3.2.2. Críticas a la “noción” de populismo	
2.3.2.3. El embrujo conceptual de la cenicienta	
2.3.2.4. Los reflejos en el espejo populista	
2.3.2.5. Las olas populistas	
2.4. La región: fines del siglo XIX e inicios del siglo XX	
2.5. La experiencia populista latinoamericana	

- 2.6. El populismo clásico o histórico latinoamericano
 - 2.6.1. Brasil: El Estado Novo de Getulio Vargas
 - 2.6.1.1. El populismo del Estado Novo
 - 2.6.2. México: Lázaro Cárdenas
 - 2.6.2.1. Nacionalismo y Populismo
 - 2.6.3. Argentina: Juan Domingo Perón
 - 2.6.3.1. Sindicalismo y Peronismo
- 2.7. El neopopulismo: refugio para el desconcierto y el statu quo
- 2.8. Una historiografía del populismo en el Perú
 - 2.8.1. Perspectiva Sociológica-Funcionalista
 - 2.8.2. Crítica Económica y Neoliberal
 - 2.8.3. Neopopulismo
 - 2.8.4. Perspectiva Histórica
 - 2.8.5. Nuevos estudios críticos

CAPÍTULO 3 Una difícil transición: de la ciudadanía restringida a la política de masas 129

- 3.1. Caudillismo y tradición autoritaria
 - 3.1.1. Caudillismo y personalismo político
 - 3.1.2. La dinámica caudillo-pueblo
 - 3.1.3. La modernización tradicionalista
 - 3.1.4. El ideal Republicano
 - 3.1.5. El Estado Caudillista (1821-1896)
 - 3.1.6. La ciudadanía corporativa
- 3.2. La democracia y el espacio público
 - 3.2.1. La Democracia
 - 3.2.2. La “esfera pública”
 - 3.2.3. La Esfera Pública en el Siglo XIX
 - 3.2.4. La Esfera Pública en el Siglo XX
- 3.3. De la ciudadanía restringida (1896-1930) a la política de masas (1930-1989)
- 3.4. Las Incursiones Democratizadoras
- 3.5. La ciudadanía

CAPÍTULO 4. EL DISEÑO INSTITUCIONAL 135

4.1. El Presidencialismo

4.2. La Constitución

4.2.1. La Herencia de Cádiz

4.2.2. Las Constituciones de 1896-1990

4.2.3. La constitución de 1860

4.2.4. La Constitución de 1933

4.2.5. La Constitución de 1979

4.3. El Sistema electoral

4.3.1. El sistema electoral decimonónico

4.3.2. El sistema electoral del Siglo XX

4.3.3. La Junta Electoral Nacional de 1896

4.3.4. El moderno sistema electoral 1931

4.3.5. La Ley N° 12391

4.3.6. Ley N° 14250

CAPÍTULO 5. Populismos y populistas: la experiencia peruana 228

5.1. Nicolás de Piérola (1895-1899). “protopopulismo”, la herencia caudillista

5.1.1. El contexto político

5.1.2. El liderazgo y la construcción del héroe

5.1.3. El Partido Demócrata

5.1.4. El Gobierno de Piérola (1895-1899)

5.2. Guillermo Billinghurst: “El pan grande y los orígenes del populismo”

5.3. Luis M. Sánchez Cerro: Populismo de derecha y fascismo

5.3.1. La fundación del Partido Unión Revolucionaria y la tendencia fascista

5.3.2. Las Elecciones de 1931

5.3.3. La llegada al poder

5.3.4. La lucha política

5.3.5. El asesinato de Sánchez Cerro

5.4. Fernando Belaunde Terry: El Pueblo lo hizo

5.4.1. Nace Acción Popular

- 5.4.2. Las elecciones de 1963
- 5.4.3. El gobierno del presidente Belaunde (1963-1968)
- 5.5. Velasco: La Voz de la Revolución
 - 5.5.1. El golpe de 1968
 - 5.5.2. El desarrollo hacia dentro
 - 5.5.3. Las Reformas
 - 5.5.4. La subordinación de los actores sociales
 - 5.5.5. El liderazgo
- 5.6. Alan García Pérez: El futuro diferente
 - 5.6.1. Un producto aprista
 - 5.6.2. El Político
 - 5.6.3. La cultura política del Líder
 - 5.6.4. Los balconazos
 - 5.6.5. El triunfo electoral
 - 5.6.6. La heterodoxia nacionalista
 - 5.6.7. Crisis del vínculo social y descomposición de los actores

CAPÍTULO 6: Resultados y Discusión. Características del populismo peruano 294

- 6.1. El populismo como producto de la democracia
- 6.2. La importancia del diseño institucional
- 6.3. La construcción del pueblo
- 6.4. No todo reformismo es populismo
- 6.5. La verdadera herencia del caudillismo el corporativismo

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1	59
Cuadro 2	155
Cuadro 3	158
Cuadro 4	167
Cuadro 5	168
Cuadro 6	168
Cuadro 7	186
Cuadro 8	217
Cuadro 9	240
Cuadro 10	242
Cuadro 11	250
Cuadro 12	263
Cuadro 13	265
 Gráfico 1	 101
Figura 1	246

RESUMEN

El populismo es uno de los conceptos de mayor dificultad dentro de las ciencias sociales y la ciencia política. Su significado y recurrencia en la historia latinoamericana han sido motivo de intensos y, a veces, acalorados debates entre intelectuales de todas las posiciones políticas e ideológicas sin que con ello se haya llegado a consensos definitivos sobre el qué es el populismo. Encierra atribuciones más negativas que positivas que lo relacionan con el autoritarismo, el oportunismo político, la demagogia, el desprecio hacia las elites políticas y las instituciones democráticas formales, la participación popular, el clientelismo, la prodigalidad económica y cierta carga de impredecibilidad en las decisiones políticas por parte del gobernante. Sin embargo, su aparición en diferentes momentos de la historia latinoamericana representó una apertura del sistema democrático y la llegada de sus beneficios a una mayor cantidad de ciudadanos excluidos del sistema político-económico hasta ese momento.

El populismo recurre a una personificación de la política en un líder carismático y hábil, capaz de ser vocero de un discurso articulador de demandas y que pueda dar unidad a una colectividad heterogénea. Esta característica del líder populista ha invisibilizado procesos complejos de la sociedad peruana en su camino o lucha por una vida democrática y la consolidación de su ciudadanía. Herederos de una tradición caudillista, desde los orígenes de la República, la sociedad peruana está marcada por la aparición de líderes políticos de gran arrastre popular, que con una retórica mesiánica, y un manifiesto desprecio por los mecanismos de intermediación política institucionalizados, remecieron la política nacional y apuntaron los reflectores del interés académico hacia su accionar, en desmedro de procesos de movilización social, coyunturas económicas, y el juego por el poder de los actores políticos.

Estos líderes encontraron canales discursivos para articular a la sociedad civil en un proyecto de “comunidad política”, pero además existía (y existe) una sociedad civil cuyas demandas no son satisfechas por el Estado, por lo

que se articulan social y políticamente para construir modelos democráticos alternativos. Pero, tanto líderes populistas como sociedad civil se desenvuelven dentro de un diseño institucional con reglas que ponen límites a su accionar. Estos tres campos de análisis (el liderazgo populista, la dinámica de actores sociales y la estructura político electoral) han sido abordados más de manera aislada que complementaria por lo que se tiende a desdibujar el fenómeno cayendo en explicaciones parciales que encierran al populismo como una patología de sociedades democráticas no consolidadas.

En Perú el debate sobre el populismo está más en manos de sociólogos que de historiadores, los primeros han dirigido el debate asignándole al populismo un espacio histórico temporal en la década de los años cincuenta/sesenta del siglo pasado, el llamado “populismo histórico”. Entendiéndose al populismo de tres maneras: 1) como un espacio de transición del autoritarismo a la democracia, 2) como la “versión latinoamericana” del sistema democrático y 3) en oposición a la democracia como una manifestación contraria a dicho sistema.

Para adentrarnos en el análisis del populismo en el Perú analizaremos a seis regímenes de gobierno entre 1895 y 1990 que fueron considerados como populismo, para ello emplearemos las técnicas del análisis comparativo y el análisis de actores.

Palabras claves:

Populismo, historia política peruana, siglos XIX y XX, democracia, y ciudadanía.

ABSTRACT

Populism is one of the most difficult concepts within the social sciences and political science. Its meaning and recurrence in Latin American history have been the subject of intense and, at times, heated debates among intellectuals of all political and ideological positions without this having reached a definitive consensus on what is populism. It includes more negative than positive attributions that relate it to authoritarianism, political opportunism, demagoguery, contempt for political elites and formal democratic institutions, popular participation, clientelism, economic prodigality and a certain burden of unpredictability in decisions policies on the part of the ruler. However, its appearance at different times in Latin American history represented an opening of the democratic system and the arrival of its benefits to a greater number of citizens excluded from the political-economic system until that moment.

Populism resorts to a personification of politics in a charismatic and capable leader, capable of being a spokesman of a discourse articulating demands and that can give unity to a heterogeneous community. This characteristic of the populist leader has made invisible the complex processes of Peruvian society in its path or struggle for a democratic life and the consolidation of its citizenship. Heirs of the tradition of caudillismo, from the origins of the Republic, Peruvian society is marked by the emergence of popular political leaders, who with a messianic rhetoric, and a manifest disregard for the mechanisms of institutionalized political intermediation, shaken politics national and pointed the reflectors of academic interest towards their actions, at the expense of processes of social mobilization, economic conjunctures, and the game for the power of political actors.

These leaders found discursive channels to articulate civil society in a "political community" project, but there was also (and there is) a civil society whose demands are not met by the State, so they are articulated socially and politically to build models alternative democratic. But, both populist leaders and civil society are developed within an institutional design with rules that

set limits to their actions. These three fields of analysis (the populist leadership, the dynamics of social actors and the electoral political structure) have been addressed more in an isolated way than complementary, which tends to blur the phenomenon, falling into partial explanations that confine populism as a pathology of unconsolidated democratic societies.

In Peru the debate on populism is more in the hands of sociologists than historians, the former have led the debate by assigning populism a temporary historical space in the decade of the 1950s / 1960s, the so-called "historical populism." Understanding populism in three ways: 1) as a space of transition from authoritarianism to democracy, 2) as the "Latin American version" of the democratic system and 3) as opposed to democracy as a manifestation contrary to that system.

To delve into the analysis of populism in Peru we will analyze six government regimes between 1895 and 1990 that were considered as populism, for which we will use the techniques of comparative analysis and stakeholder analysis.

Keywords:

Populism, Peruvian political history, nineteenth and twentieth centuries, democracy, and citizenship.

PRESENTACIÓN

En el primer capítulo haremos un recuento y análisis historiográfico sobre cómo ha sido abordado el tema del populismo por la Academia. Dividiremos la exposición en tres partes. La primera de ellas dedicado al origen del término y sus dificultades de conceptualización. Cuyos orígenes, en el plano más ligado a la praxis política, nos remiten a Napoleón III y su peculiar estilo político conocido como el Bonapartismo. En el plano de la organización social nos remiten a la Norteamérica de fines del siglo XIX con el impacto de la “economía global” en el ciudadano promedio asalariado ligado a la agricultura y a los telégrafos. Desde una perspectiva más humanista nos remite a la Rusia de finales del siglo XIX y al movimiento intelectual *narodnik*. Seguidamente, se ofrecerá un recuento historiográfico de las principales posiciones teóricas sobre el populismo, resaltándose sus principales contribuciones al debate actual sobre la construcción de las identidades políticas. Finalmente, expondremos el estado de la cuestión en nuestro país, destacando la postergación del debate sobre el populismo con respecto al nivel alcanzado en la región y en Europa.

En el segundo capítulo nos ocuparemos del tránsito de la política oligárquica a una política de masas. Dividiremos la exposición en tres partes. Ocupándonos en primer lugar, de las características del caudillismo y su influencia en la política peruana. Esta particular forma de liderazgo político autoritario que debilitó a las instituciones estatales, creó un culto al líder y fortaleció el clientelismo político. Estas características serán recurrentes dentro de la política peruana aunándose a ellas el prejuicio y temor hacia la participación popular presentes desde la época pre independentista.

En el tercer capítulo, expondremos como fue evolucionando el sistema electoral, y se construyó el diseño político sobre el cual tendrán que operar los actores políticos ya sea adecuándose o enfrentándose directamente a él.

El cuarto capítulo, está dedicado a hacer el ejercicio comparativo de los regímenes seleccionados para el análisis. Partiendo en primer lugar de la presentación de estos regímenes, en su contexto y evolución dentro de la historia política peruana.

Finalmente, el quinto capítulo nos enfocaremos en señalar las características más importantes del populismo peruano. En esta investigación no abordamos al populismo como una patología de la democracia, ni como algo *per se* malo para la vida democrática. Muy por el contrario, lo vemos como una de las caras de la democracia, quizás no la más adecuada y con la mayor cantidad de imprevisibilidad para los actores políticos. Pero estas características son la expresión de la conflictividad entre los actores políticos y del peligroso “pasivo” de promesas no cumplidas. En concreto, parafraseando a Jorge Basadre, del “incumplimiento de *la* promesa de la vida *democrática* peruana”. Las expectativas de igualdad social y democracia que llegaron con la modernidad post independencia calaron mucho más hondo en la ciudadanía de lo que se menciona y se cree, por un sector dominante de la academia. Recientes investigaciones apuntan hacia ello (García-Bryce 2008; Forment 2012 y Whipple 2014). Son los vicios de la elite los que hicieron de la modernidad un recurso más para perpetuar la desigualdad social estructural heredada del pasado virreinal. Lo que ingeniosamente llamó Fernando de Trazegnies (1980) “la modernidad tradicionalista”.

No pretendemos hacer una apología del populismo sino resaltar que su presencia dentro de la política, no solo nacional, sino regional e internacional, se da por razones que no tienen que ver con una suerte de embrujo del líder populista efectuado a una “masa popular” ignorante, ni mucho menos es la negación de la modernidad y la democracia. El fenómeno populista se da precisamente en un contexto de modernización y de ampliación de la democracia. Es la incapacidad de las elites por hacer efectivo el sistema democrático lo que genera la irrupción de líderes populistas. Líderes que no necesariamente son populistas convencidos, sino que deben recurrir a este tipo de discursos y acciones para atenuar la

conflictividad social, y frenar el ascenso de propuestas que derrumben el sistema establecido.

Chantal Delsol (2015), analizando al populismo desde el lado europeo, aplicable también a la experiencia latinoamericana, destaca que:

“Lo opuesto a la emancipación de la Ilustración es el arraigo en lo particular (tradiciones, ritos, creencias, grupos restringidos). La clase popular tiene la sensación de que la elite ha llevado demasiado lejos la emancipación, desde todos los puntos de vista y en el sentido de una indiferencia hacia los principios y las costumbres de los grupos restringidos. Por eso se irrita y por eso se convierte en un adversario para la elite. La elite no responde con argumentos sino con desconsideración: describe al particular como un rematado idiota, con el fin de camuflar su estatus de enemigo ideológico. Dice que no entiende nada, pero solo para no tener que argumentar con su opinión inoportuna (p.14).

En esencia el descrédito del populismo y su transformación en insulto político, viene de la mano con buscar silenciar cualquier opinión crítica respecto del modelo político-económico neoliberal, que al decir de sus defensores, representa el modelo que mejor garantiza la perdurabilidad del sistema democrático liberal y las libertades constitucionales.

En esta investigación se busca dar una visión más completa sobre el populismo en nuestro país, buscando dar una perspectiva histórica y sociológica que contribuya a un análisis político más profundo. Estas perspectivas no siempre son complementarias, pero su integración es necesaria para analizar un fenómeno tan recurrente en nuestra historia política, y que goza de tanta mención, que su definición se ha vuelto terriblemente vaga e imprecisa. Por estas razones buscamos contribuir a perfilar algunas características de lo que se denomina populismo en nuestro país, y de este modo identificar las razones que posibilitaron su aparición, las características del liderazgo populista en nuestro país, y de cómo se generó la construcción de la identidad política colectiva alrededor del populismo.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

El populismo es uno de los conceptos de mayor dificultad dentro de las ciencias sociales y la ciencia política. Su significado y recurrencia en la historia latinoamericana han sido motivo de intensos y, a veces, acalorados debates entre intelectuales de todas las posiciones políticas e ideológicas sin que se haya llegado a consensos definitivos sobre el qué es el populismo. Encierra atribuciones más negativas que positivas que lo relacionan con el autoritarismo, el oportunismo político, la demagogia, el desprecio hacia las elites políticas y las instituciones democráticas formales, la participación popular, el clientelismo, la prodigalidad económica y cierta carga de impredecibilidad en las decisiones políticas por parte del gobernante. Sin embargo, su aparición en diferentes momentos de la historia latinoamericana representó una apertura del sistema democrático y la llegada de sus beneficios a una mayor cantidad de ciudadanos excluidos del sistema político-económico hasta ese momento.

En un libro de reciente publicación *El eterno retorno del populismo en América Latina y el Caribe* (2012) se puso en evidencia el aun vivo debate existente sobre el tema, tanto en su intento de conceptualización como en su aplicabilidad para el análisis político. La presencia de regímenes de retórica socialista y de arrastre popular elegidos democráticamente en la región en las primeras décadas del nuevo milenio reabrió con mucha fuerza el debate y la crítica. Se habló peyorativamente de un regreso del populismo a la región¹, el cual habría reaparecido desde los años noventa del siglo pasado

¹ Como ejemplo de ese resurgir del interés académico por el populismo está el Seminario de investigación de FLACSO en México “Populismo, buen gobierno y justicia social” creado en el 2005. Este seminario editó tres importantes libros: *Vox populi: Populismo y Democracia en América Latina* (2007), *Política y sociedad en México. Entre el desencuentro y la ruptura* (2008) y *¿Autoritarismo y democracia? Hugo Chávez y Evo Morales* (2009). A partir del 2010 el seminario cambia de nombre a “Procesos políticos contemporáneos de Latinoamérica”.

en forma de populismo neoliberal (*neopopulismo*), vinculado a la derecha, y que desde finales del siglo XX en adelante fue reemplazado por un populismo de izquierda más cercano al populismo original (o histórico) de la década del sesenta de la pasada centuria.

Esta reaparición del tan temido populismo en la región estaría asociada a las consecuencias negativas de las políticas neoliberales en su apuesta ciega por el desarrollo económico y la mano invisible del mercado, como opina Emir Sader (2009), las nuevas experiencias políticas vienen a poner en cuestión el “sentido común neoliberal”². Las ciencias sociales en la región, en general, catalogaron a estos fenómenos como “nuevos gobiernos de izquierda” o simplemente como “gobiernos populistas” (Reano 2012: 61).

Del lado europeo se manifestó también una reaparición del populismo, pero vinculado a la derecha. Fenómeno, que el recientemente fallecido, Tzvetan Todorov (2012) denominó “el espectacular ascenso de los partidos populistas” (pág. 145) y Chantal Mouffe (2009) relaciona como una “consecuencia del consenso pospolítico” que a “falta de un debate democrático efectivo sobre posibles alternativas” entre partidos de derecha e izquierda condujo “en muchos países al triunfo de partidos políticos que afirman *ser la voz del pueblo*” (pág. 72).

Este llamado “populismo de derecha” estaba marcado por un discurso con expresiones xenófobas, anti semitas, anti islamistas, en el inicio de la ahora ya consolidada “crisis migratoria internacional”. Líderes como Pim Fortuyn en Holanda, Pia Kjaersgaard en Dinamarca, Christopher Blocher en Suiza, Jean Marie Le Pen en Francia, y Nikolaos Michaloliakos en Grecia, dirigieron partidos políticos que ponían en medio del debate a la migración externa como causa de la crisis económica de sus respectivos países. Articulando, un discurso integrador basado en el odio anti migrante, haciendo un llamado a la unidad nacional a través de la añoranza de una “comunidad política” primigenia y recurriendo a la demagogia para convencer a un electorado

² *El Nuevo topo: los caminos de la izquierda latinoamericana*. Buenos Aires: Siglo XXI.

exacerbado por las crisis económicas y la aparente (o real) ineficacia del sistema político para atender sus demandas. Propuestas efectistas y oportunistas, pero que eludían realizar cambios de fondo en la política económica de sus respectivos países.

Con este contexto, el populismo resurgió como un fértil campo de investigación teórica para los estudiosos de las ciencias sociales, la democracia y la filosofía política. En contraposición a esta tendencia de las ciencias sociales en la región y en Europa, en el Perú el tema fue dejado de lado por la academia y ha sido muy poco estudiado, salvo honrosas excepciones, desde los años noventa del siglo pasado en adelante. A tal punto que el debate sobre él se centra en los medios de comunicación quienes difunden una visión esencialmente negativa del populismo encasillándolo como un discurso clientelista, retrógrado, autoritario, improvisado, coyuntural y antidemocrático.

1.1. Situación problemática

El populismo recurre a una personificación de la política en un líder carismático y hábil, capaz de ser vocero de un discurso articulador de demandas y que pueda dar unidad a una colectividad heterogénea. Esta característica del líder populista ha invisibilizado procesos complejos de la sociedad peruana en su camino o lucha por una vida democrática y la consolidación de su ciudadanía. Herederos de una tradición caudillista, desde los orígenes de la República, la sociedad peruana está marcada por la aparición de líderes políticos de gran arrastre popular, que con una retórica mesiánica, y un manifiesto desprecio por los mecanismos de intermediación política institucionalizados, remecieron la política nacional y apuntaron los reflectores del interés académico hacia su accionar, en desmedro de procesos de movilización social, coyunturas económicas, y el juego por el poder de los actores políticos.

Estos líderes encontraron canales discursivos para articular a la sociedad civil en un proyecto de “comunidad política”, pero además existía (y existe)

una sociedad civil cuyas demandas no son satisfechas por el Estado, por lo que se articulan social y políticamente para construir modelos democráticos alternativos. Pero, tanto líderes populistas como sociedad civil se desenvuelven dentro de un diseño institucional con reglas que ponen límites a su accionar. Estos tres campos de análisis (el liderazgo populista, la dinámica de actores sociales y la estructura político electoral) han sido abordados más de manera aislada que complementaria por lo que se tiende a desdibujar el fenómeno cayendo en explicaciones parciales que encierran al populismo como una patología de sociedades democráticas no consolidadas.

El concepto de populismo es impreciso, como bien han señalado autores como Francisco Panizza (2009); Gerardo Aboy Carlés (2001) y Oscar Chamosa (2013). Señalando que se ha vuelto “un cliché” escribir sobre el populismo lamentando esta falta de claridad conceptual que pone en duda su utilidad para el análisis político.

En el Perú el debate sobre el populismo está más en manos de sociólogos que de historiadores³, los primeros han dirigido el debate asignándole al populismo un espacio histórico temporal en la década de los años cincuenta/sesenta del siglo pasado, el llamado “populismo histórico”. Entendiéndose al populismo de tres maneras: 1) como un espacio de transición del autoritarismo a la democracia, 2) como la “versión latinoamericana” del sistema democrático⁴ y 3) en oposición a la democracia como una manifestación contraria a dicho sistema.

Los historiadores por su parte se han aventurado tímidamente a esbozar opiniones sobre el concepto, adhiriéndose a los análisis de turno o empleándolos en sus variantes más generales; resaltándose del populismo las características autoritarias del poder ejecutivo, participación y

³ Característica común a todos los países de la región.

⁴ No obstante la oposición de éstas perspectivas se basan casi en los mismos factores para fundamentar sus resultados, destacándose entre ellos la herencia colonial y el autoritarismo.

protagonismo político de las masas populares, y un mayor gasto estatal en programas sociales.

Diversos gobiernos y gobernantes, de finales del siglo XIX en adelante, tanto democráticos como autoritarios, han sido tildados de populistas al presentar alguna o algunas de las características antes enunciadas sin importar que sus programas políticos e intereses fueran muy diferentes; y muchas veces antagónicos entre sí. Al agruparse de esta manera regímenes tan heterogéneos se ha resaltado sobremanera el protagonismo de los líderes populistas en medio de la euforia popular generalizada, caracterizándose a la masa electoral ciudadana como irracional, emocional y clientelista. Por lo que la articulación política y social que permitió el triunfo electoral y la legitimidad de estos líderes pasa a un segundo plano en el análisis, avasalladas por las explicaciones funcionalistas y de carácter macro-económico, por el análisis político de las elites, y en cierta manera por el prejuicio generalizado de subestimar al electorado en sus elecciones políticas.

La calidad de los trabajos es desigual y la reflexión teórica muchas veces repite lugares comunes; no obstante ello se ha buscado rastrear los orígenes del populismo en el país y a los representantes del modelo “populista tipo”, los resultados han sido desconcertantes poniéndose el rótulo populista a regímenes tan diferentes entre sí como lo fueron los de: Nicolás de Piérola, Luis M. Sánchez Cerro, Guillermo Billinghurst, Juan Velasco Alvarado, Fernando Belaunde Terry, Alan García, Alberto Fujimori e inclusive el saliente gobierno de Ollanta Humala fue tildado de populista durante su primer año de gobierno⁵. Aunque algunos científicos sociales y analistas políticos han usado diferentes conceptos de populismo para definir el particular populismo de cada uno de ellos, la regla general ha sido la de encasillar a todos dentro de un macroconcepto de populismo, resaltándose los aspectos autoritarios de estos gobernantes.

⁵ El temor ante un eventual “líder populista” fue expresamente materializado en la prensa tanto escrita como televisiva que asediaron al entonces candidato nacionalista. El vertiginoso cambio en la política de gobierno de Ollanta Humala de “la gran transformación” a “la hoja de ruta” disipó el temor y/o expectativa de un gobierno de corte populista.

Las variantes que hemos detectado son las siguientes: Steve Stein define a Nicolás de Piérola como un protopopulista, el historiador Alejandro Salinas, José Chaupis y Nils Jacobsen⁶ consideran al “Califa” como populista a secas. Jorge Basadre consideraba a Guillermo Billinghurst como populista, los sociólogos Osmar Gonzáles y Peter Blanchard encuentran los orígenes del populismo peruano en él, comparten esta idea los historiadores José Luis Huiza, Humberto Leceta, Luis Alberto Torrejón y Renato Bazán; el investigador norteamericano David Palmer consideraba a Augusto B. Leguía como un populista siguiendo los patrones del caudillismo decimonónico, esta idea la comparte el historiador Augusto Ruíz de Zevallos que dirá que se encuentran en Leguía “los atisbos del Estado populista” y “se pueden hallar las raíces históricas y sociales de las ofertas programáticas de los principales movimientos políticos del siglo XX, como el APRA, la Democracia Cristiana-PPC, Acción Popular y las izquierdas”. Para la década de 1930 Steve Stein y el sociólogo Manuel Castillo se refieren a la propuesta política de Luis M. Sánchez Cerro como un “populismo autoritario”, “populismo conservador” o de “derecha”, los historiadores Alfonso Quiroz y Paulo Drinot comparten esta posición. El APRA, para la mayoría de estudiosos es un partido populista, para algunos es “el partido populista de América”⁷. El historiador Emilio Iván Candela Jiménez encuentra en el gobierno de Oscar R. Benavides prácticas populistas tanto en el uso retórico de sus mensajes así como en la política pro obrera de su gobierno. En esta línea Paulo Drinot, ha resaltado aspectos de la política social del Gobierno de Benavides especialmente en su política de vivienda y con la creación de comedores populares durante su periodo de gobierno⁸. Sinesio López (2016) entre otros investigadores consideran populista a Manuel A. Odría. Existe casi total

⁶ Jacobsen encuentra similitudes en el modo de hacer política del Califa con los políticos populistas vieneses Georg Ritter von Schönerer y Karl Lueger, contemporáneos al caudillo.

⁷ La socióloga María Josefina Huamán Valladares, a contracorriente, cuestiona la denominación de populista al APRA para el periodo 1930-1945. Aunque no es preciso del todo Antonio Zapata (2016) en *Pensando a la derecha*, señala el ropaje de izquierda y la retórica populista que la “derecha peruana limeña y provinciana” adoptaron para participar en la política peruana y conseguir el apoyo popular a través del APRA.

⁸ Al respecto consúltese los estudios de este autor: “Food, Race, and Working-Class Identity: Populism and *Restaurantes Populares* in Peru”, *The Americas*, N° 62 (2), pp. 245-278; y los capítulos 4 y 5 de su reciente libro traducido al español *La seducción de la clase obrera. Trabajadores, raza y la formación del Estado peruano*.

unanimidad en señalar a la primera etapa del Gobierno de las Fuerzas Armadas con Juan Velasco Alvarado como populista, los autores peruanos que más han desarrollado esta postura son los sociólogos peruanos Julio Cotler, Aníbal Quijano, Nicolás Lynch y Sinesio López. El análisis negativo del “populismo político y económico” de Alan García reúne a científicos sociales y economistas, entre ellos: Eliana Cardoso y Ana Helwege, Carlos Boloña Behr⁹, John Crabtree, y Henry Pease¹⁰. Cinthia Sanborn, Romeo Grompone, John Crabtree, entre otros investigadores de formación norteamericana entienden la política de la dictadura de Fujimori como neo-populista^{11 12}.

Reflexionar sobre el populismo en el Perú inevitablemente supone reflexionar también sobre la democracia en nuestro país. Las características de nuestra historia nacional llevaron a entender nuestro proceso democrático como inconcluso e imperfecto con profundos matices autoritarios y una ciudadanía en construcción. Los estudios sobre el populismo en el país se

⁹ Los trabajos del economista destinados al gran público más que a la academia reforzaron la visión negativa del populismo. Ver *Cambio de rumbo* (1993) y *Lecciones de economía* (1999).

¹⁰ En esta forma de ver el populismo el acento está puesto en la falta de responsabilidad fiscal y de planificación, resaltándose el carácter irracional del populismo, así como de las naciones que lo adoptan como modelo. Oscar Chamosa señala que “de alguna manera, esta versión de populismo es la del economista británico Peter Wiles quien en 1967 definió el populismo como un síndrome antes que un programa” (Chamosa, 2013). El trabajo de Wiles al que nos remite el historiador argentino es “Populism: A Syndrome not a Doctrine,” en Ionescu and Gellner (Coord.), *Populism. Its Meaning and National Characteristics*. Londres: Macmillan, pp. 163-79. Ilustrativo de esta manera de ver el populismo es el libro del abogado José Luis Sardón (2013), *Democracia sin populismo: cómo lograrlo*. Madrid: Unión Editorial.

¹¹ Nos adherimos a la opinión de Nicolás Lynch de considerar que no existe una vinculación entre el asistencialismo de Fujimori al “populismo clásico” porque dentro del programa neoliberal existe un programa focalizado de asistencia a poblaciones vulnerables (extrema pobreza) y esta asistencia focalizada no significa necesariamente una ampliación de derechos, y esto le guste o no a sus críticos es una característica de los populismos históricos (Lynch, 2000).

¹² Mención aparte merece la tesis de Mariana Alvarado Chávez (2009) *La invención del etnocacerismo: populismo radical en el Perú*. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencia Política con mención en Política Comparada. Lima: PUCP. En ella destaca el perfil autoritario del etnocacerismo de Antauro Humala y se vale del concepto de populismo radical usado por Carlos de la Torre, quien lo define en los siguientes términos:

“De acuerdo con Carlos de la Torre, es una reacción nacionalista a las políticas neoliberales aplicables por los regímenes neopopulistas. En ese sentido, lo plantea como un resurgimiento del populismo clásico de los años 60, con las mismas retóricas nacionalistas y antiimperialistas, glorificación del pueblo y uso de manifestaciones masivas para demostrar apoyo al líder” (Alvarado 2009: 104).

han orientado en su mayoría a resaltar la precariedad de la institucionalidad democrática, rastrear las prácticas políticas oficiales y no oficiales entre ciudadanos y los líderes populistas, y sobre todo tratar de entender el respaldo social al autoritarismo. Por ello se han buscado sus orígenes en tiempos anteriores a su periodificación histórica remontándose hacia finales del siglo XIX tratando de explicar los orígenes en la época caudillista, teniendo a Nicolás de Piérola como antecesor de la política populista. Y es que el término populismo en nuestro país, está muy arraigado, relacionándose inclusive a los acontecimientos de movilización de masas desde las primeras décadas del siglo XX, e inclusive se llegó a llamar “populistas” a las primeras manifestaciones políticas de las agrupaciones de criollos e indígenas a favor de la Independencia¹³. Estos primeros usos del término resaltaron las apreciaciones negativas asignadas a las masas urbanas desde los tiempos de la Revolución Francesa. En el Perú los temores contra la *irracionalidad del populacho* y sus violentas acciones se remontan hacia los años finales del Virreinato los primeros años de la joven república peruana¹⁴, cuando en los medios de prensa de la época reproducían los actos de la Revolución Francesa y su impacto negativo en la sociedad europea.

Esta partida de nacimiento del uso del término en la historia político-social de nuestro país, eran complementadas con las imágenes idealizadas y satanizadas de las prácticas políticas clientelares de los “caudillos”. La forma patrimonialista de disponer de los recursos del Estado es lo que determinó que sus prácticas políticas sean vistas como populistas y por ende que se les considere como los predecesores de la política populista en el país.

¹³ El pensamiento neoescolástico español del siglo XVI de pensadores como Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, entre otros, influyó en el universo intelectual latinoamericano pre y pos independentista. El pensamiento neoescolástico respaldaba una relación entre el rey y los reinos en la búsqueda del bien común, esto significaba que el monarca debía respetar los privilegios de sus súbditos y que su poder estaba limitado. Por ende existía un derecho a la rebelión en caso el derecho de un pueblo sea amenazado por un rey tiránico. Este argumento fue usado por muchos jefes rebeldes y por las juntas, para justificar sus acciones en la crisis de Bayona de 1808. Véase al respecto Manuel Giménez Fernández (1947) *Las doctrinas populistas en la independencia de Hispanoamérica*. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones.

¹⁴ Sobre el particular pueden consultarse de Claudia ROSAS LAURO, *El impacto de la Revolución Francesa en el Perú, 1789-1808*. Lima: PUCP/ IFEA (2008).

Apresurada o no esta apreciación sobre dichas prácticas políticas, un hecho indiscutible dentro de la caracterización del fenómeno populista es su tendencia autoritaria. La historiografía nacional sobre el particular a conceptualizado este rasgo del periodo de nuestra joven república atribuyéndole ser el origen de la llamada “tradición autoritaria”¹⁵ en nuestra política nacional. Con esta definición se explicaba de algún modo la tendencia de la población a legitimar gobiernos marcadamente autoritarios, la complicidad de la elite dirigente a respaldar golpes de Estado y en cierta medida, el desprecio de la ciudadanía por la institucionalidad democrática.

El “corto siglo XX” peruano, parafraseando a Hosbawm, presentó acontecimientos diversos de difícil periodificación por la variada naturaleza de los hechos acaecidos: golpes de estado, dictaduras, periodos de transición democrática, expansión de derechos ciudadanos, cambios de modelo económico, explosión demográfica. Dichas circunstancias hicieron y hacen muy complejo la articulación de demandas, y la construcción de una “comunidad política”.

Para Alberto Vergara (2015) durante el siglo XX se produce dentro de la elite política latinoamericana la oposición entre quienes defendían un régimen de competencia política restringido y heredado del siglo XIX, y quienes propugnaban un régimen político con una mayor inclusión. En opinión de este autor, “esta tensión respecto del sistema político dio forma al siglo XX latinoamericano y estuvo en la raíz de las diversas versiones del populismo (p. 74). El papel del Estado por ello es crucial, porque a través de él se sintetizarán los programas políticos, creándose y materializando las expectativas de los actores políticos. Como señalan Mabel Thwaites y Hernán Ouviaña (2012):

“El espacio, así, es el espacio de condensación de las relaciones de fuerzas sociales que se plasman materialmente y que le dan contornos específicos y variables. Como instancia no neutral, recorta, conforma y reproduce la escisión clasista e

¹⁵ Este fue el término que acuñó el investigador estadounidense David Palmer y que difundió el historiador peruano Alberto Flores-Galindo.

internaliza contradictoriamente los conflictos y las luchas” (p. 54).

Por este motivo la periodificación que adoptaremos en esta investigación será la propuesta por el recientemente fallecido sociólogo Henry Pease y el joven historiador Gonzalo Romero (2013). Tomando como base para la periodización los profundos cambios producidos en el seno de la estructura del Estado propusieron una periodificación en cuatro momentos para la historia política del siglo XX: 1) El Estado Oligárquico (1895-1956); 2) La crisis del estado oligárquico (1956-1968); 3) El Estado Intervencionista (1968-1990); y 4) El Estado Neoliberal (1990-2000).

1.2. Formulación del problema

El populismo se presenta desde la academia y la prensa política como un fenómeno recurrente, casi característico de la política en nuestro país, sin que eso conlleve necesariamente a una delimitación clara de lo que el populismo es, encierra, representa e implica en un país como el nuestro. Reúne más características negativas que positivas, y es usado indistintamente para referirse a las políticas de los gobernantes, que de alguna manera escapan al control de los actores políticos tradicionales y presentan propuestas políticas en favor de las masas populares. Por ello en este estudio perseguimos analizar la evolución del término populismo en nuestro país, a través del análisis de casos concretos identificar las diferentes actores políticos en pugna en los diferentes regímenes identificados como populismos y el cómo influyo “el diseño institucional” (reglas y actores políticos) para favorecer la aparición de populismos como alternativas políticas.

Problema principal

¿Cuáles fueron las condiciones políticas y sociales que posibilitaron la aparición de populismos en nuestro país? ¿Es aplicable el enfoque de Ernesto Laclau para el análisis del populismo en nuestro país?

Problemas específicos

¿Qué se entiende por populismo en la historiografía peruana?

¿Qué características tiene el populismo en el Perú?

¿Cuáles son los actores políticos que se benefician con los populismos?

1.3. Justificación teórica

El estudio “*¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? Populismos y populistas en el Perú. Siglos XIX-XX*” permite adentrarnos en el fenómeno del populismo en el Perú, poniendo haciendo un recuento pormenorizado de la aparición, aplicación y evolución de término dentro de las ciencias sociales de América Latina, y como fue interpretado por la academia en nuestro país. El populismo a nivel conceptual es impreciso identificándose como populismo o populistas, diferentes regímenes, muy diferentes entre sí, sin mayores similitudes que cierta atención a las masas populares, a través de la atención de sus necesidades a través del gasto público; autoritarismo y la falta predictibilidad de las decisiones del ejecutivo.

1.4. Justificación práctica

El análisis comparativo de diversos gobiernos que fueron catalogados como expresiones de populismo en nuestro país, nos permitirá poder especificar qué es lo que realmente se debe entender como populismo en el Perú, y que características presentó en la historia política peruana. Así, como dilucidar que contextos sociales, económicos y políticos permiten que el populismo constituya una alternativa para los sectores populares, y obligan a los líderes políticos a hacerse populistas.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Analizar como el populismo se ha desarrollado en las ciencias sociales en nuestro país.

1.5.2 Objetivos específicos

- Conocer como se ha manifestado el fenómeno del populismo en nuestro país.
- Conocer y analizar a los siguientes gobiernos que fueron catalogados como populistas: Nicolás de Piérola (1895-1899), Guillermo Billinghurst (1912-1914), Luis A. Sanchez Cerro (1932-1933), Fernando Belaunde Terry (1962-1968), Juan Velasco Alvarado (1968-1972) y Alan García (1980-1985).
- Conocer y analizar cómo estaba articulada políticamente la sociedad y cuál era el diseño institucional en que hace su aparición el líder populista.
- Conocer, analizar y comprender el por qué de la postergación del debate sobre el populismo en nuestro país.
- Analizar la aplicabilidad del modelo teórico de populismo propuesto por Ernesto Laclau al caso peruano.
- Contribuir al análisis político del fenómeno del populismo en la región y en el país a través de un análisis histórico, político y sociológico.

1.6. Hipótesis

1. El debate sobre el populismo en el país hasta los años ochenta se mantenía a la par del desarrollo regional e inclusive se desarrollaba sus propias perspectivas teóricas, pero es con la llegada del neoliberalismo y la desaparición de los actores políticos populares que el debate en el Perú queda postergado.

Las variable independientes son la aplicación del modelo neoliberal y la desaparición de los actores políticos populares. La variable dependiente es el debate del populismo en nuestro país. Nuestros indicadores para la primera y segunda variable independiente son el

cambio de perspectiva temática sobre movimientos sociales y populismo suscitados después de la década de los ochenta. El indicador de la variable dependiente es la escasez de artículos y trabajos sobre el populismo en nuestro posteriores a la fecha señalada.

2. El populismo en el Perú, se da en procesos de frustración y escepticismo hacia la clase política dirigente, en donde se teje un discurso de comunidad política, sobre la base de actores sociales constituidos pero postergados, no es necesariamente *per se* antidemocrático pero si trastoca las instituciones políticas formales.

Nuestras variables independientes son los procesos de frustración y escepticismo; y los actores sociales constituidos. Para ambas variables nuestros indicadores son el contexto político, y los diferentes tipos de actores que se dan cita (partidos políticos, sindicatos, iglesia, etc.). La variable dependiente es el populismo. Sus indicadores son las diversas estrategias y discursos que esgrimen los liderazgos populistas estudiados.

3. El populismo aparece en contextos de regímenes de competencia política cerrada. Tomando la representación de los sectores sociales postergados. Por ello su accionar político necesariamente está relacionado con la expansión de la ciudadanía y la creación de derechos civiles exigibles al Estado.

La Variable independiente populismo tiene como indicador tanto los partidos políticos, o líderes y las prácticas políticas desplegadas. La variable independiente régimen de competencia política cerrada tiene como indicadores es el diseño institucional, es decir el marco constitucional y electora. La variable dependiente expansión de la ciudadanía tiene como indicadores las modificaciones a la ley constitucional y electoral para efectivizar el ejercicio ciudadano del voto. La variable dependiente derecho civil exigible, tiene que ver con

aquellos derechos en materia laboral, o salud, que se genera al amparo del régimen y que no son asistencialismo, sino derechos exigibles.

4. La recurrencia de las experiencias populistas en la historia política peruana, han evitado la transformación radical de la sociedad. Los gobiernos populistas sirvieron de contención a reformas estructurales y con matices, la elite y el sistema político, que supuestamente querían destruir los gobiernos populistas, resultaron fortalecidos.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Marco filosófico de la investigación

En la presente investigación utilizaremos la definición de populismo propuesta por el argentino Ernesto Laclau (2005), quien define el concepto en los siguientes términos: “El *populismo* es, simplemente, un modo de construir lo político” (p. 13). Este autor no pretende encontrar el verdadero referente del populismo, sino por el contrario hacer lo opuesto: mostrar que el populismo no tiene ninguna unidad referencial porque no está atribuido a un fenómeno delimitable, pero si a una lógica social cuyos efectos atraviesan una variedad de fenómenos. En esta investigación el énfasis lo ponemos en la “articulación de demandas” rastreando las condiciones materiales que posibilitaron el triunfo electoral, y la consolidación de los regímenes “populistas” en el país. La pregunta de Ernesto Laclau de ¿por qué algunas alternativas u objetivos políticos sólo pudieron ser expresados a través de medios populistas? (pág. 32) es de enorme relevancia para abordar el análisis de los derroteros de la política peruana y de aquellos líderes que fueron tildados de populistas hacia finales del siglo XIX¹⁶ y durante el siglo XX. Laclau otorga una flexibilidad conceptual y de espacio-temporal que permite analizar la articulación de demandas en atención a las construcciones de identidades y la realidad material de los periodos aquí analizados. Esta flexibilidad, sin alusión a referentes teóricos y cronológicos estáticos y asfixiantes, permite aproximarnos al fenómeno en su complejidad en la interdependencia entre los actores y la influencia de un diseño institucional que moldea las posibilidades reales de la consecución de sus objetivos.

¹⁶ En concreto nos referimos a Nicolás de Piérola que es considerado como un protopopulista (Stein 1980 y Jacobsen 2014) por algunos sociólogos e historiadores y como populista por la historiografía actual (Chaupis 2012 y Salinas 2012).

De José Nun (2000) tomamos el concepto de “experimentalismo democrático”¹⁷. Aunque Nun señala que esta es la alternativa por la que debería encaminarse las propuestas democráticas para la región, en sus términos: “labrar un camino rebelde de desarrollo nacional y rehacer la forma institucional del mercado y la democracia” (pág. 157), considero que es, sin quererlo, como puede resumirse la experiencia democrática peruana. Una democracia imperfecta o de baja intensidad en que gradualmente se presentan periodos de líderes carismáticos que aparecen, oportunistas o no, bien intencionados o no, demagogos o no, dentro de climas de profunda crisis institucional que no es producto de la ignorancia ciudadana sino que es consecuencia de una paupérrima oferta electoral por parte de las elites políticas. Así, el concepto de José Nun puede darnos mayores luces para entender la entusiasta participación de las masas no como un resabio de la tradición autoritaria colonial sino como un genuino malestar por la insuficiencia de la democracia ofrecida por las elites para solucionar problemas concretos de la ciudadanía.

2.2. Antecedentes de investigación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? Orígenes e historiografía del populismo

El populismo es un término rodeado de fascinación y de rechazo, de muchas imprecisiones que lo han convertido, al decir de los especialistas, en un término *cliché* (Panizza 2009; Aboy 2001; Chamosa 2013), e inútil para comprender la vida política de los países y los escenarios políticos en donde se le hace mención. Como explica Carlos Moscoso (1990), el término sirve para distinguir:

“un fenómeno (el fenómeno de masas), partidos políticos, movimientos, una ideología, actitudes discursivas, gobiernos, demagogia, reformismo, etc.” y es usado por “académicos, políticos de izquierda, de derecha, religiosos, periodistas, según como se acomode a sus propósitos” (pág. 23).

¹⁷ El término lo toma de Roberto Mangabeira Unger.

Sin embargo, estos hechos no han menguado la frecuencia con que el término es empleado tanto por simpatizantes como detractores, los cuales recurren a él para explicar conductas y situaciones donde se manifiesta cierto grado de impredecibilidad política por la personalidad autoritaria del gobernante del régimen de turno aunado a cierto apoyo ciudadano organizado, visible y capaz de ejercer presión al resto de actores en el juego político.

2.2.1. Los orígenes del populismo: pragmatismo político, modernización y simpatía por el pueblo.

Los orígenes del populismo los encontramos en el siglo XIX, en donde se hacen presentes algunas políticas y actitudes de la elite, política e intelectual, hacia las clases populares en tres países principalmente: Francia¹⁸, Estados Unidos (EE. UU.) y Rusia¹⁹. En Francia, a mediados de

¹⁸ Loris Zanatta (2014) señala un origen posterior para el caso francés con el “boulanguismo” (en francés: *boulangisme* o *la Boulange*) que en su opinión fue el precursor del populismo. Movimiento político de finales del siglo XIX (1886-1891), basado en la relación directa entre un líder carismático y un movimiento de masas animado por el resentimiento contra las elites que constituyó una amenaza para la Tercera República Francesa. Su nombre deriva del general Georges Ernest Jean Marie Boulanger (Rennes, 29 de abril de 1837 - Ixelles, 30 de septiembre de 1891), militar y político que se convirtió en ministro de Guerra, alcanzando gran popularidad convertido en un nuevo héroe nacional al evitar una posible guerra germano-francesa. Por sus reformas inquietó al Gobierno con sus discursos bélicos. El movimiento se inspiraba en una idea de democracia plebeya y plebiscitaria que se nutría del visceral antiparlamentarismo, impregnado también de pulsiones nacionalistas y militaristas (p. 170-171). El Gobierno lo depuso como ministro de Guerra en 1889, lo que provocó que le declarara la lucha a la Tercera República. Así, Boulanger se convirtió en portavoz de los grupos descontentos de la sociedad. Formó una coalición de grupos heterogéneos bajo la bandera de un nacionalismo fanático y de su persona. Para evitar que llegara legalmente al poder, el Gobierno modificó el derecho electoral e inició un proceso jurídico en contra de Boulanger y sus seguidores. Ante tal situación, huyó a Bélgica y el movimiento, privado de su líder, se desmoronó. Posteriormente, en 1891, se suicidó. Adolfo Castañón, le asigna un origen literario al vocablo en Francia. Nos dice que:

“La voz *populismo* se registra por primera vez en 1929. Proviene del latín *populos*: pueblo. Fue acuñada en el contexto de una escuela literaria que aspiraba a describir en la novela la vida de los hombres del pueblo. *El Gran Robert: Dictionnaire de la Langue Française* cita un manual de estudios literarios de los autores Castex y Surer donde se explica que hacia 1928 el escritor Léon Lemonnier, queriendo reaccionar contra la novelística aristocrática y mundana, fundó junto a André Thérive la *escuela populista* y definió sus intenciones en dos manifiestos en agosto de 1929 y en enero de 1930. Se trataba de pintar la vida de la pobre gente, pero de pintarla con medida y verdad, sin caer en los excesos y en las ideas preconcebidas del naturalismo” (Castañón: 130).

¹⁹ Se ha destacado la presencia de un populismo austriaco contemporáneo a las manifestaciones populistas antes señaladas representado por Georg Ritter von Schönerer

siglo se hace presente la práctica del Bonapartismo²⁰, iniciada con Napoleón Bonaparte, pero encarnada con mayor nitidez en su sobrino Napoleón III. Hacia finales del XIX podemos encontrar dos denominaciones de populismo uno vinculado al “Partido del Pueblo” de Estados Unidos y otra versión en Rusia vinculada al movimiento intelectual *Narodnik* y a la crítica marxista.

Estas expresiones de cómo entender la política, la organización social y la identificación solidaria con las masas populares no nacieron de la nada. Se debieron al enorme impacto que la Revolución Industrial significó en la vida de millones de personas a nivel mundial. La aparición de las grandes ciudades, de las grandes industrias (en especial las textiles), y de una población urbana cada vez más numerosa y empobrecida. Todo este clima social desfavorable creaban las condiciones anímicas propicias para una revolución social.

Como destacó el notable historiador Eric Hobsbawm (1998) “la Revolución Industrial creó el mundo más feo en el que el hombre jamás viviera” (pág. 301), y es que pese al enorme desarrollo material y científico que significó la Revolución Industrial para las potencias mundiales y en general para toda la humanidad, este fenómeno acrecentó la desigualdad social a niveles nunca antes visto. Siguiendo a este mismo autor encontramos que, hacia mediados de siglo, entre 1840 – 1850, “el mundo carecía de equilibrio”, si bien se habían producido avances significativos que apuntaban a considerar moderno el mundo que se estaba gestando, por ejemplo: se abolió oficialmente la esclavitud (1815), las ideas liberales se habían impuesto casi en todo el mundo, el poder económico y político ya no lo detentaban las oligarquías; convivían junto a estos logros: remanentes de la esclavitud (Brasil y EE. UU.), no se había debilitado del todo las relaciones de servidumbre porque la población era aún en esencia rural, en el plano

(1842-1921) y Karl Lueger (1844-1910). Véase de Carl Schorske (1981) “Politics in a New Key: An Austrian Trio”: idem, *Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture*, p. 116–180. Nils Jacobsen destacará la influencia de estos políticos vieneses en la estrategia política de Nicolás de Piérola.

²⁰ Enrique Dussel (2007), siguiendo a Poulantzas (1972), es de los pocos autores contemporáneos que considera como antecesor del populismo moderno al bonapartismo.

internacional las potencias y los EE. UU., ejercían el control de la política y la economía mundial (págs. 305-306).

Esta convivencia de elementos antagónicos, hacía inevitable la conflictividad social y la búsqueda de cambios políticos, teniendo presente que desde 1830 el mundo había experimentado un acelerado cambio social y el “movimiento revolucionario mundial” reapareció con enorme fuerza y mayor respaldo popular a causa del impacto social negativo que significó la Revolución Industrial (pág. 306).

Es así que Europa fue remecida por “las revoluciones de 1848” que se originaron por diferentes razones (sociales, económicas, nacionalistas) pero con un protagonista principal, “la masa popular”. A esta llamarada de entusiasmo, se la dio el llamativo nombre de la “primavera de los pueblos” que puso de manifiesto la profunda distancia y contradicción de una sociedad en plena evolución y sus instituciones que seguían siendo “reaccionarias” pues pretendían mantener la antigua estructura social. Eric Hobsbawm destaca acertadamente el clima de frustración y resentimiento del hombre promedio remecido por el impacto de la Revolución Industrial:

“Su odio hacia la riqueza y la grandeza de aquel amargo mundo en que vivían, y sus sueños de un mundo nuevo y mejor, daban a su desesperación ojos y un sentido, aun cuando sólo algunos, sobre todo en Francia e Inglaterra, tuvieran conciencia de ese significado. Su organización o facilidad para la organización colectiva les daba fuerza” (Hobsbawm 1998: 308).

Con este telón de fondo la aparición de propuestas políticas que buscaran transformar la sociedad era inevitable y no es de extrañar que se originaran en los países que evidenciaban el mayor contraste entre los principios rectores de dos mundos, uno en esencia agrario y el otro capitalista. Las propuestas “populistas” de esta época buscaron articular discursos integradores que puedan atenuar la conflictividad social, lograr satisfacer los reclamos de la población, manteniendo el control del estado sin necesidad de hacer cambios de fondo. En las siguientes líneas explicaremos cada una

de ellas y las razones de por qué las consideramos antecesores del populismo político contemporáneo.

2.2.1.1. El Bonapartismo

Este concepto tiene su origen en la tradición marxista usado en diversos trabajos de Karl Marx, Friedrich Engels y León Trotsky, usado para identificar situaciones en que “las clases contendientes se equilibran una a la otra tan estrechamente que el poder del Estado, como mediador ostensible, adquiere por el momento, un cierto grado de independencia de ambas”.

Cronológicamente el bonapartismo se origina con el primer Imperio de Napoleón I, pero no se manifestará como una política hasta el Imperio de Luis Napoleón I, Napoleón III. El bonapartismo, como es descrito por Marx en el *18 Brumario de Luis Bonaparte*, obra contemporánea a los hechos ocurridos, fue una síntesis entre monarquía militar y apoyo popular que se refugia en la figura de Napoleón, como paradigma, por considerársele “el hombre que extendió la Revolución y la República”. Su objetivo era legitimar su poder dinásticamente a través de la imposición del Imperio como sistema político, y del apoyo popular como base de su legitimidad. Ignacio Molina (1998) define “modernamente” lo que fue el bonapartismo en los siguientes términos:

“Estilo político *populista*, practicado por los dos emperadores Napoleón, que tuvo numerosos partidarios entre los pequeños terratenientes, los campesinos y los obreros franceses del siglo XIX. Es la versión moderna del cesarismo²¹ como forma de gobierno y consiste en una dictadura personal legitimada por plebiscitos. Doctrinalmente se opone al absolutismo pero propugna un *Estado expansionista, apoyado en la fuerza militar, y la ideología nacionalista conservadora*” (p. 14).

²¹ “Práctica política originada en Roma a partir de la figura de Cayo Julio César. Consiste básicamente en la defensa de un poder autoritario capaz de orillar los intereses particulares o de grupo para favorecer la ejecución de una política que supuestamente beneficia a toda la comunidad. Fue definida por Tocqueville y Weber como aquella situación en que la organización política va perdiendo lazos de unión intermedios entre el Estado y el individuo, aumentando así el poder del primero que es dirigido por dictadores carismáticos” (Molina 1998: 18-19).

En su célebre estudio sobre el bonapartismo Frederic Bluche (1984) lo definía en los siguientes términos:

“El Bonapartismo [es] una nueva fórmula de poder que alía a la democracia (pasiva) la autoridad (actuante) (...) Representa una forma de gobierno autoritario y de administración centralizada. Consiste en el resultado de una doctrina simple pero no es –a partir de los Cien Días– una poderosa corriente política. Y ello por carecer de verdadero ejército de partidarios del régimen, aparte del ejército propiamente dicho (...) Pues el Imperio al no haber mantenido las promesas del Consulado, sólo sobrevive merced a la victoria. La guerra prolongada, a pesar de la popularidad personal del Emperador, llevaba en sí el germen de la derrota final y del derrumbe del sistema” (pág. 43).

En el caso de Napoleón III, las jornadas revolucionarias de febrero de 1848 restablecieron en Francia la “República” y avivaron en el seno de las clases víctimas de los excesos de la industrialización, la esperanza de ver nacer un régimen más “social”. En junio del mismo año se produce una insurrección obrera que es aplastada de un modo brutal con miles de asesinados, prisioneros y deportados. Esto tuvo como consecuencia que las elites liberales y conservadoras francesas dejen por un tiempo sus antagonismos y confluyan en lo que se llamó el “Partido del Orden”²² unificándose frente a las amenazas de movimientos políticos radicales. La presión de las revueltas obligó al gobierno provisional a proclamar solemnemente el “derecho al trabajo”. Ello dio lugar a la creación de los llamados “talleres nacionales”²³, en los que los numerosos parados franceses podían ser empleados en trabajos de utilidad pública. Se habría previsto contratar a 15 000 hombres y pagarles dos francos diarios, pero en junio eran 130 000 los parados inscritos, por lo que el Estado se vio imposibilitado de dar trabajo a

²² El partido del orden fue una coalición que reunía facciones monárquicas, orleanistas y legitimistas. Marx se referiría a ellos como una síntesis entre: “la restauración y la monarquía de julio”. Los bonapartistas eran hacia antes de las elecciones un pequeño apéndice molesto dentro de este partido.

²³ Diseñados por Louis Blanc (1811-1882), periodista y diputado francés, los talleres nacionales funcionaron como remedio provisional (tan provisional como el gobierno) hacia el desempleo creciente de esos años, y cuyas propuestas aparecieron inicialmente en su periódico *Revue du Progres* (1839) para posteriormente ser reproducido en el folleto *L'organisatio du travail* (1840). Como recuerda Pedro Planas (1993), la fórmula de los talleres ideados por Blanc conciliaba “libertad y fraternidad” a través de una nueva “organización del trabajo” orientada a satisfacer tantas las necesidades de empleo de los parados como la necesaria ampliación de obras públicas (pp. 60-61).

todos. La inviabilidad de mantener este programa provocó el cierre de los talleres, hecho que provocó sangrientos motines en junio de ese mismo año.

Tras esto la Asamblea decidió separarse de los obreros parisienses e hizo brotar el miedo al “peligro rojo” comunista en toda Francia. El temor esparcido permitió posicionar al “Partido del Orden”, consiguiendo el respaldo del campesinado como por la burguesía moderada, como en los católicos y los nostálgicos de la monarquía. Es así, que el Partido del Orden decide apoyar a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I, quién con un apoyo tan amplio y a su heroica ascendencia, fue elegido con una aplastante mayoría de cinco millones y medio de votos de un total de siete millones cuatrocientos mil sufragantes. Materializándose sus ambiciones de poder truncadas en dos oportunidades, que lo llevó a la cárcel, durante la monarquía de Julio.

Se convirtió en el primer -y único- presidente de la Segunda República, con un mensaje político ambiguo que proponía la síntesis entre los principios de la Revolución de 1789 y los deseos de orden y paz social que albergaba la Francia más conservadora: en su mensaje y en su acción de gobierno se mezclarían siempre el autoritarismo contra el “peligro” de la revolución social y un reformismo liberal de tendencia democrática (contrario al predominio de los notables tradicionales) e incluso socialista (bajo la influencia de los discípulos de Saint-Simon)²⁴.

Ya como presidente de la República, Luis Napoleón siguió la corriente conservadora mayoritaria en la Asamblea: se ganó el apoyo de los católicos al dejar la enseñanza privada en manos de la Iglesia con la Ley Falloux e intervenir militarmente para reponer el poder del Papa contra la República Romana en 1849; al mismo tiempo, salvaguardó su imagen presentándose como víctima impotente de las medidas más impopulares de la Asamblea. Y,

²⁴ Aunque esta ambivalencia era común para la época pues era periodo de cambios sociales cuya característica principal era la convivencia de posiciones político económicas que buscaran incentivar el desarrollo económico y mantener el orden social. En Francia, los hombres, que capitaneaban las altas finanzas y la industria pesada (los *sansimonianos*) todavía para 1830-1840 vacilaban entre el capitalismo y el socialismo para decidir cuál era el mejor camino para establecer la naciente sociedad industrial en Francia.

sobre todo, se esforzó por acrecentar su poder personal, recortando el sufragio universal y las libertades. Elegido para un periodo de cuatro años no podría reelegirse de manera legal, fracasó su intento de conseguir modificar la Constitución para dicho fin. En 1851 protagonizó un golpe de Estado destinado a perpetuarse en la presidencia en contra de las prescripciones constitucionales. Así, el 2 de diciembre –el día del aniversario de la coronación de Napoleón I y de la batalla de Austerlitz- se fijaron por todo París unos carteles que anunciaban la disolución de la Asamblea legislativa y el restablecimiento del sufragio universal.

Inició un inmenso e intenso programa de obras públicas (carreteras, canales, redes ferroviarias, puertos, etc.) a través del cual se multiplicaron los puestos de trabajo, sino que además redujo la jornada a 12 horas (incluyendo los domingos) e instituyó diversas medidas de previsión social: cajas mutuas, viviendas populares, etc. Como recuerda Pedro Planas (1993), esta política de Napoleón III estaba lejos de ser oportunista porque estas ideas ya las había desarrolladas hacia 1843. En un artículo periodístico afirmaba que “la tarea principal de todo gobierno en Francia, debía consistir en *eliminar la pobreza y fomentar las actividades productivas*”. Y en 1844, publicó su conocido folleto *La extinción de la pobreza* (reeditado para fines electorales en 1848), en este artículo “abogó por una fuerte intervención estatal como requisito para redistribuir la riqueza a los trabajadores y eliminar el desempleo, mediante la conformación de colonias agrícolas y puestos oficiales de trabajo” (págs. 63-64). Estos textos junto con su *Manual de Artillería*, escrito durante su encierro en la prisión de Ham, que bautizara como su “Universidad de Ham”, le sirvieron para difundir sus ideas políticas de gobierno.

Se creó así su estilo de gobierno, mezcla de autoritarismo y apelación directa al pueblo, eliminando la intermediación de los partidos y del Parlamento. Hábilmente usó una propaganda efectiva para presentarse a sí mismo como garante del orden, de manera que el golpe de estado fue ratificado de forma abrumadora en el referéndum de diciembre de 1851. Una segunda consulta aprobó del mismo modo el restablecimiento del Imperio en

noviembre de 1852. Luis Napoleón Bonaparte se convirtió así en Napoleón III el 2 de diciembre de 1852. El emperador asumía al mismo tiempo los poderes ejecutivo y legislativo; nombraba a los ministros directamente y limitaba a su antojo el poder de las dos asambleas previstas por la Constitución.

En 1852 completó la configuración de su dictadura promulgando una carta otorgada de corte cesarista, inspirada en la Constitución del año VIII (1799), y restableciendo en su persona la dignidad imperial hereditaria; el que había sido *príncipe presidente* pasaba a llamarse entonces *Napoleón III, emperador de los franceses*.

Como podemos apreciar, la práctica política que en la actualidad se le asigna al populismo histórico, esta suerte de autoritarismo, personalismo, demagogia y contacto con lo popular, están presentes en el bonapartismo, que al decir de los especialistas representa una concepción autoritaria y vertical del poder en torno a un liderazgo carismático, cuya legitimidad se funda en la “voluntad del pueblo” a través de plebiscitos. No es una monarquía absoluta, sino una especie de monarquía o pseudomonarquía donde se reconoce la soberanía del pueblo, aunque no se trate de una monarquía constitucional. Hernán Ibarra (2008) ha destacado las particularidades de este liderazgo que “se construyó sobre un sustento multclasista”, con un “apoyo” donde destaca “la presencia de sectores populares urbanos y rurales, fracciones del ejército, capas medias y grupos de las elites dominantes” (pág. 41).

En esta manera de hacer política necesariamente está presente una importante capacidad de entablar alianzas que demandan del líder no solo demagogia sino pactar entre diferentes actores sociales que tienen muchas veces intereses contrapuestos y hasta antagónicos. La tendencia o tentación al autoritarismo y la represión están presentes pues nunca se puede estar totalmente seguro de la solidez de las alianzas entabladas. Además, se corre el grave riesgo de acrecentar el descontento de las mayorías ante el incumplimiento de las expectativas generadas. Pedro Planas (1993) incluyó

la política de Napoleón III como uno de los antecedentes institucionales e históricos de mayor relevancia para poner en marcha al Estado de Bienestar, junto con la “Convención montañesa de 1793”, los “Talleres Nacionales” de Le Blanc y los “seguros nacionales” de Bismarck (pág. 65).

2.2.1.2. El partido del pueblo

El término *populismo* fue usado por primera vez en Estados Unidos a mediados de la década de 1890, en referencia a *The People`s Party* (Partido del Pueblo)²⁵. Margaret Canovan (1981) resalta este hecho:

“In the last decade of the nineteenth century a *radical populist movement* appeared with startling suddenness in the United States, lasted long enough to give the American political establishment a severe shock, and the faded away as quickly as it had come. *The People`s Party* held its first national nominating convention at Omaha in July 1892. There they adopted a radical platform which contained demands ranging from government ownership of railroads to popular referendums and from monetary inflation to the banning of strikebreakers. The Populist candidate in the 1892 Presidential election, James Weaver, polled over one million votes” [las cursivas son nuestras]” (pág. 17).

Al decir de Carlos Moscoso (1990) el llamado “Partido del Pueblo”, derivaba de la tradición del “radicalismo empresarial” contrario al avance capitalista (pág. 27). Resalta que su esquema era simple, proponía que el “pueblo” era “una raza en esencia inocente”, “libre de compromisos y responsabilidades políticas” que “constituían una masa homogénea”. Frente a un adversario, “los poderosos” conformado por “los banqueros” y “los dueños de monopolios” (pág. 27).

Charles Postel (2007) pone énfasis en que este *populismo* es una manifestación de la modernidad más que un rezago al cambio y cuestiona que sea considerada como una propuesta antimoderna. Sobre el particular dice sobre los activistas del “Partido del Pueblo”:

²⁵ El libro más completo sobre el “partido del pueblo” es de *The Populist vision* de Charles Postel.

“But were they?, this work of historical excavation suggests otherwise. ***And that is what makes the experience of the Populism so relevant.*** The populists challenged the corporate frameworks. They protested the inequitable distribution of wealth. ***They demanded more responsive government. But they too, were modern*** (pág. viii).

Es decir el fenómeno populista en Norteamérica surge dentro de un contexto democrático, de aceleración económica y de desigualdad en la distribución de la riqueza. No es por tanto un fenómeno reñido *per se* con la democracia, es una manifestación de ella así como una exigencia de la ampliación de sus beneficios directos y conexos a un mayor número de ciudadanos.

Por ello, está presente en su discurso cierta ambivalencia entre reformas que podríamos circunscribir a ideologías de derecha y de izquierda. Carlos Moscoso (1990) perfila como fueron las características de estos populismos:

“Los populistas de derecha se distinguirían de los de izquierda en que, mientras los primeros creen en el urgente retorno de la mítica *libre empresa* económica, el individualismo, los valores tradicionales, la vecindad, el trabajo ético y el rol de los sexos, los segundos lo hacen en la *democracia económica* como reforma política anticorporativa, en la *extensión de las formas democráticas a todas las esferas de la vida*, la socialización de los recursos como paso al igualitarismo y la sociedad balanceada” (pág. 28).

Postel (2007) demuestra como el uso y significado del populismo entre los intelectuales de Norteamérica cambió con el transcurso del tiempo sin por ello cambiar la valoración de manifestación democrática que encierra. En 1893, el historiador Frederick Jackson Turner, en su celebrado artículo “The Significance of the Frontier in America History”, describe al populismo como la representación de una “sociedad primitiva” incapaz de apreciar la complejidad de una “sociedad desarrollada”; a lo largo del texto reemplaza la palabra “primitiva” (*primitive*) por otros como “tradicional” (*traditional*). Estos calificativos estaban lejos de ser peyorativos pues lo que buscaban era evidenciar el choque entre los ideales cooperativistas locales de los *farmers* con las ideas capitalistas de los industriales (pág. 6).

El contexto de la segunda guerra mundial y el Holocausto, llevó a historiadores como Richard Hofstadter de la universidad de Columbia a reexaminar el populismo. En su libro *Age of Reform* (1955)²⁶, ganador del premio Pulitzer, su interés recayó en saber si existían tendencias irracionales, intolerantes y antisemitas en la protesta de los *farmers*. El movimiento fue calificado por Hofstadter como “esquizofrénico” y como una respuesta que ponía en peligro la modernización de la sociedad norteamericana. Pese a ello, su postura no caló en la academia pues siguió considerándose al populismo como “una respuesta racional al nuevo orden corporativo” (p. 7). Entre los años 1970 y 1980, los estudios de la llamada nueva historia social (*New Social History*), pusieron el énfasis en que el populismo fue “una resistencia cultural ante el ascenso del orden comercial y el desarrollo capitalista”. Se dejó un poco de lado los aspectos netamente políticos para analizar las dinámicas culturales del movimiento, muestra de ello es *Democratic promise: The populist moment in América* (1976) de Lawrence Goodwyn.

Finalmente, Christopher Lasch en su libro *The true and only heaven: progress and its critics* (1991), pone en evidencia que la protesta populista no estaba reñida con los ideales de democratización y desarrollo. Los “populistas” consideraban que había espacio tanto para el mercado como para el “welfare state”.

Como se aprecia, el movimiento populista gestado en aquellos años en Norteamérica era la respuesta a un proceso de industrialización y de crisis económica. Los agricultores del Middle West unieron sus voces para protestar contra los políticos y los banqueros de la Costa Este. En el discurso de los populistas existían tanto elementos liberales como socialistas. Eric Hobsbawm (1998a), recordando a Horace Greeley²⁷, uno de los profetas del individualismo, señala que estaba adherido al socialismo

²⁶ Richard Hofstadter (1955) *Age of reform. From Bryan to F.D.R.* New York: Alfred A. Knopf.

²⁷ Uno de los fundadores del Partido Republicano (1854) y director del New York Tribune, el periódico más influyente de los Estados Unidos (entre 1840 y 1870). Diario que usó para promover a los partidos *Whig* y *Republicano*, del que actuó como órgano de expresión, y defender políticas reformistas como el abolicionismo. En la Guerra de Secesión apoyó radicalmente a los estados del Norte frente a los del Sur.

utópico, difundiendo y comentando los méritos de las “falanges” furieristas, aquellas comunas semejantes a *kibbutzim*²⁸ (pág. 307). Al referirse a Huey Pierce Long, Jr.²⁹, político “populista” estadounidense, señala que:

“Es característico de la situación de los Estados Unidos en los años treinta que el *populismo* demagógico de mayor éxito, y tal vez el más peligroso de la década, la conquista de Luisiana por Huey Long, procediera de lo que era, en el contexto norteamericano, una tradición radical y de izquierdas. Limitaba la democracia en nombre de la democracia y apelaba, no a los resentimientos de la pequeña burguesía o a los instintos de conservación de los ricos, sino al igualitarismo de los pobres. Y no era racista. Un movimiento cuyo lema era *Todo hombre es un rey [...]*” [las cursivas son nuestras] (Hobsbawm 1998b: 139).

Mario Petrone (2006) sintetiza los problemas de los *farmers* estadounidenses de la siguiente manera:

- a. Las corporaciones ferroviarias cobraban precios monopólicos. Los *farmers* eran clientes cautivos, dependían de las ferroviarias para obtener equipos y provisiones y para enviar sus granos al mercado. El poder de las compañías se veía aumentado porque dominaban la política estadual del Oeste. Contralaban las legislaturas a través de sobornos y corruptelas.
- b. La sujeción a los acreedores era una pesadilla permanente. Los *farmers* necesitaban capital para comprar maquinaria y alambrear pero cuando la cosecha era abundante, el mercado se saturaba y los precios caían, a lo que se sumaban las pérdidas de cosechas en los períodos de sequía. Por otro lado, estaban en manos de los comerciantes locales quienes les vendían a crédito obligando a las familias a hipotecar la cosecha del año venidero sin siquiera haberla sembrado aún. El endeudamiento y la experiencia de sometimiento y humillación que implicaba el endeudamiento constituían una vivencia

²⁸ Comuna agrícola israelí.

²⁹ Apodado el *Pez Rey* (*The Kingfish*), fue un político estadounidense del estado de Luisiana. Miembro del partido demócrata y conocido por sus políticas populistas radicales. Sirvió como gobernador de Luisiana desde 1928 a 1932 y como senador de este mismo estado de 1932 a 1935. Asesinado en 1935. Los datos sobre su biografía los tomamos de la página web dedicada a este personaje <http://www.hueylong.com/>.

frecuente para los *farmers* quienes formaron la espina dorsal del movimiento populista (págs. 21-22).

- c. La reducción del circulante. Esto forzó la baja en los precios de los productos agrícolas a la vez que incrementó el valor del dólar, aumentando de esta manera el endeudamiento de los *farmers*.

Con este contexto, hacia principios de 1880, los *farmers* crean las cooperativas de compra y venta para defenderse frente a los acreedores. Sin embargo, la mayoría de las cooperativas fracasó por la férrea oposición de comerciantes y banqueros locales y también porque la base financiera de las cooperativas era demasiado endeble, y sus patrocinadores demasiado pobres.

Si bien la mayor cantidad de adherentes lo conformaban los *farmers*, el movimiento populista adquirió un matiz plural en la medida que se hacía más popular. Se inició con alianzas de agricultores como: “The farmer’s Alliance and Industrial Union”, “The National farmer’s Alliance”, “The Colored Farmer’s Alliance”, “The Farmer’s Mutual Benefit Association”. Además fue una propuesta abierta a aceptar otras voces en su seno como fueron: “Knights of labor” (vinculado a los obreros de las industrias), “The Woman’s Alliance” (grupo feminista), “The Citizen’s Alliance” y otros grupos que tenían agendas reformistas e inclusive que reivindicaban la participación de los afroamericanos en la política norteamericana³⁰.

Entrar en política no era una cuestión simple. Fueron creciendo las alianzas en varios estados, pero se hicieron más evidentes las diferencias y disensos entre los grupos. Las posturas variaban entre líneas moderadas y otras radicales, divisiones en torno a la cuestión racial debido a la actitud ambigua de la Alianza hacia los farmers negros; el carácter religioso entre los militantes católicos, protestantes, agnósticos y ateos. El movimiento tenía un

³⁰ Este tema es conflictivo dentro de los estudiosos del populismo norteamericano porque los populistas no necesariamente estaban a favor de la integración con la población afroamericana, en el mejor de los casos opinaban al mejor estilo del apartheid sudafricano inglés “iguales pero no mezclados”. Sin embargo, la apertura que da el movimiento a las voces reformistas, permitió dar tribuna a propuestas políticas propias de la población afroamericana.

elemento “emocional religioso” (*emotional-religious element*), mucho de la retórica de los políticos populistas provenía de citas bíblicas. Pero quizás el principal problema fue que no pudo llevarse a cabo la idea de una gran coalición entre el Sur y el Norte, una unión de *farmers* y trabajadores, de productores contra monopolistas y financistas del Este plutocrático. Entrar en política significaba que el control del movimiento pasaría inevitablemente de los *farmers* a manos de políticos profesionales hacia quienes, los primeros, manifestaron una permanente hostilidad; por otro lado, se tensionaba el problema de las lealtades partidarias pues al convertirse en un proyecto “pluriclasista” necesariamente la agenda de reformas de los *farmers* estaría supeditada a intereses colectivos con los que no necesariamente estarían de acuerdo.

Mario Petrone (2006) añade que se siguieron distintas estrategias según las circunstancias y tradiciones políticas de cada estado para mantener vivo el proyecto político. En 1892 emergió un partido de carácter nacional, el camino fue difícil pues muchos simpatizantes abandonaron sobre la marcha. El fracaso de las cooperativas cobraba sus bajas pero las tensiones que implicó romper con viejas lealtades partidarias alejaron a muchos más. De todas maneras, hasta el sur formó un Partido del Pueblo (*People's Party*) y dio, además, el dramático paso de incluir a miembros afroamericanos en sus filas.

La pluralidad del movimiento dio sus frutos y le permitió tener un inusual éxito en las elecciones de 1894. En términos netamente electorales el “populismo norteamericano” consiguió una muy alta votación en Colorado (41%), Washington (39%), Kansas (39%), y Texas (36%). No tan altos en California (18%), Missouri (8%) y Tennessee (9 %).

Finalmente, en 1896 se produjo una fusión en el ámbito nacional entre el Partido del Pueblo y el Partido Demócrata que nombra un candidato de estilo y posiciones populistas e incluye varias demandas de este grupo en su plataforma pero perdió las elecciones. Con posterioridad a 1896, cuando lo

que quedaba del Partido del Pueblo se perdía en el olvido, se produjo un auge de prosperidad económica causado por aquello mismo que los populistas habían estado reclamando: un aumento en el volumen de la base monetaria al descubrirse nuevos campos mineros y procesos extractivos.

2.2.1.3. El populismo ruso

En la terminología marxista de mitad del siglo XX, “populismo” aparece como traducción en lenguas occidentales del ruso *narodnichestvo*, que deriva de *narod*, pueblo. A medida que el movimiento comienza a adquirir protagonismo se acuña el término *narodnik* para designar a sus miembros y adalides. Comúnmente se hace referencia al narodismo como referencia al movimiento *Narodnik Volya* (Voluntad Popular). Este movimiento revolucionario ruso de fines del siglo XIX defendía una democracia social basada en beneficio de los pequeños productores rurales y artesanales oponiéndose al mismo tiempo tanto a la oligarquía zarista como a los principios marxistas. La intelligentsia rusa utilizaba el término *narodnik* para señalar una actitud en particular dentro del movimiento radical, una nueva actitud de humildad hacia el pueblo, que llevó a los *narodnik* a sostener que los intelectuales no deberían conducir al pueblo en nombre de ideas abstractas, extranjeras y sacadas de los libros sino adaptarse, ellos, al pueblo tal cual es, fomentando la resistencia al gobierno en nombre de las necesidades cotidianas reales.

En la Rusia de fines del siglo XIX, la vasta población rural trabajaba en condiciones de miseria y sujeción sin paralelo en Europa, bajo un estado zarista autocrático y represivo. En un uso convencional amplio, el populismo ruso, abarca aproximadamente desde 1870 hasta 1917 incluyendo a una amplia variedad de pensadores y activistas; por lo que resulta difícil establecer un conjunto de proposiciones que todos los populistas hubieran aceptado. Para Mario Petrone (2006) “entre el Estado y los campesinos se encontraba una tercera fuerza, una elite instruida, pequeña pero de vital importancia, cada vez más orientada hacia las formas occidentales de pensamiento” (pág. 18). Según Margaret Canovan (1981), esta minoría

privilegiada alentó y trabajó para la revolución, pues estaba consternada por la injusticia de su sociedad y eran incapaces de soportar el sentimiento de culpa al verse beneficiados por este estado de cosas. Hacia principios de 1870, el impulso de hacer sacrificios por el pueblo se volvía predominante en los círculos intelectuales. El significado es más claro: el énfasis está puesto en “ir al pueblo” acatando sus deseos y luchando por defender sus intereses, en particular la tierra campesina y la libertad respecto de los terratenientes y el estado.

Se entendía que el desarrollo de la civilización para unos pocos privilegiados se había logrado gracias al trabajo y al sufrimiento de la masa del pueblo y que, por lo tanto, las “clases cultas” debían reconocer que tenían una enorme deuda moral con el pueblo.

No proponían seguir ciegamente las formas e instituciones occidentales, sino que construyeron una visión específicamente rusa del futuro. Haciendo una síntesis entre las ideas de los eslavófilos conservadores que valoraban las tradiciones de las comunas campesinas y las ideas fraternales del socialismo europeo, postularon la posibilidad de construir una nueva sociedad socialista sin pasar por las mismas etapas europeas de capitalismo y expropiación.

De ahí se suscitó la polémica entre narodistas y marxistas rusos. Desde finales del siglo XIX, Engels junto a los socialdemócratas alemanes con Bernstein y Kautsky a la cabeza, se esforzaron por imponer la idea de que el único socialismo era el marxismo. En esta línea, el joven Lenin en una serie de textos publicados en 1894 y 1897³¹, expuso las contradicciones internas del discurso narodista aplicándole adjetivos tales como: “subjetivistas”; “superficiales”; “románticos”; “embelesados”; “inmaduros” y otros similares

³¹ “Quiénes son *los amigos del pueblo* y como luchan contra los socialdemócratas”. En *Obras*. Tomo I. Moscú: Ed. Progreso, (1894), pp. 11-93: “¿A qué herencia renunciamos?”. En *Obras*. Tomo I. Moscú: Ed. Progreso, (1897), pp. 165-182; y “The Economic Content of Narodism and the Criticism of it in Mr. Struve’s Book”, *Collected Works*, vol. 1, (1894), pp. 333-423. E inclusive calificaba como populistas experiencias fuera de Rusia como en su artículo “Democracia y populismo en China” (1912), en donde consideraba a la ideología de Sun Yat-sen, el llamado por él, el “demócrata chino”, como populista.

que buscaban poner de relieve la irracionalidad de los enunciados de estos supuestos “amigos del pueblo”. Lenin anticipó en su condena al narodismo los juicios de valor que en el futuro se destinarían a las experiencias políticas rotuladas similarmente de populismo, pero omitió de su análisis las afinidades teóricas y políticas que Marx tenía con los “narodnik”, evidenciadas en sus escritos sobre Rusia. En especial su interés por las propuestas de aquellos, acerca del “desarrollo desigual” de la historia de las sociedades y en especial sus simpatías por la propuesta de Chernsyshevsky sobre la “obshina” o comunidad agraria como eje estructural en la trayectoria del socialismo en Rusia (Shanin 1983 y Quijano 1999).

El estudio más completo sobre esta experiencia “populista” sigue siendo la obra del historiador italiano Franco Venturi, *El populismo ruso*. En donde hace un detallado y bien informado recuento de los hechos, personajes y desenlace del movimiento populista ruso, con la expresión máxima de su oposición al absolutismo, que fue la destrucción del imperio zarista. Señala como personaje de origen del populismo a: Aleksander Ivánovich Herzen, demócrata revolucionario, inspirador del partido y posterior revista *Narodnik Volya* (Voluntad Popular), que tenía como frase inspiradora “ir al pueblo” (*khozhdenie y narod*). En su origen era un movimiento en esencia juvenil e intelectual, a medida que se relacionaba con las masas populares campesinas y se nutría de los textos marxistas de la época cobra un matiz revolucionario y radical.

En 1874, los que participaron de aquella aventura volvieron con una nueva conciencia de las dificultades que implicaba hacer la revolución y, sobre todo, de las diferencias entre la perspectiva de los intelectuales y la de los campesinos. Su compromiso con un futuro socialista seguía en pie y en 1876 se creó el partido “Tierra y Libertad” (*Zemlya i Volya*). El ideal de los populistas rusos era una Rusia socialista en la cual reinaran la hermandad y la armonía; libres de un Estado autocrático que mantuviera las inequidades sociales y económicas. Creían que estos ideales estaban profundamente enraizadas en las tradiciones de la aldea rusa, en particular en la práctica de la tenencia comunal de la tierra en virtud de la cual no existía la propiedad

absoluta y exclusiva de la tierra dentro de la aldea y los lotes se reasignaban equitativamente en forma periódica a través de la repartición.

Surgió así la disyuntiva del qué y cómo hacer para llegar hacia ese objetivo. Según Margareth Canovan (1981), las dos alternativas entre las cuales se dividió el movimiento fueron: a) una elitista y conservadora y b) una genuinamente populista. La primera sostenía que la única posibilidad de construir un amplio movimiento popular residía en la organización de un partido estrechamente cohesionado que golpeará al gobierno de la única manera posible para un grupo pequeño: con actos de terrorismo individual. Cuyo objetivo final era tomar el poder y construir una sociedad socialista. La segunda alternativa consistía en abandonar el aire enrarecido de la elite intelectual y sus teorías abstractas y adaptarse a las necesidades, las perspectivas y los intereses del pueblo.

En 1879 el partido finalmente se dividió en moderados y radicales. Un sector llamado “Repartición Negra” (*Cherny Peredel*) para significar su demanda primordial de redistribución igualitaria de la tierra entre los “negros” o “clase servil” se quedó a trabajar con el pueblo, dirigidos por Georgi Valentinovich Plejhanov³² (quien posteriormente se convirtió al marxismo). La facción más fuerte, *Narodnaya Volya*, decidió concentrarse en la lucha terrorista contra el estado autocrático. Luego de muchos fracasos, asesinaron al Zar Alejandro II en marzo de 1881. Como acertadamente señala Teodor Shanin (1983) “narodnik” era un nombre que en el lenguaje corriente ruso cubría una realidad muy heterogénea, “desde un revolucionario terrorista hasta filantrópico joven noble³³”.

Oscar Chamosa (2013) señala que a pesar de la connotación negativa que el término populismo adquirió gracias a Lenin, los autores marxistas europeos se abstuvieron de aplicarlo en forma indiscriminada. Con el triunfo bolchevique el populismo se convirtió en un sujeto de especulación histórica antes que un problema político presente. A lo largo de los años veinte y

³² Autor de *El papel del individuo en la Historia* ([1898] 1969) México DF: Grijalbo.

³³ Shanin, Teodor (1983) *Late Marx and the Russian Road* New York: Monthly Review Press.

comienzos de los treinta, los líderes marxistas europeos concentraron su crítica en sus dos enemigos presentes, la social democracia y el fascismo, pero a ninguno de ellos les endilgó el mote de populista.

2.2.2. Valoración de estos antecedentes del populismo por la crítica

Hasta los años ochenta de la pasada centuria se relacionaba al bonapartismo como un antecedente del populismo por la tendencia de la academia a considerar al populismo como una manifestación del autoritarismo. Por ello la imagen personalista del régimen, el control del aparato militar, el pactismo entre diversos estratos de la sociedad (los actores políticos de la época), y el respaldo popular del que gozaba, especialmente por parte de la población campesina y los pobres urbanos, serán las principales características de comparación entre él y el moderno populismo. Al complejizarse el análisis del populismo, especialmente por su impacto en la ampliación de derechos ciudadanos, se dejó de lado relacionar al bonapartismo con el populismo. Los pocos autores contemporáneos que los relacionan ponen énfasis en la capacidad de diálogo con diferentes colectivos y con intereses muchas veces yuxtapuestos.

Sobre los populismos norteamericano y ruso, la crítica ha señalado acertadamente que ambos se enfrentaron al desafío “del industrialismo”, “el urbanismo”, “la grandiosidad”, “la centralización”, “la jerarquía”, y “trataron de resistir estas tendencias y de descentralizar lo social” (Worsley 1970: 271). Ambos se opusieron al avance del capitalismo y a uno de sus resultados principales: la destrucción o el severo agotamiento de la pequeña propiedad y la producción en pequeña escala (Vilas 1994: 34). Aunque ambos son “populismos agrarios”, los populistas rusos, con su desprecio hacia la reforma constitucional liberal y la adopción del terrorismo como opción ética, ofrecen un fuerte contraste con el compromiso de los populistas estadounidenses con los procesos políticos y la búsqueda de leyes e instituciones para proteger sus intereses. Ambos idealizaron al pueblo y aspiraron a un control de la sociedad desde abajo pero resulta obvia la diferencia entre un impulso como éste que proviene del pueblo mismo y

aquel que proviene de una intelligentsia sacudida por sus remordimientos de conciencia (Canovan 1981: 96).

2.2.3. La preocupación intelectual por el populismo

La tensión entre el populismo y sus analistas en el mundo intelectual se debe a que apareció como fenómeno político en un contexto de profunda crisis de la democracia liberal después de la primera guerra mundial, bajo la expansión del fascismo y de la victoriosa revolución rusa con sus efectos disruptivos. Por ello desde su origen se presenta en un espacio intermedio entre la dictadura y la democracia.

Tim Houwen (2011) señala que el “populismo” permaneció como un vocablo poco utilizado por los académicos hasta la década de 1950. Hubo que esperar hasta las décadas de los sesenta y setenta para que se iniciara propiamente el debate académico sobre el populismo con la obra colectiva *Populism: Its Meanings and National Characteristics* en 1969, a cargo G. Ionescu y E. Gellner, obra traducida al español el mismo año como *Populismo. Sus significados y características nacionales*. Esta obra colectiva fue el producto editorial de conferencias sobre el populismo organizadas por The London School of Economics en 1967. Durante los días que duró el evento participaron 43 ponentes de diferentes países con temáticas que exploraban la experiencia populista en el siglo XIX y XX, en espacios geográficos diversos tanto en Europa, Asia, África, Estados Unidos como Latinoamérica.

En estas conferencias se intentó ofrecer una panorámica general sobre todos los movimientos y casos que fueron definidos como populistas para establecer algunas características comunes a estos movimientos. Pluralidad de definiciones sobre el populismo que destacaban: la vinculación de la aparición del fenómeno con los procesos de industrialización y urbanización; el papel protagónico de las masas urbanas y el liderazgo carismático de los gobernantes de turno. Se plantearon valoraciones positivas y negativas del populismo para el fortalecimiento de la democracia en un contexto post

autoritarismo. Inclusive Isaiah Berlin llegó a plantear la existencia de un verdadero populismo y de un falso populismo. El primero sería una propuesta igualitaria para la sociedad que buscaba terminar con la aristocracia y los regímenes de competencia política cerrados. En la otra orilla ponía de manera anacrónica experiencias políticas de diverso cuño como: el Bonapartismo, el MacCartismo, El gobierno de Nasser en Egipto, el gobierno del Primer Ministro ghanés Osagyefo Kwame Nkrumah y el gobierno del presidente pakistaní Ayub Khan.

Este texto fue fundamental para posicionar el uso del concepto populismo en el debate sociológico y político de América Latina. Como todo concepto su estudio ha experimentado una evolución de acuerdo a los acontecimientos históricos acaecidos en la región y a los temas ejes del debate académico mundial. De manera sintética podemos decir que en el origen del término populismo, estaba relacionado con el análisis de los regímenes autoritarios en donde es visto como una variante del autoritarismo en oposición a la democracia. En la actualidad el debate sobre el populismo se inserta dentro del proceso de consolidación y calidad democrática de los regímenes de la región. En donde se pasa a analizar que tanto influye el populismo en la consolidación de la democracia.

Dentro de estos dos polos existen estadios intermedios en donde se insertan las diferentes conceptualizaciones que sobre el populismo se han realizado hasta la fecha. Julián Melo (2014), propone los siguientes estadios en lo que denomina los “tiempos del populismo”: 1) Fascismo y totalitarismo: el populismo cronológicamente convive con regímenes autoritarios por lo cual puede ser visto tanto como una variante de estos estilos o como una alternativa en oposición a ellos; 2) populismo y socialismo: se destaca la relación entre ambos, si pueden ser vistos como proyectos coligados o en disputa por la representación de las masas; y 3) Democracia: se pone énfasis en las transiciones a la democracia en América Latina y otras latitudes. A partir de este último grupo de estudios se resaltarán con mayor énfasis el papel del discurso y la creación del sujeto político dentro de los regímenes populistas.

Esta evolución del pensamiento académico es natural porque en el siglo XX, el respaldo popular del que empezaron a gozar regímenes autoritarios en diferentes partes del mundo puso la alarma sobre un poderoso actor político vilipendiado y temido históricamente por las elites: la multitud. El colectivo humano pasó a ser el gran actor político, y ello no pasó desapercibido para la ciencia social ni para la psicología social. Serge Moscovici ([1981] 2013), definía su época, a inicios de los ochenta, como la *era de las multitudes*. Expresaba sus preocupaciones en los siguientes términos:

“[...] a comienzos del presente siglo, se estaba seguro de la victoria de las masas; a su término, nos encontramos por completo cautivos por quienes la conducen [...] Un Mao, un Stalin, un Tito, un Castro y numerosos émulos suyos han ejercido y ejercen un imperio total sobre su pueblo que les profesa, a cambio un culto ferviente” (pág. 9).

El populismo será conceptualizado en base a los temores y expectativas políticas que la aparición de las masas en el escenario político despertará en los intelectuales de todas las posiciones ideológicas. A continuación ofreceremos un recuento de las diferentes conceptualizaciones existentes del populismo.

2.2.4. La polisemia conceptual

El populismo ha sido abordado, a lo largo del tiempo, desde distintas perspectivas analíticas. Mientras que algunos lo conceptualizan como una etapa vinculada a los procesos de modernización de los países periféricos (Germani³⁴, Ionescu y Gellner³⁵); otros lo ligan con el papel del Estado, ya sea para introducir al capital y las clases sociales en la transición hacia el capitalismo (Ianni³⁶), para garantizar el desarrollo dependiente (Cardoso y

³⁴ Germani, G. (1978). *Authoritarianism, Fascism, and National Populism*. New Jersey: New Brunswick.

³⁵ Ionescu, G. y Gellner, E. (Compiladores) (1969). *Populism. Its Meaning and National Characteristics*. Londres: Macmillan

³⁶ Ianni, O. (1975–1984). *La formación del Estado populista en América Latina*. Ciudad de México: Era.

Faletto³⁷), o para apoyar a las burguesías, débiles a la hora de imponer su hegemonía (Weffort y Quijano³⁸); algunos lo analizan como un tipo particular de discurso político (De Ippola³⁹, Sigal y Verón⁴⁰); como una experiencia política particular de los sectores populares (James⁴¹, Maretuccelli y Svampa⁴²); como una forma de articulación entre la política y la economía (Dornbush y Edwards⁴³); como la identificación del movimiento con el Estado entendida como una política de integración nacional (Touraine⁴⁴), como resultado de un intenso y masivo proceso de movilización social que se expresa en una acelerada urbanización (Vilas⁴⁵), como una construcción académica que, paradójicamente, señala las limitaciones de los propios académicos a la hora de intentar resolver los fantasmas creados por su propia imaginación (Olivera⁴⁶). Algunos creen que no existe el populismo sino populismos (Canovan⁴⁷), mientras que otros son pródigos a la hora de proyectarlo hacia el futuro en función de los avances propios de la sociedad contemporánea, hablando de un populismo posmoderno (Taguieff⁴⁸).

Hay tantas concepciones del populismo como enfoques académicos, visiones ideológicas e, incluso, modas intelectuales puedan existir. A partir de la variedad de autores y posiciones mencionadas, con el tiempo se produjo un ocultamiento del concepto en sí mismo y que nos llevó, de forma

³⁷ Cardoso, F. E. y Faletto, E. (1969 – 1996). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Ciudad de México: Siglo XXI.

³⁸ Weffort, F. y Quijano, A. (1973). *Populismo, marginalización y dependencia: Ensayos de interpretación sociológica*. San José de Costa Rica: Universitaria Centroamericana

³⁹ De Ippola, E. (1987). *Ideología y discurso populista*. Ciudad de México: Plaza y Valdés

⁴⁰ Sigal, S. y Verón, E. (1986 – 2003). *Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*. Buenos Aires: EUDEBA

⁴¹ James, D. (1990). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*. Buenos Aires: Sudamericana.

⁴² Martuccelli, D. y Svampa, M. (1997), *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*. Buenos Aires: Losada

⁴³ Dornbusch, R. y Edwards, S. (Editores) (1991). *The Macroeconomics of Populism in Latin America*. Chicago: The University of Chicago Press.

⁴⁴ Touraine, Alain (1999) “Las políticas nacional-populares”, en Mackinnon, María Moira y Petrone, Mario Alberto, comps., *Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema de la Centenaria*. Buenos Aires: Eudeba.

⁴⁵ Vilas, Carlos (1988) “El populismo latinoamericano: un enfoque estructural”, en *Desarrollo Económico*, Vol. 28, Nº 111.

⁴⁶ Olivera, G. (2005). “Revisitando el síntoma del *populismo*”, en *Metapolítica*, 44 (9), noviembre/diciembre 2005, pp.51-58

⁴⁷ Canovan, M. (1981). *Populism*. Londres: Junction Books.

⁴⁸ Taguieff, P. (1996). “Las ciencias políticas frente al populismo: De un espejismo conceptual a un problema real”, en *Populismo posmoderno*, AA.VV. Quilmes: Universidad de Quilmes, pp. 29-79

casi automática, a pensar al populismo según uno u otro referente. Y es que pareciera imposible abordar al populismo como fenómeno en sí. Dicho ocultamiento, sin embargo, pone de manifiesto “la falta de un acuerdo básico sobre sus elementos definitorios”. Convirtiéndose, el populismo en una “etiqueta política”, que designa una amplia gama de fenómenos, partidos, movimientos, líderes democráticos y autoritarios de distintas épocas, lugares y afiliaciones ideológicas.

2.2.5. Intentos de síntesis

Los intentos de síntesis para clasificar tan diversas definiciones conceptuales no están ajenos de posiciones ideológicas y de carácter instrumental para justificar la posición a favor o en contra del populismo. Como señala Canovan (1981), “las interpretaciones del populismo han estado fuertemente influenciadas por los resquemores de algunos intelectuales hacia lo popular y toda su progenie repulsiva, y por el idealismo de otros que han exaltado al hombre común y sus simples virtudes” (pág. 11). Revelando en cierta medida los puntos de vista de los académicos sobre su propia situación política y las relaciones entre la elite y las masas.

A continuación presentaremos cinco esfuerzos de síntesis de la producción bibliográfica sobre el fenómeno populista para poder entender cómo ha ido variando la valoración de la “bestia negra” por la academia. Nuestra elección es arbitraria pues existen numerosos recuentos y análisis de la producción bibliográfica sobre el populismo. Sin embargo, considero, que en las síntesis seleccionadas, se muestra de manera clara las motivaciones de los autores para agrupar de la manera en que lo hacen los estudios sobre el populismo; tanto por el momento político, el desarrollo teórico sobre el tema, los autores que escogen, así como por la irrupción de nuevos actores políticos y de nuevas formas de hacer política existentes al momento de ser escritos.

Lo que se percibe en estos intentos de síntesis es:

- 1.- Se pone de manifiesto que el populismo es una realidad del sistema democrático en la mayor parte del mundo.

- 2.- Se delimita un particular populismo en la región de América Latina.
- 3.- El debate ya no está en ver el fenómeno populista como una variante del autoritarismo sino más bien en el cómo se inserta éste en el debate sobre la democracia, su consolidación y calidad.
- 4.- Se empieza a valorar al populismo como un fenómeno global adaptable casi a cualquier posición política, esto debido a la consolidación del análisis del discurso en la ciencia política y en las ciencias sociales.
- 5.- La imagen de Juan Domingo Perón aún sirve de referente arquetípico para los análisis sobre el populismo.
- 6.- Se pone mayor énfasis en la articulación de demandas de las masas en oposición al impacto de las reformas económicas liberales y neoliberales.

2.2.5.1. Un populismo singular: América Latina

El abogado, investigador y político peruano Carlos Moscoso Perea (1990) en su libro *El populismo en América Latina*, hizo un sesudo y bien informado recuento de las principales posiciones teóricas en torno al populismo hacia finales del siglo XX. Desde su perspectiva, no se podía partir de un concepto universal de populismo equiparable a todos los países y todos los periodos históricos. En su opinión el “populismo iberoamericano se presentará como algo opuesto, contrario a los otros populismos⁴⁹” (pág. 34). Clasifica a las teorías sobre el populismo de la siguiente manera: 1) Teoría formalista; 2) Teoría estructural funcionalista o clásica; 3) Teorías evasivas; 4) La escuela desarrollista, 5) La alianza policlasista, y 6) La teoría post-marxista⁵⁰.

La primera de estas teorías ve en la caracterización su razón de ser, por ello los autores que engloba como “formalistas” circunscribirán al populismo a una o algunas características que son por ejemplo: el discurso demagógico (Torres⁵¹ y Álvarez Junco⁵²); el caudillismo (Lambert⁵³ y Bayer⁵⁴), la pasión

⁴⁹ El autor presenta un balance amplio de las “manifestaciones” políticas caracterizadas como populistas, en aquella época, en: Europa, Asia, América Latina, y África.

⁵⁰ Silvina Funes y Damián Saint-Mezard (1992 [2002]) adoptan la misma clasificación.

⁵¹ Torres, Sagrario (1987) “El populismo. Un concepto escurridizo”, en Álvarez Junco, J., comp., *Populismo, caudillaje y discurso político*. Madrid: Centro de Investigaciones Científicas / Siglo XXI, pp. 159-180.

rural o indígena (Macrae⁵⁵ y en cierta medida Canovan); el nacionalismo (Worsley⁵⁶); la pertenencia a una determinada clase (Torres, Sala de Toruon⁵⁷ y Winocur⁵⁸), y el plagio ideológico⁵⁹ (Minogue⁶⁰). Considera a estos enfoques limitados, y preocupados más en la forma que en el contenido ideológico del populismo (pág. 66).

La segunda de las teorías la relaciona directamente con los sociólogos argentinos Gino Germani y Torcuato Di Tella, destacando el análisis que realiza el primero sobre la relación del populismo con los procesos de transición democrática en América Latina y los movimientos sociales, a los que denomina “nacionales-populares”. Del segundo destacará la aparición del populismo dentro de un contexto de agotamiento del liberalismo como motor del cambio social, de avance de las ideas progresistas y revolucionarias, y sobre todo de un mayor protagonismo o ausencia de él en las elites políticas latinoamericanas. Critica de esta teoría la caracterización del populismo como un momento de la historia en estrecha relación con el bienestar económico, el grado de desarrollo de las economías latinoamericanas y la ciudadanía. Y que se defina más el término en oposición a un paradigma (la democracia liberal) que por su contenido y significado propio (pág. 92).

⁵² Álvarez Junco, José, comp. (1988) Ponencia “Los movimientos populistas”, en *Populismo, caudillaje y discurso político*. Madrid: Centro de Investigaciones Científicas / Siglo XXI.

⁵³ Lambert, Jacques (1964) *América Latina. Estructuras sociales e Instituciones políticas*. Barcelona-Caracas: Ed. Ariel.

⁵⁴ Bayer, O. (1967) *El populismo en la Argentina*. Buenos Aires: Ed. Pius-Ultra.

⁵⁵ Macrae, Donald (1969) “El populismo como ideología”, en Ionescu y Geller *Populism. Its Meaning and National Characteristics*. Londres: Macmillan.

⁵⁶ Worsley, Peter (1969) “El concepto de populismo” en Ionescu y Geller *Populism. Its Meaning and National Characteristics*. Londres: Macmillan, pp. 258-307.

⁵⁷ Sala de Toruon, Lucía (1983) “Algunas reflexiones sobre el populismo en América Latina”, en VV. AA., *El populismo en América Latina*. México: Centro de Estudios Constitucionales, pp. 7-29.

⁵⁸ Winocur, Marcos (1983) “El populismo en América Latina”, en VV. AA., *El populismo en América Latina*. México: Centro de Estudios Constitucionales, pp. 31-42.

⁵⁹ Para el autor el populismo presenta pocos rasgos propios. Señala el carácter ideológico ecléctico del populismo al adoptar como slogans políticos ideas liberales, socialistas, anarquistas, nacionalistas para distorsionarlas y traicionarlas (p. 65).

⁶⁰ Minogue, Keneth (1988) *La teoría pura de la ideología*. Buenos Aires: Ed. Grupo Latinoamericano.

En las teorías evasivas, para el autor se percibe “cierta incomodidad” racionalista por abordar la conflictiva empresa de conceptualizar el populismo. Se concentra en Margareth Canovan y su opción metodológica de elaborar tipologías del populismo ⁶¹ más que buscar una conceptualización sobre él. En su opinión, si bien han contribuido en dejar de hablar de populismo y optar por describir los “populismos” existentes, esta teoría es una fuga para no abordar el debate y que ha conllevado a “debilitar la ya vaga concepción del objeto que se analiza” (pág. 100).

La llamada por el autor, teoría de la “escuela desarrollista” surge a finales de los setenta como propuesta de análisis integrado del desarrollo para la comprensión de las sociedades iberoamericanas tomando en cuenta la relación: proceso económico, condiciones estructurales y situación histórica (pág. 103). Los autores de los que parte para su análisis son F. H. Cardoso y E. Faletto, en su opinión se propone que el populismo es solo un momento, pero esta vez, es un momento del desarrollo socio-económico y político de las naciones iberoamericanas. Cuestiona el tratamiento únicamente económico que se le da al populismo el cual considera que: 1) el populismo cumple una función de legitimación de la voluntad de crear un mercado interno y como respuesta a la incorporación de las masas a la vida económica y política, y 2) Cuando se de la constitución de dicho mercado interno el populismo llegará a su fin (pág. 116).

⁶¹ Canovan (1981) considera siete tipos de populismo agrupados de la siguiente manera: Populismos Agrarios y Populismos Políticos. Los primeros estarían conformados por: a) “Farmers radicalism” (El partido del pueblo en EE.UU.), b) “Peasant movements” (las experiencias nacientes del Este de Europa), y c) “Intellectual agrarian socialism” (el movimiento *narodnik* ruso). Los populismos políticos por su parte se conforman de la siguiente manera: “Populist dictatorship” (por ejemplo Perón), b) Populist Democracy (mecanismos formales e informales de participación política popular por ejemplo: llamadas para votar en referéndums e invocar a la participación popular en las decisiones gubernamentales), c) “Reactionary populism” (El caso de Georges Wallace y sus seguidores) y 7) “Politicians populism” (Formación de alianzas no ideológicas unificadas en base a la apelación de “el pueblo”).

Al abordar al populismo como “alianza policlasista”, señala que el populismo es presentado, citando a Hennessy⁶², “como un arma organizacional para sincronizar grupos de intereses diferentes y se aplica a cualquier movimiento no basado en una clase específica” (pág. 119). Destaca a Octavio Ianni como el primero que aborda el populismo desde la perspectiva de la relación de clases sociales (pág. 120), pero considera que sus planteamiento son insuficientes para entender la dinámica del populismo. A su entender, Ianni “nos presenta las clases sociales como el equivalente de grupo social; esto es, para designar tipos de estrato social provenientes del resultado de las relaciones de dominación-superposición de una comunidad de intereses”. Entendiendo a las clases sociales como “simples espectadores humanos” no como actores políticos capaces de comprender la acción política y su capacidad transformadora (pág. 134)

Con la teoría post marxista, y en concreto con la obra de Ernesto Laclau, es más generoso, destacando como principales aportes de su obra: 1) el tratamiento de las ideologías y 2) la identificación-relación que se encuentra entre populismo y pueblo (pág. 161). Valora el esfuerzo de Laclau de desligar al populismo de un determinado “estadio de desarrollo” ya que se trataría de un fenómeno ideológico susceptible de aparecer en cualquier momento histórico motivado por diversos factores. Para Moscoso ello es un avance en la teorización y la categorización del populismo (pág. 161) y cumple con algo que reclama de manera textual a las cinco teorías precedentes, y es el de destacar el papel del pueblo como actor político.

Concluye señalando que el populismo en Iberoamérica solo era concebible a partir del fenómeno de masas (pág. 267) por lo que la configuración de ¿quién es el pueblo? es central. Muestra simpatía por la teoría de Laclau al destacar que el concepto de pueblo es “articulación” y solo a partir de ahí puede gestarse una “movilización ideología” (cambio social) no clasista,

⁶² Hennessy, A. (1969) “Populismo en América Latina”, en Ionescu y Geller, eds., *Populismo. Sus significados y características nacionales*. Buenos Aires: Ed. Amorrortu, pp. 39-80.

pues ello supone la descomposición del viejo sistema ideológico de dominación (pág. 270).

2.2.5.2 Críticas a la “noción” de populismo

En una tesis aún inédita y poco difundida, *Análisis crítico de la noción de populismo en la literatura*⁶³, Ruby Rodríguez-Castelo (1991) señala que en el contexto latinoamericano el término ha sido usado para referirse a: 1) Formas de movilización de las masas; 2) Movimientos políticos multclasistas (fundamentalmente urbanos); 3) Tipos de regímenes; y 4) Etapa en el desarrollo de los países.

Disgrega lo que la producción académica ha referido como populismo de la siguiente manera:

1. Formas de movilización socio-política que han buscado la activación de las masas recién incorporadas a la vida urbana, para su manipulación (Germani).
2. Movimientos sociales multclasistas con liderazgo de clase media o alta y base popular obrera o campesina (Germani y Ianni).
3. Tipos de regímenes surgidos luego de la crisis del orden oligárquico, como consecuencia de la crisis capitalista mundial (Weffort).
4. Fase histórica en la modernización de los países de América Latina o etapa en la transición a la modernidad (Germani; Ianni).
5. Etapa en el desarrollo de los países latinoamericanos, ligada al comienzo de la industrialización por sustitución de importaciones (O'Donnell).
6. Discurso político que divide a la sociedad en dos campos políticos antagónicos (Laclau).
7. Reacción ante una modernización impuesta de tipo nacional, que trata de mantener o recrear la identidad colectiva, a través de

⁶³ Tesis de maestría con Mención en Ciencias Políticas con Mención en Políticas Comparadas de los Países Andinos (FLACSO-Ecuador), el asesor de dicha tesis fue Carlos de la Torre.

transformaciones económicas, buscando un desarrollo sin rupturas (Touraine)

Describe tres grandes perspectivas teóricas dentro del análisis del populismo: 1) Teorías que ligán Populismo y Modernización (Germani y Di Tella); 2) Perspectiva dependentista (Wefford y Ianni) y 3) Análisis del discurso (Laclau y Álvarez Junco).

Concluye que estas investigaciones encierran la preocupación por entender el contexto histórico específico de los países latinoamericanos en el proceso para llegar a formas de “desarrollo político modernas” en estrecha relación con la democracia occidental (pág. 66). Destaca como la visión estructuralista-funcional es gradualmente superada y puesta a debate por las visiones postmarxistas, en especial por los autores que proponen el análisis del discurso, que buscan introducir nuevos elementos para la interpretación de los fenómenos populistas, de tipo cultural-simbólico, buscando superar, tanto el reduccionismo de las posiciones marxistas ortodoxas, que consideran a lo político como el reflejo de lo económico, como los análisis lineales y ahistóricos de los teóricos de la modernización (pág. 68).

2.2.5.3. El embrujo conceptual de la cenicienta

María Mackinnon y Mario Petrone (1999) en la introducción a *Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema de la Cenicienta* proponen una clasificación a partir de la “evolución del concepto” en: 1) Funcionalismo, 2) Estructuralismo, 3) Coyuntural, y 4) Cultural.

Desde una perspectiva funcionalista se piensa al populismo como fenómeno que aparece en los países “subdesarrollados” en la transición desde la sociedad tradicional a la moderna (Germani y Di Tella) entendiéndosele como una respuesta al proceso de “desarrollo social asincrónico” por parte de los países subdesarrollados. A su entender para comprender la conducta política de las clases populares era preciso referirse a la posición de desventaja técnica y geográfica frente a las de las elites, disponiendo de la

movilización social como mecanismo para intervenir en la vida política debido al fracaso de la integración social a través de los mecanismos de la política tradicional.

Gracias al aporte de estos autores, surgen nuevos elementos dentro de la conceptualización del populismo, para explicar las movilizaciones populares teniendo en cuenta la condición espacio temporal de donde ellas se originan. Se hace notar la participación de diferentes actores, destacándose el carácter policlasista del populismo, así como el surgimiento de líderes carismáticos para orientar a las masas disponibles; y una motivación ideológica explícita denominada revolución de las aspiraciones (Forero, Ramos y Jara 2010, p. 10).

En el análisis estructuralista (“histórico-estructural”), sus autores (Cardoso y Faletto, Ianni, Vilas, Murmis y Portantiero⁶⁴, Weffort, Torre⁶⁵, y Touraine) destacan el rol interventor del estado que, ante la debilidad de la burguesía, debe asumir un rol de dirección de los procesos de cambio. Así se vincula al populismo con el estadio de desarrollo del capitalismo latinoamericano que surge con la crisis del modelo agroexportador y del estado oligárquico. Poniéndose diferente énfasis de acuerdo a las preferencias intelectuales e ideológicas de cada autor.

Desde la perspectiva de la teoría de la dependencia, Cardoso y Faletto, ponen el acento en la reconstrucción del proceso histórico-estructural de las sociedades para entender cómo se relacionan las clases y cuál es el movimiento que en cada período las impele a la transformación.

Desde una óptica marxista, Ianni, considera que el “Estado populista”, si bien no es un nuevo modelo de Estado, es intervencionista y nacionalista en lo económico dentro del marco del capitalismo, y culmina con la metamorfosis de la política de masas en lucha de clases. Vilas afirma que el populismo es

⁶⁴ Murmis, Miguel, y Portantiero, Juan Carlos (1971) *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI.

⁶⁵ Torre, Juan Carlos (1990) *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del populismo*. Buenos Aires: Sudamericana.

el resultado de un intenso y masivo proceso de movilización social que se expresa en una acelerada urbanización, en el impulso a un desarrollo económico de tipo extensivo, en la consolidación del Estado nacional y en la ampliación de su gravitación política y económica. Murmis, Portantiero, Weffort y Torre analizan al populismo como un fenómeno que resulta de la crisis de hegemonía oligárquica. Touraine sostiene que el populismo es la identificación del movimiento con el Estado y por eso se define mejor como una política de integración nacional.

El enfoque coyuntural (Adelman⁶⁶, James⁶⁷, Matsuhita⁶⁸, Tamarin⁶⁹, Horowitz⁷⁰, Fausto Boris⁷¹, Murilo De Carvalho⁷², y French⁷³), condiciona la aparición y desarrollo de populismos en América Latina a “las oportunidades y restricciones que rodean a las distintas clases o sectores sociales, en particular trabajadores, en determinadas coyunturas”. Sus estudios hacen hincapié en las oportunidades y las restricciones que rodean a las distintas clases o sectores sociales, en particular a los trabajadores, en determinadas coyunturas históricas y cuestionan las explicaciones que remiten los orígenes del populismo al pasado pre-populista de América Latina. Existen distintas inclinaciones y corrientes en este grupo, entre ellos las que destacan la cultura social y política de la clase, la constitución de los sujetos y los sentidos que tienen para los actores sociales las experiencias vividas (James) y las que se centran en el estudio de la compleja red de alianzas,

⁶⁶ Adelman, Jeremy (1992) “Reflections on Argentine Labour and the Rise of Perón”, en *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 11, N° 3 (Sep., 1992), pp. 243-259.

⁶⁷ James, Daniel ([1988] 2010) *Resistencia e integración: El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. - 2ª ed. - Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010.

⁶⁸ Matsushita, Hiroshi (2014) *El movimiento obrero argentino, sus proyecciones en los orígenes del peronismo (1930-1945)*, Buenos Aires: Ediciones RYR,.

⁶⁹ Tamarin, David (1985) *The Argentine Labor Movement, 1930-1945: A Study in the Origins of Peronism*. Albuquerque.

⁷⁰ Horowitz, David (1990) “Industrialists and the Rise of Perón, 1943-1946: Some Implications for the Conceptualization of Populism”, en *The Americas*, Vol. XLVII, N° 2.

⁷¹ Fausto, Boris (2003) “El Estado getulista (1930-1945)”, en *Historia concisa de Brasil*. México: FCE.

⁷² Murilo de Carvalho, J. (2005) *Cidadania no Brasil. O longo caminho*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

⁷³ French, John D. (1992) *The Brazilian Workers' ABC: Class Conflict and Alliances in Modern Sao Paulo*. Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press.

relacionada a su vez con procesos socio-económicos que crearon distintas dinámicas y posibilidades de alianzas entre las clases (French).

Finalmente, desde un enfoque cultural, sus autores (Laclau, De Ipola y Portantiero) se destaca que el populismo se gesta en el ámbito cultural, especialmente en el discurso ideológico como mecanismo para articular sectores sociales.

El objetivo de los autores es “plantear algunos problemas epistemológicos de la construcción del concepto para su discusión y debate”. Son críticos respecto al empleo del concepto de neopopulismo pues a su entender “llevaría adelante una incorporación selectiva que fragmenta a los sectores subalternos” que lo distancia significativa del populismo clásico, que buscaba la inclusión social y política de amplios colectivos humanos (sindicatos y partidos políticos) (pág. 24).

2.2.5.4. Los reflejos en el espejo populista

Francisco Pazzini (2005) en la introducción a la obra colectiva *El populismo como espejo de la democracia*, señala que aunque no existe aún un acuerdo académico sobre el significado del populismo, es posible identificar un núcleo analítico en torno al cual existe un grado significativo de consenso, en el cual destaca tres elementos: 1) un modo de identificación; 2) un proceso de nominación; y 3) una dimensión política (pág. 10).

Distingue tres modos de aproximación teórica y analítica al populismo: a) generalizaciones empíricas; b) explicaciones historicistas; y c) interpretaciones sintomáticas (Pazzini 2009: 11).

En el enfoque empirista en base al análisis de supuestos casos de populismo se intenta extraer una serie de características definitorias positivas que podría ofrecer un grupo distintivo de atributos para caracterizar el fenómeno. Trabajos orientados a tipificar el populismo como los de

Margareth Canovan, Peter Wiles⁷⁴ y Michael Conniff⁷⁵, son parte de esta perspectiva.

El segundo enfoque consiste en vincular al populismo con un determinado periodo histórico, formación social proceso histórico o conjunto de circunstancias históricas. La mayoría de los trabajos sobre el populismo se entroncan aquí, teniendo como espacio temporal predilecto la crisis económica de la década de 1930 hasta la desaparición del modelo de desarrollo de industrialización mediante la sustitución de importaciones (ISI), a fines de la década de 1960, y presta especial atención al liderazgo carismático de líderes populistas como Getulio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina y Lázaro Cárdenas en México.

El enfoque sintomático del populismo si bien incorpora algunos de los rasgos de los enfoques empíricos e historicista, tiene como objeto principal de análisis la constitución del pueblo como un actor político. Este enfoque entiende al populismo como un discurso anti *statu quo* que simplifica el espacio político mediante la división simbólica de la sociedad entre “el pueblo” (como los de abajo) y su otro (las elites políticas, la burguesía y los poderes fácticos).

El autor reflexiona sobre el hecho de que el populismo inevitablemente nos remite a los “fantasmas del totalitarismo” que ensombrecen la democracia; pero también, resalta el autor, “nos recuerda que todas las sociedades democráticas modernas constituyen un compromiso entre lógicas democráticas y no democráticas, y que el equilibrio de poderes de la democracia liberal moderna garantiza y limita simultáneamente la voluntad del pueblo” (p. 49). En la sociedad global en la que vivimos, en donde el colectivo, la política tradicional y los políticos tradicionales pierden representación, el autor es de la opinión que el populismo plantea preguntas incómodas sobre “aquellos que quieren llenar el vacío del poder, pero

⁷⁴ Peter Wiles (1967) “Populism: A Syndrome not a Doctrine,” en Ionescu and Gellner (Coord.), *Populism. Its Meaning and National Characteristics*. Londres: Macmillan, pp. 163-79, en este artículo el historiador argentino identificó 24 características diferentes.

⁷⁵ Michael Conniff (1999) “Introduction”, en *Populism in Latin America*.

también sobre aquellos a quienes les gustaría subordinar la política a la razón tecnocrática y a los dictados del mercado” (pág. 49).

2.2.5.5. Las olas populistas

Susanne Gratius (2007) en *La “tercera ola populista” de América Latina*, con vista a explicar el fenómeno populista en la región utiliza el término de “Latin-populismo”, su texto se inserta dentro de la preocupación internacional por el llamado “giro a la izquierda latinoamericano” de la primera década del siglo XXI, que generó miedos y expectativas por el triunfo electoral de líderes abiertamente contrarios al sistema económico neoliberal como Evo Morales en Bolivia, Carlos Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela y los esposos Kischner en Argentina. En sus términos, “desde una perspectiva principalmente actual, este Documento de Trabajo analiza el fenómeno del populismo latinoamericano y su relación con la democracia” (pág. 1)

Señala un punto crucial dentro del análisis del populismo y es que éste es un proyecto político en una zona gris entre la democracia y el autoritarismo, y por ello a su entender:

“El retorno del populismo a Sudamérica y en particular a la región andina (la de mayor inestabilidad política de América Latina) refleja que el proceso de construcción de la democracia y del Estado que aún no ha concluido” (pág. 1).

Plantea la historia del populismo en la región a través de tres estadios que denominó “olas populistas” y que vendrían a ser las siguientes:

El “nacional-populismo” de los cuarenta. En donde se encuentra el origen del Latin-Populismo y que contribuyó a crear Estados nación, a través de la inclusión de las capas urbanas menos favorecidas de la población. De manera comparativa a las experiencias populistas en Rusia y EE.UU., señala que la variante latinoamericana “fue un movimiento que surgió en el contexto de la transición de sociedades rurales a sociedades industriales” (pág. 6). De este modo plantea que el “populismo histórico” fue la respuesta tardía a una crisis del Estado liberal oligárquico dominado por los

terratenientes. Esta transición produjo nuevos actores políticos, cuyas demandas sociales canalizó el populismo de forma vertical. Este periodo está marcado por la presencia de líderes carismáticos que permanecieron durante muchos años en el poder y que promovieron el voto universal, la inclusión de los obreros y crearon sistemas de protección social. Líderes como Juan Domingo Perón en Argentina, Gétulio Vargas en Brasil, José María Velasco Ibarra en Ecuador y, Lázaro Cárdenas en México. En materia económica, el populismo de esta época estuvo ligado al modelo de sustitución de importaciones (ISI) que predominó en la región hasta los años ochenta del siglo pasado.

El neopopulismo de los noventa. A finales de los ochenta surgieron populistas de derecha que aplicaron políticas económicas de corte neoliberal siguiendo la receta del denominado consenso de Washington. Sus principales representantes fueron Carlos Menem en Argentina y Alberto Fujimori en Perú. Ambos abusaron del liderazgo personal, concentraron el poder y gobernaron al margen o en contra de las instituciones democráticas –cabe recordar el “golpe institucional” de Fujimori en 1992 cuando cerró el parlamento. Los dos aplicaron políticas económicas basadas en las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI): combatir la inflación, reducir el tamaño del Estado, privatizar empresas estatales y fomentar la apertura comercial. Ambos representaron los intereses de los grandes inversores, aunque promovieron también el ascenso de un nuevo grupo de empresarios nacionales. Los dos dejaron un balance desastroso que requirió una profunda reconstrucción política, social y económica en sus países.

El populismo de izquierdas del siglo XXI. En opinión de la autora, esta tercera ola populista, se diferencia del nacional-populismo por su discurso político y orientación izquierdista y por no volver al período de sustitución de importaciones. Y del neo-populismo, por sus políticas públicas y oposición a la política económica neoliberal. Propone en líneas generales una mayor intervención estatal en la economía que incluye la nacionalización de los recursos naturales, así como nuevos programas de educación y salud son algunas de las medidas destinadas a fortalecer el papel del Estado. Señala

con énfasis que “los elevados precios en el mercado energético internacional, permiten a los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela a utilizar el gas y el petróleo para financiar proyectos en sus países y como “arma política” frente al exterior. Otra característica común del populismo de izquierdas es su vinculación o afinidad con el socialismo cubano y su discurso anti-globalización que le diferencia del nacional populismo histórico. Propone una lectura de la bibliografía sobre el “latin-populismo” dividida en tres teorías:

- a. *La “tesis culturalista”*. La cual sostiene que la causa del populismo en América Latina es su historia colonial, puesto que la tradición iberoamericana fomenta el clientelismo, el patronazgo, la corrupción y los vínculos personales de poder en detrimento de la democracia representativa.
- b. *La “tesis dependentista”*. La cual surgió en los años setenta a raíz de la teoría de la dependencia de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, sostiene que la extrema dependencia externa de las economías latinoamericanas ha impedido el desarrollo de sociedades democráticas con bienestar social.
- c. *La “tesis política”*. La cual explica la debilidad democrática de la región a través de la crisis de la democracia representativa y particularmente del sistema de partidos políticos y de las instituciones del Estado.

El populismo latinoamericano, a su entender, es consecuencia del entrecruce de estos tres factores: 1) De una cultura política de redes clientelares donde las políticas sociales no son un derecho de los ciudadanos sino un “regalo” del patrono o caudillo a cambio de apoyo político, 2) De la existencia de estados débiles y vulnerables ante fluctuaciones de la coyuntura internacional que apenas ofrecen servicios a los ciudadanos, 3) De gobiernos elitistas que no han creado una ciudadanía política y social o una verdadera democracia representativa e inclusiva (pág. 2).

Encontramos en estos intentos de síntesis el proceso de cambio gradual de perspectiva respecto al populismo y la influencia de Ernesto Laclau dentro del debate. El enfoque estructural-funcionalista fue el predominante, y por ello el papel del Estado, los procesos de modernización y el rol de las elites nacionales (políticas y económicas) serán los más destacados.

Se analizó, el fenómeno como uno de los tipos del autoritarismo, experiencia vivida y muy reciente para los investigadores que iniciaron el debate, así que se intentó acuñar un concepto aplicable a todos los contextos. Sin embargo, la particularidad del fenómeno en América Latina demandó ampliar la perspectiva, pues estos gobiernos populistas pese a su autoritarismo emprendieron paradójicamente procesos de ampliación de la ciudadanía con medidas radicales que fueron postergadas por los gobiernos anteriores. Así los autores se enfocaron en el movimiento social y las particularidades del liderazgo de los gobernantes populistas. El interés gradualmente se desplazará a analizar las formas en que se articulan las demandas sociales de los actores sociales y como se da forma al colectivo en la palabra “pueblo”, que encierra una serie de significantes dependiendo de quién la formula y sobre quienes recae.

2.3. La región: fines del siglo XIX e inicios del siglo XX

Tras la independencia y los primeros procesos de modernización a inicios del siglo XX, la historia de los países de América del Sur guarda parecidos estructurales en economía, política y en sus características poblacionales. En lo económico existía la coexistencia de modos económicos capitalistas y no capitalistas. En lo político, la nueva geografía de la región veía a los nacientes países trazar y determinar sus nuevas fronteras, existían poderes regionales más que un poder central nacional; si bien se adoptó en la forma, el Estado democrático como forma de gobierno, en la práctica existía una precaria institucionalidad y la fortaleza del Estado se medía por la capacidad del gobernante de turno por mantener el control respecto a otros “caudillos” que pugnaban por hacerse del poder. La sociedad en estos países era plural

y étnicamente diversa, existía una masa rural analfabeta, sectores urbanos pobres y una ciudadanía en ejercicio muy precaria.

Para el siglo XX, a riesgo de ser reduccionista, la historia de los países de la región divergió según el modo en que afrontaron los siguientes problemas: 1) la influencia de los caudillos; 2) la concentración del poder económico a través de la gran propiedad; y 3) la homogenización de la población.

Estos problemas están interconectados porque el poder político de los caudillos dependía de la ausencia de un poder estatal central, el juego político electoral se restringía a un grupo privilegiado de la sociedad al que se denominará “la oligarquía”, que tenía como base de su poder económico y político, la tenencia de grandes propiedades agrícolas. Los partidos políticos eran elitistas, con una visión patrimonialista del Estado y con un sistema electoral en donde muy pocos ciudadanos votaban. El ejercicio del derecho al voto estaba restringido a los ciudadanos por razones de edad, pago de tributos, analfabetismo, y sexo.

A medida que los sistemas electorales se perfeccionaban, se delimitaban mejor las fronteras nacionales, la actividad económica primario exportadora se diversificaba, aumentaba la recaudación tributaria, y las burguesías comenzaban a tener mayor protagonismo en la administración pública; los caudillos perdían paulatinamente protagonismo en la vida política, consolidándose la modernización de la sociedad y el Estado. Este “alejamiento” del poder de los caudillos tuvo su propia dinámica en cada una de los países de la región. Según sea la capacidad y ambición de la elite política civil, ahora organizada en partidos políticos, podrá separarse del caudillismo o convivir con él en el poder.

En las primeras décadas del siglo XX, América Latina era predominantemente agraria, tenía sistemas políticos aristocráticos y excluyentes, no se habían desarrollado “grupos de interés”, ni sindicatos fuertes ni partidos de masas. Esta situación generó una gran conflictividad en diferentes niveles, tanto entre los campesinos y oligarcas en los

latifundios, como en la estructura del Estado, pues los oligarcas impedían la implementación de políticas que afectaran sus intereses. Como señalara Barrington Moore ([1966] 1991) en su célebre obra *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia*, el mayor freno de tipo estructural para la afianzamiento de la democratización social y política, estaba constituido por la permanencia de una agricultura terrateniente tradicional basada en la ligazón, por razones económicas y extraeconómicas, del campesino a la tierra.

Por estos motivos, la reforma agraria surgió como una medida idónea para solucionar los conflictos en el campo y debilitar el poder de los oligarcas en el escenario político. La medida fue necesaria en toda la región y no se aplicó de manera uniforme en todos los países, su aplicación dependía de la fortaleza de la oligarquía para resistir las presiones de los demás actores sociales, en nuestro país la medida llegará con mucho retraso, recién en los años sesenta con un gobierno militar y tras un golpe de Estado la reforma pudo llevarse a cabo. Peter Dorner (1974) señala que:

“En un sentido estricto; el concepto reforma agraria se refiere a las medidas encaminadas a la redistribución de la tierra en favor de los campesinos y los pequeños agricultores. Desde un punto de vista más amplio, puede considerarse que la reforma agraria incluye la consolidación y la concesión de títulos de propiedad sobre la tierra en zonas donde prevalecen sistemas de tenencia regidos por la costumbre, así como el asentamiento de colonos en áreas cultivadas por primer vez” (pág. 14).

Esta redistribución de la tierra, generó el consecuente debilitamiento del poder oligárquico y la consagración del derecho de propiedad para las masas campesinas privadas de él. La transformación social que la reforma agraria supuso fue lo que finalmente determinó el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna en América Latina, pues con esta medida se destruyó el núcleo del poder del Estado oligárquico.

Cada uno de los países latinoamericanos emprendió la tarea de homogenizar a su población y extender la ciudadanía. No fue una tarea fácil, pues la característica fundamental de la poblacional de América Latina es la

diversidad étnica. Ante ello se produjo una serie de políticas que buscaban alfabetizar a las masas populares y cimentar las bases de una ciudadanía nacional. Pero, también existieron posiciones abiertamente racistas que buscaban exterminar a las minorías étnicas, por considerarlas un obstáculo para el desarrollo y la consolidación de la nación; siguiendo los planteamientos del positivismo y el darwinismo social. A excepción de Brasil, que pudo cimentar con mediano éxito su identidad nacional en la diversidad, el resto de países de América Latina optó por el exterminio cultural y, en casos extremos, por el exterminio físico de las poblaciones aborígenes pobres.

2.4. La experiencia populista latinoamericana

El populismo ha constituido uno de los fenómenos históricos de mayor impacto social y recurrencia en la historia política de América Latina. La región siempre a medio a camino entre el autoritarismo y la democracia, es considerada por algunos críticos como un “paraíso populista” (Zanatta, 2014) en donde el populismo no sería un sólido rival de la democracia representativa sino el modelo político regional hegemónico (pág. 209). Exagerada o no esta apreciación la recurrencia de fenómenos con rasgos populistas ha sido una constante que ha llevado a considerar al populismo latinoamericana como único, y dotado de una propia definición conceptual, variables determinantes y una propia periodificación.

Mario Poblete (2006) señala que el “populismo latinoamericano” es un fenómeno social *sui generis* que se diferencia de aquellas formas de populismo anteriores en otras regiones del mundo. En su opinión las experiencias tradicionalmente identificadas como predecesoras del populismo moderno, el populismo ruso y el norteamericano, fueron experiencias que involucraron a “sectores sociales específicos” de sus respectivos países, en el “Populismo Latinoamericano, la sociedad en su totalidad se ve imbuida por el fenómeno impulsado desde arriba” (pág. 28). Propone una conceptualización propia del populismo latinoamericano en los siguientes términos:

“En este sentido el *concepto formal* de Populismo Latinoamericano versa de la siguiente manera: es un tipo [de] configuración social específica (política, económica y social en general) que adquiere Latinoamérica, principalmente, a mediados del siglo XX. La cual en cuanto impulsada desde el Estado, adquiere generalización a nivel nacional, es decir, la sociedad nacional en su conjunto padece el influjo y organización estatal. Es también un fenómeno *multivalente*, ya que puede tener diferentes intensidades en cada ámbito social, es decir, puede ser intena o laxa desde la perspectiva comparada, como puede estar ausente en uno como en varios ámbitos. Dicho sea de paso, podrían observarse casos en que el sistema político no presente indicios de Populismo pero en un sistema económico que si responda a todos o a la gran mayoría de los cánones propios del Populismo. Del mismo modo, el fenómeno puede ocurrir concentrado o disperso temporalmente” (pág. 28).

Como recuerda Aníbal Quijano (1999) el “membrete populismo” fue usado en América Latina, por ejemplo, para experiencias tan distintas como el battlismo en Uruguay, el cardenismo en México, los partidos apristas (APRA, AD, MNR, MLN, Ortodoxos) y los gobiernos de Belaunde en Perú, el liberalismo de Gaitán en Colombia, el varguismo o getulismo posterior al “Estado Novo” en Brasil, el gobierno de Eduardo Frei en Chile, el gobierno de Velasco Ibarra en Ecuador, y el gobierno de Juan José Torres.

En lo que respecta a la datación histórico cronológica del populismo, existen muchas periodificaciones para la región influenciadas por las preferencias de los autores respecto a los casos analizados, las variables tomadas para el análisis (política económica, consolidación del Estado y la democracia, participación de las masas populares), así como a la particular valoración que tengan sobre el populismo (como más cercano al autoritarismo ó como constructor de identidades políticas democráticas). A medida que el crecimiento capitalista y urbano erosionó la hegemonía tradicional de las clases altas, emergieron los precursores del populismo en las ciudades más grandes y los países más prósperos, los que podrían denominarse los populistas tempranos o liberales. Aunque atraían algunas simpatías del sector obrero, se apoyaban en las elites no comprometidas con el ejercicio del poder y la emergencia de las clases medias.

Paul Drake (1982) sugiere que podría ser útil considerar las nociones de populismo “temprano”, “clásico” y “tardío”. Esta periodificación no puede ser tomada de manera rígida pues la aparición del populismo varió de país en país, según sus propias características políticas, sociales y económicas. En esta línea Michael Connif (2003) propuso la siguiente periodificación para incluir, además al “neopopulismo”:

Cuadro I
PERIODIZACIÓN DEL POPULISMO Y DEL NEOPOPULISMO

	POPULISMO		NEOPOPULISMO
Periodo	Características	Periodo	Características
1900 – 1929	Populismo temprano ⁷⁶ .	80s`	Experimentación temprana por líderes activos antes de los golpes militares (Alan García, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Arnulfo Arias).
40`,50` y 60`	Populismo clásico, aparentemente extinguido por los regímenes militares.	90`	Neopopulismo de verdad en América del Sur (Menem, Fujimori Collor de Mello, Bucaram).
80`y 90`	Resurgimiento del populismo (80`) y neopopulismo (90`).	Fines de los 90`y comienzos del siglo XXI.	Neopopulismo militar o militarismo populista (Chávez, Gutierrez, Oviedo).

Fuente: Michael Connif (2003)

Un tema crucial que consideramos necesario poner de relieve para adecuar estas periodificaciones sobre el populismo, es la interrogante que Ernesto

⁷⁶ José Luis Renique (2015) considera dentro de esta categoría a los gobiernos de José Batle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915) en Uruguay; Hipólito Irigoyen (1916-1922) en Argentina y Jorge Alessandri (1958-1964) en Chile.

Laclau (2006) hiciera sobre la relación entre el populismo con un mayor acceso a la ciudadanía por sectores de la población excluidos. Se interroga el “¿por qué algunas alternativas u objetivos políticos sólo pudieron ser expresados a través de medios populistas?” (pág. 32).

La resolución de esta pregunta implica ir más allá de los matices autoritarios y demagógicos con los que tradicionalmente se relaciona el populismo; que si bien son parte de sus características no son únicas ni mucho menos determinantes. Es además, establecer que tanto sirvieron las experiencias etiquetadas como populistas para ampliar la ciudadanía y qué tipo de derechos exigibles al Estado generaron. En este orden de ideas es que discrepamos con la inclusión del término neopopulismo como una manifestación o evolución del populismo histórico, pues el asistencialismo practicado por los regímenes políticos neoliberales de los años noventa de la pasada centuria respondían a un plan focalizado de ayuda a poblaciones vulnerables mas no constituyeron de por sí un medio de ampliación de la ciudadanía.

2.5. El populismo clásico o histórico latinoamericano

El período 1930-1950, según fechas reiteradas en la mayoría de los estudios, es el periodo de los llamados “populismos clásicos”. Es un espacio de tiempo coincidente con eventos de importancia mundial tanto en el plano económico como en el político. El crack de Nueva York de 1929, repercutió significativamente en América Latina, en lo que denomina Olivier Dabène (2001), “transmisión internacional de coyuntura” (TIC). La economía latinoamericana susceptible a los cambios del mercado mundial internacional, como era, y es hasta la actualidad, vivió un proceso de decrecimiento de sus principales productos de exportación. En pleno contexto de la Guerra Fría, los países latinoamericanos se vieron en la necesidad de modificar la estructura formal del juego político así como la manera en que se incorporaba a las masas populares, en un periodo de avance de las ideas sindicalistas de tendencia socialista y marxista en los aún pequeños y poco organizados colectivos obreros. Para un sector

informado de latinoamericanistas se dieron tres tipos de respuesta política a la crisis, las cuales estuvieron muy relacionados a la coyuntura de cada país latinoamericano: gobiernos oligárquicos, dictaduras militares y los casos populistas. La crisis económica creó un sentimiento de vulnerabilidad generalizado en la población de los países latinoamericanos, que los hizo especialmente simpatizantes de políticas proteccionistas y nacionalistas. Como acertadamente señalan Silvina Funes y Damián Saint-Mezard (2002) los populistas latinoamericanos han tenido su corazón en la *ciudad* y el *campo* actuó generalmente aportando la masa de seguidores producto de las migraciones internas (pág. 320).

Algunos autores coinciden en señalar que en Latinoamérica el populismo aparece por la crisis del Estado liberal dirigido por las oligarquías agroexportadoras. En ese punto es cuando los populistas habrían descubierto que la profunda desigualdad existente en Latinoamérica impedía la modernización (Palacios, 2001). Constituyéndose como un movimiento político urbano que se oponía al *statu quo* basado en la exportación de productos primarios vigente desde el siglo XIX, y que proponía un cambio acelerado basado en el desarrollo industrial. El afianzamiento de la teoría económica de la dependencia impulsada por la CEPAL fortalecerá esta posición. Considerándose a la exportación de materias primas equivalente a dependencia. Por lo que un objetivo capital de los populismos clásicos será impulsar la industrialización y la emancipación económica, tratando de construir un capitalismo nacional (Funes y Saint-Mezard 2002: 321).

En esa línea interpretativa, Carlos Malamud (2005) señala que el populismo implicó la postergación de derechos y libertades individuales a favor de la reivindicación de los intereses populares y la mayor capacidad estatal para generar desarrollo y responder a esos intereses. Por ello, continúa el autor, una condición esencial para que los Estados cumplieran con esas nuevas misiones era el reforzamiento del poder presidencial, ya que solo así podrían tomarse las decisiones necesarias evitando trabas u obstáculos de carácter político.

Por consiguiente, toda la década de 1930 se caracterizará por la aparición de gobiernos autoritarios y dictatoriales, algunos llegados al poder por elecciones y otros por golpes de Estado, que enfatizaban ese reforzamiento de su autoridad como un mecanismo fundamental que permitiría el orden interno y la estabilidad económica. Este proceso vio sus primeras manifestaciones empezando esta década, cuando en 1930 una serie de levantamientos militares y civiles terminaron en golpes de Estado en varios países de la región como Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y República Dominicana. Fue en esa coyuntura tan convulsa que surgieron nuevos líderes y movimientos políticos que más adelante serían catalogados de populistas, como lo detallaremos en las siguientes líneas.

Latinoamérica, de esta manera, será una de las regiones más complejas en estos años por la confluencia de diversos procesos entre golpes de Estado, levantamientos populares, guerras civiles, guerras externas, sumándole a todo ello el desgaste de las formas tradicionales de dominación política (gobiernos oligárquicos) y del funcionamiento económico (modelos primario-exportadores). Ante esa realidad, lentamente se irá abriendo paso una forma de hacer política que luego será conocida como populismo.

Según Ernesto Laclau (2005), el liberalismo que caracterizó la política latinoamericana de las primeras décadas del siglo XX se articuló en torno a cuatro principios básicos: 1) un liberalismo dirigido por las elites como la ideología política de los gobiernos, 2) un énfasis en el desarrollo económico y material con una base ideológica positivista, 3) la adopción de un europeísmo o la admiración de los valores y 4) costumbres europeos como símbolos de lo civilizado y el antipersonalismo como una clave de la estabilidad política.

Los populismos de los años treinta van a reaccionar frente a todas esas características, las que van a ser tenidas como representativas de una forma elitista, egoísta y anticuada de hacer política, frente a la visión moderna que encarnaran los nuevos líderes latinoamericanos. Así, las ideologías populares enfatizarán su antiliberalismo político, al criticar el carácter

excluyente de las elites respecto a los sectores medios y populares; su nacionalismo antieuropeo, resaltando las particularidades del desarrollo histórico de cada país, su defensa de las tradiciones populares frente al europeísmo anterior y el personalismo encarnado en la exaltación de los líderes populares.

Esto quiere decir que, justamente, la forma de hacer política en los años treinta va a marcar notorias y sustanciales diferencias con los principios que habían guiado a la mayoría de naciones latinoamericanas en las décadas precedentes. Sin embargo, estas novedades no fueron extensivas a todos los países de la región, por lo que no podemos generalizarlas sino plantear que hubo una respuesta política diferenciada en América Latina frente a la crisis de los treinta. Dentro de esas respuestas una de ellas será la práctica populista, que examinaremos más adelante como un caso particular presente en algunos países, incluido el Perú.

A diferencia de la experiencia europea y norteamericana donde el populismo remitía nostálgicamente a un modelo pasado de homogeneidad social, en América Latina no se buscó modelos que imitar en el pasado, sino que se persiguió transformaciones en el presente con miras al futuro. La modernización del Estado y la sociedad eran imperativos, y para ello se conjugan en el populismo voluntad política de modernización y nacionalismo. A su vez existió una preocupación e interés manifiesto por controlar los movimientos sociales, tanto por temor a su capacidad destructiva del orden, así como la necesaria inclusión de las masas populares en el proceso de modernización. Existe dentro del populismo clásico la idea de que el industrialismo es equivalente de desarrollo económico e indicador de bienestar social para el proletariado, mientras que actividades económicas como la agropecuaria y la minería, así como el comercio agroexportador, son consideradas como causas fundamentales de atraso económico (Ianni 1984: 167).

En esta línea de ideas los regímenes que mejor se identifican como parte del populismo clásico son los de Getulio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas

en México y Juan Domingo Perón en Argentina. Observemos en el cuadro sus principales características.

2.5.1. Brasil: El Estado Novo de Getulio Vargas

Getúlio Dornelles Vargas es quizás el más importante y polémico político brasileño del siglo XX, su influencia se extiende hasta el día de hoy. Su herencia política es reclamada, al menos, por dos partidos brasileños actuales: el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Laborista Brasileño (PTB). Llegó a la presidencia carioca en cuatro oportunidades: a) 1930–1934 en el Gobierno Provisorio; b) 1934–1937, en el gobierno constitucional; c) 1937–1945, en el Estado Novo; y d) 1951–1954, presidente electo por voto directo.

Si bien la experiencia brasileña propiamente populista solo puede considerarse como tal recién con la ampliación de la base electoral que lleva a Vargas al poder en 1951, es necesario hacer el recuento de los principales cambios ocurridos desde la década de los años treinta para comprender el ascenso de Vargas y la consolidación del populismo en la política brasileña.

Weffort (1998) acertadamente observa que ya a partir de 1930, existía una “tendencia a la ampliación institucional de las bases sociales del Estado”, tras el abrupto colapso del estado oligárquico brasileño. En esa ampliación, señala que “la participación política de las clases populares tiene mucho que ver con las condiciones en las que se instala el nuevo régimen y con la incapacidad de las clases medias y de los sectores industriales de reemplazar a la oligarquía en las funciones del Estado” (pág. 137).

Brasil para las elecciones de 1930 llegó afectado por la crisis económica consecuencia del crack de 1929. Las elecciones del 1 de marzo se llevaron a cabo de acuerdo con las tradiciones de la antigua república, es decir con el recurso desde el gobierno de un fraude a gran escala. Tras el triunfo del candidato oficialista Washington Luís, un grupo de jóvenes políticos se

acerca al movimiento *tenentista*⁷⁷ con los cuales toman el poder el 24 de octubre. El 3 de noviembre Getúlio Vargas derrotado en las elecciones, es nombrado presidente provisorio y permanece en funciones durante quince años⁷⁸.

La llegada de Vargas al poder se produce en medio de discrepancias dentro de las elites regionales en su alternancia al poder y del hartazgo de las clases medias y populares frente a la corrupción de los gobernantes. En la *República Velha* (1889–1930), la llamada “política del *café com leite*”, regía el destino político de Brasil, en este sistema alternaban en el poder los políticos de São Paulo y Minas Gerais. Por eso, a comienzos de 1929, Washington Luís seleccionó al Presidente de São Paulo, Júlio Prestes, como su próximo sucesor, lo que fue apoyado por los presidentes de los 17 estados. Solamente tres estados negaron el apoyo a Júlio Prestes: Minas Gerais, Río Grande del Sur y Paraíba.

Los políticos de Minas Gerais quedaron insatisfechos con la selección de Júlio Prestes, ya que esperaban que Ribeiro de Andrada gobernara aquel estado. Como resultado de la ruptura, esta política llegó a su fin y se inició la articulación de un frente opositor al intento del presidente. Minas Gerais, Río Grande del Sur y Paraíba se unieron a políticos de oposición de diferentes estados, inclusive el Partido Democrático de São Paulo, para frenar la candidatura de Júlio Prestes. Formaron, en agosto de 1929, la Alianza Liberal, que fue lanzada el día 20 de septiembre de ese mismo año y Getúlio Vargas y João Pessoa (Presidente de Paraíba) concurren como candidatos a las elecciones presidenciales.

⁷⁷ El **tenentismo** fue el nombre dado al movimiento político-militar y a la serie de rebeliones de jóvenes oficiales (en la mayoría, tenientes) del Ejército Brasileño en el inicio de la década de 1920, descontentos con la situación política de Brasil. No propugnaban ninguna ideología en particular pero sí demandaban reformas en la estructura de poder del país, entre las cuales se destacaban el fin del “voto cautivo”, institución del voto secreto y la reforma a la educación pública. A pesar de su derrota, el movimiento tenentista tenía todavía una fuerza apreciable debido a su experiencia militar y a su prestigio en el seno del ejército. Véase: Boris Fausto, “Brasil: estructura social y política de la Primera República, 1889-1930”, pp. 413-455. En Leslie Bethell, ed (1992). *Historia de América Latina*. Tomo 10. América del Sur, c. 1870-1930.

⁷⁸ W. Ansaldi y V. Giordano (2012) dividen este periodo en: a) Gobierno Provisorio (1930-1934); b) Presidencia Constitucional (1934-1937) y; c) Dictadura y *Estado Novo* (1945-1951).

El programa de la Alianza Liberal reflejaba las aspiraciones de las clases dirigentes regionales no vinculadas directamente con el café. Su objetivo también era ganarse las simpatías de la clase media y, en cierta medida, de la clase obrera. Defendía la necesidad de estimular la producción nacional en general, y no solamente la del café. También se oponía a los diversos proyectos de valorización del café en nombre de la ortodoxia financiera, y por esta razón no estaba en desacuerdo, en este punto concreto, con Washington Luís. Propuso ciertas medidas de protección para los obreros, como el derecho a pensiones, normas especiales en relación con el empleo de mujeres y niños, y el derecho a vacaciones remuneradas. (En los centros urbanos importantes, en los cuales Vargas se vio obligado a hacer campaña un poco contra su voluntad, fue recibido entusiásticamente; y ello hasta en Sao Paulo, lugar donde el carácter antipaulista de la Alianza hubiera sido fácilmente explotable.) Como réplica clara al presidente, que había afirmado que el problema social en Brasil era un «problema policial», la plataforma de la oposición afirmaba que este problema no podía ser ignorado, y que constituía “uno de los problemas que debía ser estudiado más seriamente por el poder administrativo”.

Las elecciones fueron realizadas el día 1º de marzo de 1930 y dieron la victoria a Júlio Prestes. La Alianza Liberal se rehusó a aceptar la validez de las elecciones, alegando que la victoria de Júlio Prestes era un fraude electoral. Getúlio Vargas obtuvo en su propio Estado 298.677 votos a favor, frente a 982 en contra. La victoria de Júlio Prestes, admitida públicamente por Borges de Medeiros, pareció señalar el fin de la división regional. Sin embargo, muy pronto empezaron a airearse diferencias de opinión en el seno de la Alianza.

Ya durante el gobierno provisorio, Vargas tomó medidas tendientes a la incorporación desde arriba de las masas populares como: 1) estableció la jornada de trabajo de ocho horas, 2) estableció la protección al trabajo de la mujer y el menor, y 3) reglamentó las condiciones de trabajo para empleados bancarios y de los rubros de farmacéuticos y panaderos. En 1931, el decreto 19770 reglamentó la sindicalización de empleados y de empleadores, “a las

asociaciones sindicales se les atribuía el derecho de defender, ante el gobierno y el Ministerio de Trabajo, los intereses económicos, jurídicos, higiénicos y culturales de todos los trabajadores que ejerciesen profesiones idénticas similares o conexas. Esta función sólo sería permitida a los sindicatos reconocidos por el Ministerio de Trabajo recién formado.” De esta manera, desde temprano aparecía la necesidad de incorporar a las masas en un sistema corporativo que permitiera control y participación a la vez. La negociación directa entre la clase empresarial y los trabajadores pasó a estar mediada por un Estado árbitro que se reservaba el poder de decisión. Así “el Estado pasó a representar tanto a las clases patronales como a los trabajadores”.

Es a partir de 1930 cuando Getulio Vargas comienza a ejercer el poder y se plantea, fundamentalmente, el cambio de la política económica, en particular con la ampliación de las bases del sector industrial. Tales cambios estaban directamente relacionados con la crisis de año 1929 y sus efectos sobre la economía cafetalera que predominaba en el país. Esto implicaba la sustitución del modelo agro-exportador por el desarrollo de una fuerte industria que permitiese la eliminación de la dependencia externa y fomentase una economía interna fuerte. Entre los años de 1930 y 1937 Vargas se plantea el enfrentamiento de la situación político-económica que atraviesa Brasil, la cual está caracterizada por la crisis económica y el descenso político de la oligarquía cafetera, asentada en el estado de Sao Paulo. Los paulistas (del Estado de Sao Paulo), no conformes con la nueva situación a lo que se agrega la depresión económica, se enfrentan en 1932 al gobierno de Vargas, creándose dos frentes opositores: los constitucionalistas de Sao Paulo y los legalistas que constituyen las fuerzas del gobierno, lo cual conduce a una conflagración civil que termina con un acuerdo entre Vargas y los paulistas.

El manejo de esta situación pone en evidencia un objetivo del nuevo presidente: acabar con los regionalismos y propiciar en el Brasil un sentimiento nacionalista. Sin embargo, con la victoria de la “revolución”, el

fenómeno del caudillismo no desaparece, pasa a ser mediatizado por el gobierno de Vargas, quien es la expresión del nuevo pacto de poder.

En opinión de Mireya Sosa de León (2004) los siete años que van desde el ascenso de Vargas al poder en 1930, hasta el golpe del 10 de noviembre de 1937, momento en que se consolida el gobierno, hasta 1945, son años de agotada improvisación tendientes a cambiar el modelo político implantado en 1889, cuyas raíces estaban hundidas firmemente en el pasado de la política económica del imperio, cuyas características dadas por el desarrollo de los enclaves de producción que variaban de estados y de productos, generaban el cambio de actividades económicas y junto a ellas las migraciones de los sectores poderosos, por una parte, y las de las masas populares, por la otra. En busca de los beneficios de la nueva fuente de riqueza: palo de Brasil, azúcar, oro, café, caucho son los nombres de los productos que dieron sentido a la economía brasileña y poder a los estados de Bahía, Minas Gerais, Sao Paulo, Belén, Río, etc.

2.5.1.1. El populismo del Estado Novo

El "Estado Novo" fue una creación personal de Getulio Vargas, el cual comienza con el golpe de estado del 10 de noviembre de 1937 y finaliza en 1945. Vargas se hacía llamar el "Padre de los humildes", pero su base social es la pequeña burguesía, aunque atrae a los obreros, reorganiza el sindicalismo, lo burocratiza y logra neutralizarlo.

A grandes rasgos, la industrialización es una de sus políticas esenciales a la cual se suma su política social llamada nacionalista burguesa y populista nacional. Su proyecto político de la modificación de la estructura económica brasileña se realiza y los fundamentos del "Estado Novo" se cumplen en gran parte, destacándose entre ellos las nacionalizaciones que sirvieron para dar impulso al desarrollo industrial, la política ferroviaria y la construcción de la siderúrgica de Volta Redonda. Igualmente impuso restricciones a las compañías que explotaban y exportaban materias primas e incentivó a la

industria nacional gravando con elevados aranceles a los productos importados.

La constitución de 1937 debía ser el órgano jurídico en el que se apoyaría el Nuevo Estado para llevar a cabo su programa político, lo que se evidencia en el vigor que se le da al Estado. Por ello se pretendía crear una legislación social que comprendiera la asistencia médica y las pensiones a los trabajadores. Esta legislación estaba destinada a la clase proletaria, con la finalidad de ganarse su lealtad, sustento de ese gobierno paternalista que Vargas implantó. La doctrina para justificar este sistema era el “Trabalhismo”, el cual se hacía eco a través de los programas radiofónicos “A Hora do Brasil” de 1942. Desde 1937 se da el fenómeno de la “Quadratura sindical”, así se organizan los sindicatos desde el Ministerio del Trabajo, creado por Vargas, en forma vertical descendente: Sindicato Bancario, Textil, etc. No hay relaciones paralelas entre ellos, además se crea un Tribunal del Trabajo y una Bolsa de Trabajo, es decir, se inicia toda una infraestructura tendiente a beneficiar, por una parte, a la masa trabajadora, pero especialmente a contratarlas. Con la Ley del Trabajo de 1940, se establecen las medidas reivindicativas del trabajador como el salario mínimo y seguridad social. Esa organización paternalista impuesta al sector operario por Vargas era parte de una estructura económica corporativista global que el gobierno del armó para toda la sociedad urbana. Ello finalmente desembocó en la creación del “Partido Trabalhista”, coalición de los sindicatos dominados por el gobierno y de las fuerzas progresistas que Vargas esperaba liderar adoptando programas de industrialización, nacionalismo económico y seguridad social.

Esta estructura política, diseñada por Vargas obedeció estrictamente al cambio económico que se propuso desde su ascenso al poder: la modificación de la economía, hasta 1930 agroexportadora, hacia un modelo industrial y para ello se encontró con un problema de difícil solución como fue el de la integración económica del país, caracterizada por la fragmentación del sector, remanente del “localismo” de la Vieja República. La única manera de eliminarlo era implantando un gobierno fuerte y

centralizado para integrar el Estado Federal. Ello lo logra a través de la política de orden jurídico que desarrolla en la Ley del Trabajo, controlando los sectores de producción mediante el sindicalismo de las medidas corporativas que impone el sector. La Corporación se define, según Félix Restrepo:

“(...) como el conjunto de los sindicatos de obreros y patronos de un mismo oficio. A ella corresponde en primer lugar, atender el bien de los obreros, mirar por la seguridad de los capitales invertidos en las respectivas empresas, evitar a la reunión de competencia e impedir que el monopolio se convierta en precios excesivos... La corporación hace la huelga imposible, y aún más, el cierre de las fábricas y termina con la lucha de clases. Une en un verdadero espíritu de colaboración patriótica y de caridad cristiana a todos los que trabajan en un mismo edificio: capitalistas, directores técnicos y simples obreros... debe prevalecer la coordinación perfecta de todas las iniciativas circunscritas en la órbita del estado y el reconocimiento de las organizaciones de clases como colaboradores de la administración pública⁷⁹”

Al ser Vargas el coordinador de las iniciativas privadas y del Estado en materia económica, además de ser el conciliador de los diferentes intereses, es él mismo la base de sustentación de ese nuevo Estado. Lleva implícito el carácter autoritario del gobierno. El Estado era un instrumento clave en la profundización del modelo agroexportador desde 1930, también lo será para la reproducción de la acumulación industrial.

El Estado invierte en el desarrollo de los sectores básicos. Al hacerlo incurre en un déficit, que cubre con emisión monetaria, aumentando la capacidad de financiamiento interno del sistema; posteriormente realiza su producción a precios subsidiados, transfiriendo así una parte del excedente a la burguesía industrial. A la vez la expansión monetaria genera una inflación controlada, que contribuye a mantener deprimidos a los costos reales de la mano de obra, contrarrestando los efectos de la legislación laboral sancionada por el Gobierno de Vargas. Por otra parte, frente a las dificultades de la balanza de pagos, la respuesta de la política económica es comprimir las importaciones mediante una política proteccionista selectiva. Así va creando mercados

⁷⁹ Citado en Sosa (2004).

cautivos que consolidan la posición de una fracción monopólica de la burguesía, mientras libere divisas para la importación de los equipos y bienes intermedios necesarios para expandir y diversificar la industrialización. El financiamiento interno y las inversiones extranjeras directas están prácticamente ausentes en esta etapa del desarrollo industrial brasileño.

2.5.2. México: Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas alcanzaría la presidencia de México, impuesto por Plutarco Elías Calles en el marco del "Maximato"⁸⁰. Sin formación académica pero con una militancia activa desde joven en las fuerzas de la Revolución bajo las órdenes de Pancho Villa y de Venustiano Carranza. Y con su presencia una mezcla de populismo y nacionalismo se hará presente en el sexenio 1934-1940. Como recuerda Alan Knight ([1990] 1998):

"ningún historiador pone en duda la importancia del cardenismo, pero muchos discrepan en lo que concierne a su carácter. Tradicionalmente tanto los seguidores como los adversarios de la ortodoxia revolucionaria han considerado que en el cardenismo culminó la Revolución social. Otros lo han presentado como un intermedio dramático y radical dentro del proceso revolucionario, una desviación casi bolchevique a ojos de algunos. En estudios recientes se ha vuelto a hacer hincapié en las continuidades, aunque de un tipo diferente: las de la construcción del Estado, el corporativismo y el desarrollo capitalista. Aquí el cardenismo encaja perfectamente en la Revolución, pero no se trata de la Revolución como vehículo de la redención nacional y del radicalismo popular, sino del estatismo y de la acumulación de capital" (pág. 16).

Cárdenas inició su carrera política, actuando entre 1928 y 1933, como gobernador de Michoacán, presidente del Partido Nacional Revolucionario (P.N.R.), secretario de gobierno del presidente Ortiz Rubio y de guerra y marina bajo la administración de Abelardo Rodríguez. Esta experiencia

⁸⁰ El Maximato fue el periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928, con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país, hasta 1934, con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo de "*Jefe Máximo de la revolución*" deriva el nombre de este periodo. No obstante, la institucionalización política del Maximato fue acompañada del crecimiento de los conflictos sociales y la polarización ideológica. Aquí se encuentra la génesis del cardenismo.

política personal y la creencia de su incapacidad intelectual, sirvieron para que el saliente Calles lo designara para la sucesión presidencial de 1934, pensaba que con Cárdenas en el poder él podría preservar su autoridad y mantener el sistema impuesto por el Maximato.

Sin embargo, el nuevo presidente comenzó a distanciarse del estilo del gobierno de su mentor. Toleró las huelgas y los conflictos sociales que sacudían a México, generando la reacción de los sectores políticos ligados a Calles en el Congreso, que exigían la represión y la imposición de orden en el país. Ante la oposición, Cárdenas tomó rápidamente una serie de medidas que le permitirían recuperar el pleno ejercicio del poder presidencial. Entre ellas: designó un nuevo gabinete, tras obligar a los callistas a dimitir; recuperó la dirección del P.N.R. reemplazando a su presidente por un dirigente de su confianza, Silvano Barba González; y tomó el pleno control sobre el ejército, el Congreso y los gobernadores, desplazando a los sectores ligados a Calles.

El punto de ruptura definitivo entre Cárdenas y los líderes del maximato se produjo en 1936, cuando se expulsó a Calles del país por opositor al gobierno y se pide la renuncia de todos los callistas en el gobierno. A partir de ese momento, el modelo estatal de Cárdenas encontraba el espacio para su construcción.

La presidencia de Cárdenas está marcada por una aceleración de la reforma agraria y por la nacionalización de la industria petrolera. Puso en marcha un modelo corporativo promulgando una legislación del trabajo y reorganizando el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) alrededor de cuatro grupos: los sectores campesino, obrero, militar y popular (Dabène 2001: 64).

En opinión de Alan Knight, “el Cardenismo fue una expresión netamente mexicana del populismo latinoamericano”. Como proyecto político y socio – económico tenía un pilar fundamental en la tradición revolucionaria del país. El discurso de Cárdenas y su estilo político procuró recuperar aquellos ideales inconclusos que la revolución dejó por las luchas internas de los

líderes revolucionarios. Atendiendo a las nuevas circunstancias socio – económicas de la década del treinta, Cárdenas relanzó la política de tierras en pos de velar por la población campesina. Bajo su gobierno, se amplió la legislación laboral incorporando a los grupos de trabajadores rurales, se impulsó la educación entre las comunidades campesinas, se dividieron grandes latifundios entre pequeños productores individuales y propiedades comunales o ejidos

Si bien el Cardenismo tuvo como eje fundamental de su labor de gobierno a la población campesina, no desconoció la situación de los obreros urbanos. Unificó el movimiento obrero a través de la creación en 1936 de la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.) y estableció un sistema de cooperativas obreras, limitando así, la oposición política de esos sectores y subordinándolos a su liderazgo. En pos de mejorar la condición social de los trabajadores urbanos, veló por el cumplimiento de las normas del derecho laboral y favoreció el incremento salarial que posibilitara un mayor consumo interno. Como contraparte, la preocupación constante por la situación campesina derivó en un aumento constante de los productos rurales y su consiguiente impacto inflacionario. Esto a su vez debilitó el poder adquisitivo real de la población urbana y, consecuentemente, su fidelidad política al presidente.

2.5.2.1. Nacionalismo y Populismo

Cárdenas impulsó una política nacionalista que le asegurara la plena posesión de los recursos naturales del estado, a fin de reorientar sus ganancias hacia las áreas más sensibles de acuerdo con el proyecto gubernamental. En este sentido, la cuestión del petróleo resultó particularmente evidente. Ya que a partir de 1930, tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en el espacio mexicano, las empresas petrolíferas inglesas y estadounidenses adquirieron una participación más efectiva en ese mercado. Desde 1935, con la conformación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se inició el conflicto entre éste y las empresas extranjeras por cuestiones fundamentalmente de

carácter salarial. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambos obligó a recurrir a la justicia para hallar una solución. El fallo de la Corte Suprema de Justicia mexicana dispuso la obligación empresarial de otorgar el aumento salarial según los requerimientos obreros. La respuesta de las compañías extranjeras fue el rechazo y el incumplimiento de lo dictado por el alto tribunal. Ante esa actitud, el gobierno de Cárdenas tomó una medida contundente. Acusando a las empresas de desconocer la soberanía del estado mexicano y de sus instituciones de gobierno, se decidió expropiarlas.

Se crea así, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y reconoce que los bienes de las compañías extranjeras se pagarían apropiadamente y de acuerdo a la ley vigente. La drástica medida sirvió para la adhesión de la población al liderazgo presidencial y para exaltar el nacionalismo mexicano. Sentimientos que se profundizaron ante el rechazo extranjero a la disposición y el posterior bloqueo a PEMEX de las empresas estadounidenses que exigían el pago inmediato de la expropiación, no en petróleo, y atendiendo a las ganancias futuras pérdidas.

A pesar de las presiones, Cárdenas logró imponer su criterio de pago a las compañías extranjeras y afirmar así su autoridad presidencial. La consolidación de la autoridad presidencial tuvo además, un punto crucial en la reorganización del P.N.R. a través de la conformación del Partido de la Revolución Mexicana (P.R.M.). Tras la expropiación petrolera, el gobierno de Cárdenas se encontró con una fuerte oposición externa que le dio mayores fuerzas a los críticos internos. En ese marco se hizo necesario consolidar el apoyo de las distintas fuerzas sociales en una estructura política e institucional nueva. En marzo de 1938, la asamblea nacional del P.N.R. establece una nueva forma de ordenar su configuración interna. Se definieron cuatro sectores, el obrero, el campesino, el popular y el militar, que habrían de constituir el esqueleto fundamental del nuevo partido presidencial.

Al finalizar el gobierno de Cárdenas en 1940, las dificultades económicas complicaban la elección de un sucesor. Esa situación provocaba además, la

confrontación. El Congreso mexicano había aprobado una nueva ley de expropiación en 1936. Por ella, el gobierno podía nacionalizar cualquier tipo de propiedad pagándola según sea su valor fiscal, en tanto existiera una causa de utilidad pública. La ley establecía además, que existía un plazo de diez años para pagar los bienes expropiados desde el momento en que ésta se realizaba.

2.5.3. Argentina: Juan Domingo Perón

Aunque el gobierno de Juan Domingo Perón es reputado como el modelo populista “tipo” latinoamericano, mucho de lo que será su política y contacto con las masas populares encuentra su origen en la agitación social de los años treinta que tiene su punto pico en 1936 cuando se produce un profundo viraje en la política argentina. A fines de 1935 una huelga general fue duramente reprimida, lo cual generó una exigencia desde diferentes sectores de la sociedad civil para la intervención y mediación más activa del Estado en la regulación de los conflictos sociales (Devéne 2001: 64). Organizaciones tales como la Liga Patriótica Argentina o la Iglesia Católica exigen al gobierno y especialmente al Ministerio de Trabajo, prevenir los conflictos, luchando contra la desocupación y vigilando que los salarios no caigan. Se crea un sistema de arbitraje trilateral estado-empresarios-sindicatos que permiten evitar el recurso a la huelga. Tanto empresarios como sindicatos se entienden para reclamar al Estado la adopción de medidas proteccionistas, como fue el caso de la industria textil que se vio amenazada por las importaciones a bajo precio japonesas, italianas y alemanas. Esto origina una activa campaña para obtener restricciones a las importaciones. Esto dio forma a que apareciera un discurso nacionalista haciendo de la unión sagrada “gobierno-empresariado-sindicatos” la condición para la salvación del país. El estado accede a estas exigencias, pues tenía un interés muy real, y ese era el poder controlar la movilización social para asegurar la paz social y contrarrestar el avance de los comunistas.

Argentina vivía procesos de cambio sociales, económicos y políticos, que sin embargo no se traducían en un orden social más incluyente para los actores que se estaban incorporando, tanto desde los asentamientos rurales⁸¹ como desde el extranjero⁸², a su despegue económico. En este sentido, “si bien las transformaciones estructurales tendían a fortalecer y a poner en movimiento al mundo del trabajo, las instituciones de la restauración conservadora permanecían en gran medida indiferentes a esos cambios: he aquí que se perfila la escena característica de una crisis de participación” (Torre, 1989: 9).

El prefacio al primer gobierno de Juan Domingo Perón, de 1946 a 1955, se encuentra en el golpe de Estado impulsado en 1943 por jóvenes militares que se oponían a la participación argentina en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ese cambio social comienza a articularse el accionar político de Perón, quien desempeñó un papel determinante en el movimiento de esos jóvenes, aunque no el principal. El grupo militar que impulsó el golpe expresaba orientaciones ideológicas próximas al fascismo italiano con ciertas ideas del propio totalitarismo de Estado que proponía Mussolini, por lo que atacó abiertamente algunos sectores de la oposición civil, a los partidos políticos, a la vez que trató de silenciar a los grupos intelectuales. Como señala Olivier Debène (2001) “cuando Perón llega al poder en 1946 no hace más que extender una práctica ya vigente”.

2.5.3.1. Sindicalismo y Peronismo

La figura política de Perón adquirirá mayor protagonismo dentro del nuevo grupo gobernante como Ministro del Trabajo. La formación de una coalición

⁸¹ Las ciudades eran testigos de una migración interna constante de trabajadores del campo a las grandes ciudades, en particular a la capital, Buenos Aires, cuya capital federal experimentó crecimientos casi de proporciones geométricas a principios del siglo XX. Este hecho llevará a la sociedad entera a sufrir una transformación profunda en el tipo de labores desarrolladas hasta el momento. Gran parte de las fuerzas trabajadoras que posibilitaban la expansión productiva del país durante las primeras décadas, habían pasado abruptamente de campesinos a obreros.

⁸² Una enorme afluencia de inmigrantes europeos llegó casi ininterrumpidamente a varias regiones de la Argentina desde finales del siglo XIX. Con su arribo también llegaban las ideas sindicalistas europeas inspiradas en el anarquismo y el comunismo.

populista, afianzada en pactos con los sindicatos y otros movimientos de base, se empieza a materializar. Los trabajadores urbanos formaron parte fundamental de esta alianza policlasista, tanto durante sus años de Ministro del Trabajo como durante su gobierno posterior. Esta alianza múltiple estuvo formada por: “I. Una élite ubicada en los niveles medios o altos de la estratificación y provista de motivaciones anti-statu quo. II. Una masa movilizadora formada como resultado de la ‘revolución de las aspiraciones’. III. Una ideología o un estado emocional difundido que favorezca la comunicación entre líderes y seguidores y cree un entusiasmo colectivo” (Di Tella, 1965: 48).

El peronismo tuvo apoyo de muchos círculos de las fuerzas armadas⁸³, de un apreciable sector del clero y de algunos grupos influyentes de industriales medianos. Todos estos grupos, en particular los últimos mencionados, constituían un sector postergado de la burguesía, del cual provino lo más selecto del liderazgo: el sostén económico, la capacidad organizativa y la ideología del partido de Perón, el llamado “Partido Justicialista”.

El liderazgo de Perón se basaba marcadamente en un mensaje moldeable a las aspiraciones de todos los grupos constituyentes, sin especificar los medios para lograr los objetivos planteados. Las habilidades discursivas de Perón, educadas durante muchos años de docencia en la escuela de cadetes del ejército y en una profunda intuición sobre la población argentina, le permitieron articular las aspiraciones de diversos sectores de la sociedad, por lo que creó “una masa obrera débilmente organizada, que mantiene relaciones difusas y directas con un liderazgo de tipo paternalista, y un movimiento popular igualmente ligado a una dirección externa pero basado en los sindicatos” (Torre, 1989: 1), en particular los que habían sido integrados por los trabajadores urbanos que provenían del campo.

Su liderazgo no descartó al viejo sindicalismo existente antes de su llegada a la presidencia. Por el contrario, estando adaptado a la dinámica de la vida

⁸³ Perón fue instructor de los primeros años en la academia militar.

urbana, con una larga experiencia en la lucha social, se dirigió a la vieja guardia sindical para ganar su apoyo invitándolos a poner los recursos, organizacionales y políticos con los que esta contaba al servicio de su inserción en el mundo obrero y de la conquista del poder. En este sentido, el viejo sindicalismo encuentra en el gobierno peronista una serie de oportunidades de negociación imposibles en el orden social anterior, a la vez que Perón logra un afianzamiento dentro de sectores sobre los que basará mucho de su poder futuro. Por ello, la alianza establece, como una deliberación racional para la sociedad, el visto bueno a la creciente intervención del Estado en varios órdenes de la vida social, lo que da como resultado la satisfacción de reivindicaciones del viejo sindicalismo que regímenes pasados habían ido postergando y que el peronismo, al menos discursivamente y de una manera difusa, pretendía enfocar y poner sobre la mesa de discusiones sociales.

El gobierno populista de Perón impulsó la democratización de Argentina por vía autoritaria, es decir, el cambio político no se produjo como resultado de continuas luchas y presiones de los sectores de una sociedad que llevan a la élite gobernante a poner en marcha una serie de reformas institucionales. El cambio fue motorizado por la acción de quiebre de esta y ciertas pautas verticales que venían directamente desde la Casa Rosada. En este contexto de una iniciativa producida desde arriba, “surge en la sociedad una movilización que combina la lucha de clases y la demanda de participación, el enfrentamiento con los patrones pero también con las estructuras de poder que protegen sus privilegios”, todo canalizado por el liderazgo peronista, portador de un inmenso carisma y de un gran vacío en el contenido de su mensaje. El hecho en conjunto le permitió dotar de nuevas “identidades colectivas” a los sectores sociales excluidos del antiguo orden social, particularmente a los nuevos obreros de las ciudades.

La ambigüedad ideológica del gobierno de Perón, propia de los movimientos y gobiernos populistas que luego se constataron en otros países del continente, se tradujo en la proyección de una imagen política como de un partido “reformista” y un partido “del orden” al mismo tiempo. Reforzado por

dos ideas utilizadas por el peronismo continuamente: la “justicia social y la “identidad nacional”. La habilidad política de Perón le propició manejar la solidaridad nacional y las fronteras de lo “popular” como algo propio del peronismo, identificando a todos los argentinos con los peronistas, como si fuesen un solo sujeto. “Calificando como no argentinos a los adversarios de las políticas reformistas implementadas en materia social por el gobierno” (Aboy Carlés, 2001: 30).

La “justicia social” fue utilizada como un elemento de justificación para alcanzar las reformas sociales tendientes a superar el orden político precedente y establecer patrones de dominio y estructuras que, a la larga, derivaron hacia un Estado corporativista con profundas redes clientelares. Simultáneamente todo este entramado, basado en la Justicia Social, sirvió también para marcar distancias con la tesis de la lucha de clases defendida por los grupos de izquierda, de los que el peronismo se alejaba, al tiempo que iba dejando sin agenda y sin discurso.

La naturaleza contradictoria y ambigua del gobierno peronista no podía sostenerse por mucho tiempo y en esto tardó algo más en implosionar debido en parte a los ingentes beneficios que obtuvo la economía argentina durante la Segunda Guerra Mundial, y en parte dados los equilibrios discursivos y manipuladores de la retórica del líder.

Al final, satisfacer las demandas de tantos grupos sociales distintos, para luego arremeter contra ellos en una lógica de exclusión/inclusión permanente, concluyó con el derrocamiento de Perón cuando transitaba en medio de su segundo mandato, en 1955. Es interesante ver la diversidad de sectores que se aliaron entonces para deponer al gobierno peronista, pues “confluyeron allí tanto aquellos que veían en el peronismo una vulneración de la libertad y la democracia, como quienes respondieron también con la sedición a las políticas reformistas en material social del régimen”. Entre los grupos participantes hubo distintas ramas de la Iglesia católica y de sectores conservadores de grupos agrarios e industriales.

2.6. El neopopulismo: refugio para el desconcierto y el statu quo

Hacia mediados de los años noventa de la pasada centuria apareció y se difundió rápidamente el concepto de “neopopulismo” para caracterizar un nuevo momento en la historia política latinoamericana. El término apareció para describir el estilo de gobierno y el liderazgo político de mandatarios más afines con el programa de reformas estructurales del Consenso de Washington y con las políticas económicas neoliberales, pero que tenían una retórica que se asemejaba al “populismo histórico”. Los intelectuales que difundieron el neologismo (Roberts 1995, Weyland 1997, Novaro 1995, Sanborn y Panfichi 1996, Grompone 1998 y Crabtree 1999) tenían en su mayoría una formación académica en universidades norteamericanas concentrando su análisis más en aspectos politológicos electorales, y económicos que en un análisis social. En aquellos años la temática política sobre América Latina había pasado de ver al fenómeno populista como una variante de los autoritarismos en la región a verse como un remanente e impedimento real para la consolidación de la democracia liberal en la región⁸⁴.

La “tercera ola de democratización”, los avances en materia de derechos y garantías socio-políticas, tuvieron que ver mucho con ello, pues crearon expectativas de inclusión en amplios sectores de la población. Ello contrastó

⁸⁴ La influencia de la ciencia política, los estudios sobre la consolidación de la democracia y el método comparativo impulsados por los politólogos italianos Giovanni Sartori y Leonardo Morlino, renovaron el análisis de la política en la región, pasando a revisión los principales elementos y conceptos de la política latinoamericana; el populismo no estuvo exento de ello. En concreto sobre los trabajos de Weyland (2001) y Fleidenberg (2007), Angelica Abad (2012) señala que: “son los que mejor operacionalizan y desengranan el concepto. Siguiendo la lógica de la escalera de abstracción propuesta por Sartori para la definición de conceptos, ambos buscan llegar a una definición mínima y delimitan el *genus* y el *differentiam* del populismo, aclarando cómo se distingue de otros conceptos y ámbitos de conocimiento (p. 16). Y en efecto en términos estrictamente metodológicos de la ciencia política su trabajo es notable, pero al buscar permanencias en el discurso populista sin detenerse en las particularidades de cada espacio geográfico, contexto histórico, y poder de presión de los actores políticos, los resultados pueden ser demasiado generales para entender dinámicas concretas, y sobre todo la excesiva generalización, producirá el efecto contrario que persigue la comparación, que es definir el concepto. Al todo parecerse por el uso de determinada retórica, los objetos de análisis pierden su singularidad y significado histórico social.

con la falta de compromiso democrático de las clases políticas para incluir nuevas temáticas en la agenda, que poco pudieron hacer para evitar el aumento de los niveles de pobreza, la inestabilidad y debilidad institucional. Ello dará lugar al alejamiento de los electores de los partidos políticos (y de la política en general), propiciando la aparición de nuevos gobiernos de corte populista o “anti-político”, conocidos como nuevo populismo o neopopulismo (Conniff 2003; Freidenberg 2007; Mansilla 2009).

El uso de este concepto, en opinión de Nicolás Lynch (2000) redujo el análisis del fenómeno populista en la región al que circunscribió ahora únicamente a resaltar aspectos clientelistas y personalistas, así como contribuyó al uso peyorativo del “populismo” en general, minimizando u ocultando el efecto democratizador que generó en la región. Ya tras la crisis económica de los años ochenta y el derrumbe de los gobiernos de corte socialista, el populismo adquirió una mala fama, destacándose sus rasgos autoritarios y su ineptitud en política económica. De hecho, el debate sobre el populismo para los años noventa se centraba en el manejo económico, es así que los economistas en general, pasaron a ser los analistas principales dentro de los medios de comunicación masiva. Muy difundidas fueron las críticas de Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards (1992), y de Eliane Cardoso y Ann Helwege (1993) sobre el “populismo económico” de los mandatarios en la región de los años ochenta, destacándose el terrible impacto que ocasionó en los diferentes en materia social, económica y política en los países donde se aplicó.

Se denominó a los años ochenta, “la década perdida”, y con la instauración generalizada de la hegemonía del neoliberalismo, las políticas populistas fueron denostadas. Ello sin embargo no fue impedimento para relacionar ciertas prácticas políticas clientelistas y conservadores hacia los sectores más desfavorecidos de la población a través de dádivas y subsidios “caritativos” y “solidarios” con el populismo. Y es a esta ayuda focalizada, contemplada dentro de las directrices del Consenso de Washington a lo que se le denominó neopopulismo.

Anibal Quijano (1999) pone énfasis en que en los años noventa se impone un concepto reduccionista de populismo, en el cual se le despoja al concepto de sus referentes y memoria histórica (*deshistorización*) y es usado para la caracterización de “fenómenos históricos indeterminados” (*ahistorización*). Pasando a destacarse elementos como: discurso, liderazgos y masas, de manera aislada sin ponerse énfasis en las condiciones materiales que posibilitan la elaboración de determinados discursos, la aparición de alianzas pluriclasistas y liderazgos eclécticos y autoritarios, y la articulación de demandas que hace posible crear un sujeto colectivo. Se relaciona al populismo con “todo discurso que se pronuncie sobre los problemas *populares* o se *dirija al pueblo*” y a los “liderazgos” que logren seguidores populares y que utilizando los *mass media* los manipula y controla.

Se impone en esta década la valoración negativa de “la identidad popular”, que pasa a ser un colectivo inculto y manipulable. Lo que trae como consecuencia la deslegitimación de cualquier propuesta política encaminada a buscar representar a los sectores populares y atender sus demandas, pues inevitablemente está condenada al fracaso.

Debemos señalar que el propio debate sobre el populismo en sí, también contribuyó para acuñar el neopopulismo, pues la última etapa del debate teórico puso énfasis en el análisis del discurso y en la creación de identidades colectivas (Laclau, Zizek, Dussel). El problema fundamental es que en el periodo de los años 30 al 60 del siglo XX, el populismo histórico remitía a una comunidad política sobre las bases de la organización colectiva ya establecida a través de partidos políticos, sindicatos de trabajadores, cooperativas de campesinos y movimientos sociales; en el contexto de los 90 en adelante esos colectivos están en crisis por lo que la identidad política de la ciudadanía se hace más volátil y su interés en la política pragmático.

Es en la presente centuria existe un resurgir de la movilización social en abierta oposición al sistema político económico neoliberal, pero cuya

plataforma de demandas son sectoriales y difícilmente pueden integrarse a demandas más generales que involucren a la ciudadanía en su conjunto.

El neopopulismo efectivamente reduce las variables de análisis, pues en el contexto que se desarrolla los actores principales del “populismo histórico”: movimientos sociales, sindicatos, masas urbanas, clases medias están profundamente debilitados a causa de las reformas estructurales implementadas, por lo que su capacidad de acción política es muy limitada por no decir nula. Los intelectuales que difunden el término, en un primer momento, encuentran a nivel discursivo, parecidos con el populismo histórico en figuras como Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Carlos Collor de Mello en Brasil y Abdalá Bucaram en Ecuador. En una sociedad donde prima el individuo y el interés local sobre el bienestar general la construcción de un sujeto político colectivo es muy difícil. Por ello, el uso de la demagogia, la práctica del clientelismo y el liderazgo autoritario serán las únicas variables visibles para el análisis de estos gobiernos de gran arrastre popular pero carentes de una posición política clara.

Un segundo momento de este concepto se da a inicios de la presente centuria, donde un inesperado boom de regímenes de tendencia izquierdista, socialista y nacionalista emergió en la región. Líderes como Ernesto Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva y Dilma Russeff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y el difunto Hugo Chávez en Venezuela fueron catalogados como neopopulistas e inclusive, se llamó a su estilo de gobierno como un “populismo radical” (De la Torre, 2010). Se mantiene, sin embargo, dentro de la crítica a estos regímenes, el cuestionamiento a su postura frente a la economía y el papel del Estado.

Para Flavia Freidenberg (2007) estos nuevos populismos mantienen los atributos generales del “liderazgo populista clásico”, tienen una base social más difusa y pluralista; son grandes representantes de la antipolítica – muchos de ellos son outsiders y mantienen un discurso fuertemente antipartidista y anti-institucional-; evitan asociarse directamente con

agrupaciones como sindicatos y movimientos sociales, emprenden gran variedad de políticas sociales y económicas que, a diferencia de los clásicos, no puede enmarcarse con una agenda política determinada. A diferencia de los populistas clásicos que tenían una agenda más universal de creación de derechos, los nuevos tienen agendas sectoriales que distribuyen beneficios de manera focalizada.

A la luz de los desenlaces de los llamados neopopulismos en la región, debemos discrepar con la posición de Fleidenberg. La experiencia “chavista en Venezuela” de construir un modelo alternativo: “el socialismo del siglo XXI”, derivó tanto por la ambición del régimen como por la intervención de la derecha venezolana en una dictadura con retórica populista, con una base social clientelar y asistencialista. El matrimonio Kirchner-Fernández en Argentina, no pudo superar las altas expectativas despertadas desde el peronismo, se vio sobrepasada por el cáncer de la corrupción y no pudo superar una política de subvenciones y asistencialismo para mantenerse en el poder. Cristina Fernández terminó su periodo gubernamental en medio de críticas y un proceso judicial abierto por corrupción.

Las experiencias de Correa en Ecuador y Morales en Bolivia fueron diferentes pues las reformas a la constitución en sus respectivos países permitieron que se traspasara las políticas “sectoriales” y “los beneficios focalizados” y constituir proyectos nacionales que les valieron ser reelegidos y mantener índices de popularidad y respaldo muy altos a lo largo de su gestión. Ambos ponen fin a sus periodos gubernamentales consiguiendo avances significativos en materia económica y social, pero sobre todo en términos políticos, la sociedad como tal en Ecuador y Bolivia percibe y ejerce más ciudadanía.

Discrepo con el empleo del término neopopulismo para estos regímenes, pues se aprecian claramente que en los casos de Venezuela y Argentina, el uso retórico del populismo no supera el asistencialismo como estrategia política. Se construye en bases clientelares el respaldo no a través de generación de derechos ciudadanos. Sobre los casos de Ecuador y Bolivia,

ambos gobernantes lograron convertir una propuesta sectorial en nacional, efectivamente consiguieron crear una “comunidad política”, y ambos perfilan con mayor éxito un capitalismo alternativo al imperante en la región. Pueden ser equiparados con mayor facilidad al populismo histórico, pero el momento en que se generan es en medio de un despertar de nuevos actores políticos y de fortalecimiento de los ya existentes, es un contexto en donde la democracia como tal se ha consolidado como ideal en los ciudadanos, estamos más cerca del “experimentalismo democrático” de José Nun (2002) que en el de una vuelta del populismo.

En la actualidad este concepto sirve más como un refugio para simplificar el análisis de regímenes con matices autoritarios, nacionalistas, y con propuestas alternativas al modelo económico neoliberal pero que fueron elegidos democráticamente. La práctica política e impacto en las masas se reduce en este enfoque a una “retórica populista” que no necesariamente está en relación con aquello que quierase o no consiguió el populismo, que fue ampliar la ciudadanía a sectores excluidos y debilitar, al menos temporalmente, el poder e influencia de las elites económicas.

Indicativo de ello es que en una reciente publicación de *d+i Centro de Ideas, análisis y tendencias* de la consultora española Llorente et Cuenca, José Antonio Zarzalejos (2015) señalaba que:

“No es forzado suponer que el populismo comienza a tener, además, una *buena reputación*. Hasta el momento el concepto remitía a la demagogia fácil, al discurso febril y exaltado y a la consigna como sustitución frívola del discurso con contenidos académicos. Ahora no: ahora el *populismo* —en política, en periodismo, y en comunicación— remite a otras *ideas fuerza* y a otros conceptos sociales. Remite, sobre todo, a un rechazo a las elites políticas y económicas y al beneficio y aplaudido intervencionismo del Estado para solventar las carencias de la privatización de lo público que la crisis y la recesión habrían favorecido en servicios definitorios del bienestar en los países occidentales” (pág. 15).

El populismo así entendido desde finales de la centuria pasada está siendo utilizado desde el marketing político como una estrategia válida y necesaria

para ganar elecciones, con discursos, en su esencia, cada vez más generales y vacíos, pero que en la forma se presentan como radicales e innovadores, que no buscan crear identidades políticas duraderas sino despertar emociones pasajeras y crear redes clientelares. El neopopulismo es un claro indicativo de ello. Desde el poder, se sabe que el debate político aparece y se mantiene desde los medios de comunicación, por ello las posiciones políticas conservadoras crean un discurso, que en esencia es el mismo, que supuestamente hacen las opiniones contrarias a las que encasillan como “populistas”.

2.7. Una historiografía del populismo en el Perú

El término fue acogido por los sociólogos peruanos en la década de los sesenta en adelante por influencia del funcionalismo y la teoría marxista, en plena ebullición de la movilización social, la ideología de izquierda y las transiciones democráticas. Se le entendía como una estrategia que desde el poder, sectores conservadores de la sociedad aplicaban para hacer frente y detener la movilización social y la lucha de clases. Julio Cotler ilustra esto al definir al populismo en los siguientes términos:

“movimiento pluriclasista, que a través de relaciones de clientela manipula a las masas populares en proceso de adaptación urbana, por medio de símbolos carismáticos y a fin de incorporarlos al sistema social existente por vías de la ocupación y el consenso. Persigue el establecimiento de una convivencia entre diferentes sectores de la sociedad, ampliando las bases de la ocupación y consumo de la población, a través de la labor de modernización del país, que consiste fundamentalmente en impulsar el proceso de modernización”.

Esta definición fue muy influyente y conserva hasta la actualidad mucha vitalidad entre los que se aproximan al fenómeno populista en nuestro país. En ella podemos ver que se le da al populismo un lugar dentro del proceso a la modernización de nuestro país. Se convierte en un momento histórico sin cambios de fondo, pues no supone el reemplazo de un modelo por otro, sino un momentáneo equilibrio entre los actores políticos. Este equilibrio era considerado negativo puesto que las medidas desde el ejecutivo tenían un

carácter provisional que retrasaba la conquista del poder por parte de las grandes mayorías proletarias. Entendido así el populismo, solo podría mantenerse reproduciendo prácticas clientelares y exaltando a las multitudes.

Las variantes que hemos detectado son las siguientes: Steve Stein define a Nicolás de Piérola como un protopopulista, el historiador Jorge Salinas y Nils Jacobsen consideran al “Califa” como populista a secas. Jorge Basadre consideraba a Guillermo Billinghurst como populista, los sociólogos Osmar Gonzáles y Peter Blanchard encuentran los orígenes del populismo peruano en él, comparten esta idea los historiadores José Luis Huiza, Humberto Leceta, Luis Alberto Torrejón y Renato Bazán; el investigador norteamericano David Palmer consideraba a Augusto B. Leguía como un populista siguiendo los patrones del caudillismo decimonónico, esta idea la comparte el historiador Augusto Ruíz de Zevallos que dirá que se encuentran en Leguía “los atisbos del Estado populista” y “se pueden hallar las raíces históricas y sociales de las ofertas programáticas de los principales movimientos políticos del siglo XX, como el APRA, la Democracia Cristiana-PPC, Acción Popular y las izquierdas”. Para el periodo de la década de 1930 tenemos que Steve Stein y el sociólogo Manuel Castillo se refieren a la propuesta política de Luis M. Sánchez Cerro como un “populismo autoritario”, “populismo conservador” o de “derecha”, los historiadores Alfonso Quiroz y Paulo Drinot comparten esta posición. El APRA, para la mayoría de estudiosos es un partido populista, para algunos es “el partido populista de América”. El historiador Emilio Iván Candela Jiménez encuentra en el gobierno de Oscar R. Benavides prácticas populistas tanto en el uso retórico de sus mensajes así como la política pro obrera de su gobierno. En esta línea Paulo Drinot, ha resaltado aspectos de la política social del Gobierno de Benavides especialmente en su política de vivienda y con la creación de comedores populares durante su periodo de gobierno. Sinesio López (2016) entre otros investigadores consideran populista a Manuel A. Odría Existe casi total unanimidad en señalar a la primera etapa del Gobierno de las Fuerzas Armadas con Juan Velasco Alvarado como populista, los autores peruanos que más han desarrollado

esta postura son los sociólogos peruanos Julio Cotler, Aníbal Quijano, Nicolás Lynch y Sinesio López. El análisis negativo del “populismo político y económico” de Alan García reúne a científicos sociales y economistas, entre ellos: Eliana Cardoso y Ana Helwege, Carlos Boloña Behr, John Crabtree y Henry Pease. Cinthia Sanborn, Romeo Grompone, John Crabtree, entre otros investigadores de formación norteamericana entienden la política de la dictadura de Fujimori como neo-populista.

Como hemos señalado en líneas precedentes, en nuestro país el populismo no ha tenido un desarrollo teórico tan amplio en comparación a lo avanzado en otros países de la región o Europa. Por lo que pese a la nutrida cantidad de referencias y menciones en textos de sociología política, historia y ciencia política, el término aún presenta imprecisión y poca claridad cuando se refiere al análisis de un periodo específico. A grandes rasgos podemos clasificar los estudios en torno al populismo en nuestro país de la siguiente manera: 1) Perspectiva Sociológica-Funcionalista; 2) Crítica Económica y Neoliberal; 3) Neopopulismo; 4) Perspectiva Histórica; y 5) Nuevos estudios críticos. Si bien esta selección y las denominaciones son arbitrarias, hemos querido destacar la preponderancia de una perspectiva en concreto en los diferentes estudios sobre el populismo para así proceder a su clasificación y análisis en conjunto.

En el análisis del populismo en nuestro país se ha pasado de analizarlo desde arriba, es decir desde la imagen del líder y su control del Estado, a un análisis enfocado en el lenguaje del discurso populista y su impacto en la población. De verlo como un periodo específico del país en su camino a la modernidad en un contexto de crisis económica y precariedad democrática, a un estilo político recurrente de ser utilizado por las elites políticas, de derecha e izquierda, ante contextos de crisis económica y/o política. Personajes como Juan Velasco Alvarado, Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori, se exponen como representantes clásicos del populismo, los tres primeros, y del neopopulismo, el último. Los regímenes de García y Fujimori son atacados por encarnar lo peor del populismo: prodigalidad económica y clientelismo, mientras que Velasco aún conserva simpatías y

valoraciones positivas por parte de la intelectualidad de izquierda, sectores de clase media conservadores, y en el imaginario social popular. Los sectores altos de la sociedad, relacionadas con las antiguas oligarquías, por su parte mantienen una antipatía y crítica frontal a su legado histórico en especial por la aplicación de la reforma agraria.

Para describir mejor las características del estudio del populismo en nuestro país pasaremos a explicar la clasificación propuesta.

2.7.1. Perspectiva Sociológica-Funcionalista: Aquí podemos circunscribir la mayor cantidad de trabajos de sociología política aparecidos desde las décadas de los sesenta hasta la primera mitad de los noventa. En donde predomina un enfoque funcioanalista-estructuralista influenciada por los trabajos de Germani e Ianni. En ellos el papel del Estado es crucial, ante la ausencia de una sociedad civil organizada y con una participación política mediocre.

Aún es una visión predominante dentro de las Ciencias Sociales peruanas pues se considera que el populismo tiene un espacio histórico dentro de la historia política latinoamericana (años cuarenta y sesenta de la pasada centuria) y que tiene un matiz positivo para la ampliación y consolidación de la democracia. Fue una visión que se retomó en los primeros años del siglo XXI a raíz del triunfo democrático de la izquierda en diversos países latinoamericanos. Nicolás Lynch (2009), sintetiza lo que implica el populismo para esta perspectiva a la luz del contexto en que apareció y los triunfos electorales de la izquierda en el nuevo milenio:

“Esta definición más cercana a las estructuras quiere decir que el populismo en América Latina fue también un proyecto político, con grados distintos de elaboración, que supuso independencia nacional –traducido tempranamente como antiimperialismo- integración social y política del conjunto de la población, movilización y en algunos casos también iniciativa popular. Todo lo anterior, debido a la ausencia de una alianza de clases y su representación respectiva que lo llevara adelante (Weffort 1973), recaía en la responsabilidad potenciada del Estado como actor político e histórico de primer orden” (pág. 47).

Se pone el énfasis en el papel crucial de las alianzas pluriclasistas, la expulsión de la oligarquía de su influencia y poder en el Estado, el discurso nacionalista, y ampliación de la participación política popular. Como modelo paradigmático de todo ello se resalta el gobierno de las FF. AA., y en especial el papel que jugó Juan Velasco Alvarado en la primera etapa del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

La toma del poder político por Velasco supuso una matización del término, pues pese a que la lógica del populismo, en opinión de sus críticos, coadyuvaba a mantener el *statu quo*, la radicalidad del régimen supuso una transformación en la manera de entender lo que el populismo significaba por parte de los científicos sociales. Y es que las fuerzas armadas iban más allá de exaltar pasiones reivindicativas, y empezaron a incorporar una serie de reformas que consistían en construir ciudadanía, a través de un discurso nacionalista e integrador.

En esta línea se encuentran los trabajos de López (1997), Lynch (2000, 2009), y Dietz (1986), que resaltan la apertura a la participación política popular que el régimen militar paradójicamente representó. Adicionalmente, hay que destacar que el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas dio espacio a voces contrarias provenientes, incluso, de la militancia de izquierda, que desde las ONGs y movimientos sociales venían realizando trabajos sociales fomentando la participación política de las poblaciones urbanas pobres y marginales. Ahora tenían un espacio de acción dentro del mismo Estado, a través de SINAMOS. Dicha organización estaba a cargo de Carlos Delgado, y reunía a una gran cantidad de representantes de izquierda, desde ex-guerrilleros hasta militantes como: Héctor Béjar, Helen Jaworski, José Luis Alvarado, Diego Robles, Gerardo Cárdenas, José Adolf, Jaime Llosa, David Mejía Galindo y Willy Bezold Salina.

Osmar Gonzáles (1999), siguiendo a Edward Shils⁸⁵, señala la existencia de una “tradición populista” en la intelectualidad peruana de izquierda (1968-1989), en sus palabras, esta tradición “supone que los valores positivos [de la sociedad] se encarnan siempre en el pueblo” (págs. 183-184). Al decir de este autor, los intelectuales de izquierda inspirados en la intelectualidad rusa del siglo XIX, tenían una “imagen” del pueblo y su función dentro de la política peruana que era: 1) Constructor de la nación desde abajo; 2) Depositario de valores inherentes; 3) Orientador político; y 4) Punto de equilibrio y madurez de la participación política.

Estas ideas en torno al pueblo no fueron un ejercicio meramente de abstracción sino que se crearon en un contexto en el que la participación política, la asociación popular y los movimientos sociales, estaban transformando el rostro de Lima y el Perú. Las agrupaciones populares creadas en torno a los barrios populares, centros laborales, AA. HH., movimientos de mujeres etc., consiguieron efectivizar la ciudadanía para los más pobres y lograban materializar las exigencias hacia el Estado. De esta manera los intelectuales de izquierda, vinculados en su mayoría a Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y en trato directo con las poblaciones populares pusieron al pueblo como eje de transformaciones radicales y necesarias dentro de la política nacional, que suponían un mayor gasto del estado. Durante el gobierno de Velasco apoyaron sus reformas en un primer momento, en el camino sus opiniones en torno al carácter autoritario que adoptaba el régimen dividió a los especialistas que empezaron a usar el término de “populismo” en reemplazo del de “revolución desde arriba”.

Tras la caída del régimen y la vuelta a la democracia, los estudios sobre el impacto del régimen militar no pudieron dejar de resaltar la apertura democrática y la inclusión social para las masas urbano-marginales y campesinas que se lograron en la primera etapa del régimen; sin por eso

⁸⁵ *The Intellectuals and the powers, and other essays* (1972). Chicago: The University of Chicago Press.

prescindir de la valoración negativa que el populismo inspiraba en los intelectuales de izquierda y de derecha.

Ya para los ochenta con la llegada de Belaunde y García, y su particular estilo político, se busca diferenciar lo popular que remitía a la organización desde las bases sociales del populismo, entendido este, como una estrategia política que tenía a la demagogia, el clientelismo, el asistencialismo y la manipulación como elementos constitutivos.

Florence Barker (1970) en esta línea señala lo que fue el “belaundismo”, entendido como un populismo que tenía su razón de ser en el liderazgo de Belaunde, que tuvo que ponerse a tono con las necesidades del clima político que era receptivo a los personalismos y caudillismos. Tras el golpe de las FF. AA. en 1968 se reforzaría la imagen mítica del líder.

Por su parte, Henry Pease (1988) analizando el periodo de García diferenciaba el populismo de lo popular:

“Por eso entre *populismo* y *popular* media un abismo, y no es democrático el reemplazo de organicidad participativa, propia de la ciudadanía como derecho, por la zanahoria y el palo que trajeron a fin de cuentas todos los populismos” (pág. 88).

Carlos Franco (1990) en su artículo “La plebe urbana, el populismo y la imagen del *alumbramiento*”, se interroga por la recurrencia de la adhesión popular peruana al “populismo” y la inconstancia de su lealtad hacia la política y el modelo “populista”. Siguiendo la una distinción propuesta por Mirko Lauer entre “populismo de la distribución” y el “populismo de la identidad”. Franco entiende que el populismo de la distribución es concordante con su propia posición respecto a la “modernidad popular” que se sustenta en valores similares a los del pragmatismo y la utilidad, en un claro análisis de las clases populares de costo-beneficio. En sus términos:

“(…) lo que quiero decir es que a través de los populismos, las multitudes plebeyas usaron en su favor los magros recursos redistribuibles del Estado y lograron representar sus intereses en la arena escena pública. Es reconocible, por tanto, en el largo plazo, la actuación de la misma lógica racional y utilitarista que orientó en cada fase de ese largo proceso los

traslados que la plebe urbana hizo a sus lealtades a diferentes actores populistas. Pero lo dicho hasta aquí apunta también a develar la relación de la conveniencia mutua sobre el cual se basó el matrimonio del populismo con las multitudes urbanas” (pág. 131).

La recurrencia del populismo en nuestro país, en este análisis de Franco pasaría a constituir una estrategia de las elites para mantener el sistema en un contexto de mediocridad institucional y de las masas populares para conseguir la satisfacción de algunas necesidades⁸⁶. En un agudo análisis al abordar el populismo de la identidad señala que:

“(…) el discurso populista en el Perú se distingue, como se sabe, por un conjunto preciso de apelaciones valorativas que reelaboran profundas necesidades de reconocimiento e igualdad social, de protagonismo popular y participación movimentista, de reelaboración del *mundo de los abajo* y de promesas de *unidad nacional*, de fraternidad comunitarista y de fusión de sangres y culturas en la construcción de una *nación integrada*, propuesta como tarea colectiva. En este sentido, el discurso populista no se presentó como la reivindicación de los intereses basados en la objetiva posición de los grupos o las clases sociales o en las organizaciones o instituciones que los expresan sino que se dirigió a todos, sea como individuos, sea como colectividades, en la continua e interminable elaboración de la promesa *unitarista o integracionista*” (p. 134).

Alberto Adrianzén (1990) en su artículo “Estado, sociedad: señores, masas y ciudadanos”, pondrá énfasis en la particular relación del populismo con la tradición política nacional. En concreto en los aspectos poco democráticos de la propuesta populista y hacia qué sectores de la sociedad proyecta su aversión y confrontación, sobre el particular nos dice:

“En ese sentido, el populismo en el Perú, antes que antioligárquico, ha sido principalmente antiaristocrático y antiseñorial, por ser, justamente, elitista y autoritario. Por ello, el populismo es capaz de fundar una tradición y tener un rostro plebeyo, pero no necesariamente democrático. Y ello es posible por la persistencia del carácter estamental de la sociedad, pero también porque el populismo, que es una respuesta a la crisis del Estado oligárquico, nace divorciado de

⁸⁶ Muchos autores de ciencia política sostienen que la recurrencia del populismo en nuestro país es lo que permite que el sistema electoral pervivir de la manera en que lo hace con instituciones tan débiles. Si no fuera por el populismo al decir de estos autores, el sistema democrático y electoral hubiera caído o no podría subsistir, como lo hace, sin reformas estructurales.

una visión liberal de la democracia, y cuando propone una respuesta no-liberal a dicha crisis deriva, muchas veces, hacia lo autoritario y puramente estatal, reforzando así el carácter elitista del poder” (pág. 26).

Inevitablemente en el enfoque de Adriánzen debe existir una concordancia de opiniones entre la elite oligárquica y las masas populares en cuanto a la detentación del poder, y el rol que el Estado juega como ente democratizador y de integración, en sus palabras:

“El populismo es, si se quiere, la otra cara, la plebeya, de un sistema autoritario y elitista, que tiene dos rostros: uno aristocrático y el otro plebeyo. Es decir, los señores de un lado, y el pueblo o la plebe, del otro. Por ello, el populismo es consustancial a lo oligárquico, es más no puede vivir sin él. Son hermanos enemigos. Lo que vincula a ambos es la incapacidad de reconocerle a la sociedad una racionalidad propia o, mejor dicho, su propia autonomía. Sea porque la aristocracia considera la desigualdad y a la heterogeneidad social como algo natural; sea porque en el populismo es el Estado, al reconocer la conformación heterogénea del pueblo, *el que constituye en la práctica la unidad nacional*. Para uno es la elite, para otros es el pueblo, quienes simbolizan y agotan el concepto de nación. Pero para ambos es el Estado el que encarna e integra a la nación” (p. 26).

Como se aprecia en los artículos de Franco y Adriánzen, sin recurrir a referentes teóricos como Chantal Mouffe o Ernesto Laclau, ya se perfilaba dentro de la sociología política peruana un derrotero similar sobre el populismo en torno a la capacidad de crear identidades y generar articulación de demandas. Este proceso de maduración y concordancia con las experiencias políticas en otros países latinoamericanos se vio interrumpido por la llegada al poder de Fujimori y el contexto post autogolpe. La pérdida de protagonismo de los principales actores políticos populares aunada a la crisis de representatividad de los partidos políticos, cambió dramáticamente las áreas temáticas a explorar. En el contexto de reforma del Estado de los años noventa la participación popular se reduce drásticamente. Los actores sociales y colectivos (sindicatos, movimientos sociales, etc.) quedan muy disminuidos e incapacitados para participar en el juego político. Por ello, la academia se preocupó más en analizar al resto de actores políticos, y el nuevo contexto neoliberal autoritario en el país y en la

región. A diferencia de otros países como Argentina en donde el análisis del “populismo clásico” convivió con el enfoque “neopopulismo”, el Perú se aisló, y se alejó por muy buen tiempo de desarrollar una línea teórica propia de conceptualización del populismo.

2.7.2. Crítica Económica y Neoliberal: La crisis económica internacional de los años ochenta acabó con los regímenes de corte populista en América Latina, mientras se intensifica la movilización social y la violencia política. En ese particular contexto, se produce la derechización de la política mundial y la consolidación del capital financiero como poder político.

Se produce una serie de estudios que incidirán notablemente en la importancia de la liberalización de los mercados y el repliegue del Estado de su faceta de empresario y motor de la economía, para convertirse en un Estado regulador encargado de administrar los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y de las privatizaciones de las empresas estatales. Se comenzará a analizar el populismo casi exclusivamente en su impacto negativo en la economía y las finanzas, así como en la formación de redes clientelares y corruptas. Desaparecen casi totalmente menciones positivas a su rol en la democratización de la sociedad y reducción de la conflictividad social.

El artículo de Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards (1992) “La macroeconomía del populismo” influyó notablemente en el cambio de enfoque del populismo, en donde el análisis del fenómeno se redujo casi exclusivamente a aspectos económicos, lo que se denominó “populismo económico”. En esta línea Eliana Cardoso y Ann Helwege (1993) se concentran en como las crisis económicas influyen en el modo de hacer y entender la política latinoamericana, señalaran que la marca del populismo en los años ochenta e inicios de los noventa es “la hiperinflación causada por el déficit presupuestario y la crisis de la balanza de pagos (pág. 211).

Para el caso peruano el gobierno de Alan García (1985-1990) fue el chivo expiatorio para analizar el fenómeno populista. El desastre económico y

político, sumado a la violencia terrorista en que el aprismo dejó al país, consiguió que líderes e ideas de izquierda quedaron profundamente desprestigiados, y prácticamente anulados de la escena política peruana. Con el proceso de “reforma del Estado” iniciado en el país en los noventa, siguiendo las tesis del “Consenso de Washington”, se consolida una corriente de opinión reduccionista de los problemas sociales a los aspectos económicos y que encumbraba a la “economía” como modelo explicativo infalible (Escalante, 2015). Las voces de esta postura, en su mayoría, se encuentran vinculadas al programa político iniciado en la década de los noventa, como es el caso de Carlos Boloña⁸⁷ y Hernando de Soto⁸⁸, y de simpatizantes de la economía neoliberal de libre mercado y el papel de mínima participación en la Economía por parte del Estado, como los casos de Jaime de Althaus (2007) y José Luis Sardón. Se empieza hablar de un “ciclo populista” en los años ochenta que llega a su clímax con el intento de privatización de la banca y la hiperinflación durante el gobierno aprista (Parodi 2005: 208).

Esta perspectiva tiene como eje de sus reflexiones la política económica del gobierno aprista y a partir de una crítica a su modelo económico, difunde una imagen esencialmente negativa del populismo en sus aspectos sociales y políticos. Boloña (1993) al referirse al periodo 1985-1990, señala que “durante todo ese tiempo se privilegió la decisión política por sobre el criterio técnico que exigía el manejo de los asuntos públicos”. La demagogia y el clientelismo si bien son características de diferentes liderazgos y formas de hacer política, se convertirán bajo esta óptica en constitutivos del populismo.

Si bien el periodo de tiempo analizado preferido era el gobierno aprista⁸⁹, la crítica a este periodo significó la reinterpretación de la historia peruana⁹⁰, del

⁸⁷ Economista y ex Ministro de Economía y Finanzas del Perú en los Gobiernos de Alberto Fujimori entre 1991-1993, y finalmente de julio a noviembre del 2000.

⁸⁸ Abogado, asesor político y fundador del Instituto Libertad y Democracia.

⁸⁹ Un trabajo de difícil ubicación será el de ZURITA, Víctor Raúl (1990) *Populismo y política económica: la experiencia de Billinghurst*. Tesis para optar el grado de Bachiller en Economía. Lima: PUCP. En donde se hace una crítica al enfoque económico de Guillermo Billinghurst, pese a la distancia temporal y al entrecruce entre análisis histórico, sociológico y económico, considero que este trabajo forma parte de la perspectiva de crítica económica y neoliberal por los criterios de los que parte para analizar el periodo de Billinghurst.

legado del velasquismo y en general del papel del Estado como empresario. Representativo de ello es la defensa del modelo de privatización impulsado en los noventa que narra Jaime de Althaus (2007):

“Es cierto que en la cúspide la pirámide económica hay ahora más empresas multinacionales que antes y que el proceso de privatización no sirvió, en lo inmediato, para fortalecer el desarrollo de los grupos económicos nacionales. Pero esto último *se debió a que estos grupos no tenían la capacidad económica de participar en las compras de las principales empresas estatales por la sencilla razón de que habían sido golpeados duramente, cuando no desaparecidos, primero por las expropiaciones **velasquistas**, que ciertamente lograron romperle el espinazo a la oligarquía, con el resultado lamentable de interrumpir un proceso de acumulación nacional que se desarrolla a partir de agroexportación moderna y que incursionaba en una industria vinculada a las exportaciones* (pág. 247).

El nuevo milenio significó una relectura global de lo acaecido en la historia política nacional, la reinserción económica y el triunfo de la perspectiva neoliberal en la conducción del gobierno. Asimismo impuso un firme compromiso de esta perspectiva por evitar cualquier retroceso, como lo evidencian las palabras de Carlos Boloña (2000):

“Ahora, para el 2000 vemos que los *salvadores* de siempre buscan unirse nuevamente, el alanismo y su entorno, los *populistas* y los comunistas, Moráles Bermúdez, y Pérez de Cuéllar, es una mescolanza que tratan de mantener vigente recurriendo al *Pacto de Gobernabilidad* y a la candidatura única, cual caballo de Troya. Lo lamentable es que en lugar de tener nuevos líderes, nuevas ideas, y nuevos o reestructurados partidos, vemos las mismas caras, y las mismas ideologías que ya fracasaron y que pretende llevarnos de regreso al desastre de los 80’s; lo que equivale decir, decir un retorno al terrorismo, a la quiebra económica y a al ingobernabilidad” (pág. 86).

Así los enemigos del desarrollo económico y la democracia, son una masa heterogénea de voces contrarias al modelo y al enfoque neoliberal, que tienen el estigma del “fracaso” y remiten a décadas dominadas por la crisis económica y la violencia subversiva. Lo que Althaus (2007) denominó las resistencias al modelo capitalista de los “beneficiarios del *orden populista*”.

⁹⁰ Ya Eliana Cardoso y Ann Helwege (1993) habían incluido a la primera fase del Gobierno Revolucionario como parte del “populismo clásico latinoamericano” junto con los gobiernos de Perón, Cárdenas y Vargas.

Si bien Boloña a inicios de la centuria identificaba a los populistas como parte del problema, para el contexto de las elecciones del 2005 con la irrupción de Ollanta Humala como candidato presidencial, el populismo abarcaba ahora, a todas las voces contrarias al modelo impuesto en los noventa, lo que generó preocupación y miedo en las elites políticas, como recuerda Althaus (2007):

“Y hubo miedo, sin duda. Pero no a un cambio democrático y justiciero, sino a una involución estatizante y *populista* que pusiera en marcha *otra vez* los mecanismos que nos habían llevado al enfrentamiento, a la descapitalización del país y a la larga crisis económica que desembocara en la hiperinflación de fines de la década de 1980” (pág. 9).

El extremo mayor de esta manera de interpretar el pasado, es de considerar los derechos laborales y sociales no como derechos sino como privilegios, obtenidos al amparo de regímenes autoritarios, proteccionistas, clientelistas y estatistas como lo señala Althaus (2007):

“Todo depende aquí, por supuesto, del punto de vista desde el que se hace el análisis. Si no se percibe que los privilegios legales que la reforma tiende a eliminar son *insostenibles*, si no se les percibe como *privilegios* sino como *conquistas* o *derechos*, pues el proceso será visto como un arrasamiento de derechos, por más que no se trate sino de privilegios. Una cosa es decir que las reformas liberales requieren desarticular a las organizaciones sociales para implantarse, y otra que buscan desmontar protecciones legales y rentistas de sectores protegidos a fin de redistribuir poder, ingresos y beneficios” [las cursivas son nuestras] (pág. 287).

2.7.3. Neopopulismo: La consolidación del sistema económico neoliberal en los años noventa aunada a la aparición en América Latina de líderes políticos con gran arrastre popular como Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor en Brasil, Abdalá Bucaram en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú e incluso Rafael Caldera en Venezuela, trajo de nuevo a la escena académica el uso del término populismo, pero bajo un nuevo ropaje que conciliaba populismo político y liberalismo económico, al que se denominó neopopulismo.

Se configuro el concepto de neopoulismo en pleno proceso de la “tercera ola de democratización”, de esta manera los avances en materia de derechos y

garantías socio-políticas, crearon expectativas de inclusión en amplios sectores de la población. Sin embargo, como señala Angela Abad (2011) “la falta de compromiso de las clases políticas para incluir nuevas temáticas en la agenda, el aumento de los niveles de pobreza, la inestabilidad y debilidad institucional, dieron como resultado un alejamiento de los electores de los partidos políticos (y la política en general), propiciando la aparición de gobiernos de corte populista o “anti-político”, conocidos como nuevo populismo o neopopulismo”

Este nuevo populismo no sólo conserva gran parte de sus rasgos clásicos, sino también mantiene su relación contradictoria con la democracia. Sobre el particular Weyland dirá que: “(...) while neopopulist leadership has diminished the quality of democracy in Latin America, it actually seems to have helped ensure democracy’s survival” (pág. 150). A diferencia de sus expresiones anteriores, estos nuevos populismos eran menos propensos a la realización de reformas radicales. Durante los noventa los gobernantes populistas –personalistas y carismáticos- conjugaron su retórica maniquea y su capacidad movilizadora con la puesta en marcha de políticas focalizadas y estrategias clientelares entre la población de menores recursos económicos.

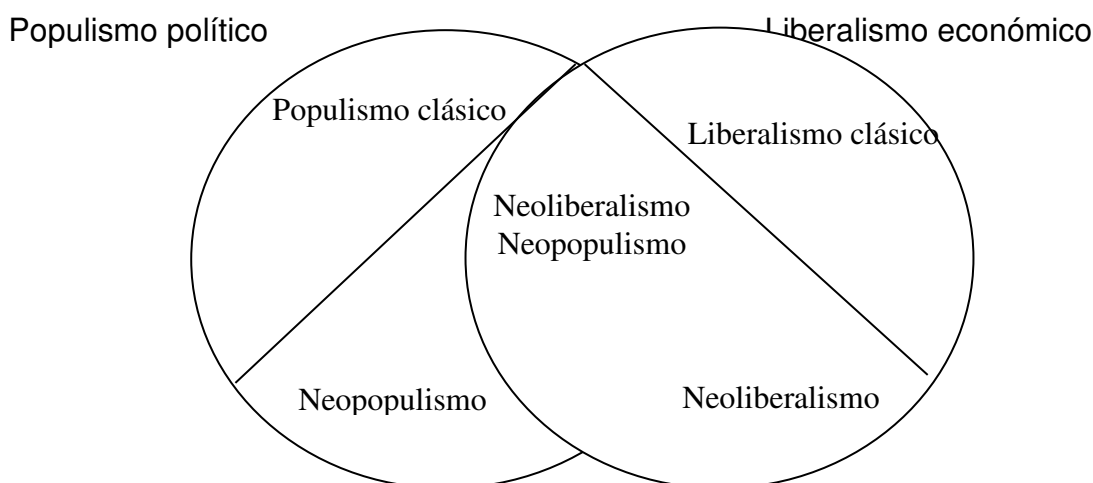
En nuestro país se analizó como expresión máxima del neopopulismo el periodo de gobierno Alberto Fujimori generando una nutrida bibliografía sobre las prácticas políticas del régimen, el nivel de clientelismo alcanzado y el debilitamiento de las instituciones que esto generó. Dicha postura no estuvo libre de cuestionamientos al relacionarse el régimen con el populismo⁹¹. Sin embargo, la nueva terminología de neopopulismo permitía abarcar el análisis del régimen en el contexto de la aparición de nuevos liderazgos carismáticos (outsiders) y la consolidación del neoliberalismo en la región. El énfasis se pone en la personalidad del líder que lo diferencia de

⁹¹ Un sector informado de la intelectual peruana considera erróneo relacionar el régimen de Fujimori con el populismo, dado que su poder político no se fundaba en un partido de masas o en un llamado a las clases trabajadoras organizadas, como fue el caso de la mayoría de los anteriores líderes populistas peruanos y latinoamericanos (Lynch 1999, Stein 1999, Cotler y Grompone).

las perspectivas anteriores, pues el análisis político que realizan estos autores se concentra en las estrategias discursivas y su relación con la masa popular. Cronológicamente, convive con las explicaciones “economicistas” del populismo, a las que se asemeja al considerar al neopopulismo como parte de la evolución del populismo clásico.

La bibliografía es abundante y sigue creciendo en la medida que el neopopulismo como concepto se consolida, por lo que en este acápite remitiremos a los principales autores que han definido y orientado el debate para la experiencia “neopopulista peruana”.

Weyland (1997) en su artículo “Neopopulismo y neoliberalismo en América Latina: Afinidades inesperadas”, señaló que en la década de los ochenta resurgió en varias de las nuevas democracias latinoamericanas. La modernización socioeconómica realizada por los regímenes militares precedentes había debilitado los mecanismos tradicionales de control de las elites, como el clientelismo, y concentrado a gran número de personas en los centros urbanos. Con el retorno de la democracia, esta masa no comprometida políticamente obtenía plenos derechos de participación. Al mismo tiempo, la debilidad de los partidos políticos y de los grupos de interés no permitía integrar a la mayoría de los ciudadanos en redes organizativas fuertes. En este contexto se encontraba “disponible” un gran número de personas para los “populistas”, teniendo en cuenta que las privaciones producidas por la crisis económica de la década de los ochenta hicieron particularmente atractivas sus profusas promesas (p. 12). Llega a considerar como un “prototipo del neopopulismo al gobierno de Alan García.

Gráfico N°1

Fuente: Weyland (1997: 12).

Aldo Panfichi y Cynthia Sanborn⁹² (1997) en su artículo “Fujimori y las raíces del neopopulismo” exponen una visión exclusivamente negativa del fenómeno populista en general y en concreto de su trayectoria en el Perú. La cual relacionan con autoritarismo, personalismo de los líderes y una actitud anti-institucional. Califican al régimen de Fujimori como neopopulista por la similitud de su liderazgo autoritario, carismático, centralizado y vertical y la búsqueda de identificación directa con los sectores populares, que son aspectos similares que comparte con el “populismo clásico” en el Perú. Establecen diferencias que permiten llamarlo neopopulista por la distinta base social en el sector informal a la que apela y por la combinación entre el “estilo político” personalista señalado y las políticas económicas neoliberales. La principal crítica que se le hace a este enfoque es que llaman al régimen fujimorista “democracia neopopulista” a la par que consideran que el antecesor que le da origen, el populismo, representa autoritarismo. Una posible explicación a este llamativo aspecto es el hecho que en la época se

⁹² Sanborn ya había analizado el populismo en detalle en su tesis doctoral: *The democratic left and the persistence of populism in Peru: 1975-1991*. Tesis doctoral en la especialidad de gobierno. Cambridge: Harvard University, 1991.

relacionaba al neopopulismo con la “democracia delegativa” de Guillermo O’Donnell⁹³.

Romeo Grompone (1998) en *Fujimori, neopopulismo y comunicación política*, usa el término neopopulismo más para referirse a lo que refieren otros que para usarlo como un concepto analítico. Problematisa el uso de la categoría y la contrasta con definiciones más completas provenientes del análisis del populismo clásico. Establece asimismo las diferencias entre la integración de las clases populares al desarrollo urbano industrial, fenómeno que está en la raíz del populismo clásico, y los esfuerzos de asistencia focalizada a grupos específicos de un alcance ciertamente menor. En su opinión no es suficiente la “relación sin intermediarios” presente en el populismo latinoamericano y el fujimorismo, sin el componente social que si existía en el populismo clásico con la participación colectiva masiva y efectiva en el espacio público. Señala que lo que sucede con el liderazgo de Fujimori se basa en lo que denomina un “carisma de situación”, donde no son las cualidades del líder sino la inestabilidad del contexto lo que lleva a la gente a ver a este como extraordinariamente calificado.

Aníbal Quijano (1999) en “Populismo y fujimorismo” critica enérgicamente que se vincule al régimen de Fujimori con el populismo histórico. Es enfático en criticar el uso de neopopulismo como una variante del populismo. En su opinión existe un enfoque reduccionista y ahistórico que busca quitar significado al populismo, encasillándolo en el discurso y las prácticas autoritarias. Así, bajo el rótulo neopopulismo se reproduce una imagen desdibujada del contexto histórico en que surge el populismo y de las implicancias sociales que su aparición generó en la morfología de la sociedad estamental de los años cuarenta y sesenta. Señala como un abuso en el uso del término llamar populista al régimen fujimorista, aún en el sentido reduccionista antes mencionado. Al decir de Quijano:

“En el mejor de los casos, podría pensarse que dicha caracterización resulta de una confusión entre dos asuntos que

⁹³ Nicolás Lynch (1999) sobre el particular dirá que estos autores no toman en consideración el carácter golpista del régimen fujimorista por lo que el régimen no puede entrar dentro de los casos que abarca el concepto de O’Donnell.

no obstante estar, sin duda, vinculados entre sí, requieren ser cuidadosamente distinguidos: el *fenómeno Fujimori* del periodo electoral de 1989-1990 y el fujimorismo como régimen político desde el 28 de julio de 1990 y en especial desde el 5 de abril de 1992” [las cursivas es mías] (pág. 187).

John Crabtree (1999) en “Neopopulismo y fenómeno Fujimori”, propone un enfoque que se asemeja en mucho al de Panfichi y Sanborn al considerar los aspectos negativos del populismo en una línea continua que relaciona y une el populismo de los años treinta, con el velasquismo, el gobierno de García y el gobierno fujimorista. Nos dice al respecto que:

“La definición principal de populismo que aquí se emplea está referida a la de un estilo de gobierno caracterizado por las reivindicaciones de líderes fuertes, y a veces carismáticos, al pueblo, saltando por encima de los partidos y políticos existentes y por consiguiente *sin mediación institucional* [las cursivas son mías] (pág. 46).

Pone un especial énfasis en la crisis institucional y en la capacidad de representación de los partidos políticos. En opinión de Crabtree existe una contraposición entre gobierno representativo y populismo, en el sentido de que la persistencia del populismo en la política peruana habría impedido las posibilidades del desarrollo del gobierno representativo.

2.7.4. Perspectiva Histórica: Solo en décadas recientes los historiadores han abordado el tema del populismo buscando conciliar lo narrativo con lo teórico. Desde que Jorge Basadre mencionara el perfil populista de gobernantes como Nicolás de Piérola y Guillermo Billinghurst existió un prolongado silencio por el tema hasta que la sociología, buscando completar el cuadro teórico del populismo histórico, se interesa por los orígenes del populismo en el país, su relación con la política y el populismo de derecha de los años treinta. Es así que las investigaciones abocadas a analizar el populismo tendrán un matiz de encuentro entre enfoques sociológicos e históricos; recurrirán a un análisis de larga duración para poder rastrear e identificar prácticas populistas; harán uso de la comparación entre gobiernos (mayormente los sociólogos); y queriéndolo o no, estarán en la línea del “Latin Populism” o “Populismo Latinoamericano”, propuesto por Mario

Poblete (2006) constituyendo estudios de caso o propuestas teóricas iniciales para caracterizar al populismo latinoamericano y al populismo peruano.

Los primeros análisis de “sociología histórica” los encontramos en los años setenta, ochenta y noventa de la pasada centuria con los trabajos de Peter Blanchard y Jaime Coronado para el caso de Guillermo Billinghurst y los trabajos de Steve Stein y Manuel Castillo concentrados en la figura de Sánchez Cerro. De esta lista solo Peter Blanchard no es sociólogo, lo incluimos en esta lista porque la perspectiva del historiador norteamericano se encontraba más en la reflexión teórica sobre el significado de Billinghurst en relación al desarrollo del concepto de populismo en América Latina y el Perú.

Peter Blanchard (1977) en “A populist precursor: Guillermo Billinghurst” destaca las simpatías que Billinghurst despertaba en las masas populares, y de cómo logró a través de su discurso y acción articular un gran apoyo popular que le permitió llegar al poder a través de una protesta popular. El gran mérito de Billinghurst en opinión de este autor fue desarrollar una “alianza hacia abajo” sobre la base de un “liderazgo carismático”.

El aún por entonces, universitario, Jaime Coronado (1984), en un trabajo universitario publicado, *El gobierno en Billinghurst y la emergencia de la clase obrera 1912-1914*, destaca como la figura de Billinghurst contribuye a la formación de una idea de clase entre los obreros y la consolidación de los mecanismos de lucha colectiva y agremiación laboral. El desarrollo del tema de populismo no es profundo, pero si en armonía con los ideas imperantes hasta ese momento sobre el “carácter mesiánico” del liderazgo de Billinghurst.

Steve Stein (1980) en *Populism in Peru. The Emergence of the Masses and the Politics of Social Control*, hace un análisis sesudo y profundo sobre la elección de 1931 entre el partido Unión Revolucionaria y el partido Aprista. Considerada en su momento como una de las obras más importantes de la

historia política peruana, señaló de manera clara como tanto el “Sánchezcerrismo” como el Aprismo fueron populismos que acabaron sirviendo a los “intereses de la oligarquía”. Es en los años treinta en donde Stein ubica el origen del populismo en la política peruana. Para este autor el populismo de los años treinta reproducía y continuaba el clientelismo heredado de la colonia. El clientelismo político se caracteriza un intercambio de bienes y servicios. Para los detentadores del poder político, el intercambio significaba apoyo en las calles y en las urnas. Para los clientes, las recompensas se manifiestan de diferentes maneras, desde favores personales a bienes materiales. La crisis económica de los años treinta, desde el punto de vista de las masas convirtió al “clientelismo populista” como una manera realista para obtener un pedazo de la torta limitada o de, simplemente, sobrevivir en un ambiente difícil y muchas veces hostil al forjar lazos con los que tenían un mayor acceso a los recursos del Estado (pág. 204).

En su opinión los dos partidos sedujeron a las masas con la ilusión de un cambio social radical. Pero, en realidad, acabaron absorbiendo a las masas dentro de nuevas estructuras autoritarias basadas en el paternalismo: ya de tipo derechista con Sánchez Cerro o de tipo izquierdista con Haya de la Torre⁹⁴. Así, el populismo, en vez de romper con el paternalismo, mecanismo de control de la política oligárquica, lo “masificó” en toda la sociedad, convirtiendo las clases populares en actores dependientes de las nuevas élites políticas.

Tomando como referentes a Steve Stein, Max Weber y Ernesto Laclau, Manuel Castillo (1990) en “El populismo conservador. Sánchez Cerro y la Unión Revolucionaria”, destaca el componente populista del discurso sánchezcerrista, aunado a su personalidad autoritaria y singular carisma.

⁹⁴ En un libro de Antonio Zapata (2016) *Pensando a la derecha*, se define al APRA como la “derecha disfrazada de izquierda”. Atrevida afirmación que contradice la opinión académica general y el sentido común popular que vincula al APRA y a su líder Haya de la Torre con la izquierda peruana, pero que sirve para explicar desde un punto de vista práctico y político los abruptos cambios de rumbo en los planes programáticos de dicho partido; así como que da sentido a las afinidades de militantes apristas con sectores y representantes de la oligarquía.

Para Castillo ya existe dentro de la sociedad peruana y específicamente en la aristocracia peruana, un populismo de derecha. Remontable al menos al periodo de Augusto B. Leguía, en donde existía ya el convencimiento de llegar al pueblo, pero la capacidad de movilización social no era aún posible. Pero ello cambia para la década de los años treinta tras la caída de Leguía:

“Es a partir de estas bases que se fue construyendo un populismo derecha que en el momento de la confrontación producida por la situación de crisis del 31, Sánchez Cerro y la Unión Revolucionaria supieron representar. Tuvieron la capacidad, en un momento en que las Fuerzas Armadas no estaban desgastadas, como dice Basadre, de organizar y arrastrar tanta masa popular como sus competidores apristas y de oponérseles de igual a igual, y no es gratuito pues que los militares masivos en las elecciones del 31 lo realizaran tanto el APRA como la Unión Revolucionaria” (pág.)

Castillo destaca como las coincidencias entre la mentalidad popular y oligarca, ambas compartían un profundo catolicismo, y expectativas de conducción del país por parte de un líder autoritario. Sobre Sánchez Cerro dirá que no era un personaje solo autoritario sino, en esencia, conservador, pero, a su vez, marcadamente populista. El enfoque de Castillo pone énfasis en ver como el urrismo, expresión del “conservadurismo populista”, recoge la esfera privada de la vida cotidiana que se convierte en la base de su programa. Las racionalidades deben expresarse, en el urrismo los nuevos actores sociales se entremezclan con la necesidad de síntesis del imaginario colectivo que va formando hasta constituir una recalificación de las identidades anteriores. Como en todos los populismos el conservadurismo exagera el ámbito de acción de lo público y el rol del Estado atentando contra el espacio privado.

Hacia finales de los años noventa en adelante hay un reencuentro historiográfico con Basadre, y se destaca dentro de la historiografía nacional la figura de Guillermo Billinghurst como antecesor de la política populista en nuestro país. En este primer análisis los referentes teóricos sobre el populismo serán casi nulos en los trabajos históricos primando un enfoque narrativo más próximo al análisis de los movimientos sociales y la multitud, en la línea de George Rudé. Los trabajos de los historiadores Luis Antonio

Torrejón (1995, 2006 y 2010), José Luis Huiza (1998) y Humberto Leceta (2001) han explorado a profundidad el rostro de la plebe urbana que llevó al poder a Billibghurst así como dado cuenta de la base electoral del entonces candidato a través del análisis de la inscripción en los clubes electorales. Mientras Leceta prioriza la confrontación social entre clases sociales impulsada por un líder mesiánico, Torrejón incidirá en que el comportamiento de la plebe en el motín de 1912 fue propio de una “sociedad en transición” en donde conviven elementos de una sociedad premoderna y moderna. Huiza por su parte hace un enfoque comparativo entre el tránsito de la política oligárquica hacia una política de masas, en la medida que el sector popular adquiriría mayor protagonista y las respuestas del ejecutivo hacia las necesidades sociales de las masas, la aparición de líderes como Billinghamurst era casi una necesidad de la época y del momento político que vivía el país.

Otros trabajos que apuntan en esta misma dirección son los de Renato Pantoja (2000) y Javier Barrera (2004), destacando más las causas del fracaso del proyecto de Billinghamurst y el impacto que el discurso del “pan grande” generó en los sectores populares. Son trabajos de carácter más limitado con una intención de divulgación más que de investigación.

En los primeros años del siglo XXI con la consolidación del modelo teórico de populismo de Ernesto Laclau, los trabajos históricos y sociológicos sobre el particular se esforzaron en ampliar la perspectiva hacia los orígenes del populismo y su desarrollo en nuestro país. Así, los periodos de tiempo analizados se diversificaron y se enfocaron con mayor detalle los gobiernos de: Nicolás de Piérola, Guillermo Billinghamurst, Luis M. Sánchez Cerro, y Óscar R. Benavides. Esto no significó una profundización teórica en cuanto a la definición del populismo, aunque si se avanzó notablemente en caracterizar mejor las llamadas “prácticas políticas populistas”, así como un retorno del análisis de la historia política con mayor rigor documental.

Paulo Drinot (2001) en “El comité Distrital Sanchezcerrista de Magdalena del Mar: Un ensayo de micro historia política”, sin entrar en análisis teóricos, desarrolla los lineamientos principales sobre el populismo de derecha de

Sánchez Cerro propuestos por Steve Stein y Manuel Castillo. Analizando un caso muy puntual como es este comité distrital analiza aspectos muy puntuales de la vida partidaria del urrismo, como son: la redacción de las actas, la procedencia étnica y laboral de los inscritos, y la participación. En sus palabras el análisis de estos factores corroboraría la tesis de Stein sobre las características del populismo que surgió en los años treinta. Al explorar el ritualismo de las actas concuerda con la posición de Castillo sobre el conservadurismo y ritualismo que el urrismo imponía a la esfera privada de sus simpatizantes.

El sociólogo Osmar Gonzales (2005) en *Los orígenes del populismo en el Perú. El gobierno de Guillermo Billinghurst (1912-1914)*, remonta hacia el gobierno de este personaje el inicio de la política populista, que marcaba una suerte de evolución del pensamiento político de las masas urbanas. Así, a su entender y comparando los gobiernos de Nicolás de Piérola y Guillermo Billinghurst:

“(...) mientras con Piérola las masas fueron atrás del caudillo en las montoneras de 1894 y exhibían incipientes grados de organización y conciencia política autónomas, las clases subalternas que participaron en las jornadas de 1912 se encontraban en un proceso de franca politización, pudiendo imponer a su candidato –Billinghurst– ante el parlamento para que éste lo reconociera como presidente. En segundo, lugar, mientras Piérola representaba a los sectores eclesiásticos y conservadores y no tenía previsto ensanchar la base ciudadana del Estado, Billinghurst, por el contrario, sí buscó ampliar los derechos ciudadanos a los sectores populares, tanto sociales como políticos” (pág. 20).

A lo largo del texto se presenta al gobierno de Billinghurst como un periodo de tiempo de maduración política de los sectores urbanos. El autor para abordar el populismo se remite a la obra de Laclau, pero no es claro en proponer un concepto sobre el populismo. Toma del autor argentino su tesis principal sobre la articulación de demandas en torno al populismo y como esa articulación posibilita homogenizar y dar corporeidad a la masa urbana limeña, así como se vale de que para Laclau el populismo no remite necesariamente a un espacio temporal determinado. Esto aplicado al escenario peruano le permite a Gonzales proponer una fecha de nacimiento

para el populismo anterior a la del populismo histórico de la región, y relacionarlo con la práctica política de la elite política limeña de las primeras décadas del siglo XX. Por lo que, Billinghamurst a su entender representa: “un desgaje de la forma cómo las élites oligárquicas ejercieron la política, más cerca de los pequeños grupos y a los salones que a las calles y el pueblo” (pág. 20).

Danilo Martuccelli y Maristella Svampa (2007) en “Las asignaturas pendientes del modelo nacional-popular. El caso peruano”, analizan los problemas de consolidación de lo que denominan el “modelo nacional-popular” a través de tres periodos de tiempo de la historia peruana: 1) el avatar del APRA y de Haya de la Torre (desde 1930 hasta fines de los sesenta), 2) el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1975) y 3) la gestión de Alan García (1985-1990). Entienden como modelo nacional-popular:

“el [*E*]stado del sistema político propio de una época de industrialización que busca hacer viable el crecimiento hacia adentro, a través de la incorporación política de los sectores populares y el esfuerzo por movilizar las masas de manera “organizada” (esto es, canalizar las demandas sociales a través del aparato político-institucional)” (pág. 213).

De este artículo destacamos dos aspectos importantes para el análisis del populismo en nuestro país, uno a nivel de “etnografía histórica” y otro a nivel teórico. Los autores reflexionan en el carácter trunco de las experiencias populistas que abordan, indirectamente, destacan el papel de la decepción y la frustración de las masas populares hacia la consolidación del modelo nacional-popular como medio de perduración y continuidad del populismo como alternativa política en el país. Estos temas si bien son abordados en diversos trabajos de ciencias sociales y de ciencia política, lo son a un nivel referencial, no como un tema independiente de análisis. Su inclusión en la línea de investigaciones como las de Martha Nussbaum (2014) sobre el papel de las “emociones” en la política, pueden contribuir a enriquecer nuestro conocimiento de la dinámica de actores políticos en nuestro país. Ya a nivel teórico ofrecen una “presentación analítica” que denominan “triángulo populista” que consiste en los siguientes elementos: 1) Un estilo político

particular encarnado en un líder, que implica un conjunto de rasgos simbólicos; 2) un tipo de intervención económica dirigido a la consolidación del mercado interno; y 3) un tipo de vinculación “orgánica” entre los sindicatos y el sistema político que apuntó a su participación organizada. En opinión de los autores, “el modelo nacional-popular no existe sino en la medida en que se da una exitosa articulación política entre estos tres elementos” (pág. 217). Tomando como objeto de estudio nuestro país, someten a prueba su enfoque, destacando los problemas que presentaron los actores políticos de la elite dirigente (APRA, Velasco y García) para consolidar el modelo nacional-popular.

Tirso Molinari (2009) en *El fascismo en el Perú. La Unión Revolucionaria, 1931-1936*⁹⁵, nos ofrece el que es hasta ahora el mejor estudio sobre el breve gobierno Luis M. Sánchez Cerro y su influencia en la política peruana. Analizando el fenómeno desde una perspectiva teórica más cercana a la sociología comprensiva de Max Weber y Pierre Bourdieu, resalta la influencia del carisma político de Sánchez Cerro, para poder articular en torno a su liderazgo a un sector popular importante de la población peruana, hecho que le permitió ganar las elecciones de 1931 frente al APRA, partido político de masas que había hecho de la confrontación con la oligarquía su carro de batalla para llegar al poder. Por su parte la Unión Revolucionaria se mostraba como un partido conservador, autoritario y de influencia fascista que a través de la figura paternalista de su líder logró articular a la sociedad dentro de un programa político conservador que hiciera frente al radicalismo de socialistas y comunistas. Sobre el discurso sanchezcerrista dirá:

“(...) su discurso va así a tener un credibilidad insospechada. Además, la figura racial cetrina y mestiza del personaje y sus modales campechanos así como sus actitudes *populacheras* y su lenguaje directo y sencillo viabilizaron una rapidísima sintonía y empatía con aquellas multitudes populares que vieron en él lo que buscaban, una suerte de héroe y líder

⁹⁵ Esta publicación fue producto de investigaciones de larga data en torno a Sánchez Cerro y su partido político. Véase del autor: Formación del Partido Unión Revolucionaria: Crisis política y proceso electoral en 1931. Una aproximación al movimiento sanchezcerrista. Memoria de Magister. Lima: PUCP, 1996; y Dictadura, Cultura Autoritaria y Conflicto Político en el Perú. 1936-1939. Tesis para optar el Grado de Doctor en Ciencias Sociales. Lima: UNMSM, 2012.

popular, incluso de *salvador* del país en una situación sumamente crítica” (pág. 19)

Molinari además señala que “su carisma, su liderazgo carismático, más que en su discurso recaía en su gesto *revolucionario* y en su presencia mitificada” (p. 19). No menciona de manera explícita si Sánchez Cerro es populista, pero da entender que no está en desacuerdo de la perspectiva sociológica dominante que vincula a este gobernante como populista.

Los historiadores José Chaupis (2012) y Alejandro Salinas (2012) han explorado los regímenes de Piérola de 1879-1881 y 1895-1899 respectivamente. En ellas partiendo de un estilo narrativo buscan conciliar el análisis social con la dinámica de actores y han develado en buena medida la dinámica política del Califa y su entorno. Dentro de sus pautas metodológicas y teóricas, ambos autores parten de los elementos más generales de Ernesto Laclau para caracterizar a Piérola como populista, al resaltar que el populismo por sí mismo no remite a ninguna postura política determinada, que es aplicable a periodos anteriores a la habitual datación cronológica entre los años cuarenta y sesenta, y sobre todo el cómo se reúnen dentro de su discurso diversas voces en apariencia contradictorias que logra articularse en torno al liderazgo carismático de un líder. Más allá de estos elementos no hay mayores desarrollos teóricos en las obras de los autores que permita explicar la consideración como populista a Piérola o que pueda alimentar el debate en torno al populismo en nuestro país.

En una tesis aún inédita Emilio Candela (2013) El régimen de Óscar R. Benavides (1933-1939) ¿una experiencia populista?. Definiciones y nuevos planteamientos en torno a su accionar político, identifica prácticas populistas en el gobierno de Benavides a nivel discursivo, en sus términos:

“se elaboró un típico discurso populista, con el añadido de resaltar la incorporación de los reclamos urgentes de obreros y empleados a través de un Estado que asumió nuevas funciones. Y sobre esto último, el discurso oficial también dejó en claro que la intermediación partidaria no era la mejor manera de procesar esas demandas, sino a través de la relación directa entre el gobernante y el pueblo. Idea que fue resaltada por el propio Benavides, cuando en su último

mensaje a la Nación enumeró todas las mejoras realizadas en favor de las clases trabajadoras, algo que se había logrado concretar en un periodo en el que no hubo Congreso y con los principales opositores exiliados o encarcelados” (pág. 199).

Ofrece un recorrido sobre la evolución del populismo en América Latina y las diferentes conceptualizaciones que sobre él se han hecho. Según su línea de análisis el gobierno de Benavides es confrontado con las similitudes que presenta con los gobiernos representativos del llamado “populismo histórico”. Por ello, el énfasis de su análisis recae en el liderazgo de Benavides pero circunscrito al ámbito del discurso, único punto en común con los populistas. Eso porque el estilo de liderazgo de Benavides fue “paternalista”, “personalista” y “nacionalista”, señalándose siempre como el personaje que estaba por encima de cualquier lucha partidista, y que él mismo asumió al definirse como “un soldado que solo pertenecía a la Nación” (pág. 200). Reducir el análisis únicamente a nivel discursivo, no es la más conveniente, porque el autoritarismo como tal es paternalista, personalismo y tiende al nacionalismo. El componente social y económico del populismo es dejado de lado, porque al ser un gobierno en esencia represivo, autoritario y dictatorial, la necesaria apertura democrática que trae el populismo es obviada.

Alejandro Salinas (2014), en quizás el mejor libro hasta la fecha sobre el gobierno de Guillermo Billinghurst, *La época del “pan grande” Billinghurst presidente 1912-1914*, explora los pormenores políticos de la llegada al poder, gobierno y posterior caída del ex aliado de Piérola. El recuento histórico es notable pues reproduce con detalle los principales sucesos políticos del periodo, en donde se recrea y entreteje las particulares dinámicas de los actores políticos en su apoyo o rechazo al gobierno. Al igual que en su obra sobre el Califa, toma como referente teórico para caracterizar al gobierno de Billinghurst como populista a Laclau, sin que ello signifique un desarrollo de las ideas del pensador argentino en el contenido del libro.

Nils Jacobsen (2014), en un muy informado artículo “Populism Avant La Lettre in Peru: Rebuilding Power in Nicolás de Piérola’s Mid-Career, 1884–1895”, desde una perspectiva amplia, influenciado por el renovado interés del populismo de derecha en Occidente, encuentra similitudes en el modo de hacer política de Nicolás de Piérola “el Califa” con los políticos populistas vieneses Georg Ritter von Schönerer y Karl Lueger, contemporáneos al caudillo. En su enfoque Nicolás de Piérola es un vanguardista de la política peruana del siglo XIX pues no se restringió únicamente a los mecanismos de la política caudillista de su tiempo, sino que buscó ensanchar la base popular que los respaldaba con su personalidad carismática y un discurso demagógico efectista a través de los medios de prensa.

Cynthia McClintock (2013) en su artículo “Populism in Peru: From APRA to Ollanta Humala” nos ofrece desde una perspectiva de larga duración la recurrencia del populismo en la política peruana, así como los diversos y diferentes rostros que adoptó el populismo desde los años treinta de la pasada centuria hasta el siglo XXI. La caracterización que nos presenta es como sigue: 1) Classical Populism: Víctor Raúl Haya de la Torre; 2) Military Populism: Juan Velasco Alvarado; 3) Populismo: Alan García; 4) Neoliberal Populism: Alberto Fujimori; y 5) Radical Populism: Ollanta Humala.

En opinión de esta investigadora norteamericana la recurrencia y permanencia del populismo en nuestro país no es para sorpresas dadas las características de nuestra historia nacional, en sus palabras:

“The persistence of populism in Peru is not surprising. First, due in part to Peru’s geography and colonial history, socioeconomic divides have very deep. Second, to date liberal democracy has been widely perceived as insufficiently successful in bridging these divides. Although the failures of Peru’s 1980-90 liberal-democratic governments are the best-known, there is a long history of elected governments that were perceived to be insufficiently committed to social reform. As a result, popular *frustrations* and *resentments* were galvanized by populist leaders. In a vicious cycle, liberal-democratic institutions were weakened by populism; when liberal-democratic institutions were reattempted, they were less likely to achieve growth with equity and more vulnerable to populist challenges” [las cursivas con mías](pág. 237).

Las fracturas históricas de nuestro país se convierten en la causa y efecto de la pervivencia del populismo en la política peruana. Los procesos de reforma truncos como el comprendido entre 1895-1914 durante la República Aristocrática; los periodos de 1939-45 y 1956-62 durante los gobiernos de Pardo; y el periodo de 1963-68 durante el gobierno de Belaunde, significaron impactos negativos muy duros para la sociedad civil que provocó la desilusión y la frustración entre las masas populares, y creó el clima propicio para que el populismo y sus líderes pudieran influir en el ánimo de la población. Se generó lo que señala McClintock el ciclo vicioso del populismo, que en su opinión era un ciclo que tenía posibilidades de romperse en las elecciones del 2016, con la consolidación del sistema democrático liberal.

Paulo Drinot (2016), en *La seducción de la clase obrera*, desarrolla con mejores argumentos el perfil populista del gobierno de Benavides. Concretamente, en los capítulos cuarto⁹⁶, quinto, y sexto en donde se refieren a las políticas que el gobierno implementó en pro de la población popular “obrero” en áreas como: vivienda, alimentación y salud; que se materializaron en instituciones tales como las “Juntas Departamentales Pro Desocupados” (Vivienda), “los restaurantes populares” (Alimentación y Nutrición) y el “seguro social” (Salud). Teóricamente se refiere al populismo en los términos de Alan Knight (1998) como una imagen recurrente en el panorama político latinoamericano que conserva cierta utilidad para definir políticas de transición entre regímenes de participación política cerrada o restringida en favor de una elite oligárquica y regímenes de participación que fomenten la competencia política y tengan un carácter de apertura a las demandas populares. Si bien es discutible la denominación del régimen autoritario de Benavides como populista, el énfasis que pone Drinot en las políticas públicas como medios para la articulación de las demandas sociales y la identificación de la población como actor político es notable. El desarrollo de esta dimensión de las políticas públicas fue dejado de lado u

⁹⁶ Versión ampliada de su artículo “Food, Race, and Working-Class Identity: Populism and Restaurants Populares in Peru”, *The Americas*, N° 62 (2), pp. 245-278.

omitido por las investigaciones históricas por un considerable periodo de tiempo.

2.7.5. Nuevos estudios críticos: En este enfoque se parte de la consolidación del fenómeno neopopulista a nivel mundial, moviéndose entre las perspectivas teóricas de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Chantal Delsol y Slavoj Žižek. Por ello las experiencias europeas “populistas” de derecha e izquierda serán gravitantes para definir los nuevos tópicos del análisis del populismo. Como señala Stephanie Rosseau (2012):

“La manera en que son construidos los Estados y la forma en la que se las élites estatales articulan las identidades nacionales dentro de la sociedad constituyen variables centrales para comprender cómo es que la ciudadanía logra ser construida” (pág. 25).

El legado de Laclau será importantísimo en este enfoque, destacándose “la articulación de demandas” y “el discurso” como medio de formación de las identidades políticas. Agrupándose en lo que Yannis Stavrakakis⁹⁷ y Francisco Panniza denominan “interpretaciones sintomáticas”, entendiendo al populismo como un discurso *anti statu quo* que simplifica el espacio político mediante la división simbólica de la sociedad entre “el pueblo” (como los de abajo) y los otros (los enemigos del pueblo).

De esta manera los trabajos se enfocaran en el impacto de los discursos en la construcción de identidades colectivas y actitudes ciudadanas hacia la política. No son estudios muy numerosos y en su mayoría son de pequeño y mediano alcance, al enfocarse en movimientos muy específicos entre pequeños a medianos intervalos de tiempo.

Juan Carlos Ubillúz (2010) en “La política del síntoma. De la democracia radical al populismo (y de vuelta a la lucha de clases)”, cita muchos autores teóricos de las ciencias sociales como Laclau, Badiou, Žižek, Chaterjje, y Agamben. Se analiza al populismo como la nueva “política del síntoma” al neoliberalismo, como en su momento fue el Marxismo y la lucha de clases

⁹⁷ Stavrakakis, Yannis (2009) “Religión y populismo en la Grecia contemporánea”, en *El populismo como espejo de la democracia*. México: FCE, pp. 313-350.

frente al capitalismo. Escrito en un contexto de consolidación de regímenes de izquierda en la región, el autor tiene una posición no tan negativa frente al populismo al decir que:

“Pero si bien no hay que tenerle miedo al *populismo*, tampoco hay que identificarlo con la solución: el populismo de izquierda es hoy un lato necesario con relación a las políticas neoliberales de la década de 1990. *El populismo es un alivio para los de abajo* y un experimento en forma de promesa, todo eso y nada más que eso...” (pág. 314).

Carlos Alberto Adrianzén (2010) en “De Soto y la imposible apuesta por un neoliberalismo popular”, se ocupa de analizar el libro *El otro sendero* del abogado y asesor político Hernando de Soto, figura importante del neoliberalismo peruano y de las reformas político-económicas de los años noventa, en opinión del autor:

“el valor principal de *El otro sendero* radica en la articulación de un *nuevo relato* que, al dotar a viejos actores sociales de nuevas identidades políticas, proveyó a la derecha nacional de un nuevo programa de acción” (pág. 97).

Siguiendo a Laclau, presenta al libro como “un discurso político” atravesado por una “lógica populista” porque en él se establecen las condiciones sobre las cuales se desarrolla lo social y la política. Dos conceptos de Laclau serán desarrollados con algo de detalle: el “momento equivalencial” y la “frontera política”. El momento equivalencial refiere que en algún momento todas las demandas sociales se convierten una sola, esto se produce cuando se han establecido los ejes comunes sobre los que se articulan las demandas. En este caso al decir de Adrianzén los ejes son: la propiedad privada y la relación perniciosa que existe entre el Estado y los tres actores de los que se ocupa De Soto en el libro (habitantes de los pueblos jóvenes, comerciantes de los mercados populares, y los “microbuseros” del transporte informal). En esta versión populista de derecho la delimitación del campo político y el establecimiento de la frontera política recae en la ley y como esta establece criterios de exclusión / inclusión hacia los nuevos actores políticos. El papel de los tecnócratas, en esta línea de ideas, será de vital importancia porque son ellos los que “construyen” el orden social, al ser ellos los que configuran los criterios de exclusión / inclusión.

Mariana Alvarado Chávez (2009) en *La invención del etnocacerismo: populismo radical en el Perú* destaca el perfil autoritario del etnocacerismo de Antauro Humala y se vale del concepto de populismo radical usado por Carlos de la Torre, quien lo define en los siguientes términos:

“De acuerdo con Carlos de la Torre, es una reacción nacionalista a las políticas neoliberales aplicables por los regímenes neopopulistas. En ese sentido, lo plantea como un resurgimiento del populismo clásico de los años 60, con las mismas retóricas nacionalistas y antiimperialistas, glorificación del pueblo y uso de manifestaciones masivas para demostrar apoyo al líder” (Alvarado 2009: 104).

Su discurso trataba de articularse con la herencia ideológica velasquista que tenía como ejes el nacionalismo y niveles jerárquicos rígidos. El etnocacerismo era, cuando surgió, a comienzos de la década del 2000, un movimiento marginal y no era tomado suficientemente en serio por la mayor parte de analistas sociales peruanos, debido en parte a su prédica violentista, su enfrentamiento visceral contra quienes ellos llamaban “los blancos” o “criollos” y sus posturas xenófobas, anti-norteamericanas, antichilenas y hasta antisemitas. El etnocacerismo proponía, en efecto, la superioridad de la “raza cobriza” -término eufemístico que ellos usaban en lugar de “indio”- sobre cualquier otra.

El análisis de Alvarado se concentra en el análisis discursivo del etnocacerismo, que como proyecto político, explota las condiciones de fragmentación, exclusión y resentimiento que persisten en el país. Reconoce esta situación, y ofrece una explicación de su carácter injusto, proponiendo una vía de reivindicación que potencia la animadversión existente dándole un carácter liberador. Al hacerlo, no sólo profundiza los clivajes sociales históricos, sino que introduce un nuevo clivaje étnico para intentar lograr el apoyo del sector que considera mayoritario: el de los llamados cobrizos. De este modo, inventa una nueva identidad e intenta aglutinarla en base a su oposición a un enemigo común –los blancos-, a través de un discurso radical que incita a la violencia (pág. 8).

Stephanie Rosseau en (2012) *Mujeres y ciudadanía. Las paradojas del neopopulismo en el Perú de los noventa*, desde el punto de vista de los derechos y el estatus de las mujeres, llama la atención sobre un conjunto de paradojas suscitadas en el década de los noventa. Observa que el grado de involucramiento de las mujeres en los movimientos sociales no siempre está asociado con un mayor reconocimiento de sus derechos humanos ni con una sólida institucionalización de sus derechos recientemente reconocidos. A través de tres estudios de diferentes sectores donde las mujeres peruanas han organizado e impulsado sus demandas ciudadanas en décadas recientes: el movimiento feminista, el movimiento de mujeres del sector popular urbano de Lima metropolitana, y las mujeres activas en el ámbito de la política formal a escala nacional y local, discute los aportes de estos diferentes grupos de mujeres en la construcción de la ciudadanía en el contexto de un régimen neopopulista y autoritario. Señala con acierto que mientras que en el Perú de los noventa el neopopulismo tuvo su impacto más negativo en las mujeres de las clases populares, ellas fueron las más movilizadas por el gobierno de Alberto Fujimori.

CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Esta investigación analiza el populismo en el Perú desde una perspectiva múltiple para ofrecer una lectura más completa del fenómeno dentro de la política peruana. En primer lugar, ahonda en los lineamientos teóricos que definen al *populismo* como fenómeno social y político, poniendo especial atención al modo de articulación política ciudadana en seis gobiernos que fueron entendidos como populistas: Nicolás de Piérola; Guillermo Billinghurst; Luis A. Sánchez Cerro; Fernando Belaunde Terry (primer gobierno), Juan Velasco Alvarado; y Alan García. Para lo cual, analizaremos las características del liderazgo de cada una de estos presidentes, en concreto: 1) en qué contexto histórico social aparecieron, 2) las características de su discurso integrador en relación a la construcción de una “comunidad política” y 3) La capacidad de sus reformas de ampliar la ciudadanía. Recurrimos para dicho fin al modelo comparativo weberiano como marco general y a las propuestas comparativas “acotadas” de Giovanni Sartori (1991).

Seguidamente, historiar la experiencia populista en nuestro país nos obliga a detenernos en el tránsito del siglo XIX al XX, analizando los principales cambios producidos en la transición de una política oligárquica a una de política de masas, así como de la recurrencia de ciertas prácticas políticas ajenas al sistema formal de representación política (como el clientelismo y la demagogia) que buscan y necesitan de la legitimidad popular. La masificación de la vida urbana y de la expectativa por la ampliación de la ciudadanía supone entender el cómo se fueron gestando términos como: “pueblo”, “partido político”, “democracia”, “soberanía”, “esfera pública” y “ciudadano”, en el léxico y el imaginario de los actores sociales.

Finalmente, entender que el populismo se desarrolla dentro de un sistema político con reglas electorales y actores políticos organizados que han reconocido a la “soberanía popular” como fundamento del orden público, como acertadamente ha destacado Loris Zanatta (2014). Estas reglas electorales pueden ser muy restrictivas o muy abiertas y; los actores políticos pueden ejercer una presión política efectiva como tener una absoluta incapacidad para ejercer presión. Los líderes populistas, incluso los golpistas como el caso de las fuerzas armadas en 1968, tenían como parte de su discurso la salvaguarda de los intereses nacionales, el estado de derecho y la democracia; y se veían imposibilitados de ejercer un autoritarismo total.

3.2. Unidad de análisis

La investigación enfocará al populismo bajo tres niveles de análisis. Un primer nivel de carácter conceptual en donde se busca rastrear el “populismo” como una construcción histórica, enfatizando su particular génesis y desarrollo en nuestro país. Para dicho fin tomamos las herramientas metodológicas de la historia conceptual y de su principal representante Reinhard Koselleck. Además siguiendo a Margaret Canovan (1981) entendemos que el concepto de populismo no está ajeno a la ideología, prejuicios y convicciones de los intelectuales que lo abordan. En palabras de la mencionada investigadora:

“las interpretaciones del populismo han estado fuertemente influenciadas por los resquemores de algunos intelectuales hacia lo popular y toda su progenie repulsiva, y por el idealismo de otros que han exaltado al hombre común y sus simples virtudes” (pág. 11).

Un segundo nivel de análisis es de carácter institucional proponiendo una lectura del desarrollo de los proyectos populistas en dos campos diferentes pero complementarios: 1) El diseño político peruano, entendido como las instituciones políticas (sistema electoral, sistema democrático, legislación,

partidos políticos) y 2) La articulación social, entendida como el activismo cívico (movilizaciones sociales, asociaciones civiles, cultura política). Para dicho fin recurrimos a las herramientas metodológicas de la ciencia política y la politología, para analizar cómo se desenvuelven los actores políticos, y qué características presentaron durante los gobiernos identificados como populistas.

Finalmente el tercer nivel de análisis es la confrontación de la teoría de Ernesto Laclau sobre el populismo a la realidad peruana, para desentrañar no la conceptualización precisa sobre el término sino la lógica de los actores sociales de apostar por modelos de corte populista. Esto no por un simple hipnotismo hacia el líder carismático ni ignorancia en materia política sino como una respuesta “racional” a sus demandas y en atención objetiva a su situación histórico-social. De este análisis pretendemos aproximarnos a las características del populismo propiamente peruano.

Sobre el llamado neopopulismo, somos reacios a emplear el término pues consideramos que más que una variante neoliberal del populismo histórico, es la aplicación del modelo neoliberal mismo. Los procesos que tuvieron lugar en los años noventa no son asimilables a los llamados populismos clásicos latinoamericanos. Tanto por las diferencias entre las agendas públicas de unos y otros movimientos así como la forma de su base social, y los medios en los que se estructuraron ambos tipos de identidades políticas. La temática del mal llamado neopopulismo se circunscribe a lo que denominó Guillermo O'Donnell (1997) como “democracia delegativa”.

El “neopopulismo” de la década de los noventa, es a nuestro entender, la aplicación de los programas de asistencia focalizada a poblaciones vulnerables, que en si reproducen un sistema clientelar y no necesariamente el reconocimiento de derechos ciudadanos. El populismo histórico, para bien o para mal, llevaba conexas una serie de derechos ciudadanos exigibles al estado, el asistencialismo no necesariamente. Por tal motivo si bien nos ocupamos del neopopulismo para el recuento historiográfico, con el caso del gobierno de Alberto Fujimori (1990-1999), máxima expresión, según un

sector de estudiosos⁹⁸, del neopopulismo en el país, no será objeto de análisis en esta investigación. Tampoco nos hemos proyectado más allá del primer gobierno de García, en atención al dramático cambio en el diseño institucional y a la complejización del análisis social de los nuevos actores políticos de los años noventa en adelante.

En años recientes tras el inusitado giro a la izquierda en la región, se definió a los nuevos gobiernos de inicios de siglo XXI en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, y Venezuela, como un nuevo momento del neopopulismo, llamándosele “nuevo populismo”, “populismo radical” o “populismo de izquierda”. Las experiencias tuvieron diferentes desenlaces, pero en líneas generales esta conceptualización sirvió para criticar las políticas en contra del neoliberalismo y las propuestas de un capitalismo alternativo. Pese a que estuvieron más próximos al populismo histórico consideramos que es otro el contexto en que aparecen, con una dinámica de actores diferentes y que por ende lo hacen diferente al populismo. Estos líderes tuvieron diferentes desenlaces, uno de ellos tuvo un elogiado primer gobierno que le valió para volver al poder años después (Michelle Bachelet), algunos cerrarán su ciclo con gran respaldo popular (Evo Morales y Rafael Correa), otros fueron sacados abruptamente del poder en medio de cuestionamientos y procesos por corrupción abiertos (Dilma Russeff y Cristina Fernández de Kirchner), y uno de ellos derivó en una dictadura (a la muerte de Hugo Chávez le sucedió Nicolás Maduro en Venezuela).

A excepción del caso venezolano, podemos decir que estos regímenes se encuentran dentro de la categoría propuesta por José Nun de “experimentalismo democrático”, en donde la construcción de un sujeto colectivo se vio matizado por los cambios que pudieron efectuar en el juego político los mandatarios de turno con los otros actores políticos. Los cambios más significativos y positivos en esta dirección se dieron en Ecuador y Bolivia. Argentina no pudo superar el asistencialismo, la retórica peronista y la oposición de la derecha. Chile siguió una línea más reformista porque los actores que conformaron las movilizaciones sociales más importantes

⁹⁸ Incluso Bruce Kay se refiere a un Fujipopulismo. Ver al respecto: “Fujipopulism and the Liberal State in Peru” en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 38 (4), 1996.

consiguieron ser parte del gobierno. El cáncer de la corrupción con el que convivió y que no pudo enfrentar Lula da Silva, cobró como víctima, a Dilma Russeff.

3.3. Universo

El universo de estudio son los 25 gobiernos presidenciales sucedidos en nuestro país entre los años de 1895 y 1990.

3.4. Muestra

La muestra seleccionada comprende 6 periodos de gobierno y estos son Nicolás de Piérola (1895-1899), Guillermo Billinghurst (1912-1914), Luis A. Sánchez Cerro (1932-1933), Fernando Belaunde Terry (1962-1968), Juan Velasco Alvarado (1968-1972) y Alan García (1980-1985).

3.5. Selección de la muestra

El criterio de selección de la muestra se basó en que existe mayor consenso entre los investigadores en considerarlos como experiencias populistas y manifestaciones del populismo en nuestro país.

3.6 Técnica

Las técnicas a utilizar son dos: el análisis comparativo y el análisis de actores.

Recurrimos para dicho fin al modelo comparativo weberiano como marco general y a las propuestas comparativas “acotadas” de Giovanni Sartori (1991).

La influencia de la ciencia política, los estudios sobre la consolidación de la democracia y el método comparativo impulsados por los politólogos italianos Giovanni Sartori y Leonardo Morlino, renovaron el análisis de la política en la

región, pasando a revisión los principales elementos y conceptos de la política latinoamericana; el populismo no estuvo exento de ello.

En concreto sobre los trabajos de Weyland (2001) y Fleidenberg (2007), Angelica Abad (2012) señala que: “son los que mejor operacionalizan y desengranan el concepto. Siguiendo la lógica de la escalera de abstracción propuesta por Sartori para la definición de conceptos, ambos buscan llegar a una definición mínima y delimitan el “genus” y el “differentiam” del populismo, aclarando cómo se distingue de otros conceptos y ámbitos de conocimiento (pág. 16). Y en efecto en términos estrictamente metodológicos de la ciencia política su trabajo es notable, pero al buscar permanencias en el discurso populista sin detenerse en las particularidades de cada espacio geográfico, contexto histórico, y poder de presión de los actores políticos, los resultados pueden ser demasiado generales para entender dinámicas concretas, y sobre todo la excesiva generalización, producirá el efecto contrario que persigue la comparación, que es definir el concepto. Al todo parecerse por el uso de determinada retórica, los objetos de análisis pierden su singularidad y significado histórico social.

Por ello al análisis comparativo, debe contrastarse con una perspectiva histórica que parta de la presentación de estos regímenes, la valoración correcta de sus posibilidades en su contexto histórico y la evolución de los actores políticos dentro de la historia política peruana.

CAPÍTULO 4

UNA DIFÍCIL TRANSICIÓN: DE LA CIUDADANÍA RESTRINGIDA A LA POLÍTICA DE MASAS

La experiencia peruana post independencia nos presenta la pugna por construir una nación en torno al Estado, y la enorme tara que representó (y representa) la herencia virreinal para conseguir dicho propósito. Según Carl Herbold (1974), el legado administrativo del virreinato a la naciente república peruana tuvo las siguientes características: 1) centralismo, 2) formalismo legal, 3) “estatismo”, 4) dualismo peruano (existencia del “Perú real” y el “Perú legal”), 5) parasitismo fiscal y 6) acomodo permanente entre lo tradicional y lo nuevo. El Perú del siglo XIX no tuvo una elite vigorosa y unificada ni instituciones políticas y estatales que reemplazaran a las que habían organizado el orden virreinal, y ello en buena medida permitió que las características que señaló Herbold como legado virreinal se reproduzcan a lo largo del siglo XIX y XX.

Al iniciarse la vida independiente peruana no existía ninguna asociación de comunidades políticas capaz de tomar decisiones sobre como formar un Estado-Nación libre y soberano (Contreras 2004: 261), en vez de ello con la economía en ruinas y roto el vínculo virreinal que rigió y articuló el aparato productivo, y con una estructura basada en una división estamental de la sociedad, se tenía en la práctica, la negación de los principios liberales sobre los cuales la nueva República había fundado su organización jurídica, el joven país se transformó en “un conjunto de espacios regionales con una lógica particular; si no autosuficientes, “poseedores de una dinámica marcadamente autónoma” (Manrique 1987). Paul Gootenberg (1999) sostiene que dadas sus dinámicas económicas contrarias, las regiones favorecían y luchaban por políticas nacionales opuestas. Como resultado, el

origen del Estado se definía por autonomías y por su falta de conexión (Gootenberg 2002: 264-265).

La peculiar geografía del país, a su vez, contribuyó a todo ello, y a la fragmentación política, pues la distancia entre los centros políticos de las regiones y el desarrollo económico de alguna de ellas (son los casos de la sierra central, la costa y sierra sur) les dio autonomía y la suficiente capacidad de desarrollar una elite política propia. En el gamonalismo reposaba aún el poder político y económico.

Estas características crearon un sistema político post independencia dominado por los intereses de una pequeña elite económica que tenía en el gamonalismo y los caudillos sus principales actores políticos. Hecho que imposibilitó el desarrollo de una estatalidad en el país y la construcción de instituciones políticas sólidas que pudieran privilegiar los intereses públicos sobre los privados. Contrariamente, a lo que podría pensarse, la ciudadanía fue bastante amplia desde las Cortes de Cádiz y paulatinamente América Latina fue cerrando el camino a la participación popular, con intermitencias y repliegues. Las elecciones en el nuevo contexto político eran inevitables y no podían cancelarse por ser la principal fuente de legitimidad. Quedando como único recurso para las élites las “reformas electorales” destinadas a discutir el número de ciudadanos que participarían en las elecciones (Aljovín 2016, Chiaramonti 1995, del Águila 2013, Peloso 2001, Peralta 2011, Ragas 2008).

Con la reforma electoral de 1896, el sistema fue marcadamente restrictivo y excluyente a la participación popular hasta bien entrado el siglo XX. Los cambios demográficos y económicos que experimentó el país forzaron al Estado y a las elites políticas a ampliar la participación política hacia nuevos actores, en la medida que el Estado redefinía sus funciones y se hacía insuficiente el diseño político e institucional imperante.

En este acápite exploraremos el tránsito de lo que denominamos “la ciudadanía restringida”, término con el que aludimos al sistema político creado en 1896 y que se prolongará hasta 1930, a la “política de masas” que

se iniciará en 1930 con altibajos, hasta tomar su forma definitiva en 1980 con la consagración del sufragio universal.

La imagen del caudillo será dominante durante este siglo, y dejará su impronta en la política peruana y latinoamericana desde entonces, casi como la forma política predominante y típica de América Latina. A partir del enfoque del caudillismo en América Latina se pasó a analizar las particularidades políticas del siglo XIX, donde la imagen de líderes militares que buscaban hacerse del poder a través de las armas teniendo una perspectiva patrimonialista del Estado (ver al “estado como botín”) era lo imperante. Es ante esta situación de crisis institucional, como señala el historiador John Lynch (1992), que los caudillos cumplieron tres funciones en el seno de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. En primer lugar, el caudillo era el jefe militar de una banda armada que luchaba por el control político de la región, paso previo en su camino por alcanzar la presidencia del país. En segundo lugar, el caudillo era un benefactor que establecía relaciones de clientelaje con numerosos individuos a los que prometía riquezas, cargos y prebendas, a condición de luchar bajo su mando. Finalmente, el caudillo desempeñó el papel de gendarme o protector, controlando la movilización de las masas campesinas que amenazaban la estabilidad del régimen.

El contexto político del siglo XIX peruano se dan dos características que llaman poderosamente la atención: 1) la amplitud del derecho de sufragio y 2) la presencia del caudillismo. Las elecciones siguieron la tradición inaugurada con Cádiz eran muy abiertas y permitían casi la participación irrestricta de los diversos ciudadanos basados en la idea de una sociedad “corporativista”.

Estos dos factores delimitarán lo que serán las estrategias de la elite para mantener su control del Estado y de las masas populares que buscarán hacer valer los derechos propagados por la modernización y ganar espacios para su participación política.

4.1. Caudillismo y tradición autoritaria

Alberto Flóres-Galindo ([1999] 2003) señalaba que el caudillismo republicano nació asociado a jóvenes militares como Gamarra o Santa Cruz, que lucharon por la independencia. Los caudillos militares en los años posteriores a la independencia tomaron conciencia de que su rol no solo se reducía a la culminación de la guerra, sino que se irrogaron la responsabilidad de gobernar el país. Así, el caudillismo se convirtió en un estilo político y en el paradigma de cualquier liderazgo político posible, acatado inclusive por los más acérrimos antimilitaristas. Para ilustrar este peculiar fenómeno, Flóres-Galindo, recurre al ejemplo de Nicolás de Piérola, “el califa”, y sentencia que “sin caudillo no existía posibilidad de eficacia en la política nacional”. Citando a Basadre señala que “al estudiar la preeminencia del caudillaje en esta época, hay que tomar en consideración tanto su propia capacidad arrolladora (la del caudillo), así como la pasividad de la sociedad”. Para entender esa apuesta ciega en un individuo y en sus designios (pág. 26).

Desde que Flores-Galindo, señalara la existencia de esta tradición autoritaria, se desdibujó en cierta manera el análisis del fenómeno caudillista, pues necesariamente el enfoque de este autor remite al carisma del líder y una pasividad casi absoluta del electorado, y en última instancia de las masas populares. Una crítica que podemos hacer a este enfoque es que desatiende las dinámicas regionales y las estrategias políticas que emplearon los diferentes actores políticos a favor y en contra del caudillismo. Al ser una experiencia compartida por América Latina, se analizó el fenómeno como uno de los signos característicos para hacer política en el continente y es para algunos autores, el referente político antecesor del populismo del siglo XX⁹⁹.

⁹⁹ Esta es la opinión de Cecilia Méndez e Iván Millones, que a modo de reflexión sobre el ascenso político de Ollanta Humala remontaron la retórica populista a los años de la Guerra del Pacífico con la figura emblemática de Andrés Bello Cáceres. El “Brujo de los Andes” era una parte constitutiva del discurso nacionalista de los hermanos Humala y su propuesta política de cara a las elecciones del 2005, el “etnocacerismo”, al respecto consúltese de Cecilia Méndez (2006) “Populismo político y etnicidad en los Andes”, en *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*. N° 26, pp. 13-16; y de Iván Millones “El mariscal Cáceres: ¿un héroe

Para Graciela Soriano (1990) desde una perspectiva histórica más amplia y política, el caudillismo constituiría una posibilidad de “pluralismo político espontáneo” y eventualmente factible, como respuesta americana a la desarticulación del Imperio español, implicada en la ruptura y en las desiguales guerras de Independencia. Fundamentada en el “prestigio de los jefes” (como expresión de la relación del individuo con la masa) y en la fuerza de las armas (como condición o factor para la obtención y para la conservación del poder), y puede emerger espontáneamente como tendencia en situaciones de debilidad institucional, y de atraso técnico-económico.

Francois-Xavier Guerra¹⁰⁰ señala que el republicanismo latinoamericano, tiene un carácter tradicional y modernista en la construcción de valores y principios unificadores destinados a crear el sentimiento de pertenencia a una comunidad política. En opinión de Alejandro Salinas (2003) en el escenario histórico peruano, “la débil integración entre las nacionalidades y la marginalidad de los sectores urbanos y rurales devino en condicionante social para la formación del caudillismo”, ante la inexistencia de “mecanismos formales para establecer frentes policlasistas no hubo bases sólidas para el surgimiento de partidos políticos”. La convocatoria del pueblo por los clubes electorales estuvo circunscrita al papel de comparsa festiva más que de efectiva participación democrática. En la terminología política de entonces, partido, bando o facción venían a significar lo mismo: “grupo clientelista seguidor de un caudillo”, es decir proyectos personalistas retocados con ciertas demandas populistas y patrióticas. Ese difundido espíritu de facción dio origen a sucesivos líderes, cuyos lazos carismáticos legitimaban su influencia social.

militar o popular? Reflexiones sobre un héroe patrio peruano”, *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*. N° 26, pp. 47-57. Para el caso de México es la opinión de Enrique Krauze que en diferentes obras y artículos ha señalado la conexión entre el caudillismo y el populismo, véase al respecto del autor *Siglo de Caudillos: Biografía Política de México 1810 – 1910*. México: Siglo XXI Editores, 1976; *Por una democracia sin adjetivos*. México: Joaquín Mortiz-Planeta, 1986; y “Decálogo del populismo iberoamericano”, *El País*, publicado en la edición del 14 de Octubre del 2005.

¹⁰⁰ Guerra, Francois-Xavier (1992) *Modernidad e Independencia / Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*. Madrid: Editorial Mapfre.

Un contemporáneo al caudillismo, Juan Espinoza (1855), en su célebre *Diccionario para el pueblo*, describía lo que eran los caudillos para la sociedad peruana de mediados del siglo XIX:

“Los ha habido en abundancia en la América española, pero muy raros han sido los que han defendido un principio social. El caudilla[j]e ha salvajizado la pobre América, la ha aniquilado y le ha impedido llenar sus destinos, una vez alcanzada su independencia. ¡Malditos caudillos! Después que sumer[j]en los pueblos en la miseria, les dicen que es necesario aún más sacrificios para obtener su libertad, el derecho precioso de ele[j]ir sin coacción, de publicar sus pensamientos sin censura, de no pagar más contribuciones que las *precisas*; y las precisas son todas las que se les quieren imponer” (pág. 203).

Como recuerda Margarita Guerra (1972) Basadre nos ofrece la definición primaria de lo que es el caudillo como “guía o conductor”. Partiendo de esta sencilla denominación, Guerra profundiza sobre el caudillismo y propone una tipología del caudillo, que a su entender reúne los siguientes elementos: 1) Prestigio personal; 2) ambición de poder; 3) respaldo popular¹⁰¹; 4) personalismo; 5) ausencia de ideario político; 6) imitación de la figura napoleónica; 7) carisma, 8) mesianismo y 9) nacionalismo.

Los puntos referentes al prestigio personal, ambición de poder, imitación de la imagen napoleónica, personalismo, y carisma, no necesitan una explicación en profundidad, puesto que al ser líderes militares estos aspectos recaían en el don de mando de cada uno de los caudillos y en la capacidad personal de influir en las personas. El impacto de la Revolución Francesa en América fue muy grande y las proezas de Napoleón en Europa se consagraron como paradigma para los caudillos americanos que se esforzaron, de manera simbólica o real, en emular.

La ausencia de un ideario político identificable les permitía tener un discurso lo suficientemente flexible como vago para generar adherentes, y reforzar el personalismo. Sin ideas políticas guía los compromisos y pactos políticos

¹⁰¹ En el original se escribe como “ascendencia popular”, para evitar confusiones del término aludiendo hacia raíces populares del caudillo, optamos por poner “respaldo popular”, que es a lo que se refiere Margarita Guerra con ascendencia.

asumidos carecían de efectos vinculantes, y todo en última instancia recaía en la voluntad del caudillo. De esta manera la creación de instituciones sólidas era imposible y a la par que el caudillo aumentaba su poder, aumentaba la arbitrariedad y se consolidaba una visión patrimonialista del Estado.

Sobre el respaldo popular hay que hacer una necesaria identificación de dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la creación de efectivas redes clientelares en torno al caudillo por lo que la mantención del poder y el control del Estado depende del despliegue económico que el caudillo pueda realizar, ello implica que tenga recursos suficientes propios o que disponga de financistas lo suficientemente ricos para poder mantener el aparato militar y clientelar que le permita su permanencia en el poder. El segundo aspecto, es que el liderazgo carismático de los caudillos genera también alianzas sinceras entre la población, y este aspecto es quizás, uno de los más subestimados por los estudiosos del siglo XIX. El apoyo real que la población por simpatía o por expectativas clientelares (puede que muchos simpatizantes no estén vinculados a una red clientelar aún pero quieran formar parte de una) dio a los caudillos una mayor autonomía respecto a sus financistas gamonales.

El nacionalismo, no solo debe analizarse como una herramienta discursiva para generar adhesiones, pues representó históricamente una eficaz arma política en el contexto post independencia en adelante. Como acertadamente señala Cristóbal Aljovín (2000) el recurso al nacionalismo se empleó tras la independencia como un arma política para disputar los cargos públicos tras el proceso de Independencia. Como se recordará, una vez ganada la Independencia de España, muchos extranjeros formaban parte del aparato público, dentro de las fuerzas armadas muchos extranjeros que participaron en la gesta emancipadora con Bolívar y San Martín, fueron recompensados por sus labores prestadas recibiendo propiedades, y obteniendo el reconocimiento de sus rangos militares, e incluso formaron parte del aparato burocrático nacional. La propaganda nacionalista acusaba a los extranjeros de no representar los intereses nacionales, sino los suyos

propios, además de los intereses “nacionales ajenos al Perú (p.248-249). Es así que muchos militares peruanos usaron esta retórica para descalificar a los extranjeros que ocupaban cargos en la administración pública. La bandera nacionalista abarcó aspectos como el comercio, en el intenso debate entre proteccionismo y libre mercado. El Consulado de Lima tomó la representación de los comerciantes limeños, que estaban en abierta oposición a la política libre cambiaria. Tanto revuelo causó este debate que se orquestó una campaña en contra hacia esta medida. La campaña alió a los artesanos, hacendados azucareros y a los obrajeros. En el campo político es pertinente recordar que en 1831, los diputados Ildefonso Zavala y Félix Iguarín, contando con el respaldo de Luna Pizarro, pidieron en el Congreso una ley que prohibiera a los extranjeros ocupar puestos públicos. El Congreso vetó la ley porque ella iba en contra oficiales que lucharon por la independencia. Tal hecho ocasionó una rebelión militar en la cual estuvieron involucrados Valle Riestra, Rossell y Castilla¹⁰².

4.1.1. Caudillismo y personalismo político

El personalismo político hispanoamericano, para Graciela Soriano (1990) surgió desde el segundo lustro del siglo XIX, como consecuencia de la crisis de legitimidad planteada desde 1808¹⁰³. Ante las debilidades o vacíos del poder legítimo y legal surgió el personalismo, bien impulsado por deseos o fuerzas incontenibles y arbitrarios que se desataban espontáneamente con la crisis o el derrumbe del viejo orden, bien impulsado por deseos o fuerzas de un orden más noble amparados en la antigua o en la nueva legitimidad que, para conservar a ese viejo orden en sus posiciones, o para asegurar al nuevo en las suyas, no tenían otra opción que el ejercicio del poder personal. Con la herencia de la guerra, el personalismo pudo expresarse como caudillismo o como tendencia al caudillismo, contrapartidas lógicas de las dificultades del proceso de institucionalización.

¹⁰² *La Brújula* (Lima) 12 y 13 de junio de 1831; *El Centinela de la Patria* (Lima), 7 y 12, 14 de mayo 1831 y 23 de junio de 1823; *El Correo de las Encomiendas* (Cusco), 3 y 10 de febrero de 1832. Citados en Aljovín 2000: 255, nota 107.

¹⁰³ Cuando el rey español Fernando VII fue capturado por Napoleón.

El Estado peruano del siglo XIX no tuvo un definido cuerpo organizativo ni una vertebración institucional (López 1997: 126). Los intereses públicos no estaban separados de los intereses privados: existía una tensión entre el patrimonialismo de los caudillos y los poderes feudales del gamonalismo. La geografía nacional condicionó que no se pudiera desarrollarse una estructura centralizada: el poder estaba fragmentado en las regiones y mantenía débiles vínculos con el caudillismo. Con la excepción de las pequeñas ciudades, los caudillos no tenían una relación directa con la población, sino que su poder estaba mediado por los gamonales y los poderes locales que mantenían relaciones de servidumbre y de favores y lealtades con la población que estaba bajo su propiedad y su dominio.

Como recuerda Sinesio López (1997) los criollos, tanto los aristócratas como los de clase media, no lograron constituirse en una elite alternativa a la elite virreinal ni tuvieron, por eso mismo, la capacidad de crear las instituciones necesarias que contribuyeran a la organización de una relación directa, centralizada e individualista de la autoridad y el establecimiento de un orden político estable.

Como nos recuerda Camen Mc Evoy (2007) “con el pretexto de la infracción constitucional, los caudillos convocaban adhesiones y apoyo político provinciano en su camino a la conquista del poder supremo” porque “el rompimiento del orden constitucional fue parte de la cultura peruana desde la fundación de la República” (págs. 222-223).

4.1.2. La dinámica caudillo-pueblo

La independencia no creó una democracia real, y por ello los sectores populares y medios optaron por seguir a uno u otro caudillo. Sin embargo, este tipo de conciencia política en apariencia muy simple era distinto al surgido en las revueltas anticoloniales de fines del siglo XVIII, pues entonces las demandas económicas habían sido desplazadas por las políticas, especialmente el derecho de ciudadanía. Los caudillos supieron aprovechar estas exigencias para incluirlas en su propaganda política mediante ofertas

específicas para el pueblo en general, entre ellas limitar la conscripción militar, promover las industrias locales y respeto de las libertades civiles. Este discurso favoreció el florecimiento de generaciones de intelectuales liberales entre las clases medias estrechamente vinculados a las activas masas urbanas.

Los caudillos crearon una particular dinámica con los pueblos y las provincias que les permitió influir y hacer la política desde una perspectiva autoritaria y patrimonialista, a la que Gabriela Chiaramonti (2005) denominó “dinámica caudillos-pueblos”. Carmen Mac Evoy (2007) resume esta dinámica en donde la importancia del Cabildo era fundamental pues, “los ciudadanos reunidos en cabildo, reconocían la autoridad del nuevo caudillo quien, desde ese momento asumía el mando por la voluntad general de los pueblos. La naturaleza de este pacto era de carácter provisional, pues la existencia del mando otorgado expiraba en el momento en que el Perú lograra su pacificación y la nación estuviera en capacidad de ejercer su derecho de proclamar el principio de la reforma de sus instituciones por medio de un Congreso general, en virtud de la soberanía popular. Al acuerdo político entre el caudillo, cuya misión principal era salvar a la República, y los pueblos debía de seguir una nueva Constitución capaz de reorganizar el marco institucional en función a los objetivos del pacto (pág. 225).

Para algunos autores, como Alejandro Salinas (2003), estos “mecanismos intermediadores” ente el voluntarismo autocrático y la movilización de los actores populares, permitieron la generación de demandas regionales que constituyeron la permanente base de una extendida práctica clientelista. Las masas populares en general siempre encontraron en el pragmatismo del caudillismo un discurso más atractivo que la ciudadanía de segundo clase conferida por las constituciones liberales o conservadoras. Asimismo las volátiles alianzas entre las oligarquías provinciales y los caudillos, además de la creciente politización de los sectores populares, convirtieron a los regímenes autocráticos en los únicos viables para la convulsa sociedad peruana decimonónica. Sarah Chambers (2004), para el caso de Arequipa, destaca una serie de mecanismos opuestos a la centralización de la

autoridad, desde las formas pasivas como la evasión del reclutamiento y el rechazo de impuestos hasta la prensa y el boicot electoral. En esa región el aprendizaje fue ciertamente rápido y para 1851 el pueblo se hallaba altamente politizado.

Esta alianza caudillo-pueblo era fiel reflejo de la “ruralización de la política peruana” (Mac Evoy, 2007) en donde las provincias, igual que en la época colonial, delimitaban los espacios de poder de las ciudades principales y de las oligarquías rectoras conformándose la idea de las “ciudades-provincias” (Guerra, 2003). Después de 1823, buena parte de la vida política peruana continuó pensándose en términos de ciudades-provincias, lo que fue visto como una amenaza al funcionamiento del sistema político de corte nacional por la elite política limeña. En las postrimerías de la década de 1860, el Perú se vio sometido a un acelerado proceso de desintegración de sus espacios políticos y económicos, pero sobre todo de sus vínculos sociales. La guerra civil que recrudeció a mediados de 1854, y se manifestó de nuevo en 1858, 1864 y 1868, dejó una secuela de desorganización económica que forzó a la reformulación de los espacios geopolíticos tradicionales. Distritos que reclamaban trato de provincias, provincias intentando separarse del departamento al que pertenecían o solicitando un trato preferencial y autoridades provincianas que se negaban a seguir las directivas del poder central, en el marco de un proceso de reavivamiento de la política facciosa y del colapso de la economía guanera.

El declive del ejército y el agotamiento de la fórmula constitucionalista basada en la alianza caudillo-pueblos tuvieron su contraparte en el encumbramiento de la Armada y de la ciudad de Lima como actores políticos. En un escenario en el que los militares parecían haber perdido su liderazgo, tanto político como simbólico, que por casi medio siglo les permitió mantener el poder, la Armada ofreció su “patriótico contingente” con la finalidad de poner “al servicio de la Nación” los elementos de los que disponía y permitir a las autoridades legítimamente electas continuar con sus funciones.

El fracaso civil tuvo que ver, entre otras cosas, con su incapacidad de administrar el pactismo político (caudillos-pueblos) que fue la clave del éxito de los militares. El deterioro del modelo (consecuencia del agotamiento de sus fuentes de financiamiento, el hastío de la población, el cambio en las coordenadas ideológicas y la desaparición de sus principales gestores) determinó el surgimiento de una nueva modalidad política en la que la dirigencia civil se valió de la Armada para hacer respetar la Constitución.

A mediados del siglo XIX, el régimen caudillista muta hacia sistemas híbridos, democráticos en las formas, pero con fuerte impronta autocrática en sus acciones gubernativas. Al interior de ellos hubo espacio incluso para proyectos monárquicos o de gobierno vitalicio auspiciados por grupos conservadores.

En esta perspectiva, la elite política definió los términos para la articulación entre sociedad y Estado, especialmente a través de las elecciones. Se produjo una compleja combinación de lo antiguo y lo moderno en cuanto a la manera de concebir y en el ejercicio del derecho de sufragio. La definición del ciudadano, a pesar de la letra de las constituciones, tardó mucho en separarse de la del antiguo “vecino”, es decir, de un miembro de una comunidad ciudadana o pueblerina. Del mismo modo, el voto, teóricamente manifestación de la voluntad autónoma del individuo-ciudadano, fue durante largo tiempo una manifestación del reconocimiento de las jerarquías sociales o de la pertenencia a redes de clientelas o de vínculos comunitarios (Salinas 2003: 7).

El caudillismo para Alejandro Salinas (2003) fue el modelo político por el cual optaron las oligarquías provinciales ante la disgregación del viejo estado colonial. En ese contexto, el sistema de representación política organizado para ligar el latifundio y el poder político fue un vehículo para racionalizar el conflicto entre grupos terratenientes. Esa medida era un bloqueo a la unificación nacional. Desde el Estado se dieron leyes para consolidar la hacienda, con lo cual se estimulaba la diseminación política. He allí el origen de formas de poder feudalizadas, como el caudillismo, sustentado en

relaciones sociales como el gamonalismo. Por ello no había una jerarquización del poder, sino una fragmentación regional. Víctor Peralta (1991) reveló cómo durante la época del caudillaje, el tributo en términos absolutos representaba entre el 30 al 39% del monto recaudado anualmente, lo cual encubría la penuria a que habían llegado las demás rentas estatales. El crecimiento de las contribuciones directas se dio en la mitad que la bancarrota económica y la anarquía política se hermanaban. Conviene destacar como el tributo en los primeros años independentistas había ido consolidándose como el sostén de los poderes locales provincianos. Por ellos el conflicto entre el gobierno central y las oligarquías provincianas por la persistencia del tributo sería una constante. Ello sucedía porque en el mundo rural, los terratenientes y caudillos estaban decididos a reproducir el modelo de subordinación local asimétrica de los campesinos.

4.1.3. La modernización tradicionalista

Estas características dificultarán el tránsito hacia un estado moderno, el ideal republicano, y retrasarán la constitución de la profesionalización del servicio público, la descentralización de los servicios públicos y la optimización de la recaudación de impuestos. Incluso la lenta implementación de las ideas liberales no significó un rompimiento con el pasado y una apuesta por la modernización del país. Como señala Fernando de Trazegnies (1979), se produce en el siglo XIX una “modernización tradicionalista” que consiste en la: “recepción de un cierto número de elementos capitalistas, ligada a una profunda resistencia a todo cambio en la estratificación social”, es decir “se quiere devenir capitalista, es decir *moderno*, pero al mismo tiempo se quiere conservar las jerarquías tradicionales” (pág. 30).

Por ejemplo, Pablo Whipple (2013), explora para la primera mitad del siglo XIX, como la elite limeña se opuso duramente a los mecanismos de control y fiscalización del Estado frente a los vicios sociales de aquellos años: los juegos de azar y las apuestas. Bajo la construcción de un concepto de “decencia”, pretendían mantenerse fuera de los estándares de fiscalización y control legal del Estado haciendo prevalecer ciertos privilegios de la época

colonial cuyo único sustento era la condición racial del individuo. Así tenemos que en el siglo XIX, al igual que en el Virreinato, la idea de decencia entre la elite era permanente y públicamente usada como una manera de justificar moral y socialmente sus privilegios. Como podemos constatar en el párrafo de un artículo aparecido en *El Comercio* en 1841 dirigido al Intendente de Policía: “La población de Lima debe ser gobernada por autoridades que conozcan y distingan el estado, carácter y posición de las personas vecinas”, lo que hacía necesario que aunque “por la ley republicana todos sean iguales ante la ley [...] hay una cierta clase, que aún en la hipótesis de delincuente por haber violado algún pacto, siempre es considerada por el mandatario en la aplicación de la pena¹⁰⁴”.

4.1.4. El ideal Republicano

El aspecto formal del Estado (legal y administrativo) era nominalmente moderno pero carecía de las características propias de la modernidad, y se convirtió así en una prolongación del sistema virreinal basado en privilegios, prácticas clientelares, y una visión patrimonialista del Estado. Por contradictorio que pueda parecer estas condiciones políticas hicieron que una generación de caudillos aprovechando la anarquía existente, asumiera la tarea de introducir el republicanismo. A mediados del siglo XIX, el régimen caudillista muta hacia sistemas híbridos, democráticos en las formas, pero con fuerte impronta autocrática en sus acciones gubernativas. Ello se explica, como nos recuerda Alejandro Salinas (2003) por la ubicación temporal del caudillismo, a medio camino entre el antiguo despotismo colonial y el gobierno liberal asentado sobre la asociación voluntaria de individuos.

El ideal republicano estaba basado en el interés nacional, y por tanto los caudillos consideraban a la clase política como un círculo ajeno al interés colectivo, con tendencias faccionalistas y lesivos para la ordenada unidad nacional. En el afán de mantenerse en el poder fomentaban la corrupción y

¹⁰⁴ “Prudente advertencia al Señor Intendente de Policía” en *El Comercio* 563, 14 de abril de 1841. Citado en Whipple (2013: 58, nota 68).

el miedo, actitudes opuestas al *ethos* republicano y se inclinaba al despotismo. Ese mal sólo podía extirparse mediante la violencia. La pérdida de legitimidad de las formas republicanas favorecía el desarrollo del caudillismo como salvadores de las libertades del pueblo y la constitucionalidad. Sin embargo, existió una relación ente la violencia y la Constitución a manera de formar la segunda un “guión para las revoluciones”.

Surge así una nueva cultura política, con un discurso modernista en la forma pero que no insertará efectivamente nuevos términos en la relación entre ciudadanía, Estado y Nación. Y ello porque los sectores conservadores, partidarios de un gobierno elitista sustentado en vínculos familiares y amicales, estuvieron opuestos a compartir el poder con las clases populares. Nada impidió entonces a los caudillos usar estas redes personales para tener acceso y controlar las instituciones públicas en vez de fortalecer los medios constitucionales.

El golpe de Estado y la revolución fueron dos fenómenos inherentes a la cultura política surgida en las primeras décadas republicanas. Ninguno de los gobiernos caudillista alcanzó una auténtica legitimidad constitucional, por lo cual en esta situación, de permanente inestabilidad, cada grupo diseñaba su propia estrategia electoral y conspiratoria al mismo tiempo. Los caudillos se irrogaban la defensa de la comunidad política para justificar su acción militarista, pues el uso de la violencia se presentaba como el mecanismo fundamental para la continuidad republicana y la regeneración del Estado y la sociedad. La clase política fue absorbida por las prácticas del militarismo y aceptaba el quiebre del orden constitucional como parte del desarrollo sui géneris peruano.

El republicanismo se movió así entre una lógica representativa y otra jacobina, ésta última basada en la idea de que el pueblo nunca cedía la soberanía, planeaba la potestad de derrocar aquellas instituciones en las cuales no estaban representados los intereses ciudadanos. Dentro de esta lógica, el ejército asumió el papel de “pueblo en armas”, y cada una de las

facciones caudillescas guerreó por convertirse en soporte populista del Estado. Bajo el primer militarismo el Perú había surgido incipientemente los vínculos nacionales y las fronteras fueron definidas. En dicho período el uso de la violencia se legitimó en la proclamada lucha contra la barbarie, por ellos los golpistas trataban rápidamente de legitimarse convocando a Congreso. Un caudillo tenía que legitimarse para dotar de sentido y esencia a su movimiento.

Hubo en este tiempo todo un procedimiento para la conversión del caudillo en presidente constitucional. Primero se daba la ratificación del jefe revolucionario por juntas de notables en cabildo abierto, luego debía producirse la ratificación del Congreso, y posteriormente ya asegurado el poder, el caudillo buscaba desde allí un triunfo electoral. Este rasgo es fundamental en el caudillismo porque comprueba la necesidad de éste por conciliar con los “formulismos constitucionalistas”. El primer gobierno de Gamarra (1829-1833) es la prueba más clara de los parámetros jurídicos en que se encausó el caudillismo. Gamarra obligó a renunciar a La Mar en supuesta defensa de las normas constitucionales. Fue legitimado seguidamente por una junta de notables en Lima, y esperó la instalación del Congreso para obtener su nombramiento de Presidente provisorio. Finalmente ganó las elecciones presidenciales si bien obtuvo una fuerte oposición parlamentaria. El caudillo cusqueño fue, sin embargo, más allá y buscó una reforma constitucional que le permitiera permanecer más tiempo en el poder. En ese sentido, como señala Aljovín, introducir ideales republicanos en un país escaso de ciudadanos y carente de ética cívica era ciertamente una tarea ardua.

Soluciones autoritarias habían sido ya planteadas por José María de Pando en la época post-bolivarista. El ideal era establecer un sistema presidencialista restando facultades al Congreso y las juntas departamentales. Pando consideraba necesario centralizar la designación de las autoridades provinciales desde la capital.

Ya desde los años cuarenta, Bartolomé Herrera señalaba que la causa del desgobierno era haberse generalizado en la opinión pública la idea de que la “autoridad” era una invención del pueblo, y por tanto podía desobedecerla y destruirla cuando quisiera. La libertad se buscaba en el desorden de las revoluciones, lo cual, según Herrera, contrariaba la voluntad de Dios que establecía la imposibilidad de forjar la armonía social sin una autoridad que obligara al ciudadano a respetar el gobierno. Esta posición fue combatida por Benito Laso, quien había definido la soberanía como el derecho de arreglar el régimen de asociación política y de dar las leyes por las que un pueblo debe gobernarse, establecer las autoridades, nombrar magistrados. Herrera criticaba esta posición “rousseaniana” y apelaba a la naturaleza divina del hombre y la sociedad para establecer jerarquías y control férreo de la autoridad.

4.1.5. El Estado Caudillista (1821-1896)

La vida independiente del país estuvo dominada por intereses particulares y regionalistas que dificultaron la consolidación de un Estado liberal fuerte y administrativamente eficiente. En términos de Javier Tantaleán (2004): “el Estado de jure era asumido como liberal” y “el Estado de facto interactúa con una infraestructura económica de un nivel mínimo de industrialización y con poderosos intereses exportadores, que fueron variando en el tiempo: guano, salitre, azúcar, algodón, plata y cobre” (p. 172-173). De esta manera para Tantaleán, la principal tarea de este Estado “era construirse a sí mismo”, pues necesitaba de dotarse de marcos jurídicos e institucionales básicos (entes administrativos centrales y departamentales, infraestructura para servicios básicos y para el comercio), tomando para ello como referencia los modelos administrativos de Europa y Norteamérica.

En este Estado se logró establecer la alianza entre comerciantes y hacendados, sin estos grupos el Estado no hubiese mantenido su capacidad de dominio. La recaudación tributaria seguía la lógica de la época: “solo cuando al Estado le son insuficientes los ingresos que vienen de los pobres,

se recurre a los ricos”; de esta manera los ingresos totales del erario, eran financiados por los más pobres y los más ricos.

La dinámica era en sí sencilla, los hacendados como grupo, eran una extensión del Estado para la recolección, captación y canalización del tributo indígena, y en el control y suministro de brazos para la formación de los ejércitos del caudillo. La recaudación efectiva entre 1830 y 1850 osciló entre los 0,8 y 1.3 millones de pesos, lo que representaba para la época porcentajes de 22% y 24% de los ingresos del Estado en las décadas de 1830 y 1840 (Contreras 2012: 47). Las contribuciones indígenas y de las castas eran cobradas por la cadena de subprefectos y gobernadores, y podríamos decir que se trataba de una de sus ocupaciones principales, por no decir la principal. Los comerciantes, finalmente, actuaban como “bancos” de crédito del fisco.

Es importante destacar como hasta entonces la debilidad estatal había estado determinada por la inestabilidad en el gobierno central y los permanentes conflictos fronterizos. La década de 1840 estuvo sacudida por las guerras caudillistas, al mismo tiempo que por primera vez los ingresos del Estado avizoraban un gran incremento a partir de las exportaciones del guano, que en el primer gobierno de Castilla llegaron a constituir ya un 5% del presupuesto nacional. Es innegable que con el empobrecimiento de la elite aristocrática limeña y la generalizada anarquía política fueron definiéndose las bases para estos poderes fácticos. Casi en todas partes la soberanía estuvo compartida, pues los caudillos exentaban a sus regiones y a ellos mismos el control de las recién establecidas provincias republicanas.

En esas condiciones, como hace notar Carmen Mc Evoy (1997), emerge el Estado patrimonial castillista para hacer efectiva el principio de soberanía mediante un discurso nacionalista integrador y el establecimiento de una serie de alianzas con sectores provincianos. Castilla encontró además en las ideas de Bartolomé Herrera, los fundamentos ideológicos para defender la figura de un Ejecutivo fuerte y centralista. Es pertinente recordar lo que Colin

Lewis¹⁰⁵ señalaba, sobre que en Sudamérica las naciones-estado en el sentido moderno del concepto no existieron sino hasta después de mediados del siglo XIX. Entre otras razones menciona la inestabilidad de las fronteras, la ausencia de una ciudadanía y el aislamiento de las poblaciones, factores que no permitían forjar un sentimiento de “universo común”, básico para dar curso a sistemas nacionales integradores. En el Perú, el ejército se constituyó en el principal sostén de la estructura estatal. Surgió así una guardia pretoriana rodeando a los caudillos en conflicto. No tuvieron una actitud definida frente a proyectos de largo plazo, y muchos de ellos asumieron actitudes pragmáticas que los llevó a tener tantas posturas nacionalistas ó posturas favorables a los extranjeros.

El caudillismo devino entonces en la principal fuerza de cohesión social, pero al mismo tiempo representó un obstáculo para el surgimiento de un sentimiento de mancomunidad política impersonal. El caudillo post-independentista era el representante de ciertos sectores dominantes de la sociedad peruana. Lo curioso era que los caudillos locales podían ser federalistas, mientras estaba limitada su influencia a una región, pero cuando tomaban el poder se convertían mientras estaba limitada su influencia a una región pero cuando tomaban el poder se convertían en fervientes unitarios. La figura del “dictador oligárquico” como guardián del orden y el progreso, que trabajaba dentro de un sistema centralizado y como símbolo de equilibrio político lo condujo a preservarse en el poder por medio tanto de la revuelta como el fraude electoral.

4.1.6. La ciudadanía corporativa¹⁰⁶

Concordamos con Alicia del Águila (2013) cuando caracteriza al Estado del siglo XIX peruano como una “República corporativa”, esto porque la

¹⁰⁵ “Globalización y la formación del Estado: la Economía de la construcción estatal en Latinoamérica desde la Independencia a la década de 1940”, en *Gaceta Económica*.

¹⁰⁶ Este concepto es una clara alusión al concepto de corporativismo teorizado originalmente por Durkheim, que “asume que las interacciones entre los poderes públicos y algunos actores privados son particularmente intensas. Pero que desde el punto de vista de la praxis política sirve para designar a “la ideología” o “práctica política” que pretende a través de unas pocas “corporaciones sociales” como “grupos de interés” o “asociaciones voluntarias”, la participación de los individuos en la toma de decisiones públicas. Tomado de Molina Ignacio (2003) *Conceptos fundamentales de política*. Madrid: Alianza Editorial, pág. 31.

estructura estamental y política que rigió el pasado virreinal, no desapareció con la Independencia, se buscó construir una nueva estructura política, pero bajo cimientos tradicionales. Las constituciones al decir de esta autora, se convierten en espacios donde los actores llegan a acuerdos sobre lo que debe ser la nación y el tipo de ciudadanos que quieren construir. De esta manera al atribuir un carácter corporativo a la república peruana nos da a entender la presencia en el siglo XIX:

“(…) de grupos o comunidades dentro de una sociedad, cuya identidad les reconoce derechos en su diversidad (por ejemplo, el grupo de los que pagan impuestos –la mayoría jornaleros o campesinos pobres- frente a los propietarios o los artesanos jefes de taller), opuesto a la identificación de individuos ciudadanos como sujetos del derecho político, o incluso, a un solo grupo (oligárquico) que, sin más, impone una o más condiciones (no alternativas sino complementarias) para demarcar la ciudadanía según sus intereses” (p. 28).

La sociedad peruana virreinal se sustentaba en la división en “repúblicas” y castas, socialmente hablando, así como también en cuerpos institucionales con normativas propias, como la Iglesia, los ejércitos y milicias y las comunidades campesinas. Pero, además, se componía de una estructura territorial que, como se verá con la independencia, constituía identidades ancladas en las ciudades. De la capacidad de controlar las aspiraciones de sus vecinas por parte de las ciudades principales, dependerá la consolidación, ruptura o tensión de los nuevos Estados nación. Ambas características, ciertamente, eran comunes al resto de América Latina, con diferencias propias en cada situación. La república corporativa comprendió una solución híbrida que estuvo lejos de instaurar de manera inmediata un Estado moderno que impusiera sus leyes a todos por igual, en todos los ámbitos y regiones.

4.2. La democracia y el espacio público

Es necesario hacer hincapié en cómo estos dos conceptos son entendidos en el periodo de tiempo que analizamos. La democracia y sus ideales de cuño liberal calaron más hondo en la población popular peruana de lo que usualmente se cree y comenta. Fue la elite política peruana hacia finales del

siglo XIX la que redujo mediante formalismos jurídicos la capacidad de participación de las masas populares en la arena política.

Algo similar podemos decir sobre el espacio público, las masas populares abrazaron con entusiasmo las ideas asociacionistas liberales tanto porque existía ya una tradición corporativista heredada del Virreinato, así como por el genuino interés que la política y lo público despertaba entre las personas. Se manifestaron en agrupaciones colectivas que fueron desde asociaciones civiles, pasando por colegios electorales y sindicatos, hasta los partidos políticos.

4.2.1. La Democracia

David Held (2001) señala que el “atractivo de la democracia” reside en su negativa de aceptar en principio otra concepción del bien político que no sea la generada por el “propio pueblo”. Como nos lo recuerda,

“desde la búsqueda elementos de soberanía popular en las primeras repúblicas auogobernadas hasta las diversas luchas para lograr un sufragio realmente universal durante los siglos XIX y XX, los defensores de una mayor responsabilidad en la vida pública han intentado instaurar medios satisfactorios para autorizar y controlar las decisiones políticas” (pág. 333).

Esta característica tan importante, de en donde radica la soberanía y el poder político, es lo que le ha dado la capacidad de convertirse en un “orden político”, “un mecanismo de legitimidad”, en “una virtud” cívica, y en “un valor ético en sí mismo”. Como señala Held (2001): “La democracia es el único *gran o meta* discurso que puede enmarcar y delimitar legítimamente los *discursos* enfrentados de nuestra época”, su capacidad de permitir el juego político a actores sociales excluidos en los modelos antecesores (monarquía, dictadura, tiranía, etc.) posibilitó y posibilita su aceptación entre las masas populares y le arrogó una legitimidad incuestionable.

Y es que la idea de democracia es importante no solo porque represente un valor entre otros muchos, como la libertad, la igualdad o la justicia, sino que

es “el valor que puede mediar entre intereses preceptivos enfrentados” (Held 2001: 334). Como acertadamente señala David Held (2001):

“Es el punto de referencia que puede ayudar a generar una base para relaciones específicas entre diferentes preocupaciones normativas. La democracia no presupone el acuerdo sobre distintos valores, sino *que sugiere una forma para relacionar unos valores con otros* y abrir la resolución de los conflictos de valor a distintos participantes en un proceso público, sujeto únicamente a ciertas disposiciones que protegen la configuración del propio proceso. En ese reside su atractivo” (pág. 334).

Este atractivo que apunta David Held sobre la democracia pensada desde nuestra época contemporánea, las encontramos presentes en el largo periodo que analizamos. Obviamente con muchos matices, pues los conceptos no están ajenos a contextos y a los usos políticos que los actores le den para conseguir sus fines. Así la democracia, más allá de las conceptualizaciones que podamos establecer sobre su naturaleza es ante todo una construcción social con una historicidad no solo formal universal, sino particular y dinámica, dependiendo de la sociedad y los actores que entran en el juego político a través del tiempo.

Charles Tilly (2010) señala que quienes analizan la democracia y la democratización suelen elegir entre cuatro tipos de definiciones que el nombra de la siguiente manera: 1) constitucional, 2) sustantiva, 3) procedimental y 4) procesal. El primer grupo se focaliza en las leyes y acuerdos que aprueba un régimen respecto a su actividad política. El segundo, se fija en las condiciones de vida y política que promueve un determinado régimen. Los enfoques procedimentales, fijan su atención en una limitada serie de prácticas gubernamentales (mayormente en las elecciones y el proceso electoral) para determinar si un régimen se puede calificar como democrático. Y finalmente, los enfoques procesales, difieren de los anteriores, porque identifican una serie mínima de procesos que deben estar continuamente en marcha para que una situación pueda ser considerada como democracia¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Este es el enfoque de Robert Dahl (1998) en *On Democracy*, obra en la que señala cinco criterios: 1) Participación efectiva, 2) Igualdad de voto, 3) Comprensión clara (en tendida

Estos conceptos aplicados sin tomar en cuenta el contexto que analizamos, nos pueden arrojar resultados contradictorios y distorsionados. Por ello para analizar tanto la experiencia democrática como la experiencia populista en nuestro país desde una perspectiva histórica-sociológica, se debe adaptar en la medida de lo posible, un enfoque constitucional y sustantivo de la democracia, preferentemente. Ello porque es a través de la “ingeniería constitucional” que se establecerán los pactos que moldearán la actividad política de los actores y asentarán, con marchas y retrocesos la democracia como orden político. Observar si determinado régimen satisface las necesidades básicas de su población, si permite un acceso y atención de sus demandas, así como si incentiva y genera la posibilidad real de participación en la vida política de sus ciudadanos, son indicadores más certeros, en nuestro enfoque, para analizar la calidad de la democracia en el periodo estudiado y la recurrencia del populismo.

Definitivamente la insatisfacción y frustración hacia las decisiones de gobierno de la elite, desencadenó la movilización de los sectores populares tanto en el periodo caudillista como en el Perú contemporáneo. En esta línea de ideas es que la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva, o la mera búsqueda de satisfacción de las necesidades materiales, permitió consolidar al menos entre la opinión pública y la ciudadana a la soberanía popular como fuente de legitimidad para gobernar.

En esta investigación el populismo es visto como una posibilidad más de la vida democrática y no como su némesis. Compartimos la tesis de Loris Zanatta (2014) cuando señala que “el populismo es ante todo una convocatoria al pueblo como fuente de la *soberanía política* por encima de toda representación” (p. 23). Y una de sus características más relevantes es que “no puede vivir en contextos culturales” que no admiten la soberanía popular como fundamento del orden público”. Por ello la ruta de la democracia y el populismo van de la mano en la región, y con características

como las posibilidades efectivas de entender las alternativas políticas y sus consecuencias), 4) Control de la agenda, 5) Inclusión de los adultos (págs. 37-38).

muy especiales en nuestro país. Con una mezcla de temor y fascinación que se remonta a finales del siglo XIX.

La democracia demoró en posicionarse como una alternativa válida para las elites políticas como señala Pierre Rosanvallon (2006). A la derecha, predominó por mucho tiempo la desconfianza hacia la soberanía del pueblo. A la izquierda, fue el término “socialismo” el que designó el verdadero ideal (p. 9). Fue necesario esperar hasta 1848 para que en Francia la palabra democracia se impusiera realmente en el lenguaje político.

En el Perú durante el siglo XIX, con la experiencia de la revolución francesa y el desarrollo del constitucionalismo gaditano en el continente, se generó entre la elite política peruana, un significado completamente negativo de lo que la democracia significaba para la vida política del país. Los temores contra la *irracionalidad del populacho* y sus violentas acciones se remontan hacia los años finales del Virreinato los primeros años de la joven república peruana¹⁰⁸, cuando en los medios de prensa de la época reproducían los actos de la Revolución Francesa y su impacto negativo en la sociedad europea.

Es por estas razones que la defensa de la independencia y del republicanismo, en un inicio, no estuvo vinculada a la idea de la democracia, sino más bien a la idea de gobierno popular representativo como señalan algunos autores (Aljovín 2000, Chiaramonti 2005, Núñez 2013, y Peralta 2011). El clima de convulsión política de aquellos años hacía imposible ver a la democracia como algo positivo.

El gobierno popular representativo tardará en ser asimilado como gobierno democrático, es recién en la década del cuarenta donde se asocia mucho mejor la idea de representación con la de democracia. Es producto del desarrollo económico de esta década en adelante con el boom del guano que empieza una corriente de opinión favorable a la democracia, en lo que

¹⁰⁸ Sobre el particular pueden consultarse de Claudia ROSAS LAURO, *El impacto de la Revolución Francesa en el Perú, 1789-1808*. Lima: PUCP/ IFEA (2008).

llama Francisco Núñez (2013), “una relectura positiva de la Independencia”, durante la década del cincuenta. Con la consolidación del Estado Caudillista, se consolida también la idea democracia, considerándose incluso a la constitución de 1856 como la más “democrática de todas las constituciones”, y a Ramón Castilla como “el Gran demócrata”. El conflicto con España en la década de los sesenta será entendido como el enfrentamiento de la democracia contra la monarquía.

Pero este clima favorable hacia la democracia, se verá sacudido por el enfrentamiento entre militares y civiles en la década de los setenta. Los primeros buscaran permanecer en el poder a través del autoritarismo y el clientelismo, mientras los civiles reivindicaran la democracia como arma política, denunciando los males que el militarismo trajo al país. Con la Guerra del Pacífico esta tensión aumentó, al ser los militares los que tomaron la conducción del país. La rivalidad y tensión entre militares y civiles se mantendrá tras la guerra.

Entre fines del siglo XIX e inicios del XX (1895 y 1912), el Perú vivió una suerte de “primavera democrática” conocida como República Aristocrática con varios presidentes electos sucesivamente, pero esta difícilmente era una democracia que buscara ampliar la base electoral, desde la reforma electoral de 1896, la elite política del país veía con preocupación adoptar el espíritu liberal democrático de manera irrestricta y prefería mantener un sistema excluyente de las mayorías pero con ocasionales concesiones a las masas populares manifestadas a través de dádivas y obras públicas. Este poco espíritu democrático contrastaba con el entusiasmo con que las masas abrazaron las ideas liberales y democráticas, desde el siglo XIX. El tránsito de una política de notables a una política de masas no fue sencillo. Muestra de ello es la historia política del siglo XX peruano llena de golpes de estados y regímenes autoritarios. Pero pese a ello se afianzaba la democracia como valor como legitimidad para el ejercicio del poder. Y en ello tuvo que ver mucho el asalto de la esfera pública por nuevos actores.

4.2.2. La “esfera pública”

El concepto de “esfera pública¹⁰⁹” fue acuñado por Jürgen Habermas (1982), quien lo entendía como el lugar de nuestra vida social donde se puede conformar la “opinión pública”. Para Habermas, la opinión pública se refiere, “a las funciones de la crítica y del control de la autoridad organizada del Estado que el público ejerce informalmente, aunque también formalmente a través de elecciones periódicas¹¹⁰”.

Cuando las personas interactúan en la esfera pública no actúan como padres, como profesionales, como trabajadores, no son personas que deban obediencia o tengan que cumplir ciertas reglas, la interacción se lleva a cabo como individuo único, libre y dueño de sus propias decisiones, palabras e intereses. La esfera pública es una bisagra entre todo lo público y lo privado y como ambos se relacionan, es el espacio donde ambos se juntan e interactúan.

Tiene relación con las demandas de la sociedad civil y las decisiones estatales y es el espacio donde se llevan a cabo diversas relaciones. Tanto las personas como las autoridades utilizan la esfera pública de diversas formas, las personas van a ella para cuestionar al Estado (y no solo al Estado, también a diversas empresas, instituciones, personas, etc.) y el Estado (o todos los que nombramos anteriormente), van a la esfera pública para justificar, explicar y legitimar sus actos y acciones.

Las dimensiones de la esfera pública varían con el paso del tiempo, pues dependerá de las estrategias políticas de los actores y de los medios de que

¹⁰⁹ El título original en alemán del libro es: *Strukturwandel der Öffentlichkeit. (Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft)*. Una traducción literal del título rezaría de la siguiente manera: *El cambio estructural de la “publicidad”*. (*Investigaciones sobre una categoría de la sociedad burguesa*). Lo problemático de esta traducción literal es la voz castellana “publicidad”. El término *Öffentlichkeit* se formó en el alemán moderno incorporando primero el latinismo *Publizität* (trasladado del francés *publicité*) para luego germanizarlo. Se da, en cambio, la curiosa circunstancia de que mientras todos los idiomas latinos han ido perdiendo, al romper el siglo XX, las connotaciones y la denotación principal de la palabra (“publicidad” no significaba otra cosa en el castellano de hace una centuria que “vida social pública”), en el alemán que llega a nuestros días se conserva ésta intacta. Así que traducciones más correcta de *Öffentlichkeit* serían: “vida pública”, “esfera pública”, “público” e inclusive “opinión pública”.

¹¹⁰ “La esfera pública” [en línea]

<https://generaciondecontenidos.files.wordpress.com/2012/03/habermas-la-esfera-publica.pdf>

se valgan para hacerla más restrictiva o más abierta. Para ello tenemos que Carlos Forment (2012), considera que la esfera pública en el siglo XIX se componía en esencia de tres campos, cada uno con sub campos donde propiamente se gestaban las estrategias y prácticas políticas. El campo de lo Letrado, compuesto de los subcampos: Prácticas de lectura y escritura¹¹¹; y la Prensa. El campo de lo Oral compuesto de los rumores y los chismes. Y finalmente el campo de lo Visual integrado por el Teatro y la Indumentaria.

La esfera pública como propone Habermas (1982) es capaz, o al menos, parte de ella lo es, de influenciar y modificar las políticas. Y es que la esfera pública constituye un campo conexiones discursivas, tanto del Estado como de otros actores sociales, capaces de generar desde el marco de la deliberación equitativa críticas que pueden afectar el terreno de lo político¹¹².

Podemos observar desde el temprano siglo XIX, como los diarios decimonónicos difundían las ideas políticas con arduos debates por medio del “periodismo doctrinal” en el contexto previo a la Independencia. Donde cada diario asumió una postura partidaria: liberal o conservadora. Son en los periódicos donde se produce el debate ideológico, como lo demuestra Asención Martínez Riaza¹¹³.

En el Perú independiente, la polémica periodística se dio entre *El Telégrafo* de Lima, de tendencia liberal, junto con *El Penitente*, *El Convencional* y *El Playero* que estaban al servicio de los generales José de La Mar y José Luis

¹¹¹ Como acertadamente señala Víctor Peralta (1997), este aspecto de la vida pública en los primeros años del siglo XIX aún ha sido poco explorado. En su opinión el fortalecimiento de los hábitos de lectura en el Virreinato posibilitaron la difusión de lo que llama la “pedagogía política”, solo posible ante la debilidad de la metrópoli tras los acontecimientos de 1808. A través de las discusiones alentadas por Guillermo del Río, Gaspar Rico y Manuel Villalta acerca del nuevo trato que debía existir entre ciudadanos y autoridades, afloró la necesidad de promover nuevas interrelaciones sustentadas en un criterio ecléctico del concepto de libertad, donde lo único claro fue la oposición a la continuidad del despotismo. Esta postura política fue definitivamente suprimida por Abascal a fines de 1814, amparado esta vez en la Restauración absolutista. Ver al respecto: “La revolución silenciada. Hábitos de lectura y pedagogía política en el Perú, 1790-1814”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Tomo LIV, N° 1, pp. 107-134.

¹¹² Calhoun, Craig (1992) “Introduction”, en *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge (Mass.) y Londres: The MIT Press, pp. 1-48.

¹¹³ Martínez, Ascensión (1985) *La Prensa Doctrinal en la Independencia de Perú, 1811-1824*. Madrid: Ed. Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana.

de Orbegoso quienes vapuleaban al gobierno de Agustín Gamarra, que crea en el Cuzco el diario *El Sol*. A Gamarra lo apoyaban los diarios *El Conciliador* y *La Verdad*. En el periódico *La Abeja Republicana* escribía sus artículos, en defensa de la República, José Faustino Sánchez Carrión bajo el seudónimo del “Solitario de Sayán”. *El Limeño* era otro periódico que atacaba a Orbegoso y polemizaba cotidianamente con *El Telégrafo* (Gargurevich, 2002: 26).

Otra polémica interesante fue la coyuntura electoral de 1849-1851, donde se origina un debate entre los redactores de los periódicos *El Progreso* y *El Rímac*, voceros de los principales candidatos presidenciales: el general José Rufino Echenique y su *Sociedad Conservadora de la Constitución y de la Paz*, representantes de la clase política y militar; y el hombre de negocios Domingo Elías y el *Club Progresista*¹¹⁴, representantes de sectores civiles limeños y provincianos políticamente emergentes. Según los redactores liberales de *El Progreso*, partidarios de Elías, los problemas políticos de un país no acababan con tener una Constitución para guiar la conducta de los gobernantes; más bien era necesario que se les forzara a seguir una conducta trazada por las leyes y las necesidades públicas por medio de la presión de la opinión pública. Por ello, planteaban que era importante que los candidatos a la presidencia presentaran un programa de gobierno con el objeto de ser debatido y así dejar las acusaciones personales. En tal sentido afirmaban:

“En una Constitución [...] no se trata de perseguir las manifestaciones de la vida de un pueblo y desenvolver todas y cada una de las relaciones de sus miembros; no, el objeto exclusivo de la Carta es fijar únicamente el fin de la asociación y establecer las bases de sus principios generales, y solamente los principios en que deben apoyarse las demás relaciones sociales” (*El Progreso*, N° 69, 16-XI-1850, 3).

Por su parte, los redactores de *El Rímac*, partidarios de Echenique, consideraban que, dado que la República peruana estaba constituida bajo

¹¹⁴ Sobre Domingo Elías y el *Club Progresista* véase de Juan Luis Orrego Domingo Elías y el Club Progresista: los civiles y el poder hacia 1850. Tesis (Br.) PUCP. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Mención en Historia, Lima, 1989; y “Domingo Elías y el Club Progresista: los civiles y el poder hacia 1850”, en *Histórica* / Vol. 14, N°. 2, 1990.

leyes fundamentales inalterables contenidas en la Constitución, un programa político era innecesario porque generaría falsas promesas que, al ser incumplidas, propiciarían argumentos para las revoluciones. La Constitución no sólo era considerada un simple cuerpo de normas legales, sino que era la que proveía los principios e instituciones que fijaban los destinos de la nación, siendo los más seguros para dirigir la política futura debido a que brindaban estabilidad. Los redactores de *El Rímac* consideraban que esta era una diferencia importante respecto al programa político porque, en su opinión, se variaría la política del Estado según quien ganara las elecciones, lo que además significaba dejar la dirección de la política a la voluntad del gobernante, al respecto señalan:

“en los países en que hay una Constitución que señala la conducta que deben observar fielmente los que mandan; [...] en que los que mandan deben ser los primeros en obedecer las leyes, y en los que éstos son todo y la voluntad del mandatario, nada; son inútiles e innecesarios los programas, porque estando bastante determinadas en la ley fundamental la conducta que deben estrictamente observar los que dirigen la nave del Estado, basta que cada ciudadano sepa la Constitución de su país para que sepa la línea de conducta que han de seguir los gobernantes que verdaderamente desean contribuir con la ventura de su patria” (*El Rímac*, N° 32, 19-X-1850, 1).

A lo largo del siglo XIX los periódicos aumentaron su influencia entre la población, convirtiéndose en actores políticos importantes. No obstante la vida de muchos de ellos era efímera y solo aparecían por la coyuntura política. Solo cuatro de ellos llegaron a finalizar el siglo con una periodicidad continua. Odiosos para el gobierno como aliados importantes para contener a una población ávida de información y movilizadora por la insatisfacción de la línea política de los gobiernos.

Para inicios del siglo XX, el periódico más importante de ese entonces, era *El Comercio*, que se caracterizó por su pretendida objetividad, la predominancia de sus notas económicas y su servicio de cable (desde 1884), era el que más propiamente expresaba, en sus páginas de opinión, la línea civilista. De los diarios de oposición el más conocido, durante la primera década del siglo, fue *La Prensa*, que pertenecía al líder del Partido

Liberal. Si bien estos diarios estaban alineados con la tendencia de alguno de los partidos del orden oligárquico, ello no evitó que centros de redacción como los de *La Prensa* y *El Tiempo*, en la segunda década, fueran, hasta cierto punto, espacios alternativos, de encuentros, sobre todo entre los nuevos periodistas que empezaban a expresar su perspectiva como jóvenes provincianos que se sentían postergados, como eran los casos de José Carlos Mariátegui, César Falcón y Humberto del Águila en *El Tiempo*, y Abraham Valdelomar en *La Prensa*.

A partir de la primera década del siglo, empezaron a extenderse en popularidad los periódicos humorísticos: *Monos y monadas* de 1907 fue el más conocido. Este tipo de publicaciones constituyeron una ruptura significativa. Como señala Alicia del Águila (1995), no es que no hubiera existido antes una prensa de humor. *El Aletazo del murciélago* de Manuel Atanasio Fuentes en el siglo XIX fue un claro ejemplo de ello. La diferencia estaba en la extensión de dicho periodismo, no sólo en tiraje, sino en cuanto que supo llegar a los nuevos sectores emergentes de entonces. Éstos fueron quienes hicieron la lectura “subversiva”.

El espacio público a su vez se convirtió también en escenario de la discusión política, al menos en la modernidad anterior a la era de los medios masivos de comunicación. El tipo de “publicidad” de un orden político es un aspecto central en la estructura regulativa de cada sistema. La plaza pública fue el escenario predilecto para la reunión y la difusión de las ideas políticas de la población popular urbana. Mientras que los grandes salones y clubes eran los espacios predilectos para las clases altas. En un país aún en proceso de modernización los chismes y rumores políticos conformaban parte de la información consumida diariamente, parafraseando a del Águila (1995), en *callejones y mansiones*. Alicia del Águila nos ofrece un esquema interesante de los espacios de discusión, la esfera pública en las primeras décadas del siglo XX.

CUADRO II
Esfera pública (1894-1919)

+ ADENTRO			+AFUERA		
CENTROS					
Tipos de Espacios	Exclusivos	+Restringidos	-Restringidos	-Generales	+Generales
De Socialidad primaria	Salones Clubes		Cafés Restaurantes	Picanterías Chicherías Pulperías Fondas	Callejones Plazas
Instituciones modernas		Partidos Políticos Universidad de San Marcos (antes de 1910).	Sindicatos Universidad de San Marcos (desde 1910). Prensa	Fábricas Clubes políticas (en época de elecciones)	

Fuente: Tomado de Del Águila (1995)

Con las denominaciones de “adentro” y “afuera” se refiere a los círculos más cerrados y los más abiertos para la discusión política en atención a la condición o status social de las personas. Con esta categorización descubre explorando la cotidianidad para el caso concreto de Lima, la presencia de relaciones informales entre los individuos que, en última instancia, pesaban de manera más determinante que los lazos institucionales partidarios, al momento de tratar de entender la estabilidad del orden político. Relaciones tales como el compadrazgo y padrinzago. Vínculos personales de ayuda y fidelidad, el primero entre sujetos de similar condición social; el segundo, entre “desiguales”, con una correspondencia más compleja: uno, el de “arriba”, ofrece protección, beneficios materiales, etc.; el otro, el de “abajo”, lealtad expresada eventualmente en votos.

Ambos grupos de la sociedad (aristocracia y plebe) compartían espacios de interacción social en la esfera pública, y mantenían en cierto equilibrio la tensión social producto del orden asimétrico de sus relaciones e interacciones sociales. Gradualmente durante el siglo XX, en la medida que los espacios públicos se ampliaban, la población urbana aumentaba, y se incrementaba la organización colectiva a través de los sindicatos y los partidos políticos, los sectores populares urbanos y las clases medias, principalmente, van a construir su identidad en oposición al régimen aristocrático y establecer estrategias políticas de confrontación para modificar la política pública. Los partidos políticos en este contexto, a lo largo del siglo XX jugaron un papel muy importante como entes catalizadores de la conflictividad social. Como señala Julio Cotler (1988) el Perú se distingue de manera notoria “por combinar actores e intereses profundamente dispares y contradictorios”, y que “los partidos pretenden conciliar y canalizar, o simplemente acallar, a fin de evitar “el estallido del precario equilibrio político (pág. 152).

La vigencia y la legitimidad del régimen democrático estarían asociadas a la validez que la sociedad confiere a los partidos y a los actos electorales. Tales actores políticos y eventos son vistos como instancias en las que se definen y articulan y representan los variados y múltiples intereses como sociales, gremiales, clasistas, sectoriales, y regionales, ante el Estado y, en esta medida constituirían factores de identidad política y social. Por ello, los partidos políticos hasta 1990 se convertirán en instituciones muy importantes para la población, desatando pasiones y vinculaciones sentimentales genuinas, así como, desde una perspectiva más pragmática, redes clientelares interclasistas.

Por su parte las elites políticas utilizarán diversos medios para neutralizar las demandas que se gesten desde la esfera pública. A veces a través de su participación directa en ella y entrando al debate público, otras reduciendo la esfera pública a través de restricciones legales e incluso a través de la coerción y la represión policial y militar, al tener el control del Estado, la policía y las FF. AA.

En las siguientes líneas haremos un recorrido rápido del recorrido de como se fue ampliando la esfera pública y el derrotero de la democracia a lo largo del siglo XIX y XX.

4.2.3. La Esfera Pública en el Siglo XIX

Carlos Forment (2012) en un estudio innovador sobre la sociedad civil y la democracia en el Perú del siglo XIX, nos da algunas características de lo que él denomina “la democracia realmente existente” en aquella centuria, a la cual describe como: desarticulada, asimétrica, con una radical fragmentación, y, con una vida democrática culturalmente híbrida.

Era desarticulada en el sentido de que “los ciudadanos se atribuían horizontalmente, unos a otros, su sentido de soberanía”, en vez de “delegarlo verticalmente en las instituciones gubernamentales”, ello traía como consecuencia “una disociación entre las prácticas cotidianas y las estructuras institucionales” (Forment 2012: 15).

Para Forment existen cuatro tipos de sociedad en las cuales se puede ejercer la democracia: 1) sociedad civil, 2) sociedad económica, 3) sociedad política y, 4) esfera pública. Los ciudadanos ejercían la democracia con mayor disposición e intensidad que en cualquier otro terreno público, por ello señala que la democracia era asimétrica.

Como señalamos previamente, la experiencia virreinal legó a la República un fundamento racista de distinción entre sus ciudadanos, por ello, al decir del autor:

“los peruanos fueron el primer grupo de ciudadanos del Occidente moderno que fracasó en su intento de conciliar la igualdad social con las diferencias culturales, y de tal manera provocaron que la vida pública en el continente se fisurará según líneas socioétnicas” (Forment 2012: 16).

Sobre el cuarto y último punto, hay que tener presente, que el catolicismo era parte del lenguaje de la vida pública en la región. Los ciudadanos

utilizaban sus recursos narrativos para crear nuevos significados democráticos sobre la base de viejos términos religiosos, y fusionaban así unos y otros, para dar origen a un vocabulario alternativo, que el autor llama “catolicismo cívico” (Forment 2012: 16).

Forment señala que algunas de estas características se presentaron en otras democracias occidentales, pero la característica la democracia en nuestro país durante el siglo XIX, es que las reunió todas. En el siguiente cuadro sintetizamos el esquema de trabajo de este autor para definir el espacio público en donde la democracia se plasmó.

CUADRO III
LA VIDA POLÍTICA LATINOAMERICANA: TERRENOS, CAMPOS Y SUBCAMPOS

TERRENOS PUBLICOS	CAMPOS	SUBCAMPOS
I) Sociedad Civil	a) Cultural	1) Literario-Científico 2) Educacional 3) Profesional
	b) Societario	1) Mutua 2) Artesano 3) Racial-étnico 4) Patriótico 5) Masónico 6) Desarrollo Comunitario
	c) Ser vicio Publico	1) Caridad Bienestar 2) Bomberos
	d) Religioso	1) Moral 2) Iglesia
	e) Ocio	1) Recreo 2) Social
II) Sociedad Económica	a) Financiero	1) Banco-Cia. Seguro

		2) Ahorro y Crédito
	b) Crédito	1) Cooperativas
	c) Empresas	1) Empresas 2) Sociedad en Comanditas
III) Sociedad Política	a) Clubes Electorales	
	b) Municipios	
	c) Movimientos Populares	
	d) Fuerzas Armadas	1) Ejército 2) Milicia 3) Grupos Armados
IV) Esfera Pública	a) Letrado	1) Prácticas de Lectura / Escritura 2) Prensa
	b) Oral	1) Rumores y Chismes
	c) Visual	1) Teatro 2) Indumentaria

Fuente: Forment 2012: 33.

Desde la primera mitad del siglo XX existía un nutrido interés en los temas públicos, así encontramos en la *Estadística General de Lima* Atanasio Fuentes (1858) que para el periodo 1821-1856, tenemos que del total de libros publicados y panfletos, 10 173, el 23% correspondían a temas políticos y el 21% a temas judiciales. Es decir 2798 y 1975 respectivamente.

Los primeros ideales fueron predicados por un grupo notable de pensadores liberales, pero tenían poco conocimiento de cómo la nación peruana se percibía afuera de Lima, y no les interesaba. Como todos los estados que luchaban por integrarse a la modernidad, el Perú se enfrentaba a temas críticos al intentar extender su soberanía sobre un territorio nacional fragmentado, cautivo en debates teóricos sobre la soberanía y los

“márgenes”, el centralismo o el federalismo. Fiona Wilson (2014) señala que se puede decir que durante las primeras etapas, “la formación del Estado en el Perú se apoyaba en la colaboración de las autoridades municipales y los habitantes urbanos de las provincias. Para esto fue conveniente adoptar el liberalismo, que priorizaba a las libertades civiles, la educación, la ciudadanía y la protección de la autonomía municipal (págs. 35-36).

Los ideales de ciudadanía que el liberalismo difundía calaron hondamente en las masas populares, la llamada “plebe”, quienes se adhirieron al ideal democrático y aceptaban la legitimidad del nuevo orden republicano. Carlos Forment (2012) resalta el entusiasmo de las clases populares que constituyeron, según la base de datos del autor, novecientos doce grupos voluntarios en todo el Perú. Y es que el liberalismo, en Lima, pero especialmente en las provincias del país, se articuló con tradiciones más antiguas concernientes al gobierno municipal y de esta manera se arraigó una noción de derechos ciudadanos cívicos que se vinculaba no solo con la educación, sino también con la representación política durante los periodos de democracia electoral local.

Hacia mediados del siglo XIX tanto la Constitución como las leyes liberales aprobadas en la capital aceptaban que las ciudades en las provincias constituyeran el campo principal donde se podía crear la ciudadanía. Allí, los ciudadanos elegían a sus consejos provinciales como autoridad municipal y creaban espacios de debate público. Desde inicio del siglo XIX, las constituciones peruanas consagraban esta doctrina liberal de derechos y libertades individuales, igualdad ante la ley y el sufragio masculino. Pero hacia fines del siglo XIX, el liberalismo sufrió una deformación. Al decir de Mallon (1995) y Larsson (2004), las elites se enfrentaron con el problema de cómo construir una nación, una comunidad cuyos miembros fuesen iguales ante la ley, a partir de una sociedad estratificada de divisiones y jerarquías virreinales donde permanecía la creencia muy arraigada de que los privilegios políticos, económicos y sociales de la minoría blanca-mestiza debían prevalecer. En lugar de considerar un sistema democrático, el pensamiento político en la capital dio un giro en otra dirección. Pedro Planas

(1999) señaló, que existían actitudes yuxtapuestas sobre la ciudadanía, mientras una subrayaba la su apertura, igualdad y el fin del privilegio hereditario, la otra buscaba limitar los derechos políticos y civiles de la elite blanca-mestiza, quién supuestamente era la que más contribuía al mantenimiento económica del Estado. En las provincias, estas dos actitudes chocaron. Desatándose encendidos debates sobre: la administración de las poblaciones indígenas, la soberanía popular y el derecho de los habitantes subalternos de las ciudades a la representación política.

A través de otorgar derechos y libertades individuales, los constructores de la nación también crearon un vacío legal, pues los derechos colectivos de la multitud de las comunidades indígenas dejaron de existir jurídicamente. Los indígenas fueron contruidos como seres ingenuos y sufridos después de siglos despotismo español. El indio era en sí un “hombre-niño” un ser estático que jamás alcanzará una etapa de madurez y, tampoco, de plenos derechos ciudadanos. Por eso los indígenas necesitaban una “pedagogía civilizadora” para volverse ciudadanos modelados según el molde del individuo blanco-mestizo español.

Aunque las elites compartían un discurso de dominación étnica, también estaban divididos políticamente y buscaban diferentes tipos de relaciones con los artesanos y el campesinado indígena. Larson (2005) al respecto nos dice, que tanto las elites urbanas como las comunidades campesinas inscribían variados significados políticos y expectativas morales en la noción ambivalente de republicanism, mientras trataban de negociar acuerdos que gobernarán las negociaciones entre los indios y el Estado. Tales ambigüedades abrían todo tipo de posibilidades para formas locales de negociación y maniobra bajo las circunstancias apropiadas.

En cierta manera las elecciones crearon un espacio público, y forzaron a los caudillos y partidos oligarcas a iniciar campañas y organizaciones políticas. En el Perú, desde la década de 1870, con Manuel Pardo y los civilistas, los políticos pusieron mayor énfasis en las campañas electorales e involucraron a los subalternos, aún si no podían votar. Pardo y su partido se propusieron

“ampliar los límites de la ciudadanía y la participación económica a los sectores populares urbanos y otros” (Gootenberg 2002: 270). Las reglas políticas no pudieron establecerse, creando un sentimiento de desilusión entre las elites civiles. La política electoral rara vez sería un mecanismo dominante para elegir a los líderes políticos, o usada para asegurar su legitimidad. Las doctrinas políticas liberales se estaban difundiendo junto con el creciente alfabetismo y la politización de los artesanos urbanos. Se conoce más sobre su movilización en los pueblos de la costa que llevó a la formación de asociaciones de ayuda mutua sobre el viejo sistema gremial y hasta a una revaluación de los artesanos “como la clase media progresista” pero degradada del Perú (Gootenberg 1998: 208). Existía en las provincias una política contestataria emergente que a través de los medios de prensa, periódicos radicales de tendencia anarquista¹¹⁵, que se intercambiaban regularmente entre ciudades andinas incluidas: Tarma, Huaraz, Cerro de Pasco, Huánuco, Ayacucho, Cusco y Arequipa (Wilson 2014; y Deústua y Rénique 1984).

¹¹⁵ Con la difusión de las ideas de la Unión Nacional, el partido político de Manuel González Prada, una serie de periódicos regionales lo saludaron con benevolencia. Ellos eran: *La Nueva Era* de Piura, *El Porvenir* de Trujillo, *El Debate* de Ayacucho, *El Republicano* de Chiclayo, *La Reforma* de Cusco, *El Fonógrafo* de Moquegua, *El Eco de los Andes* también de Moquegua, *La Bolsa* de Arequipa, etc. Además de ello, un conjunto de jóvenes provincianos de Mollendo y del Cusco se adhirieron, además de un grupo de partidarios del pueblo de Otuzco, y se creó una Junta Directiva de la Unión Nacional. Esto permitió el desarrollo de una serie de libres pensadores provincianos de ideología anticlerical, liberal o positivista, que constituyeron una fuerte oposición a la ideología dominante. Durante la primera década del siglo XX existían publicaciones anarquistas, entre ellas: *Protesta Libre* y *Justicia* de Chiclayo. Esta última fue un seminario obrero donde colaboró Inocencio Lombardozi, uno de los principales anarquistas de la época, quién fundó el centro de “Estudios Pomalca” y una biblioteca nocturna en ese local. De Trujillo se conocen: *La Antorcha* (1905-1907), *El Zapatero*, *El Rebelde* y *El Jornalero*. Hacia 1912, aparecieron diarios de tendencia liberal pero críticas al sistema como lo era, *La Razón*, diario fundado por Benjamín Pérez Treviño, que respaldó los primeros movimientos laborales de la zona. La publicación anarquista más importante de Lima, *El Oprimido*, tenía un fluido y constante contacto con las revistas provincianas, a través del intercambio de revistas y publicaciones. Para 1908, en Tarma intercambiaba números con *Nuevo Simiento*, *El Tarmaño*, *La Aurora* y *El Oriente*; en Huaraz con *La Noticia* y *La Divisa*; en Cerro de Pasco con *El Eco de Junín* y *El Orden*; en Ayacucho con *La Escuela* y *La República*; en Canta con *Lid Canteña*; en Pasco con *El Pueblo*; en Cusco con *El Ferrocarril*; en Moquegua con *La Reforma* y *El Ferrocarril*; en Locumba con *El Centinela*; en Chiclayo con *La Protesta Libre*, *El Eco Popular*, *El Martillo* y *La Tarde*; en Monsefú con *El Tarugo*, en Guadalupe con *La Voz del Pueblo*; en Trujillo con *El Ferrocarril*, *El Jornalero* y *La Sanción*; en Cajamarca con *La Nueva Era*, *El Herald*, *El Badajo* y *La Unión*; en Piura con *El Amigo del Pueblo*, *La Nueva Era* y *La Vanguardia* y en Ferreñafe con *El Grito del Pueblo*. Véase al respecto Deústua y Rénique (1984) y de Manuel torres (1979) *Breve antología del pensamiento anarquista en el Perú*. Lima: Universidad Nacional Agraria / Taller de Estudios Andinos.

4.2.4. La Esfera Pública en el Siglo XX

El hecho de que el Estado abandonase la doctrina liberal a principios del siglo XX, y estableciera una mayor énfasis en el gobierno desde la capital, tuvieron como consecuencia la subordinación de las provincias y la erosión de sus instituciones locales.

En este punto es pertinente traer a colación lo propuesto por Migdal (2011) sobre la imagen y las prácticas. Sobre el Estado refiere que:

“(...) es un campo de poder marcado por uso de y la amenaza de violencia y conformado por: 1) la imagen de una organización dominante coherente en un territorio, que es una representación de las personas que pertenecen a ese territorio, y 2) las prácticas reales en sus múltiples partes” (p. 34).

Poole (2004) y Wilson (2014) han incidido en cómo el centralismo de finales del siglo XIX, creó un “aparato estatal contador”. La recolección de la información, a través del desarrollo de herramientas estadísticas permitió estandarizar prácticas y uniformizar terminologías locales complejas, volviéndolas consistentes. Tomando el control del capital informacional, el Estado podía tener una perspectiva del conjunto y concebir la sociedad nacional en su totalidad. De esta manera se delimitó el territorio se estableció un límite a la soberanía así como los espacios entre lo civilizado y la barbarie, lo legal y lo ilegal. Pero además “los márgenes” del Estado no son meramente territoriales, sino que también son lugares de prácticas de sobre los que la ley y otras prácticas del Estado son colonizadas por otras formas de regulación que emanan de la apremiante necesidad de la población de asegurar la sobrevivencia política y económica. En opinión de estos autores la ley del Estado es minada por autoridades personalizadas en las márgenes, quienes son a la vez de “adentro” y de “afuera”, es decir, son quienes pueden actuar en favor o en contra del Estado. Para Deborah Poole (2004), por ejemplo, la figura marginal emblemática en los Andes era el “gamonal”, el “caudillo-terratiente” mestizo y violento que representaba tanto el poder del Estado como al mismo tiempo pretendía sustituirlo. De esta manera mientras el Estado intentaba consolidar su dominio

estableciendo “márgenes” en distintos aspectos de la vida social y la política, se reforzaban ciertas prácticas contrarias para hacerle frente cuya expresión más clara que se apreciará a lo largo del siglo XX, es el reforzamiento de redes clientelares y de tendencias autoritarias caudillistas entre los actores políticos locales.

Los funcionarios de los ministerios adoptaban, cada vez más, un lenguaje seco y burocrático al tratar con las autoridades de las provincias, lo cual desconcertaba a los poderes alcaldes, quienes estaban acostumbrados a intercambiar cartas “de hombre a hombre” con oficiales a quienes consideraban sus iguales e términos sociales. En este nuevo escenario la opinión local no era tomada en cuenta para las directrices generales de la política pública, solo se le requería a las autoridades locales una mayor cantidad de informes estadísticos mientras se reducían sus facultades y competencias administrativas. Como parte del proceso de centralización estatal, los atributos del gobierno local consolidados por la ley de municipalidades de 1873 fueron retirados uno por uno. En 1897, las provincias fueron despojadas de la responsabilidad fiscal, posteriormente se les suprimió la responsabilidad administrativa por el desarrollo social (ejemplificada por la educación en 1905) y para 1910 se les despojó de los derechos políticos al ser las elecciones restringidas y después anuladas.

A lo largo del tiempo, grupos radicales se fueron formando en las provincias en abierta oposición al orden impuesto, enfrentándose a las elites. Sin embargo, la una cultura política centralista y el hábito que tenían los presidentes del Perú toda oposición política organizada, frustraron sus pretensiones de realizar una revolución desde abajo. Los radicales políticos se sentían justificados para organizarse clandestinamente, creyendo que no tenían otra opción que no fuera la de aferrarse rápidamente políticas intransigentes de subversión y confrontación.

La ampliación de la ciudadanía a través de las urnas trajo a la superficie discriminaciones que se basaban en la raza. El meollo del malestar era el complejo carácter social y racial atribuido al mestizo, lo cual se vigorizó

mediante nuevas racionalidades racistas sobre los peligros del mestizaje, al mismo tiempo que las elites ensalzaban la idea de “blanquear” a la población.

La elite terrateniente estaba en contra de la apertura democrática y electoral que el concepto de soberanía expandía entre la población. Las luchas entre partidos políticos rivales ayudaron a promover aspectos muy importantes de la democracia. Las elecciones frenaron en algo la arbitrariedad del dominio de la elite, mientras una prensa local dinámica estaba a mano para denunciar abusos (Wilson 2014: 34). Es irónico, como señala Marisol de la Cadena (1999), que posteriormente los intelectuales en Lima, la capital, hayan sucumbido a argumentos racistas y juicios morales, argumentando que lo que impedía la expansión del sistema electoral era el “provincialismo de los Andes”.

Desde principios del siglo XX, las provincias andinas se enfrentaron a un Estado central que negaba derechos de ciudadanía, y a presidentes, tanto en civiles como militares, que proscribían la oposición política, organizada cuando veían que no podían controlarla. Se acosaba constantemente a los partidos, sindicatos y asociaciones radicales. Como consecuencia de haber sido colocados “fuera de la ley”, los líderes fueron exiliados, los partidarios locales encarcelados, y la organización política se llevaba a cabo en secreto. Colapsó la noción de contrato social que vinculara al Estado nacional con los ciudadanos. Así, la ciudadanía empezó a tomar relevancia como parte de una ola de movimientos radicales que ganaban apoyo en las ciudades provinciales andinas en la década de 1930. Guillermo Nugent (1988) describe, por ejemplo, como en Chachapoyas “el orden aristocrático” se deshizo “debido a un movimiento social subalterno que se movilizó en torno a principios de ciudadanía, igualdad y progreso”, ideas que por mucho tiempo “habían sido invocadas en el ritual y el discurso, pero que yacían en flagrante contradicción con la vida cotidiana”. Fiona Wilson (2014) encuentra un escenario similar en Tarma, en donde en los años treinta el discurso del APRA, resulta atractivo para una emergente clase media, que veía en el mensaje aprista de justicia social y el cooperativismo las herramientas

ideológicas y organizativas que necesitaba para reivindicarse frente al Estado.

2.3. De la ciudadanía restringida (1896-1930) a la política de masas (1930- 1989)

Existe consenso en señalar 1896, como el periodo de inicio de la llamada por Jorge Basadre “República Aristocrática” que se extenderá hasta 1930 con la caída del gobierno de Leguía. Por la composición social de los principales actores políticos con decisión y poder efectivo en este periodo se suele hablar de una oligarquía más que una aristocracia como el grupo dominante (Cotler 2005, Pease 2013, López 2016) y que tuvo en el Partido Civil de Pardo su medio de expresión política. Una estructura de poder oligárquico existe cuando una elite gobierna de manera efectiva el resto de los sectores de la sociedad. Esta oligarquía, en su mayoría de ascendencia europea, gobernaba a una masa indígena que no tenía derechos políticos y vivía mayormente, en la pobreza.

Así Sinesio López (2016) refiere la existencia de un Estado oligárquico que fue social y políticamente cerrado, pero que efectuó tímidas aperturas para integrar a algunos sectores de la población, en la medida que era más necesaria respaldarse en las masas populares para legitimar su poder, al respecto nos dice que:

“Con el Estado oligárquico, instaurado en 1895 por la colación del Partido Demócrata de Piérola y el Partido Civil, pequeñas organizaciones políticas elitistas de entonces, el Perú avanzó hacia una cierta centralización de la autoridad, sin lograrla plenamente, y promovió una incipientes especialización de algunos que se limitaba al campo de las élites, pero seguía manteniendo una muy baja participación política de la población. Ello, no obstante, por primera vez en la historia republicana, el orden político estuvo en manos de una élite que, pese a sus rasgos señoriales, étnicos y patrimonialistas y a sus compromisos con el gamonalismo, consolidó el Partido Civil como un partido de notables. La política del siglo XX dejó der la arena movediza en la que disputaban los ambiciosos caudillos militares que buscaban mantener la ficción de la unidad de una “sociedad” fragmentada y feudalizada y de un territorio heterogéneo, difícil e incomunicado, para devenir una forma

relativamente institucionalizada de construcción del orden” (López 1997: 128).

Las oligarquías pueden ser heterogéneas u homogéneas de acuerdo al desarrollo histórico de cada país, para el caso peruano, en opinión de Henry Pease y Gonzalo Romero (2013) fueron más heterogéneas. A su entender, en el Perú encontramos una oligarquía compuesta por terratenientes semif feudales en la sierra, burgueses agroexportadores en la costa norte, financistas y comerciantes en la capital, entre otros. Aunque todos los oligarcas eran acaudalados, el dinero no fue el único requisito indispensable para ser aceptado como tal, como nos recuerdan Burga y Galindo (1981):

“Aunque los orígenes de las familias oligárquicas en la mayoría de los casos, se remontaban apenas a la época del guano, le pertenencia a la clase se definía además por el apellido, lazos de parentesco, cierto estilo de vida; en otras palabras, a lo que sería criterios estrictos de *clase*, se añadirían otros de tipo *estamental*, como rezago y herencia de la colonia” (p. 88).

Entre los años 1895 y 1919, las élites oligárquicas apostaron por la liberalización para establecer un régimen oligárquico competitivo (llamado República aristocrática por Basadre). La oligarquía se consideraba la mejor alternativa disponible para gobernar al Perú, pero tenía que compartir la escena política con otro actor político, el Ejército, al cual responsabilizaban de los males que habían azotado al país durante el siglo anterior.

CUADRO IV

Volumen registrado de votantes por año electoral durante la República Aristocrática

AÑO ELECTORAL	NÚMERO DEVOTANTES
1895	4310
1899	108 597
1903	143 142
1904	146 990
1908	184 386
1912	144 712

Fuente: Tuesta (2001) y Pease y Romero (2013).

Si bien no existen cifras oficiales sobre este periodo, se estima que la población del Perú durante la República Aristocrática estaba entre los cuatro y ocho millones de personas, por lo que podemos constatar lo poco significativas que son estas cifras siguiendo los criterios de representatividad y participación política de la actualidad. Era un periodo dominado casi exclusivamente por el partido civil.

CUADRO V
Gobiernos de la República Aristocrática

AÑOS	PRESIDENTE	PARTIDO
1895-1899	Nicolás de Piérola	Partido Demócrata
1899-1903	Eduardo López de Romaña	Partido Civil
1903-1904	Manuel Candamo	Partido Civil
1904-1908	José Pardo y Barrera	Partido Civil
1908-1912	Augusto B. Leguía	Partido Civil
1912-1914	Guillermo Billinghurst	Partido Demócrata
1914-1915	Oscar R. Benavides	Gobierno Militar (Golpe de Estado a Billinghurst)
1915-1919	José Pardo y Barrera	Partido Civil

Fuente: Pease y Gonzales 2013: 58.

Como se observa en el cuadro entre 1900 y 1919, la competencia electoral fue muy limitada y se procesó entre los partidos de notables (Partido Civil, Partido Constitucional y Partido Demócrata).

CUADRO VI
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA
ARISTOCRÁTICO

PARTIDO	AÑO DE FUNDACION
Partido Civil	1872
Partido Constitucional	1884

Partido Demócrata	1885
Unión Nacional	1891
Partido Liberal	1901

Fuente: Pease y Romero (2013: 47).

Después de 1930 fue más limitada aún, pues se excluyó a dos partidos políticos del juego electoral que empezaban a generar adherentes entre las masas populares con un discurso contrario al de las elites políticas y económicas: el APRA y el Partido Comunista. La exclusión política de ambos partidos fue acordada por la Constitución de 1933, que en su artículo 33° impedía la participación de agrupaciones o partidos *internacionales*. Tras estos hechos, ambos partidos se organizaron en secreto, lo cual forjó la idea de que la izquierda peruana tenía dos caras, la electoral y una clandestina (De la Cadena 1999). Es clandestinidad fortaleció la ideología en el interior de los partidos, así como una cultura política del heroísmo y la revolución entre sus militantes. Este veto recién se levantaría en 1962.

Entre esas élites se desarrolló el disenso, la oposición y la competencia sobre la base del reconocimiento y vigencia de los derechos civiles: la libertad de conciencia, de expresión, de propiedad, de compraventa, de movimiento, etcétera. Estos derechos tenían un reconocimiento legal, pero solo eran plenamente disfrutados por las élites. Como apunta Sinesio López (2016), esta apertura quedó a medio camino, pues entre 1931 y 1956, se combinaron la apertura a procesos electorales semicompetitivos en los que solo competían los representantes de las élites oligárquicas con una estrategia de hegemonía cerrada (dictaduras).

Esta “liberalización limitada” no avanzó hacia la democratización y la participación política de las clases populares, a excepción del gobierno de Manuel A. Odría, que otorgó en 1950 el voto a las mujeres mayores de 21 años de edad que sabían leer y escribir. Esta apertura estuvo ligada más a al espíritu reformista del gobernante y a la relativa autonomía que tenía respecto de las élites oligárquicas.

Algunos cambios en la “política social” eran inevitables, así las elites estuvieron dispuestas a reconocer ciertos derechos sociales como la jornada de las ocho horas y, la educación universitaria de las clases medias pero se mostraron reacias a otorgar la participación electoral a las clases populares. Las clases medias en los años treinta abrieron la hegemonía cerrada para consolidar su propia participación política y electoral y abrir la de las clases populares urbanas. Los partidos mesocráticos y populares antioligárquicos, por su parte, enfatizaron la participación de todos los sectores excluidos de la vida política, pero soslayaron la importancia de la competencia política.

Ante ello las élites oligárquicas, entendieron que ya no podían competir con éxito en el terreno electoral, y reaccionaron clausurando la liberalización a la que se habían abierto a comienzos del siglo XX, no toleraron el disenso ni la oposición y dejaron de ser competitivas, estimulando más bien los golpes militares. A partir de 1933, las élites oligárquicas fueron tímidamente liberales o semicompetitivas, pero no fueron democráticas excluyendo a vastos sectores sociales (campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes) de la participación política y, a su vez, los partidos antioligárquicos (APRA y PC) fueron participativos y democráticos, pero no fueron liberales. Las élites oligárquicas desarrollaron dinámicas alternas, mientras las élites rurales apostaron con frecuencia a la cerrazón dictatorial y las urbanas buscaron abrirse a una participación electoral limitada. La oligarquía urbana) los Prado, por ejemplo) impulsó, en 1939, procesos electorales con el apoyo del APRA y del PC, y en 1956 solo con el apoyo del APRA. La misma dinámica fue realizada por algunos sectores no apristas de la clase media, que buscaron apoyarse en el APRA para ganar las elecciones. Estos son los casos de Luis Antonio Eguiguren en 1936 y José Luis Bustamante en 1945.

Al resistirse a la democratización y a la participación política de las clases bajas, la liberalización oligárquica no fue, pues, una ruta hacia la democracia de masas ni a la ciudadanía democrática; se quedó a medio camino en lo que Dahl ha llamado una “oligarquía competitiva” e, incluso, retrocedió hacia una cerrazón dictatorial cuando percibió con claridad que no era capaz de ganar las elecciones en el futuro.

La exclusión social y sobre todo la exclusión política trajeron consigo la confrontación con el APRA y el Partido Comunista y la polarización política y electoral entre la oligarquía y los partidos excluidos. Los partidos antioligárquicos de los años treinta y de los cincuenta del siglo pasado proclamaron la revolución como respuesta a la exclusión política. Este discurso revolucionario se extendió (después de los sesenta) a las FF.AA., que hicieron suyas las demandas de cambio de los partidos antioligárquicos de los treinta en adelante. La polarización no impidió, sin embargo, que los partidos antioligárquicos apostaran al juego electoral institucionalizado cuando las coyunturas políticas lo permitían, a este respecto Sinesio López nos dice que:

“Ante la incapacidad de tomar el Estado por asalto desde fuera, las clases medias, acompañadas por algunos sectores populares, lo tomaron por dentro y la invadieron a través de sucesivas incursiones democratizadoras. Estas han tenido lugar en ciertas coyunturas de crisis en donde las élites políticas, económicas y militares se vieron obligadas a mostrar flexibilidad y apertura para abrir un espacio a los partidos de la clase media y populares” (López 2004:213).

Manuel A. Odría desde 1950, ensanchó la participación política, extendiendo el voto a las mujeres alfabetas mayores de 21 años de edad, y distanció al dictador de la oligarquía, que siempre fue partidaria de una política económica ortodoxamente liberal y de una participación política restringida. Esta ruptura quebró parcialmente el sistema tripartito y dio lugar, desde fines de 1955, a un juego más abierto, tanto de las viejas fuerzas políticas como de las nuevas, que canalizaban las demandas de los nuevos agrupamientos sociales. Un sector de la oligarquía, con algunos sectores nuevos de las clases medias de los cincuenta, buscó acabar con la dictadura y abrir una transición democrática, formando la Coalición Nacional, El general Odría, con la finalidad de perpetuarse en el poder y excluir a las nuevas fuerzas emergentes de la escena política, desató una represión generalizada contra sus opositores políticos, que exigían el fin de la dictadura. La Coalición Nacional se movilizó para exigir la amnistía general, la libertad de prensa, la derogatoria de la Ley de Seguridad Interior, la legalidad de los partidos políticos proscritos y, lógicamente, el fin de la dictadura. Una de las

manifestaciones de la coalición en el Teatro Municipal de Arequipa fue violentamente reprimida por la policía y por matones asalariados. El pueblo arequipeño, bajo la dirección de quienes serían luego los dirigentes del Movimiento Demócrata Cristiano, se volcó a las calles. La protesta rozó el carácter insurreccional. Además de la represión indiscriminada, hubo algunos muertos, decenas de heridos y muchos detenidos. Alejandro Esparza Zañartu, el temido ministro del Interior de la dictadura, y las autoridades políticas de Arequipa se vieron obligados a renunciar (Caravedo 1978).

Salvo la elección del cincuenta, los procesos electorales que se desarrollan en este período para salir de las dictaduras son semicompetitivos. Las élites oligárquicas compiten entre ellas, pero excluyen a los partidos de masas (Apra y PC). No eran pues procesos electorales democráticos. En 1956 la oligarquía retoma el juego electoral y busca ganarlo gracias a una alianza con el APRA. En 1962 se realiza el primer proceso realmente competitivo porque no excluye a ninguna fuerza política ni a ningún candidato el APRA se presenta con la candidatura de Víctor Raúl Haya de la Torre, y el PC respaldando la candidatura del general César Pardo Egúsquiza. El veto venía luego del proceso electoral, en el que Haya triunfa, pero no alcanza el tercio de votos que la Constitución exige.

Los movimientos populistas de los cincuenta buscaron transitar en forma ambigua un camino directo desde las hegemonías cerradas (oligárquicas o dictatoriales) a la democracia de masas, abriéndose simultáneamente a la liberalización y a una democratización limitada a las clases populares urbanas.

El crecimiento sostenido de la industria y el papel activo del Estado en ese proceso permitieron a las clases medias de los cincuenta incorporarse a la vida política y jugar, al mismo tiempo, el rol de la inclusión y la competición política.

El gobierno de Belaúnde reconoció y garantizó los derechos civiles en toda su amplitud, tanto los que tienen que ver con el mercado como aquellos que

tienen que ver con la esfera sociopolítica y política propiamente dicha. Pese a un cierto indigenismo, que trasuntaban sus planteamientos ideológicos, Belaúnde no eliminó la discriminación racial y cultural que pesaba sobre el mundo indígena. Mantuvo, asimismo, su exclusión política, así como la de los analfabetos. Ello, no obstante, la participación política se ensanchó debido al crecimiento del alfabetismo, a las migraciones internas y al acelerado proceso de urbanización. El primer gobierno de Belaunde (1963-1968), a diferencia del segundo (1980-1985), no descuidó la atención de algunos derechos sociales, sobre todo aquellos que se refieren a la vivienda y la educación. El porcentaje más alto de los gastos sociales del Estado, en el primer gobierno de Belaunde, fue dedicado a este rubro.

Este doble juego de liberalización y democratización se acabó en 1967, cuando se produjo el estrangulamiento externo de la industria y esos movimientos ambiguos se rompieron, dando lugar, por un lado, al populismo radical, expresado en el AP seoanista (del parlamentario Edgardo Seoane, impulsor de la bloqueada ley de reforma agraria) y la DC cornejista (del senador Héctor Cornejo Chávez, ministro de Agricultura del período), en que se apostó más por la democratización que por la liberalización, y, por otro lado, el AP de Manuel Ulloa Elías y Fernando Belaunde Terry, así como el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes, que apostaron, por el contrario, más por la liberalización que por la democratización.

En la búsqueda de una salida democrática emergió la candidatura presidencial de Fernando Belaunde Terry, quien aspiraba a agrupar a las nuevas clases medias antioligárquicas. Las actitudes audaces de Belaunde Terry, más que los actos de violencia política, hacían parte de lo que Bourricaud (1967) denominaba el “bello gesto”. Odría, a través del Jurado Nacional de Elecciones, pretendía excluir a Belaunde de la escena política, negándose a inscribirlo como candidato a la Presidencia de la República. Fue necesaria una gran manifestación callejera el 1 de junio de 1956, un ultimátum del candidato populista y duras refriegas con la policía para que la dictadura aceptara la candidatura del Frente de Juventudes, que posteriormente se transformó en Acción Popular. La fuerza de la candidatura

de Belaunde Terry –quedó tercero en la carrera electoral pero con una alta votación de 1956- provenía de su carácter carismático y del hecho de representar un sector de clase media que no tenía compromiso alguno ni con la oligarquía ni con la dictadura de Odría.

Paralelamente al intento de bloquear las candidaturas de la nueva clase media y de mantener excluida al APRA, Odría buscaba recomponer su relación con la oligarquía o, al menos, con un sector de ella, animando las reuniones en el Convento de Santo Domingo –tradicional espacio de arreglos políticos de la oligarquía- entre voceros oficiosos del gobierno y representantes destacados de la élite señorial, con la finalidad de seguir en el poder o, en todo caso, buscar un candidato de consenso entre la dictadura y la oligarquía, e impedir, como dijo el mismo dictador, que “cualquier aventurero entre a Palacio”. Los diversos sectores oligárquicos entraron en un juego político complejo y confuso. Un sector –el de Hernando Lavalle- buscó una alianza con la Coalición Nacional, que articulaba a un sector de la oligarquía y otro de la clase media, que luego animaría el Movimiento Demócrata Cristiano, y pretendió integrar al Apra dicha alianza. Otro –el que lideraba Manuel Prado –buscaba establecer una alianza con el APRA para asegurar el triunfo electoral, consiguiendo su objetivo en vísperas de las elecciones generales de 1956. Ambos sectores oligárquicos establecieron, a su vez, compromisos con el dictador saliente por medio de los cuales el nuevo gobierno que saliera elegido, olvidaría los crímenes y la corrupción de la dictadura mediante una política de “borrón y cuenta nueva”. Lo que explica el compromiso tanto de un sector de las nuevas clases medias como del APRA con la oligarquía es la opción de hacer viable la transición democrática en la coyuntura del 56, relegando a un segundo plano las opciones de cambio antioligárquico. Pero esos compromisos mediatizaron los cambios en las relaciones de autoridad del Estado oligárquico. Las mediaciones del gamonalismo se debilitaron, pero no desaparecieron. Este – el cambio de las relaciones de autoridad –era un tema que tanto las clases medias del treinta como las del cincuenta habían postulado. No se trataba de relaciones individualistas de autoridad como plantearían las clases medias de ochenta, sino de un cierto tipo de comunitarismo, recogiendo una cierta

tradición de la cultura política popular. Se ensanchó la participación política de las mujeres, pero se mantuvo la exclusión racial y étnica así como la marginación de jóvenes y analfabetos, cuya mayoría se encontraba en el campo, que, por entonces (1961), seguía albergando más población que las ciudades.

Este nuevo ciclo político, abierto a mediados de 1955, se cerró en junio de 1962 con un nuevo ultimátum de Fernando Belaunde al gobierno pradista, para que cese de apoyar un supuesto fraude electoral en favor del APRA. Aprovechando la acusación de fraude electoral de Belaunde contra el gobierno de Manuel Prado, los militares dieron el primer golpe institucional y antioligárquico del siglo XX el 18 de julio de 1962, siendo respaldado por algunos dirigentes de Acción Popular. El golpe se puso a sí mismo la duración de un año para el retorno a la democracia. En realidad, el primer y pasajero golpe reformista reordenó la escena electoral, impulsó algunos cambios significativos –la reforma agraria en La Convención y la creación del Instituto Nacional de Planificación- y dio el tiempo político necesario para que Acción Popular (AP) y la Democracia Cristiana (DC) formaran una alianza electoral, favoreciendo su triunfo en las elecciones generales de 1963. Pese a su carácter transitorio, este fue el primer golpe militar institucional y antioligárquico, una especie de prólogo del golpe del general Velasco Alvarado en 1968.

Es por eso que esta última etapa (1956-1968) abrió las puertas al encuentro y colaboración entre el APRA y la oligarquía, las fuerzas que habían alimentado la confrontación después de los años treinta. Se mantuvieron, sin embargo, las resistencias y reticencias de las FF.AA., que habían sido el parachoques de la oligarquía en todas las coyunturas de crisis económicas, sociales y políticas. Ese encuentro supuso mutuas concesiones. El APRA, por un lado, limaba las puntas más agudas de la estrella aprista y abandonaba las estrategias insurreccionales y el programa antioligárquico y antiimperialista. Por su parte, la oligarquía renunciaba al golpismo para volver a participar en los procesos electorales y aceptaba ciertos cambios impulsados desde el Estado, tales como una reforma agraria en los latifundios improductivos –lo que afectaba, no a la oligarquía sino al

gamonalismo-, así como un proceso limitado de industrialización. Estos acuerdos básicos se expresaron en la formación de la multipartidaria Comisión de Reforma Agraria y Vivienda y en la promulgación de la Ley de Promoción Industrial de 1959 (Thorp y Bertram 1985). Estas medidas sacaban al gamonalismo del esquema del poder oligárquico –manteniéndolo, sin embargo, como un poder social- y permitían una mayor centralización de la autoridad del Estado.

Dispuesta a establecer algunos compromisos con la oligarquía, el APRA buscó afanosamente ingresar a la escena electoral de 1956. El lapso que va de julio de 1955 a julio de 1956 fue una etapa de repliegue de la dictadura, lo que no impidió, sin embargo, que el dictador Odría buscara excluir al Apra y a las nuevas fuerzas políticas reformistas de la escena electoral (Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Social Progresismo) para continuar en el poder o, en su defecto postular al candidato oligárquico que gozara de las simpatías de la dictadura. Pero los personeros de Odría (Luis Miró Quesada y Augusto Wiese), que reunieron a algunos partidos en el Convento de Santo Domingo –escenario histórico de los cabildeos políticos oligárquicos- fracasaron debido a la emergencia de vigorosos movimientos antidictatoriales, que incluían a algunos sectores de la oligarquía. Tal es el caso de la Coalición Nacional. En esa coyuntura, el APRA, cuya dirigencia estaba deportada o en la clandestinidad, dudó entre apoyar a Hernando Lavalle o a Manuel Prado –ambos de extracción oligárquica- y terminó respaldando a este último porque ofreció el fin de la persecución y de la clandestinidad, así como mayores garantías democráticas.

El 3 de octubre de 1968 se cierra un ciclo de la política peruana, el Estado Oligárquico, e inicia con el Gobierno Revolucionario de las FF. AA. un periodo de diversas reformas estructurales y políticas distributivas que transformaran al país, y paradójicamente a través de un gobierno dictatorial, se ampliará la ciudadanía y los beneficios sociales para muchos sectores de la población antes excluidos. Las medidas del gobierno, en su primera etapa, desplegadas por el general Juan Velasco Alvarado se inscribieron dentro de la política de un agresivo corporativismo inclusivo y dentro de la inspiración

ideológica del estatismo orgánico. La reforma agraria repartió 10 298,453 hectáreas entre 399,576 familias campesinas, afectando al 55,3% de la superficie agrícola y al 32,9% de las familias rurales (Carbonetto 1984, Lynch 1992: 66-67).

La reforma agraria constituyó una agresiva redistribución de recursos en el campo, pero, sobre todo, la liquidación de la base de poder de la clase terrateniente”. Los beneficiarios, sin embargo, no fueron individuos privados sino asociaciones en donde ellos participaban y en cuya dirección el Estado tenía una presencia decisiva. La reforma agraria no dio lugar, pues, a relaciones individualistas de autoridad y a ciudadanos liberales, sino más bien a formas comunitaristas (corporativas) de relación entre los trabajadores y el Estado y a ciudadanos sociales. Las nuevas asociaciones agrarias (cooperativas, SAIS, comunidades) fueron centralizadas en la Confederación Nacional Agraria (CNA), estrechamente vinculada al Ministerio de Agricultura.

La transición de 1977-1980 (Lynch 1992) fue el resultado de un juego complejo de fuerzas: el fracaso de la institucionalización de las reformas, las tensiones internas dentro de las FF.AA., las presiones de los partidos y el enorme descontento social, expresado en la movilización masiva de la sociedad civil. Pese a la participación amplia de actores en el proceso, la transición fue parcialmente negociada entre un sector de la FF.AA. –los blandos, encabezados por el general Morales Bermúdez-, el Apra, el Partido Popular Cristiano y el Partido Comunista, y fue resistida por los duros del gobierno militar, que buscaban instaurar una tercera fase. En las negociaciones con los partidos quedó excluido el partido político Acción Popular, que demanda elecciones al año siguiente, con aplicación de la legislación anterior a 1968. Salvo el PC, los demás partidos de izquierda, más que la transición, buscaban el colapso del régimen mediante “la lucha directa de las masas”. Los temas centrales de las negociaciones del gobierno militar con los partidos interesados en la transición democrática fueron la institucionalización de las reformas mediante su reconocimiento en la Constitución y la definición del rol de los militares en la Defensa Nacional.

El éxito de la transición se debió a la formación práctica de una coalición democratizante entre los blandos del gobierno –Morales Bermúdez- y los blandos de la oposición –AP, PPC y PC- para controlar a los duros gubernamentales y a los maximalistas de derecha y de izquierda de la oposición.

Los sorprendentes resultados electorales hicieron que la Asamblea tuviera una composición política plural y dividida en tres tercios, obligando “a los distintos ‘bloques’ a llegar a transacciones y relativas fórmulas de consenso en ciertas materia para lograr su concreción en el texto constitucional, de ahí que la Carta Magna recoge –no siempre con la deseable coherencia- un contenido que globalmente expresa aportes y concesiones de las distintas fuerzas representadas]” (Eguiguren 1987:9). El APRA jugó un papel conciliador, haciendo concesiones a la derecha en algunos temas y a la izquierda en otros. Entre las concesiones a la derecha estuvo la definición de una economía social de mercado que restringía el rol del Estado en ella, sin llegar a los extremos neoliberales que se experimentaría en 1993. Entre las concesiones a la izquierda estuvo la extensión del sufragio a los jóvenes mayores de 18 años de edad y a los analfabetos. Con esa medida, el Perú instauraba el sufragio universal a partir de 1980.

La vuelta a la democracia supuso enfrentar el producto más violento de la frustración de las promesas no cumplidas de los diversos gobiernos y políticos y la exclusión, el terrorismo. La violencia terrorista se inició el 17 de mayo de 1980, con la quema simbólica de ánforas en la localidad de Chuschi (Cangallo, Ayacucho) por parte de Sendero Luminoso (Degregori 1986, 1989; Gorriti 1990). Ella expresaba su rechazo al camino electoral y, por consiguiente su autoexclusión de la incursión democratizadora al Estado, que impulsaban la izquierda y las clases populares desde el periodo comprendido entre 1978 y 1980, además del Apra, del PPC y las corrientes institucionalistas de las FF.AA.

La guerra de Sendero no fue la culminación de los grandes movimientos sociales que se produjeron entre 1976 y 1980 ni del agitado proceso político

de la transición democrática que se produjo entre 1978 y 1980. Sendero inició “la guerra popular” justamente en el momento en que la derecha recomponía su hegemonía política después de las reformas velasquistas, el APRA era derrotada y entraba en crisis, y la izquierda volvía a su tradicional balcanización política y perdía la oportunidad de representar políticamente a las clase populares. Estas habían realizado grandes procesos de movilización durante la dictadura del general Morales Bermúdez en defensa de sus salarios, sus condiciones de vida y de trabajo, así como en demanda de las libertades democráticas. Cuando se inicia la guerra senderista, el ciclo de los grandes movimientos sociales populares de pobladores, obreros, campesinos, maestros y trabajadores estatales estaba concluyendo. Con la excepción de la movilización popular de Huanta (Ayacucho), en 1969, en demanda de la gratuidad de la enseñanza realizada (Tovar 1985), Sendero Luminoso tampoco tuvo una influencia significativa en los movimientos sociales populares ocurridos entre 1976 y 1980.

Ante una izquierda fragmentada y un APRA apoyada por la dictadura del general Morales Bermúdez, Belaunde recogió el estado de ánimo antidictatorial del electorado y triunfó en las elecciones de abril de 1980. Se inició entonces un periodo de consolidación democrática y de economía de mercado que se vio asediado por la violencia desatada por el terrorismo, por la crisis económica y por la deuda externa. El fracaso de ambas aperturas –a la democracia y al mercado- se debió a la incapacidad de los gobiernos de los ochenta y de los partidos políticos para administrar, por un lado, la contradicción entre la presión interna por distribución y democratización y la presión externa por el pago de la deuda y el cambio del modelo de desarrollo y, por otro, para resolver el grave problema de la violencia política. La década del ochenta fue, en realidad, el final de una época histórica en la que se confrontaron las demandas distribucionistas y democratizadoras de las sociedades de América Latina y las exigencias de los organismos internacionales a los países deudores para que paguen sus deudas y cambien su modelo de desarrollo. Esta contradicción puso en tensión a todas las energías internas de las sociedades latinoamericanas y constituyó

un desafío a las organizaciones sociales, a los partidos, a los gobiernos y a las instituciones del Estado.

El gobierno de Belaunde atendió las exigencias externas y aplicó algunas políticas tibiamente liberales que, junto con los desastres naturales de 1983, producidos por la Corriente de El Niño (sequía en el sur y lluvias torrenciales en el norte), produjeron una dura recesión y el consiguiente desgaste del gobierno y de los partidos que lo dirigían.

El gobierno de Alan García se propuso atender las demandas internas, limitó el pago de la deuda externa y aplicó políticas heterodoxas basadas en el gasto público expansivo, generando una inflación desbocada que arrasó con la economía privada del país, con la economía fiscal, con el propio gobierno aprista y con las instituciones del Estado. Esto se inició luego de fracasado el tibio liberalismo de Belaunde: el país volvió los ojos al populismo, eligiendo a Alan García en 1985 y colocando a la izquierda en un expectante segundo lugar. García pretendió reconstruir el Estado populista, conformando una nueva coalición populista dominante –compuesta por un sector de los empresarios (los llamados “doce apóstoles”) y las clases medias- para enfrentar a los organismos financieros internacionales y al neoliberalismo mediante la fijación de solo el 10% del valor de las exportaciones al pago de la deuda externa, así como mediante el impulso de una política expansiva del gasto público para reactivar la economía. Esta medida fue acompañada por otras políticas públicas heterodoxas: establecimiento de diversos tipos de cambio, políticas arancelarias favorables a las importaciones de insumos y bienes de capital, dación de crédito cero para el campo, control de precios a los alimentos para favorecer a los consumidores urbanos. A mediados de 1987 se comenzaron a sentir los efectos del estrangulamiento externo: falta de divisas, devaluación de la moneda e inflación. A través de estas políticas públicas, la coalición dominante procesó una forma de dominación patrimonial y participativa y buscó desarrollar una vasta política de inclusión, pero no lo consiguió debido al estallido de la crisis económica en 1988. La coalición populista estalló con la estatización de la Banca en julio de 1987: los empresarios se distanciaron

violentamente de Alan García y las clases medias se replegaron en forma gradual.

Rota la coalición populista, el gobierno aprista apareció muy débil hacia el final de su mandato. García pretendió superar esa situación creando los gobiernos regionales elegidos por la ciudadanía de sus respectivas regiones, sin ofrecerles, sin embargo, ni las atribuciones, ni las competencias, ni los recursos económicos necesarios para consolidarse. El fracaso del gobierno aprista en el enfrentamiento de la crisis económica –sobre todo en el control de la inflación- y de la violencia terrorista, así como la caída del Muro de Berlín y la crisis y división de la izquierda hundieron a los partidos que hasta entonces se mantenían en pie. La primera señal de esa debacle fue la elección de Ricardo Belmont como alcalde Lima en noviembre de 1989. La elección de Fujimori en 1990 y las elecciones posteriores han consolidado el éxito de los independientes y el hundimiento de los partidos políticos, alimentado el desprestigio de la política.

La del ochenta fue también la década de las crisis y el desmoronamiento de los partidos políticos y, como ya se ha dicho, del intento de establecer un pluralismo centrípeto. En los inicios de la década se configuró un mapa partidario de tres tercios, de derecha (AP, PPC), de centro (Apra) y de izquierda (IU). Ese mapa se mantuvo en los procesos electorales de 1980, 1983, 1985 y 1986. Acción Popular y el Partido Popular Cristiano fueron los primeros que se fueron desmoronando en las elecciones de 1983, 1985 y 1986, luego de su fracaso en el gobierno (1980-1985). Su resurgimiento posterior en el Fredemo no obedeció a su propia fuerza sino al arrase del independiente Mario Vargas Llosa. Pero los partidos, sobre todo el Apra, y la izquierda en menor medida, siguieron teniendo un peso importante hasta las elecciones municipales de noviembre de 1989, en las que el candidato independiente a la Alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, los derrotó. La votación de todos los partidos juntos apenas superó la del triunfador (Pareja y Gatti 1993).

Algo parecido sucedió en las regiones y departamentos del interior, los partidos dejaron de ser la primera fuerza política del país para dar paso a los independientes. Las elecciones generales de 1990, en cuya segunda vuelta resultó elegido Alberto Fujimori, confirmaron la tendencia del electorado a prescindir de los partidos y a optar por líderes independientes (Grompone 1991). Desde entonces el tránsito de los partidos a los outsiders (Cotler 1995) fue acelerado y radical:

“En 1986, el 73% de la ciudadanía simpatizaba con algún partido político y el 17% se declaraba independiente. En abril de 1993, los simpatizantes se habían comprimido a 12% y los independientes habían pasado a constituir el 86% del electorado” (Torres 1993).

2.4. Las Incursiones Democratizadoras

Comparto la opinión de Sinesio López (2016) al señalar que fueron tres las principales incursiones democratizadoras en el siglo XX. Desarrolladas a través de varias oleadas e intentos que tuvieron diversos resultados. Los procesos de democratización se presentaron a modo de oleadas y fueron impulsados principalmente por los partidos populistas, en menor medida por los partidos de izquierda, y por los diferentes movimientos sociales mesocráticos y populares, dentro de esquemas de confrontación impuestos por la voluntad de exclusión de las élites dominantes y las distintas formas de Estado. En algunas ocasiones tuvieron éxito y en otras fracasaron. Así, tenemos:

a) La incursión democratizadora de las tradicionales clases medias y populares dirigidas por el APRA (1931, 1945, 1956), aunque cabe resaltar que la de 1956 fue más cooptación que incursión democratizadora. Aquí jugaron un papel central junto con el APRA, los movimiento sindicales agrarios y mineros, cuyas acciones culminaron en democracias limitadas y de corto aliento (1945-1948) o en convivencias oligárquicas (1956-1962) que debilitaron y castraron a los movimiento reformistas y democratizadores.

En lo que respecta a la ciudadanía, el APRA fue más partidaria de la participación política y de los derechos sociales que de la ciudadanía civil. Lo que le interesó de la ciudadanía civil no fue tanto la que tiene que ver con la esfera política (el disenso, la oposición y la competencia) ni la que tiene que ver con la esfera del mercado (la libertad de propiedad, de compraventa, de contrato) sino más bien la que se refiere a la esfera sociopolítica: la libertad de organización, la libertad de huelga, etcétera.

El APRA no solo abrió las puertas de la sociedad cerrada de los señores a las nuevas formas de protesta social de las clase medias y de las clases populares de los años treinta en adelante, sino que se preocupó también por canalizar sus demandas y por dotarlas de organización y de otros instrumentos de lucha que estaban vinculados a la conquista de ciertos derechos civiles, tales como el reconocimiento de las organizaciones sindicales, el derecho de huelga, el derecho a la educación, que emergió como un derecho civil para transformarse luego en un derecho social.

Uno de los mayores logros del APRA fue contribuir a la ampliación de la participación política de los ciudadanos, que pasó del 2%, a comienzos de siglo, al 7,4% de la población total, y al 14,98% de la población masculina, en 1931, así como al 22,44% de la población total en 1963 (North 1970). Dicho ensanchamiento se produjo, pese a las trabas que los gobiernos oligárquicos y dictatoriales pusieron al APRA, para que esta organización pudiera participar libremente en los procesos electorales. De las ocho elecciones presidenciales que tuvo el Perú desde la fundación del APRA hasta 1963, la oligarquía y las dictaduras solo le permitieron candidatos propios en 1931, en 1962 y en 1963, le toleraron y reconocieron su participación como aliada en 1945-1948 y en 1956-1962, y se reprimió o desconoció su participación en 1936, 1939 y 1950. Con algunas excepciones, la ampliación de la ciudadanía se produjo en los departamentos que experimentaron un mayor grado de modernización económica y en donde se desarrollaron con más vigor las clases medias y populares (North 1970).

El “populismo” presente en los años treinta impulsó más la democratización y la participación de los ciudadanos que la liberalización y la competencia política. Fue más democrático que liberal. El compromiso del APRA con la oligarquía en 1956 redefinió los alineamientos de los actores políticos y de las fuerzas sociales. Las FF.AA pasaron al campo reformista, la Iglesia hizo lo mismo, los nuevos partidos populistas de los cincuenta se fortalecieron y los movimientos sindicales y sociales mesocráticos y populares se desplazaron hacia la izquierda.

b) La incursión democratizadora de las nuevas clases medias, en cuya dirección estuvieron Acción Popular, la Democracia cristiana y el socialprogresismo, que ingresaron al Parlamento en 1956 y al Ejecutivo en 1963.

Estos partidos canalizaban las luchas de las nuevas clases medias – surgidas no solo por el desarrollo del capitalismo, sino por la urbanización acelerada ocurrida durante las décadas del cincuenta y del sesenta-, las cuales bregaban por conquistar un conjunto de derechos políticos y sociales frente a la dictadura de Odría, primero, y frente a la oligarquía, después. Con la emergencia de estos nuevos partidos el Perú transitó, de la situación de partido predominante – el Apra- a la de pluralismo polarizado que se mantuvo hasta 1980. Las acciones de los partidos reformistas y populistas de los cincuenta (AP, DC y SP) y por los movimientos campesinos (1955-1964), culminaron en el gobierno tibiamente reformista de la alianza AP-DC (1963-1968) que fue neutralizado en su accionar por la coalición proligárquica del APRA y la UNO y fue incapaz de realizar las reformas antioligárquicas que prometió.

La Democracia Cristiana (DC) y el Social Progresismo (SP) eran pequeños partidos programáticos dirigidos por destacados intelectuales y profesionales de clase media. AP fue desde el comienzo un movimiento aluvional y populista que giraba en torno a un caudillo carismático. Los tres tenían un programa parecido. Diferían en la ideología –socialcristiana la de la DC, humanista la del SP- y en el liderazgo. Los tres disputaban el mismo espacio

político, hecho este que impidió una alianza entre ellos en 1956 y en 1962. Solo cuando la primacía de Acción Popular fue confirmada por segunda vez en 1962 y las FF.AA. abrieron, desde el gobierno (1962-1963), la trocha del cambio que podían recorrer los partidos reformistas de los años cincuenta, la Democracia cristiana aceptó aliarse con Fernando Belaunde Terry en las elecciones de 1963.

La incursión democratizadora de las nuevas clases medias dirigidas por AP, la DC y el SP, a diferencia de la dirigida por el APRA, tuvo menos resistencias y fue relativamente rápida. Esas fuerzas políticas aparecieron en 1956 y en 1963 ya estaban en el gobierno. La menor resistencia al nuevo reformismo de los cincuenta y el ascenso meteórico de Fernando Belaunde al poder tuvieron que ver con un conjunto de factores coadyuvantes tanto de coyuntura como de estructura. Por el lado de la coyuntura, el debilitamiento y el aislamiento de la dictadura odriista, abandonada incluso por sectores significativos de la oligarquía entre 1955-1956, dejaron muchos flancos libres por los que irrumpieron las nuevas fuerzas reformistas. A todo esto hay que añadir la crisis y la fragmentación política de la oligarquía y la menor existencia que suscitaron los partidos reformistas de los cincuenta y los sesenta debido a su moderación política y a su carácter liberal y democrático.

c) La incursión democratizadora de las clases populares y de las izquierdas que entraron a la Asamblea Constituyente en 1978, al Parlamento en 1980 y en 1985, a los municipios en 1983, y a los gobiernos regionales en 1988. La incursión democratizadora de la izquierda se produjo después de la caída del Estado oligárquico, gracias a las reformas radicales del general Velasco Alvarado (López Jiménez 1997).

Impulsada en parte por la izquierda, el clasismo obrero, los frentes regionales y el movimiento de pobladores, este proceso culminó en la transición democrática de 1979-1980, en la conformación de la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1979 y en el establecimiento de la democracia a partir de 1989. La transición democrática de fines de los

setentas fue un proceso complejo en el que no solo intervinieron las izquierdas con ciertas ambigüedades y los movimientos sociales populares, sino también el Apra y el PPC y las corrientes institucionalistas de las FF.AA. El hecho más significativo de esta tercera ola democratizadora es el tránsito que hizo la izquierda de la revolución a la democracia, en un proceso difícil de aprendizaje lleno de tensiones. La izquierda en el Perú y en América Latina dejó de ser una fuerza insurreccional para apostar por la democracia. Esto implicó, entre otras cosas, la institucionalización de los conflictos sociales y políticos y el tránsito de la política como guerra a la política como competencia y como oposición. Los enemigos se transformaron en adversarios y opositores. Los que quedaron fuera de este proceso fueron los movimientos denominados Sendero Luminoso y MRTA, justamente los que desataron el terrorismo en la década del ochenta.

A medida de que las incursiones democratizadoras se ampliaban, el Estado oligárquico iba dejando de ser patrimonialista en términos institucionales, pero continuaba siendo tal en términos de cultura política.

4.5. La ciudadanía

Como nos recuerda Derek Heater (2007) “la ciudadanía es una forma de identidad sociopolítica, pero tan solo una de las varias que han coexistido durante las distintas épocas a lo largo de sus casi tres milenios de existencia (p. 11). Una manera de comparar las distintas identidades sociopolíticas la encontramos en el siguiente cuadro:

CUADRO VII
DISTINCIONES ENTRE IDENTIDADES SOCIOPOLÍTICAS

SISTEMA	TIERRA	INDIVIDUO	CONCEPTO
Feudal	Base de la relación	Vínculos recíprocos	
Monárquico		lealtad	
Tiránico		Centro del sistema	Religión / Ideología

Nación	Territorio de la nación		Idealización
Ciudadanía			Estados / Derechos /Obligaciones

Fuente: Haeater 2007: 14.

Este cuadro no pretende reducir la complejidad de la ciudadanía, porque no es un tema sencillo de hacerlo, ni en la práctica ni en la teoría, pero si busca enrumbar el análisis de la ciudadanía en nuestro país como construcción histórica diferente de otros tipos de identidades políticas, y en estrecha relación con los conceptos de: Estado, derechos y obligaciones.

El camino de la ciudadanía no ha sido fácil en el Perú, lo hemos apreciado en el recuento del proceso político que se ha suscitado en nuestro país. A partir de una “definición mínima” de ciudadanía propuesta por Sinesio López (1997), describiremos sus principales características (o elementos) y como estas se fueron formando en el particular contexto político y social de nuestro país. López señala que:

“(...) la definición mínima de la noción de ciudadano puede ser la siguiente: ciudadano es un individuo o comunidad de individuos con derechos garantizados por el Estado y con responsabilidades hacia la comunidad política de la que forma parte” (Lopez 1997: 119).

Un primer elemento que destacar es que en esta definición de ciudadano, el individuo sea cual sea la tradición desde que lo pensemos (liberal o comunitaria) es un ser sin relaciones de dependencia personal o ha roto con ellas. Es relativamente autónomo. Por ello, no puede haber ciudadanía en una sociedad de estamentos, de siervos o de esclavos. La ciudadanía solo es dable en una sociedad de individuos o de conjuntos de individuos con “derechos” que son enfatizados frente a las tradicionales responsabilidades que imponía el Estado. Una definición frecuente de derechos es definirlos

como atribuciones de ciertas capacidades a los individuos. En lo referente a la historia de la ciudadanía Sinesio López (1997) destaca:

- a.- *La capacidad de actuar libremente si impedimentos que bloquean la acción ni restricciones que obligan, a actuar de una manera no deseada.* Esta es una libertad de la acción llamada también libertad negativa.
- b.- *La capacidad de decidir libremente y de participar activamente en los asuntos públicos.* Esta es la libertad de la voluntad, llamada también libertad positiva.
- c) *La capacidad de participar en la riqueza y el bienestar que produce una sociedad ha dado lugar a los derechos sociales.*

En tercer lugar, el ciudadano con derechos implica una peculiar relación de la sociedad y de los individuos con el Estado moderno, que reconoce el claro predominio de los derechos sobre las responsabilidades y ofrece una serie de garantías constitucionales, organizativas e institucionales y recursos para concretarlos, a diferencia de la relación tradicional, en la que se enfatizaban las responsabilidades ante el Estado sobre los derechos de los derechos de los individuos.

Finalmente, la ciudadanía implica un sentido de pertenencia y de membresía a una determinada comunidad política entre cuyos miembros se establecen relaciones de interdependencia, solidaridad y lealtad. En general señala López (1997), la comunidad política ha surgido cuando las elites han sido capaces de integrar a las clases populares a la vida económica social y política de un determinado país.

De la obra T. H. Marshall y T. Bottomore (1988) tomamos dos de sus tesis para comprender mejor la evolución de la ciudadanía en nuestro país, que si bien fueron pensadas para el caso inglés, creemos que pueden adaptarse con matices para explorar la evolución histórica de la ciudadanía en nuestro país. La primera de ellas se refiere a que la igualdad inherente a la ciudadanía puede ser compatible consustancial a la estructura de clases. Al respecto nos dicen:

“[Existe] una igualdad humana básica asociada al concepto de la pertenencia plena a una comunidad –yo diría, a la ciudadanía- que no entra en contradicción con las desigualdades que distinguen en los niveles económicos de la sociedad. En otras palabras, la desigualdad del sistema de clases sería aceptable siempre que se reconociera la igualdad de la ciudadanía (págs. 20-21)

Es más, apunta que la coexistencia entre las desigualdades de clase y la igualdad del ciudadano estaba tan aceptada que “la primera ciudadanía se había convertido, en ciertos aspectos, en el arquitecto de una desigualdad social legitimada” (págs. 21-22).

La segunda que los derechos ciudadanos evolucionaron históricamente, en orden civil, político y social. Así, explican su visión tripartita de la ciudadanía:

“El elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia [...] Por elemento político entiendo el derecho de participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de sus miembros [...] El elemento social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes de la sociedad Marshall y T. Bottomore 1988: 22-23).

Si bien circunscribió el análisis de cada uno de los elementos a periodos de tiempo específicos: el desarrollo de los derechos civiles en el siglo XVIII, de los derechos políticos en el siglo XIX, y de los derechos sociales en el siglo XX. Marshall otorga una mayor maleabilidad a la cronología de la ciudadanía social, y en eso queremos incidir. La experiencia peruana muestra como los dos primeros elementos se han presentado en la historia peruana. Tras la Constitución de Cádiz los dos primeros elementos se dieron casi simultáneamente, pues con el reconocimiento de la ciudadanía se dio un margen amplio de participación política formal. Inevitablemente la herencia virreinal impondrá a la raza y al corporativismo como elementos difíciles de dejar de lado en la constitución de la ciudadanía.

CAPÍTULO 4

EL DISEÑO INSTITUCIONAL

Gabriella Chiaramonti (2009), señala que existía hace unos años dentro de la comunidad de estudiosos peruanistas y latinoamericanistas en general, dos “prejuicios” que impedían analizar de manera exhaustiva las normas y las prácticas que en el siglo XIX caracterizaron la ciudadanía política y, en particular, el ejercicio del sufragio. Por un lado, la extensa y duradera convicción de que las leyes y constituciones eran ineficaces o fácil y constantemente inobservadas, debido a acciones ilegales o corruptas. Por otro lado, tanto en el Perú como en el resto de América Latina, la idea de que las elecciones eran poco más que una farsa, cuya reiteración se tenía que considerar absurda, inexplicable y sin interés para los historiadores, por la falta de significativas consecuencias, en un contexto político dominado por la acción de caudillos o de oligarcas todopoderosos.

Para poder entender la dinámica de actores practicada en los diferentes gobiernos que analizaremos es necesario incidir en el diseño institucional que influía tanto en lo que podían hacer o no. Si bien muchos de ellos no eran respetuosos de las instituciones su alejamiento de las formas y mecanismos institucionales gradualmente podían deslegitimar su poder y hacerlo vulnerable a ser desplazado.

4.1. El Presidencialismo

Mc Clintock (1994) precisa que entre 1919 y 1968 el Perú sufrió cuatro quiebres del orden constitucional: 1936, 1948, 1962 y 1968. Se encuentra una constatación en el régimen político, y es que si bien el presidencialismo está profundamente arraigado en la cultura política peruana, existe una fuerte identificación del presidente con un mesías. Si bien Mc Clintock considera

que esto se remonta a la década de los años veinte y treinta, podríamos remontar esta imagen mesiánica hasta la época de los caudillos en el siglo XIX. Pero en los términos de Mc Clintock, y concentrándonos únicamente en la política de masas y el proceso electoral, podemos decir del presidencialismo que:

“se inicia con una ciudadanía atenta, que sopesa cuidadosamente las propuestas de campaña, continúa con la formación de una verdadera marca de apoyo a un candidato, culmina en la elección del candidato *santificado* en medio de exageradas esperanzas, y termina con una gradual desilusión popular y acusaciones de tradición y abandono” (p. 117).

4.2. La Constitución

Giovanni Sartori (2016) entendía a las constituciones como elementos de justicia, símbolo o mera expresión de arreglos políticos cupulares. Las normas constitucionales son determinantes de conductas para una variedad de actores, sea desde un punto de vista normativo-jurídico o desde un aspecto más amplio en cuanto a la conformación de los más variados fenómenos sociales. Durante mucho tiempo las constituciones peruanas¹¹⁶ y latinoamericanas fueron consideradas por las ciencias sociales como mera declaración de principios no vinculantes, en especial las constituciones decimonónicas que por el contexto en que fueron promulgadas se pensaba en ellas como gestos simbólicos para dar un recubrimiento formal de legitimidad a los diversos caudillos que usurparon el poder en aquel siglo¹¹⁷.

4.2.1. La Herencia de Cádiz¹¹⁸

¹¹⁶ El Estado peruano ha tenido 12 constituciones a lo largo de su historia republicana, las de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y la actual de 1993.

¹¹⁷ En apenas 23 años de vida independiente se sucedieron 29 gobernantes.

¹¹⁸ Para este acápite tomamos como principal referencia el artículo de Alex Loayza (2009) “Constitución-Perú” que forma parte de la obra colectiva dirigida por Javier Fernández Sebastián, *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850*. Madrid: Fundación Carolina / Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

La constitución de Cádiz de 1812 dio inicio a la era de las constituciones liberales que recrearon las constituciones latinoamericanas futuras (Aljovín 2000: 73). Durante el virreinato peruano, el término “constitución” se entendía de manera general como un conjunto de normas que regían una determinada comunidad que podía ser desde un colegio o seminario hasta una “República”; es decir, se podía entender como un reglamento que instaure y ordene pero que no tiene por objeto garantizar algún tipo de derecho; además, no se asociaba a una ley suprema, sino a una pluralidad de normas. Circunscribiéndonos a una comunidad política, cuando se hablaba de la constitución de un reino se remitía a una pluralidad de normas y tradiciones con las cuales se gobernaba. Ello suponía además la existencia de una sociedad jerárquica donde cada estamento se regía por determinadas normas y privilegios. Así no sólo no existía la igualdad ante la ley, tampoco había una ley suprema del Estado.

Con la crisis de la Monarquía hispana y la promulgación de la Carta gaditana en 1812, el concepto de “constitución” se asocia con el gobierno representativo y se vuelve vital, más como la base jurídica de la nación y guardiana de la soberanía que como garantizadora de derechos del individuo. La nueva constitución introdujo un nuevo vocabulario político como: representación, soberanía popular, igualdad, libertad; y ello trajo consigo una nueva forma de participación, creando nuevos espacios para la acción así como los nuevos fundamentos de la vida pública.

La nueva idea de soberanía permitía a la comunidad desobedecer al gobernante en caso éste actuase en contra del bien común. Estas ideas políticas estaban en contra de las doctrinas que postulaban el poder absoluto del rey, y más bien exaltaban el derecho divino del Papa, al establecer la superioridad de la autoridad espiritual en los asuntos seculares¹¹⁹. Al ya no estar la soberanía asociada a la figura del rey sino al

¹¹⁹ Además, este conjunto de ideas era muy afín a la concepción y la aplicación de la ley en el virreinato peruano. A la idea de una concepción superior del derecho, expresada en el derecho natural, se unía la noción de que la ley no podía preverlo todo, y que tenía que aplicarse según el contexto social y para el bien de la comunidad. Por ello en la formulación,

“pueblo”; en el contexto americano y en particular en el Perú, la soberanía se va a asociar a los “pueblos”, es decir, a los diferentes poderes locales. La constitución política así pasa a convertirse en la consecuencia legal del “pacto social de los pueblos” y en la “garantía de sus derechos políticos”, de ahí podemos entender mucho mejor, el por qué de la inclusión en esta Carta de detalladas normas electorales. Mantenía su compromiso con la Iglesia, aunque tomando una posición regalista, necesaria en tanto era un elemento de cohesión de la nación, restaba la libertad de conciencia propuesta en el artículo 371°:

“Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes».

En las constituciones republicanas posteriores, los derechos de la nación prevalecerán sobre los del individuo. Si bien se suprimieron las diferencias entre españoles y criollos, la república de indios y el tributo se mantuvo en el caso de las castas. Además, la definición de ciudadanía fue asociada a la noción tradicional de “vecino”. El ejercicio de los derechos ciudadanos no fue rígidamente condicionado a la alfabetización, lo cual significaba que “las relaciones políticas y sociales tradicionales” no se rompían del todo, aunque sufrieron una significativa transformación de la esfera pública debido a la difusión de la prensa y a la importancia política que lograron los cabildos, cuestionando así las jerarquías políticas territoriales superiores e inclusive la autoridad del virrey (Chiaramonti, 2005, 106-109).

Por ello, desde el punto de vista de las autoridades virreinales, la constitución minaba la autoridad política central. Este hecho produjo una serie de disputas e incluso rebeliones¹²⁰ en contra de la autoridad del virrey por no seguir la constitución gaditana. Es necesario precisar que estas críticas no cuestionaban la monarquía pero sirvieron años más tarde para

deliberación, promulgación, ejecución y aplicación de la ley no se permitía la decisión unilateral ni el absolutismo de la Corona (Tau Anzoategui, 1992, 28-62).

¹²⁰ La de Cusco en 1814.

argumentar sobre lo inaplicable que fue el constitucionalismo monárquico en la América hispana virreinal.

Tras las guerras de independencia, la Constitución cobra doble importancia: a escala internacional como la base jurídica de la existencia de una nación, y en el ámbito interno como un elemento de legitimidad política. Por ello, en gran parte de las constituciones peruanas fue prioritario definir la nación y la forma de gobierno más que los derechos del individuo. Como se puede apreciar en la Constitución de 1823 hasta la de 1839. Éstas empezaban definiendo a la nación y la forma de gobierno, dejando para el final las llamadas “garantías constitucionales”. Sólo las constituciones de 1856 y 1860 tras definir la nación, señalaron las “garantías nacionales” y las “garantías individuales”.

Respecto a la nación, las constituciones de 1823 y 1839 fueron las más prolijas, dado que además de fijar el pacto social, la religión y la ciudadanía, establecieron los límites territoriales y el “estado político de los peruanos” o nacionalidad. Esto es comprensible en la medida que eran posteriores a coyunturas como la ruptura con la Monarquía hispana y la Confederación Peruano-Boliviana, donde era crucial definir claramente a los individuos de la nación y excluir a los extranjeros.

Las primeras discusiones constitucionales en el Perú se llevaron a cabo durante el Protectorado del libertador don José de San Martín (1821-1822), dentro y fuera de la Sociedad Patriótica. El tema central no sólo era cuál de estas formas de gobierno se adaptaba mejor a las “costumbres” del pueblo peruano, sino también qué importancia tendría en su desarrollo como una nación moderna. Triunfó la opción republicana.

Los debates constitucionales posteriores giraron en torno a los temas de la división de los poderes del Estado, como Manuel Lorenzo de Vidaurre lo sintetizaba en 1827:

“La constitución no tiene otro fin que asegurar la libertad del hombre y sus derechos: todos los medios deben dirigirse a ese

fin. [...] ¿Cuál Constitución será la más perfecta? Aquella en que los tres poderes, sin oponerse uno al otro, y moviéndose todos al mismo punto que es asegurar la libertad individual y las propiedades, sean más independientes entre sí” (1973: 490).

Luna Pizarro, por su parte, se expresaba en los siguientes términos:

“Una constitución debe incluir todas las leyes que conciernen al establecimiento, forma, organización, atribuciones, modo de obrar y límites de los poderes sociales. [...] La constitución debe colocar a nuestro pueblo en el rango que le asigna la naturaleza entre las naciones independientes. Ella debe garantizar la propiedad del pudiente, la existencia del pobre, los goces del industrial, la libertad y seguridad de todos. Debe hacer reinar la tranquilidad sin opresión, la libertad sin licencia, la humanidad sin debilidad, la justicia sin crueldad. Ella debe crear un gobierno firme sin ser peligroso, y darle movimiento rápido fijando términos a su actividad» (1959, 193-194).

Es necesario señalar que esta preferencia por los derechos de la nación en el modelo constitucional permitía la existencia de ciertos privilegios como el fuero eclesiástico o la permanencia del tributo indígena y la esclavitud, todos ellos considerados necesarios para no trastocar el orden social. Estas características significaban una clara continuidad con el modelo constitucional gaditano. La Constitución tenía una gran importancia en el debate público respecto al ordenamiento político y social del país. No sólo daba una estructura jurídica moderna en tanto persistía el orden legal virreinal, pues aún no existían códigos civiles ni penales, era además de una especie de instrumento educativo en el amplio sentido del término. Estaba cargada de un horizonte de expectativas. Así, lo expresaba Luna Pizarro en su Discurso pronunciado en la misa de Espíritu Santo que precedió a las elecciones de diputados al Congreso de 1832:

“Nuestra felicidad, en efecto, debe tener su base en la Carta. En ella se depositan los gérmenes que habrán de desarrollarse con el tiempo, con las instituciones de las sucesivas legislaturas, con el fomento de la industria y demás fuentes de la comodidad o riqueza pública y, sobre todo, con la mejora de nuestras costumbres” (1959, 197).

La Constitución era fundamental para la legitimidad del régimen político por ser el instrumento legal que definía el pacto social. En tal sentido, en la

convulsionado contexto político en que cayó el Perú después de conseguir su independencia, los caudillos militares siempre apelaron para legitimar su revolución a la defensa de la carta constitucional o a su necesaria reforma en vista de su inadaptabilidad a la situación social y política del país (Aljovín, 2000). Y por ello el Perú entre 1821 y 1839, se halló regido por siete constituciones. En aquel contexto, el debate constitucional radicaba en diseñar un ordenamiento político que brindase estabilidad y orden, pero que a su vez no excluyese a los “pueblos¹²¹”. En 1839, tras el fin de la Confederación Peruano-Boliviana, el primer modelo triunfa y funciona por casi 16 años en un nuevo contexto de relativa estabilidad política y económica. Hacia 1850, el concepto de «constitución» empieza a ser cuestionado en su rol protagónico en el diseño del orden político y social, lo cual era una clara señal de que esta noción se había ideologizado y politizado.

Para 1855 Juan Espinosa, en su ya citado *Diccionario* definía el término “constitución” como la “ley fundamental del Estado” que garantizaba, a través de los derechos civiles y políticos del individuo, la paz social y política del país, pero consideraba que ésta debía ser lo más concisa posible:

“y no contener más que el conjunto de preceptos generales que abracen la organización de los poderes, su deber, y las garantías individuales. De las constituciones que conocemos, no hay una cuyos artículos no pudieran reducirse a la cuarta, quinta o décima parte; no hay ninguna que no tenga preceptos que constan ya en leyes y reglamentos separados; no hay ninguna que no esté plagada de repeticiones y redundancias que, lejos de simplificar el sentido, lo hacen confuso” (Espinosa, 2001 [1855]: 247-248).

Similares definiciones se encontraban en los manuales de derecho constitucional de José Silva Santisteban¹²² (1856) y Felipe Masías¹²³ (1855).

¹²¹ Así, los debates giraron acerca de las mayores o menores atribuciones brindadas al Parlamento o al Poder Ejecutivo, al igual que sobre la descentralización política a través de juntas departamentales. Este debate mostraba la tensión que existía entre diferentes intereses y exigencias sociales y políticas para lograr la integración nacional, que expresaban dos modelos de concebir el Estado y el poder político: uno centralista y otro descentralizador.

¹²² Silva Santisteban, José (1856) *Curso de Derecho Constitucional*. Lima: Impreso por Manuel Lagori.

Una posición diferente tenía el jurista y político Toribio Pacheco que en 1855 definía a la Constitución como:

“el conjunto de medios y condiciones que debe llenar un Estado para alcanzar el fin eterno de la justicia (...) [y] justo es lo que se halla en conformidad con la ley natural y lo que contribuye a la realización del fin que Dios ha impuesto al hombre, cual es su perfectibilidad física, moral e intelectual¹²⁴”.

Es de notar, como resalta Alex Loayza (2009), que el uso del término Constitución ya había adquirido “una connotación exclusivamente política”; muestra de ello es que establecimientos educativos como la universidad dejaron de regirse por sus “virreinales constituciones” y se pasó a usar más bien el término de “reglamento” (pág. 398)

Tras la Revolución de 1854 que comprometió a los más connotados miembros de la élite liberal peruana, el debate sobre las bases constitucionales de lo que sería la Carta de 1856 reveló cambios importantes concernientes a los derechos fundamentales, la estructura del Estado y la forma de gobierno. Se asocia ahora el concepto Constitución con otros como el de “asociación”, “opinión pública” y “democracia”.

La introducción del derecho de asociación será un hito legal fundamental para el futuro proceso de la conformación de los partidos políticos y en la introducción de un nuevo lenguaje político pluralista; esto se complementaba con la anulación definitiva de la esclavitud y el tributo indígena. Por otra parte, un renovado discurso democrático insertó dentro de la Constitución determinados mecanismos institucionales para incluir una mayor participación del “pueblo” en el aparato del Estado (Juntas departamentales, municipalidades), una mejor representación política de los “pueblos” (unidad de cámaras) y desterrar ciertos privilegios (fuero eclesiástico y militar, amovilidad de los empleados del poder judicial) con el objetivo de conseguir la cohesión social y la igualdad.

¹²³ Masías, Felipe (1855) *Breves nociones de Ciencia Constitucional*. Lima, Imprenta de J. M. Masías.

¹²⁴ Pacheco, Toribio (1996 [1854]) *Cuestiones Constitucionales*. Lima, UNMSM.

4.2.2. Las Constituciones de 1896-1990

Domingo García Belaunde (1989) con excepcional maestría sintetiza lo que vendrá a ser la vida constitucional en el plano ideológico político en el periodo que analizamos, al respecto nos dice que:

“En lo ideológico-político, se pasó paulatinamente de un Estado oligárquico existente antes de 1919, a un Estado de carácter mesocrático y asistencialista, y por cierto, *dominador*. Durante años este Estado se mantuvo inalterado, aun cuando algo influyeron en mediatizarlo, los movimientos de masas (las fuerzas aprista y comunista). El clima comienza a cambiar a partir de la década de 1950, y se refleja constitucionalmente recién en 1964, cuando la Constitución de 1933 es modificada para posibilitar la reforma agraria y permitir a los latifundistas expropiados ser pagados en bonos de alcance largo. En 1968 el experimento militar monta un Estado monopólico, intervencionista, reformista, distributivo de arriba abajo: de corte *populista*, que marca un estilo en la vida política del país. La Carta vigente de 1979 no puede escapar a este influjo, como una atenta lectura de la misma lo puede corroborar” [las cursivas son nuestras] (pág. 10).

4.2.3. La constitución de 1860

El siglo XX se inició mientras se encontraba todavía vigente esta Carta Magna. Esta Constitución había establecido parámetros para la actuación de varios Gobiernos, la mayoría elegidos por voluntad popular pero mantenía la perspectiva centralista de la Constitución de 1856. Las juntas departamentales no fueron tomadas en cuenta, se diluyó la figura del poder conservador y se estableció el Consejo de Ministros.

Tanto esta Constitución como su antecesora asignaban “a la opinión pública un papel directamente fiscalizador del poder político” en un contexto en que se permitía al acceso legal de asociaciones al espacio público. Por otra parte, se configuraba una administración más técnica de parte del gobierno en los asuntos referidos al desarrollo de la sociedad. Lo que significó una transición hacia nuevas formas de representación política (del parlamentarismo a una democracia de partidos); así como una transición también de la función del gobierno (de un gobierno responsable a uno que

debería responder a las demandas sociales), en las cuales subyacía un nuevo lenguaje político pluralista (Loayza, 2005).

La Constitución de 1860 es la que tuvo mayor vigencia en nuestra historia constitucional, setenta años, dándose bajo su amparo la mayor cantidad de elecciones de carácter constitucional y democrático. Sin embargo no hay que olvidar, que este texto constitucional fue seriamente modificado en 1896.

La vigencia de esta constitución llegó como lo señaló Domingo García Belaunde (1991) hasta el final de la *Belle Epoque* peruana. Época de “bonanzas, guerra exterior, periodo de reconstrucción y asomo, desde 1912 de inquietudes sociales con la instauración de un *gobierno populista*, continuado en 1917 y 1918, cuando empezaron, en forma ostensible, las primeras agitaciones universitarias, obreras y campesinas” (p. 7). La constitución de 1860 fue el sustento jurídico del “equilibrio corporativo” de la política peruana (del Águila 2012: 182) pues pese al esfuerzo de los liberales por hacer una constitución que destruyera el orden corporativo virreinal de jerarquías y privilegios, ellos mismos sentían afinidad con el organicismo alemán y con concepciones no individualistas de la sociedad. Además la realidad de una sociedad donde el catolicismo influía en la política y existía aún una población indígena mayoritaria (agrupada en comunidades) hacían inviables concepciones totalmente individualistas para el orden político. Diversos juristas han destacado el carácter moderado de esta Constitución (Villarán, García Belaunde, Guzmán Napurí) pues fue el resultado de un consenso y cierto equilibrio de poder político.

La Constitución afirmaba en su artículo 37° que “ciudadanos en ejercicio” eran los peruanos mayores de 21 años o casados, aun si no llegaban a esa edad; el artículo siguiente establecía que del derecho a sufragio gozaban todos los ciudadanos que “saben leer y escribir, ó son jefes de taller, ó tienen alguna propiedad raíz, ó pagan al Tesoro público alguna contribución”. A tales condiciones, la ley electoral de 1861 (art. 1) añadía la de estar inscrito en el registro cívico del lugar de residencia.

Las reflexiones que, a partir de esta Constitución, empiezan a formularse sobre la doctrina de la soberanía de la nación tienen una característica común: “se trata de visiones realistas para conformar una República Práctica” (Mac Evoy 2007: 228). Se implementa así las categorías de “ciudadano activo” y “ciudadano pasivo”. El ideal ciudadano reposaba retornaba al ámbito exclusivo de las ciudades y la esfera pública de la civitas. Porque es a partir de 1860, las condiciones de analfabetismo, educación, trabajo remunerado en dinero y contribuciones al erario público, exigidas para el ejercicio de los derechos políticos, podían encontrarse principalmente en las ciudades.

Este equilibrio sancionó en la letra y la práctica un régimen presidencial “atenuado” o “restringido”, a través de la incorporación de ciertas instituciones provenientes de los sistemas parlamentarios, que estaban reguladas constitucional o legalmente.

4.2.4. La Constitución de 1933

Elaborada poco después del derrocamiento de Leguía, la Carta Magna respondió a una natural reacción de desconfianza y cuestionamiento ante el riesgo de un excesivo poder presidencial, optando por restringir las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer las del Parlamento. Estas preocupaciones quedaron plasmadas en “exposición de motivos del Anteproyecto de Constitución” de la comisión a cargo:

“La primera interrogación que nos hemos hecho los autores del anteproyecto en sí debían alterarse los poderes que nuestra historia constitucional asigna al Presidente de la República. No es raro escuchar opiniones favorables a un cambio de régimen y a la implementación de entre nosotros del gobierno parlamentario. El carácter bien conocido de esta forma de gobierno, es anular o reducir a casi nada el poder personal del Jefe del Poder Ejecutivo, trasladando su autoridad al gabinete. La objeción capital contra esas opiniones tiene un carácter práctico. El gobierno parlamentario o de gabinete es un régimen que las constituciones pueden preparar pero no crear. Se establece y realiza por obra de fuerzas políticas ilegislables que logran, en circunstancias determinadas, dar a las mayorías congresionales potencia bastante para dominar al Presidente y

obligarlo a ceder la realidad del gobierno a gabinetes impuestos por las Cámaras [...]. El Perú no ha podido establecer el parlamentarismo, a pesar de que los textos constitucionales y la ley de ministros contienen absolutamente todos los elementos que lo hacen legalmente posible [...]¹²⁵”

“Lo que ha faltado en el Perú para dar vida al parlamentarismo no son textos escritos, sino una redistribución de valores políticos entre el Congreso y el Presidente de la República, cuyo resultado fuese romper definitivamente el equilibrio de fuerzas hacia el lado del Congreso. Hasta ahora, la balanza se ha inclinado del lado del Presidente, y la observación de nuestra historia y nuestra psicología y costumbres políticas conduce a la creencia de que, en el próximo porvenir, las mayorías de los congresos carecerán de aquella popularidad, cohesión y disciplina, de aquella inflexible y agresiva voluntad de poder, que serían necesarias para colocar al Presidente bajo su tutela, imponerle gabinetes parlamentarios y gobernar por medio de ellos. La institución del Presidente con facultades propias y extensas de gobernante efectivo, está sustentada en el Perú y en la América toda por una fortísima tradición y por hábitos populares incoercibles. Responde a un Estado social y económico que impone sus leyes inflexibles a la evolución política. No podemos imaginar la abolición del régimen presidencial sino como resultado de un cambio de cosas profundo precedido tal vez de una revolución¹²⁶”.

Esta Carta Magna creó un modelo que favorecía el entrampamiento entre poderes, sin que exista técnicamente hablando una forma de escapar de él sin destruir el régimen existente mediante el golpe de Estado. Como señala Guzmán Napurí (2007):

“(...) era posible que —como resultado del sesgo parlamentarista de la Constitución de 1933— el Congreso, el cual se comportaba como una duplicidad, pudiera controlar indebidamente a la Nación, particularmente en situaciones en las que el partido gobernante carecía de mayoría en el parlamento” (p. 136).

La experiencia de la Constitución de 1933 fue muy decepcionante pues ningún gobierno electo en procesos inobjectables logró concluir su mandato entre 1933 y 1968. Por su parte el gobierno de las fuerzas armadas creó un régimen dictatorial, de carácter reformista. No hubo ni respeto ni por las

¹²⁵ Villarán, Manuel V. (1962) *Anteproyecto de Constitución de 1931: exposición de motivos*. Lima: Talleres Gráficos P. L. Villanueva.

¹²⁶ *Ibidem*.

libertades civiles, ni por los partidos políticos. El Gobierno aprovechó esta coyuntura para reformular el aparato estatal, creando nuevas y variadas instituciones de carácter socializante y que, supuestamente, buscaban el bienestar nacional (Guzmán 2002: 148).

La debilidad de la Constitución del 1933 hizo evidente los riesgos de un sistema de corte presidencial que generaba el incremento de algunas atribuciones del Congreso tomadas del régimen parlamentario, sobre todo cuando el Congreso era controlado por una mayoría abiertamente opuesta al Poder Ejecutivo (Eguiguren 2007: 28). Escenario que se dio durante los gobiernos de Bustamante (1945-1948) y de Belaunde (1963-1968), en donde se produjeron agudos conflictos y se experimentó inestabilidad política, debido al bloqueo de propuestas legislativas gubernamentales, la aprobación en el Parlamento de leyes objetadas por el Ejecutivo, reiteradas interpelaciones o censuras al gabinete o ministros. Generándose un clima de virtual ingobernabilidad, que en el caso de Belaunde devino en un golpe militar.

4.2.5. *La Constitución de 1979*

En 1977 el gobierno de las Fuerzas Armadas encabezado por Francisco Morales Bermúdez se vio obligado por el desprestigio de su régimen dictatorial y la crisis económica, se convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente. Esta Asamblea se instala solemnemente el 28 de julio de 1978.

La Constitución de 1979 fortaleció las atribuciones del Presidente de la República y el Poder Ejecutivo, sin por ello abandonar el carácter “híbrido” del modelo imperante en nuestra tradición constitucional (Eguiguren 2007: 33). Solo duró doce años este modelo que se suponía más idóneo que los creados en 1860 y 1930, y que inclinó la balanza esta vez hacia el fortalecimiento de las atribuciones del Ejecutivo, disminuyendo aunque no suprimiendo, los mecanismos de control parlamentario.

Entre las principales características incluidas por esta Carta Magna para el Ejecutivo y el legislativo fueron las siguientes:

- Se incrementa el número de votos exigido para la elección popular del Presidente de la República, requiriendo obtener más de la mitad de los votos válidamente emitidos, a diferencia de la Carta de 1933, que sólo exigía una votación superior al tercio de los votos válidos.
- El Presidente durante su mandato, solo podía ser objeto de acusación constitucional o Antejuicio ante el Congreso por haber incurrido en traición a la patria, por impedir las elecciones, el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones o del Tribunal de Garantía Constitucionales, o por disolver el Congreso fuera del supuesto previsto en la Constitución¹²⁷.
- Se mantuvo que el Presidente de la República conjurara las funciones del jefe de Estado y de Gobierno, pero también la estipulación de que serían nulos los actos del Presidente de la República que no contasen con refrendación ministerial, como una forma de control interno del Ejecutivo como medida para evitar que el presidente fuese políticamente responsable ante el Parlamento. En este diseño los ministros resultaban individualmente responsables por sus propios actos o por los actos presidenciales que refrendaban, asimismo, serían solidariamente responsables por los actos delictuosos o infractorios de la Constitución o de las leyes en que incurriese el Presidente de la República o que se acordasen en Consejo.
- Las potestades de interpelar, censurar o extender confianza a los ministros se reservaron exclusivamente a la Cámara de Diputados.
- El Senado, además de poder invitar a los ministros para rendir informe, ejercía una importante función de control, al quedar sujeta a su ratificación los nombramientos hechos por el Poder Ejecutivo de los magistrados de la Corte Suprema, del Presidente del Banco Central de Reserva, de los embajadores, así como los ascensos a general y grados equivalentes de los oficiales de las Fuerzas

¹²⁷ Artículo 227°.- El Presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado confianza a tres Consejos de Ministros.

Armadas y de la Policía Nacional. También, correspondía al Senado designar al Contralor General, a propuesta del presidente de la República, y a tres de los siete miembros del Directorio del Banco Central de Reserva.

- Se establecía que su facultad de disolver la Cámara de Diputados solo podía ser ejercido una vez durante el mandato presidencial sin poder admitirse durante su último año, lapso en el que la Cámara solo podrá aprobar una censura mediante el voto favorable de dos tercios del número legal de diputados.
- Se introdujo la posibilidad de que el congreso pudiera delegar facultades legislativas para que dictase decretos con fuerza de ley en las materias y el plazo expresamente delimitados en la ley de delegación.
- El Poder Ejecutivo pasó a hacerse cargo de la elaboración del Presupuesto, remitiéndolo para su estudio, debate y aprobación por el Congreso. Si el proyecto de Ley no era votado y aprobado antes del 15 de diciembre, entraba en vigencia la propuesta que elaborada el Ejecutivo.

4.3. El Sistema electoral

Como acertadamente nos recuerda Sartori (2016) “los sistemas electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules, y por consiguiente afectan la conducta del votante”, además “influyen sobre si el elector vota por u partido o por una persona” (p. 31). Señalada la importancia del sistema electoral, podemos decir que un sistema electoral, en términos generales, hace alusión al conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos técnicos enlazados entre ellos, y legalmente establecidos, por medio de los cuales los electores expresan su voluntad política en votos no modificados que a su vez se convierten en escaños o poder público.

Fátima García Díez¹²⁸ acertadamente señala que la definición de sistema electoral requiere de dos distinciones previas. La primera de ellas es la que

¹²⁸ “Sistemas Electorales” [en línea]

<https://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/4.4.sistemaselectorales.pdf>

diferencia “régimen” de “sistema electoral”. Del mismo modo que la distinción entre régimen y sistema político, el régimen electoral hace referencia al conjunto de reglas electorales formales (Ley Electoral y Constitución), mientras que el sistema electoral hace referencia a los componentes o variables de las reglas de juego que, siempre en interacción, ejercen un impacto político fundamental y permiten tanto el análisis empírico como la valoración de los rendimientos efectivos de las reglas. El análisis del “régimen electoral” es el propio de las perspectivas jurídicas y el “sistema electoral” de la Ciencia Política. Para fines de esta exposición haremos un recuento del marco jurídico legal, es decir, del régimen electoral, de los periodos históricos analizados, para seguidamente hacer el análisis de actores políticos y exponer el “sistema electoral” en cada periodo de tiempo.

4.3.1. El sistema electoral decimonónico

Los colegios electorales fueron los más importantes entes sobre los que se estructuró el sistema electoral durante el siglo XIX, tuvieron vigencia desde 1823 hasta 1896, con excepción del periodo 1855-1861, años en los que fueron reemplazados por las “Juntas Electorales” de acuerdo a dos leyes. La primera fue dada por el presidente provisorio Ramón Castilla el 5 de febrero de 1855 para la elección de diputados a la Convención Nacional y la segunda fue dada también bajo el mismo gobierno, por la Convención Nacional para restablecer constitucionalmente los poderes públicos (Aguilar 2002: 9-10).

Los colegios electorales se dividían en colegios electorales de parroquias y colegios electorales de provincia. Su instalación se realizaba en los años de elecciones y terminaba después de concluida la elección, aunque en algunos casos duraban dos años es decir, hasta la siguiente convocatoria. Las elecciones para las autoridades políticas se realizaban en dos niveles. Primero, en el ámbito parroquial para elegir a los electores de parroquia y en un segundo momento en el ámbito provincial para elegir por el voto de los

electores de parroquia a los candidatos de preferencia. Las elecciones eran entonces, indirectas¹²⁹.

La Constitución de 1823, en su Art. 32 establecía que los colegios electorales de parroquia estaban constituidos por todos los ciudadanos residentes en la parroquia con derecho al sufragio. Para su elección debían estar presididos por el Alcalde ó regidor y por secretarios y escrutadores que nombraba el colegio de entre los concurrentes. Las elecciones se realizaban en su jurisdicción y luego de redactar las actas de su elección se remitían “cerradas y selladas” a la Municipalidad de la capital de la provincia en cuanto éstas estuvieran vigentes. En otros casos, se debían enviar “cerradas y selladas” al Subprefecto de la provincia quien a su vez debía remitirlas directamente al colegio electoral provincial para continuar con las elecciones en el segundo nivel.

Por su parte, los colegios electorales de provincia lo componían todos los electores de parroquia, según el artículo 33° de la Constitución de 1823 y y el artículo 13° de la Constitución de 1828, nombraban un elector por cada doscientos individuos de parroquia con derecho a voto. La reforma del Reglamento de Elecciones del 29 de noviembre de 1839 dispuso que por cada quinientos individuos de la parroquia se eligiera un elector, la parroquia que tenía menos de este número daría siempre un elector. También la ley del 29 de diciembre de 1851 señalaba este número, asimismo consideraba que se nombraría un elector más por una fracción que no llegara a quinientos y pasara de cien y, en caso de que en un pueblo no llegara a tener quinientos habitantes podía unirse con el pueblo más próximo o con los pueblos más cercanos hasta llegar al número exigido.

Con la reforma de la Ley de Elecciones dada el 4 de abril de 1861 se siguió considerando que por cada quinientos habitantes se elegía un elector propietario o por la fracción que pasara de doscientos cincuenta, y por cada

¹²⁹ BISCHOFF, Henry C. “Técnica electoral en Estados Unidos”, en *Revista Estudios Americanos*, Vol. IV, N° 14.

tres electores propietarios se elegiría un suplente. De la misma forma sustentó la ley de 1892 señalando que sobre la base de quinientos individuos se elegía un elector. Reunidos los electores de parroquia en la capital de provincia bajo la presidencia de un ciudadano, secretarios y escrutadores nombrados en su interior, se procedía con las elecciones. Las atribuciones de los colegios electorales de provincia eran: elegir en sesión pública y permanente a los diputados. Luego de concluida la elección debían remitir “cerradas y selladas” a cada cámara (Senadores y Diputados) las actas correspondientes para su calificación y proclamación de los elegidos. Después de verificadas las elecciones, cada colegio electoral de provincia otorgaba a sus representantes elegidos, los poderes correspondientes y luego quedaba disuelto.

La elección indirecta fue parte fundamental del sistema electoral. Era un proceso complejo compuesto de elecciones diferentes en las que se iba depurando a los elegidos tanto como a los propios electores. Así la mayoría de las elecciones hasta antes de 1896 eran de dos grados, con un primer nivel de parroquia y uno segundo a nivel de provincia¹³⁰. Según Aljovín (2016):

“para los teóricos decimonónicos la elección por grados tenía la función de contrarrestar la fuerza electoral de los sectores populares y crear a la vez un mecanismo de selección que favoreciera a los más capaces y a los notables en especial, lo que se observa por los requisitos, que se hacen más exigentes conforme se pasa a un grado siguiente” (p. 71).

A partir de la parroquia se forman los espacios de competencia electoral a nivel local. Para el caso peruano la relación entre las elecciones de primer y

¹³⁰ Sobre las Cortes de Cádiz, Francisco Núñez describe que: “Para la elección de los representantes a las Cortes el sistema era de cuatro grados en tres instancias: La Junta Parroquial, la junta de Partido y la Junta provincial. Al respecto véase: Núñez, Francisco (2004) Ciudadanía y participación política a fines del periodo colonial. Tesis para optar el Título de Licenciado en Historia. Lima; UNMSM. Existieron excepciones a esta regla cuando se aplicó elecciones directas como en el caso de la Constituyente de 1822. Además el 3 de febrero de 1855 se dio una ley que fijaba el procedimiento de elecciones directas, que se aplicó tres veces, en 1855, 1858 y 1860. Dicha ley, como recuerda César Gamboa, caducó rápidamente, y con la ley del 13 de abril de 1861 se regresó al sistema de elecciones indirectas. Al respecto véase Gamboa, César (2003) “¿Excepciones al modelo electoral gaditano? Las elecciones directas en el Perú del siglo XIX”, en *Elecciones*, N° 2, año 2, pp. 160-220.

segundo grado se refuerzan con el surgimiento de los clubes electorales y los partidos políticos, hacia mediados del siglo XIX, lo que hace que se vuelva imprescindible ganar la elección de primer grado, pues el elector surgido de las elecciones parroquiales se considera comprometido con el éxito político de la organización que lanzó su candidatura.

La influencia de las elites regionales era más fuerte que los mecanismos de fiscalización y control del sistema electoral. Al no existir una autoridad del gobierno central monitoreando el sistema a nivel parroquial, en la primera mitad del siglo XIX la autonomía local aumenta y se extiende a lo largo de todo el siglo. A partir de 1850 se produce un cambio en las leyes electorales que permite al Estado cobrar mayor presencia en las regiones, ello debido a los mayores ingresos financieros del Estado, gracias al guano y las nuevas tecnologías representadas por el telégrafo, los ferrocarriles, y el barco a vapor, redujeron las distancias y aumentaron en cierta medida el centralismo.

El voto era abierto y no cerrado, es decir, el sufragante escogía al candidato que le pareciera conveniente y su voto era válido siempre y cuando la persona elegida llenara los requisitos estipulados por la Constitución y las leyes electorales. Al no existir listas cerradas de candidatos, era usual que aparecieran candidatos sorpresa o que una misma persona pudiera ser elegida por diferentes provincias como congresista. Los “candidatos sorpresa” constituían un episodio normal en las elecciones de primer grado, en que, de manera improvisada, un grupo de ciudadanos terminaba apoyando a alguien inesperado. Esto podría presentarse también en las elecciones a nivel provincial (congresistas) y a nivel nacional (elección presidencial), posibilidad difícil de darse, pero no imposible teóricamente.

Las constituciones decimonónicas y las leyes electorales, hasta 1896, fueron bastante abiertas e inclusivas para las elecciones de primer grado. Indicativo de ello son los números bastante altos de inscritos en los registros cívicos, llegando en algunos casos casi al 10% del total de la población, aunque estas cifras deben tomarse con cautela, pues no necesariamente reflejan el

número final de votantes (Núñez, 2004 y Paniagua, 2003). Llama la atención el número de abstenciones, varía mucho de una lección a otra, esto puede deberse en buena cuenta al variante clima político. Además, las dinámicas locales la forma de inscripciones también marcaron el ritmo de la cantidad de sufragantes, lo que a la vez debe relacionarse con el número de abstenciones.

Siguiendo a Aljovín (2016) podemos dividir el sistema electoral decimonínco en dos periodos: 1) las elecciones ente 1812 y 1831 y 2) las elecciones entre 1831 y 1896. El primer periodo está ceñido por un sistema electoral carente de partidos políticos u organizaciones políticas formales. El candidato básicamente se construía a través de los diarios y en los mítines a través de los discursos.

El periodo que va de 1851 a 1896, está marcado por la aparición de organizaciones formales. En un inicio surgen clubes políticos que, al menos muchos de ellos, funcionaron tan solo para el periodo de la campaña electoral. Usualmente estaban conectadas con otros clubes electorales y conformaba una gran red nacional. Es un hecho singular que con la aparición de los clubes electorales hay un aumento notable de la violencia en las elecciones de primer grado (las elecciones parroquiales). Las tomas de mesa forman parte de las luchas electorales y, muchas veces, los candidatos gastaban buena parte de sus de campaña en “matones”. La meta era contralar las mesas de las elecciones parroquiales. De hecho, muy común que murieran personas, por ello José Ragas las denominó “las urnas temibles”.

Recién para 1871 se forma el primer partido político del país, fundado por Manuel Pardo que lo nombró “Partido Civil”. Dicho partido nace de la Sociedad de Independencia organización fundamental para el triunfo de Pardo. Las organizaciones políticas formales, clubes o partidos, cambian la política. Con las organizaciones políticas formales los candidatos están claramente expuestos ante la opinión pública. Con las organizaciones

políticas formales están claramente expuestos ante la opinión pública mediante el esbozo de sus planes de gobierno.

Adicionalmente existían organizaciones no formales que organizaban las batallas electorales. Las elecciones no las ganaba quién tenía mayor cantidad de partidarios y, por consiguiente, votos sino aquel que dispusiera de huestes más aguerridos y mejor pertrechadas. Las organizaciones no formales eran parte de la red clientelar del candidato, un ejemplo de ello eran los capitulares. Juan Espinoza (2001) en su *Diccionario para el pueblo* define lo que eran los capitulares:

“Habiéndose reducido a intrigas de corrillo las elecciones populares, llámanse *Capituleros* los que diri[g]en esas intrigas, con más o menos maña, con más o menos destreza. Hay hombres que no tienen más oficio que el de capitulares, y les sobra vivir con desahogo. El pueblo, a quien inducen a hacer las más perniciosas elecciones, las sigue ciegamente, y cada capitulero vale en proporción del número de hombres que lo siguen a las mesas de elección” (pág. 195).

También encontramos una definición de estos personajes para la primera mitad del siglo XX, en el *Diccionario de Peruanismos* (1936) de Juan de Arona, en donde nos dice que capitulare “es el hombre de las elecciones populares, el que dispone la gente de (cuadrillas y turbas) y de los cubileteos para sacar adelante a un candidato a la diputación o a la Presidencia de la República” (pág. 120).

Héctor López (2001), recuerda las acciones de los capitulares y uno de los más famosos de la joven república peruana, Esteban Arredondo¹³¹, en su apoyo a Rufino Echenique:

“El domingo 17 de febrero de 1850 en las parroquias de Lima – el Sagrario, San Sebastián, Santa Ana, San Lázaro y San

¹³¹ Esteban Arredondo, hombre de color, fue esclavo en la casa de don Manuel Antonio Arredondo y Pelegrín, del cual tomó el apellido. Gracias a su habilidad como jinete y su valentía frente a los toros, permitió hacerse de un protector y comprar su libertad por quinientos pesos. Sus éxitos en la arena le dieron popularidad e influencia en todos los sectores sociales limeños. Ejercía, sobre todo, gran autoridad entre las gentes de color, y los políticos, principalmente, buscaban su amistad y adhesión. Contar con el apoyo de Arredondo en época de elecciones era algo muy importante; un factor a tener en cuenta para lograr el triunfo de una candidatura. Véase al respecto Héctor López, “Esteban Arredondo capeador y capitulero”, en *El Comercio*, Lima 22 de febrero de 1990.

Marcelo- tuvieron lugar las elecciones para el colegio electoral de provincia. Ese día Estaban Arredondo y otros capituleros de Echenique tuvieron señalaba participación *tomando* las mesas en las plazuelas de San Sebastián y San Marcelo. Sus lugartenientes Agustín Buitrón “el Largo”, Bartolomé Pizarro “Boca de Fuego”, Marcos Reinoso y otros más, a la cabeza de hombres reclutados en Chancay, pusieron en fuga a los vivanquistas y capturaron también las mesas de las otras plazuelas”. En Santa Ana la lucha fue muy dura, hubo más de treinta muerto de uno y otro bando. Los heridos eran llevados a sus casas de connotados vivanquistas o echeniquistas para recibir atención de urgencia y trasladar a los más graves al hospital. Una de las víctimas más connotadas de esta verdadera batalla fue el general Idefonso Coloma, muy amigo del Presidente Castilla” (pág. 19).

Muchos parlamentarios atribuían las causas de los desórdenes, a la excesiva amplitud del sufragio y el sistema indirecto, al cual los constituyentes de 1860 habían regresado después de las negativas experiencias de los años anteriores. Algunos considerabas este sistema como inferior desde un punto de vista teórico, al abrir cómodos caminos al abuso; no obstante, la mayoría estaba convencida de que era necesario, considerando el gran número de ciudadanos, y entre ellos los indígenas, que tenían derecho al sufragio.

Gabriella Chiaramonti (2002) señala que no “existía en el país una dimensión capaz y con voluntad de empadronar a la población”, y de esta manera poder examinar su consistencia, su distribución y de controlar adecuadamente los procesos que se desarrollaban en el territorio nacional. Tal situación dejaba abierta la posibilidad de que, considerando los múltiples nexos que las leyes establecían entre el número de habitantes y los distintos momentos del proceso de construcción de la representación, este último pudiera ser distorsionado aun antes de la emisión del sufragio (por lo tanto, antes de que ocurrieran actos violentos e irregularidades) y fuera en realidad incontrolable desde el centro del sistema político.

Loa ánimos eran exacerbados por la confrontación de los simpatizantes. El poder de la “oratoria cívica”, como la ha denominado Eduardo Torres Arancivia (2012), en un mundo donde la palabra dicha tenía un impacto

mayor porque era tanto un aglutinador de masas así como un detonante para la movilización y los desmanes. Valiéndose de Juan Espinoza, y su ya antes citado *Diccionario para el pueblo*, reconstruye en parte el impacto que los discursos tuvieron en el siglo XIX, y es que Espinoza da muchas pautas de lo que un orador debe hacer de cara a comunicarse con el hombre “de la pampa grande”. En los términos de Espinoza (2001), el buen orador debe:

“Conocer bien las pasiones, creencias, espíritu y tendencias de los individuos a quienes se diri[g]e para *removerlos*, y si fuera preciso descender al lenguaje vulgar, que descienda enhorabuena, siempre que sea un *medio de persuasión*, pues a menudo el lenguaje fino de la sociedad ilustrada es confuso para la multitud, y sus flechas, de puntas demasiado agudas, van a romperse en la corteza algo dura del hombre vulgar. No hay elocuencia que valga con él que no nos comprende” (pág. 573).

Juan Espinoza, coronel liberal que llegó al Perú a combatir por la Independencia, era un agudo lector de la realidad social y política de su época asolada por la presencia de los caudillos militares. Entendía a la perfección que el cambio de época demandaba en los ilustrados un cambio radical en su modo de vincularse con la población popular, “se trata de convencer al pueblo, llegar a él, moverlo a la acción” (Torres Arancivia 2012: 94).

Estamos aquí ante los inicios del “discurso ideológico” tan característico de los años treinta del siglo XX, y que Emilio Candela (2004) define como:

“(...) elaboraciones intelectuales y emocionales sobre la naturaleza del hombre y la sociedad, que proponen un plan organizativo de la misma y al mismo tiempo justifican las acciones que tengan que realizarse para cumplir estos fines” (p. 158).

Las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales en 1893 fueron muy disputadas por las partes, con niveles sorprendentes de movilización para los mítines y clubes locales de partidos (hasta el 30% de los varones adultos en los departamentos y Provincias para cada partido). Una nueva ley electoral en 1892 se salió por la culata y creó un caos considerable. Tanto

las campañas como los procedimientos de las jornadas electorales fueron acompañados de fraude (supresión de votantes, relleno de urnas, etc., prácticas que varían considerablemente de una provincia a otra) y violencia. Aunque asombrosamente muchos ciudadanos de clase media y baja participaron, hubo un cinismo generalizado y frustración sobre el sistema electoral.

4.3.2. El sistema electoral del Siglo XX

Según Sinesio López (2016) desde la perspectiva electoral existen dos grandes etapas claramente diferenciadas en el Perú del siglo XX: la participación restringida en el Estado oligárquico (1895-1978) y la del sufragio universal, a partir de 1980. La participación restringida asumió dos formas: la social y la electoral de 1896 para participar en los procesos electorales. De ese modo, quedaron fuera de la participación electoral la mayoría de los campesinos y de los indígenas. En el contexto de la época, caracterizado por una fuerte presencia de indígenas (el 57,59% del total de los habitantes y el 56,80% de los hombres), la introducción de la alfabetización como único requisito exigido para el ejercicio del sufragio asumió una connotación de discriminación tendencialmente étnica, confirmada por el hecho de que en el curso de los debates que precedieron a la aprobación de la reforma en cuestión, casi constante fue la identificación entre analfabeto e indio.

La actitud de la mayoría de los legisladores de la época queda bien representada por las palabras pronunciadas por Manuel A. Bejarano, senador del departamento de Puno: aunque era contrario a la reforma, este afirmaba que “si la disposición “rijiera” solamente para las poblaciones indígenas del Sur de la República, sería aceptable, porque verdaderamente tenemos allí masas de pueblo inconsciente”. Y continuaba:

“pero cuando veo que, felizmente, en el Perú los individuos que, aun cuando no saben leer y escribir, tienen perfecto criterio para determinar de los intereses del País, creo que sería arrebatárles una franquicia que no hay derecho para

quitársela, bajo ningún aspecto, desde que todos formamos una comunidad política¹³²”.

Para Bejarano, no saber leer ni escribir no era entonces en sí una causa total de incapacidad para entender, aunque para gran parte de la población indígena el analfabetismo derivaba en dicha incapacidad. Los electores con la aplicación de esta reforma quedaron reducidos al 2% de la población

4.3.3. La Junta Electoral Nacional de 1896

La iniciativa de dar una nueva ley electoral fue propuesta por Nicolás de Piérola, así, el 1 de octubre de 1895, el Ministro de Gobierno Antonio Bentín envió a la Cámara de Diputados un proyecto para la reforma electoral, creando un Gran Jurado central encargado de los procesos electorales, con el objetivo principal de que las elecciones políticas “reflejaran la voluntad de la población” y que el “voto fuera directo”.

Roisida Aguilar (2002) hace un pormenorizado recuento de la aprobación de este proyecto. El Gran Jurado debía componerse de siete miembros: tres designados por el Poder Legislativo, tres por el Poder Judicial y uno por el Ejecutivo. La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados emitió un dictamen en mayoría rechazando el proyecto del Ejecutivo y alcanzando uno nuevo. Este nuevo proyecto fue revisado por la Cámara de Senadores. En el dictamen de mayoría de la comisión especial de dicha cámara, se argumentó que el proyecto de la Cámara de Diputados privilegiaba la intervención de los mayores contribuyentes en la práctica electoral. Finalmente, se formó una comisión especial integrada por los parlamentarios: Pedro Leguía y Martínez, J. Rivadeneyra, Wenceslao Valera, Jorge Polar y Julio Castañeda para dictaminar la reforma electoral. Dicha comisión nuevamente presentó al legislativo una nueva propuesta tomando en cuenta el proyecto del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados e introduciendo importantes reformas: mantuvo el voto directo, hizo obligatoria

¹³² Congreso Ordinario de 1895, Diario de los Debates de la H. Cámara de Senadores, Lima, Imprenta de “El País”, 1895, 445.

la publicación durante tres días seguidos de los resultados y candidatos elegidos, sancionó la representación de las minorías, estatuyó la jurisdicción de la Corte Superior de Lima, entre otros. El diputado García Rosell estaba a favor de la reforma argumentando que:

“Hace 70 años que el país se agita periódicamente, experimenta conmociones frecuentes y sufre hondas perturbaciones, simple y llanamente, porque no ha tenido la buena fortuna de disponer de una ley electoral que garantice el sufragio y que pueda satisfacer las aspiraciones legítimas de todos los partidos¹³³”

El nuevo proyecto electoral fue largamente discutido en la Cámara de Diputados tanto en la legislatura ordinaria como extraordinaria de 1895 y en la ordinaria y extraordinaria de 1896. Con fecha 29 de octubre de 1896 el presidente de la República Nicolás de Piérola, frente a la demora, envió un mensaje al Congreso manifestando que:

“(...) la elección [es] la base sobre la que descansa todo entero nuestro edificio político. Falsearla en cualquier forma, es, por lo mismo, minarlo desde sus cimientos, pervertir las instituciones, imposibilitar la ordenada y progresiva marcha del país, sustituir el imperio de la ley y del derecho, por la opresión en los que mandan y la rebelión en los que obedecen; es atentar contra la vida nacional y el bienestar de los ciudadanos de la manera más grave y trascendente...” Más adelante “Sólo resta pues, que [la Cámara de Diputados]... decida si acepta esas modificaciones, votando o no su insistencia...” (Basadre, 1980: 51).

Finalmente, el proyecto fue aceptado y aprobado, poniendo fin a las “tomas de mesas” y a la autocalificación parlamentaria del pasado electoral, en noviembre de 1896, estableciéndose la Junta Electoral Nacional como órgano centralizado de las elecciones encargado de los procesos electorales.

Como recuerda Peralta (2011) en diciembre de 1896, la coalición gubernamental (conformada por el Partido Demócrata y la Unión Cívica) y el Partido Civil acordaron por consenso el nombramiento de los nueve

¹³³ *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados* (Congreso Ordinario) T. II. Lima: Imp. El Tiempo. 1896. p. 687. Citado en Aguilar 2002: 11, nota 6.

integrantes de la JEN. Dos de sus miembros fueron propuestos por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, cuatro por el Poder Judicial y el último por el Gobierno. La autonomía de la JEN comenzó a resquebrajarse apenas a los tres años de su creación. La renovación de los miembros del máximo órgano electoral coincidió con la división del Partido Demócrata. El pleito entre Piérola y Billinghurst impidió que el Gobierno nombrara al noveno miembro por el veto ejercido en el Parlamento por la facción billinghurstista. La imposibilidad de aprobar el sorteo de las juntas escrutadoras a nivel nacional debido a la ausencia del noveno miembro obligó a Piérola a disolver este organismo el 24 de abril de 1899. En el mismo decreto, el mandatario ordenó que la confección de las mesas electorales para la próxima elección presidencial recayera en todos los departamentos en los ciudadanos calificados como mayores contribuyentes.

Tenía tres tipos de facultades:

a) Registrales: Se encargaba de elaborar el Registro General de la República sobre la base de los registros de las Juntas Electorales de los departamentos. Publicarlo, custodiarlo y enviar copias a las juntas electorales de los departamentos para su verificación con los originales. Remitir una copia del registro electoral a la Secretaría del Congreso para el escrutinio de las elecciones de presidente y vice-presidentes del país. Realizar anualmente las correcciones y enmiendas del Registro Electoral y clasificarlos por departamentos, provincias y distritos.

Cuidar de la impresión de los títulos electorales (estos títulos debían estar firmados por el Presidente y Secretario de la Junta Electoral Nacional y timbrados con el sello de armas de la República), y distribuirlos por medio de las juntas de su dependencia en toda la República después de formado el Registro General de la República. Renovar cada cinco años los títulos de elector y distribuirlos a los ciudadanos por medio de las juntas provinciales

b) Electorales: Se encargaba de elegir a los presidentes de las juntas electorales departamentales entre los residentes en la capital de cada

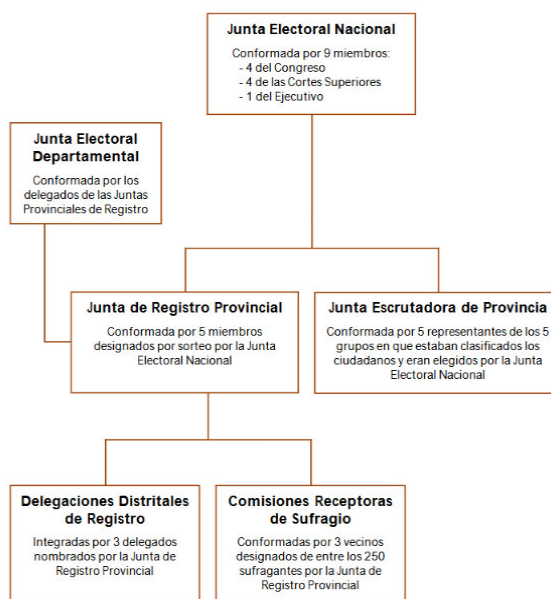
departamento. Sortear, cada vez que el Ejecutivo convocara a elecciones, cinco personas de entre los veinticinco mayores contribuyentes de cada provincia para que conformaran las Juntas de Registros Provinciales. Conservar una copia auténtica actualizada de la matrícula de contribuyentes de la República expedida por el Ministerio de Hacienda. Sortear cinco miembros de los diez elegidos por los ciudadanos de cada provincia para formar la Junta Escrutadora

c) Disciplinarias: Hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios electorales por procedimientos irregulares en el momento de la conformación de los registros electorales o en el proceso de las elecciones. Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre las personas que intervengan con carácter oficial en los actos electorales, imponiéndoles multas según los casos, entregándose dicha multa a la Municipalidad de la provincia donde se cometieron dicha infracción.

En el siguiente cuadro podemos apreciar como estaba constituida:

CUADRO VIII

ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL 1896 - 1912



Fuente: Aguilar 2002: 18.

Según Jorge Basadre, durante el período de vigencia de la Junta Electoral Nacional 1899-1912, el Partido Civil, teniendo de aliado al Partido Constitucional, comenzó a monopolizar la Junta Electoral Nacional con excepción de los años 1899 y 1911, porque manejó los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Los dos representantes de la mayoría del Congreso estuvieron siempre al servicio del Gobierno y los dos de la minoría en muchas ocasiones también fueron absorbidos por el Gobierno, lo mismo sucedió con los representantes de las Cortes Superiores (Basadre, 1980: VIII, 57).

4.3.4. El moderno sistema electoral 1931

Desde un plano de vista formalista y legalista, el sistema electoral se inicia en su sentido moderno en 1931, y en buena cuenta es ahí donde surge el sistema institucional que llegará a nuestros días. Como nos lo recuerda Domingo García Belaunde (1988) tras la caída de Leguía, el gobierno provisional de David Samanez Ocampo, firmó una resolución mediante la cual designó una Comisión ad honorem, integrada por jóvenes intelectuales de clase media¹³⁴, quienes a pesar de no ser radicales comprendieron la necesidad de ampliar las tan restrictivas márgenes del voto. El proyecto de Ley tenía que recaer sobre las siguientes bases: a) poder electoral autónomo, b) representación de las minorías, c) voto secreto y obligatorio, y, d) organización científica de los registros electorales. La comisión presentó un proyecto que con algunas variantes, pasó a ser decreto ley que promulgado poco tiempo después.

Con esta comisión se dio un paso adelante en la tecnificación del Registro Electoral, del que se carecía de antecedentes. Tuvo a su cargo esta tarea Alberto Arce, quien trabajó con maquinas tabuladoras muy avanzadas para la época, y que contribuyó a poner en marcha un Registro Electoral verdaderamente técnico. Así con el Decreto Ley N° 7177, “Estatuto Electoral” del 26 de mayo de 1931, se consagraron las condiciones básicas

¹³⁴ Entre los miembros de esta Comisión destacaban jóvenes intelectuales, que posteriormente destacaran en diferentes áreas de la política y la cultura, entre ellos: Luis E. Valcárcel, José Antonio Encinas, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, César Antonio Ugarte, Alberto Arca Parro, Federico More, Carlos Manuel Cox, y Carlos Enrique Telaya.

del voto —tales como el carácter secreto—, se establecen legalmente las características de la cédula electoral y se crea el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Aparece el JNE, como órgano máximo electoral, presidido por el fiscal más antiguo de la Corte Suprema de la República, integrado por un delegado de cada una de las cuatro universidades nacionales y cuatro delegados de los jurados departamentales elegidos por sorteo. Tal Jurado tuvo amplias facultades, y resultó innovador, pues a diferencia de lo ocurrido en épocas anteriores, no existió participación alguna de los poderes del Estado; es decir, carecieron de intervención los poderes Ejecutivo y Legislativo, y el Poder Judicial sólo lo hizo a través de su fiscal más antiguo.

En cuanto al voto, éste se estableció como obligatorio y secreto a partir de los 21 años. Los requisitos referentes a la propiedad fueron eliminados¹³⁵. No prosperó la idea, defendida por algunos sectores del Congreso Constituyente de 1931, de otorgar el voto a los menores de 18 años y a las mujeres. Se prohibió también, contrariando una antigua tradición republicana el voto del clero. La ampliación del electorado fue solo parte del objetivo del Nuevo Código, pues también se apuntaba a hacer más transparente el poder electoral. Una última reforma de importancia fue que se consagró la representación de las minorías desde entonces.

Con esta Ley Electoral, los partidos políticos pudieron encontrar masas electorales y en los comicios de 1931 participarían más votantes que en cualquier otra elección anterior.

4.3.5. La Ley N° 12391

Promulgada el 7 de setiembre de 1955 con ella se reconoció el voto de la mujer en elecciones políticas, permitiéndosele ejercer este derecho a las mujeres que supieran leer y escribir.

¹³⁵ Esta eliminación de requisitos de propiedad significó que el electorado había crecido considerablemente, aunque millones de peruanos siguieron al margen del proceso electoral.

4.3.6. Ley Nº 14250

El Estatuto Electoral del 5 de diciembre de 1962 consagra el sufragio público en mesa y se establece la cédula australiana, con secciones que incluyen la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Este era el diseño institucional en el periodo que analizamos.

CAPÍTULO 5

POPULISMOS Y POPULISTAS: LA EXPERIENCIA PERUANA

Los personajes de los que nos ocupamos en este acápite y que conforman la materia prima de nuestra reflexión sobre el populismo, dejaron una impronta en la historia nacional que se extiende a través del tiempo hasta nuestros días, generando simpatías y antipatías, hecho que ha desdibujado, en cierta manera, el conocimiento histórico que tenemos sobre sus gestiones gubernamentales.

Así, sobre Nicolás de Piérola existe una nutrida bibliografía, mayoritariamente biográfica tanto apologética como opositora. La primera explora sus cualidades de estadista y don de mando, la segunda critica su autoritarismo y corrupción. Solo en años recientes la historiografía nacional ha redescubierto al personaje con estudios más objetivos sobre su gobierno. Mucho se ha escrito sobre Piérola, pero circunscrito a la esfera biográfica, con un tinte laudatorio o recriminador de su accionar político. “Dictador”, “oportunista”, “traidor”, “ambicioso” y “usurpador” son los epítetos que su periodo 1879-1881, dejó para sus críticos de la época e investigadores contemporáneos. Los adjetivos de “estadista”, “califa” y “regenerador”, quedaron para su periodo 1895- 1899. Su biografía interesante y azarosa aún está a la espera de estudios detallados sobre su labor gubernamental y su impacto en la política republicana.

Sobre Guillermo Billinghurst, su breve periodo de tiempo como gobernante, fue la causa de la ausencia de trabajos amplios sobre los hechos políticos acaecidos sobre su mandato. Si bien desde Basadre, tenemos información y se da cuenta de los pormenores de su polémica llegada al poder, solo aparecieron estudios amplios y específicos de su gestión, a partir de la década de los noventa, de la mano de la historia social y la sociología

histórica, para posteriormente ser estudiado por la historia y la ciencia política.

La procedencia militar de Luis A. Sánchez Cerro, en cierta manera redujo la perspectiva de análisis sobre su gobierno, pues se le consideraba como un aliado natural de la oligarquía que usaba un discurso cercano al populismo pero con un matiz claramente conservador y de derecha. En la década de los noventa, se inicia una exploración de su partido la UR, la recepción de su ideología entre las masas populares, y la posterior mutación del UR hacia el fascismo.

La imagen de Fernando Belaunde Terry, está marcada por la alta valoración de su espíritu democrático en tiempos de dictadura así como por duros cuestionamientos hacia su incapacidad de frenar la corrupción durante su primer gobierno. Elegido nuevamente presidente en 1980, le tocó afrontar una crisis económica y al terrorismo, fue desbordado por ambos. En el nuevo milenio tras la nueva vuelta a la democracia, su imagen como garante de democracia fue alzada, pero a la par la imagen de la violación de derechos humanos durante su segundo gobierno. Pese a todo lo señalado, salvo su política urbanística y los hechos de corrupción acaecidos durante sus gobiernos no hay mayores aspectos de su gestión gubernamental estudiados a profundidad, lo que constituye un serio vacío historiográfico.

Juan Velasco Alvarado, cabeza visible y más recordada del golpe de Estado de las FF. AA. de 1968, goza, a diferencia de su contraparte en aquel suceso Fernando Belaunde, de amplios estudios sobre diversos aspectos de su gobierno y legado.

Finalmente, el primer gobierno de Alan García Pérez, es una espina dolorosa en la historia nacional, difícil de abordar desde una perspectiva crítica, pues se entrecruzan sentimientos de frustración, dolor y odio. El desastre político, económico y social en que dejó al país han restado profundidad a los estudios en cuanto a su gestión de gobierno. Y es que su

presidencia fue desbordada por la crisis económica y la aparición de los movimientos terroristas.

Todos ellos fueron calificados como populistas, pese a que sus programas y estilos políticos guardaban importantes diferencias. Irrumpieron en la escena política nacional en un periodo de profunda frustración social hacia las promesas incumplidas de la modernidad y de una elite política indiferente a sus problemas. Ellos tuvieron la suficiente habilidad para adaptarse a las expectativas de la población y de generar por breves momentos alianzas interclasistas y pluriclasistas. Revisemos las principales características de estos gobiernos.

5.1. Nicolás de Piérola (1895-1899). “Protopopulismo”, la Herencia Caudillista.

Nació en el seno de una familia aristocrática arequipeña, hijo de Nicolás Fernández de Piérola y Flores¹³⁶ y de Teresa Villena y Pérez. Se involucró en la política en 1869, año en que fue nombrado ministro de Hacienda durante la administración Balta, a los 30 años de edad, y tuvo en sus manos la negociación del controversial contrato Dreyfus. Este caso en particular lo enfrentará una vez en el poder en 1879 con los medios de prensa de la época.

5.1.1. El contexto político

El escenario político en que surgía Piérola tenía una base social conformada por los artesanos, el pequeño grupo de trabajadores modernos del país, los pequeños comerciantes, los empleados comerciales de bajo nivel, los empresarios de transporte y los pequeños agricultores, especialmente en la costa. Estos grupos por largos años habían buscado sin éxito representación

¹³⁶ Lourdes Leiva (1993) nos dice que la genealogía de “El Califa” proviene por línea paterna de asturianos y navarros; y por línea materna, de flamencos y castellanos. Su padre (Camaná, 1788-Chorrillos, 23 de enero de 1857) era naturalista, abogado y político. Fue nombrado Ministro de Hacienda (1852-1853) durante el gobierno del general José Rufino Echenique.

política y estaban profundamente decepcionados con la política de las élites liberales. Esta creciente base social requería de un nuevo estilo y discurso político.

Desde finales de la década de 1870, el partido civil se volvía un partido más impopular entre las masas urbanas, en especial por el mismo sector social que se adhirió con entusiasmo a su proyecto político. El partido civil era visto como un grupo plutócrata insensible a los problemas de las masas populares, conocido en la época como “la argolla”. Piérola había sido capaz de crear algo como un “nimbo”, una “leyenda”, una “mitología”, que le permitía conectar con el pueblo para quitarle terreno a un enemigo común. Por irónico que parezca, el artesano virtuoso, trabajador, comerciante o pequeño agricultor que sufrió las consecuencias de los tratos especulativos de la élite política guanera del Perú apoyó con entusiasmo la campaña política de Piérola como ministro de Hacienda entre 1869 y 1871, quién estaba en el corazón mismo de esas maniobras especulativas contra los civilistas

Este período vio un fuerte aumento del nacionalismo entre los actores políticos, como consecuencia de la devastadora pérdida de la Guerra del Pacífico. Los nacionalismos variaron considerablemente: de puramente retórica, preocupados por recuperar a Tacna y Arica de la ocupación chilena y la preparación militar contra las repúblicas vecinas (todas vistas con gran desconfianza), al economía (proteccionismo), social (anti-inmigración) y más ampliamente reformista. Los políticos tuvieron que expresar algún tipo de nacionalismo o afrontar fuertes ataques de los adversarios y de la prensa.

El peso político de varias regiones parecía estar cambiando. Mientras hasta la década de 1850 los principales conflictos se llevaban a cabo principalmente en el eje entre Lima y el sur, desde finales de la década de 1860, y cada vez más desde la década de 1880, el norte, especialmente la costa norte, pareció ser más importante. En buena medida esto fue un reflejo de la creciente importancia económica de la región (azúcar, algodón, petróleo). La costa norte sería también la primera región en la que los

sentimientos antiimperialistas serían expresados por los políticos (ya en 1894-1895), lo que confirma la labor de Peter Klarén a partir de los años setenta. Este aumento de la centralidad del norte puede medirse tanto en la región Número de clubes electorales durante campañas electorales y en movilizaciones militares durante guerras civiles (1883-1885 y 1894-1895)

Las élites claramente trataron de permanecer exclusivistas, y Piérola compartió eso. Por ello Piérola representa el intento de alguien que entiende plenamente su tiempo como una transición de la política oligárquica restrictiva y excluyente a una la política de masas. Hace uso de estos nuevos grupos sociales para su propia constelación de poder, pues entiende la política como un espacio jerárquico, reservado para la oligarquía.

5.1.2. El liderazgo y la construcción del héroe

Era un hombre de enorme vanidad, un sentido de misión, de absoluta convicción en su capacidad de salvar al Perú: que de hecho podía representar al Perú, ser la esencia del Perú y encarnar lo que el pueblo quería. Era una figura muy controvertida: la abrumadora mayoría de las élites después de la Guerra del Pacífico lo odiaba, lo consideraba un forastero, un rebelde, no alguien con quien querían trabajar juntos. Es por eso que en las postrimerías de la Guerra del Pacífico, entre 1883 y 1886, el general Andrés Avelino Cáceres, que se convirtió en su principal adversario, pudo unir quizás el ochenta por ciento de las élites detrás de él, y Piérola en ese momento sólo mantuvo el control entre una pequeña minoría de familias de elite.

Fue su energía ilimitada, su confianza en sí mismo y su valentía aparentemente desinteresada en esta lucha, su disposición a arriesgarse en enfrentamientos militantes que hicieron su imagen poderosa y creíble para muchos. Tal política de simbolismo creó popularidad a través de un estilo particular de política ya través de gestos, sin vinculación automática al análisis razonado de propuestas de políticas específicas. La construcción popular de la imagen del caudillo del califa no ocurrió de la noche a la

mañana y sufrió las violentas oscilaciones de la opinión pública peruana asociada con la inestabilidad política de la era.

La imagen de un caudillo intrépido fue alimentada durante las “campañas revolucionarias” de los años 1870, contra el gobierno de Pardo y Prado, especialmente el incidente de Huascar de 1877, en el que Piérola y sus seguidores se apoderaron del más moderno buque de guerra de la marina peruana. Pacocha contra el Escuadrón Británico del Pacífico Sur del Almirante Horsey. Piérola apareció como el intrépido y heroico defensor del honor y la soberanía nacionales, mientras que la imagen del presidente Mariano Ignacio Prado fue gravemente dañada por llamar a la ayuda británica contra un enemigo doméstico.

Se convirtió en una figura incesantemente discutida en la prensa y en chicherías en 1872, durante las audiencias del senado por cargos de malversación financiera en cuanto a su mandato como ministro de finanzas de 1869 a 1871. Sus partidarios y defensores entonces lo retrataron como el joven estadista visionario, enérgico y revolucionario “que embarca al Perú en tremendas proyectos y rupturas con los moldes podridos y antiguos de las finanzas públicas”.

En diciembre de 1879, después de la partida del Presidente Prado para comprar armas en Europa Momento desesperado de la Guerra del Pacífico contra Chile, Piérola, de cuarenta y un años, se le apareció a un amplio público en Lima y en las provincias como el único hombre capaz de salvar a la nación. En el mismo momento en que se declaró dictador del Perú en Lima en un golpe sin derramamiento de sangre, los aparceros afroperuanos que se alzaban en las haciendas algodoneras del valle de Chincha para mejorar las condiciones de trabajo y contra la competencia laboral de trabajadores contratados chinos invocaban el nombre de Piérola Protestas En ese momento ya había adquirido la imagen del líder populista que se oponía a la argolla egoísta de los plutócratas civilistas, a quienes los amplios grupos populares urbanos y rurales se hacían responsables de los desastres económicos y militares del Perú desde el estallido del boom del guano en

1876. El desastroso El resultado de la guerra inevitablemente causó serios daños a esta imagen carismática. Sin embargo, su prudente maniobra política durante sus "años en el desierto" le permitiría recuperar la confianza de amplios sectores de la ciudadanía políticamente activa después de una década, un dramático cambio de fortuna para los ex presidentes peruanos que luego se han convertido en un sello distintivo La cultura política de la nación.

Sus modales y su trato de la gente subrayaban tanto la superioridad aristocrática como el genuino cuidado y calidez para el hombrecito; Rutinariamente se dirigía a las personas de clase baja como "hijito" o "hijita", como una figura paternal benevolente. Piérola y su círculo íntimo conscientemente promovieron y reforzaron esta imagen a través de los medios publicitarios de la época. Como la mayoría de los políticos latinoamericanos posteriores a la independencia, consideraban a la prensa como una herramienta fundamental para promover su visión de la república e inclinaban a la opinión pública hacia su partido y líder. Piérola, convencido de la presión de sus adversarios, Ser oído: en sus propios papeles partidarios, como *La Patria* y *El País*, en refutaciones publicadas contra acusaciones, en frecuentes entrevistas aparecidas en periódicos nacionales y extranjeros, en folletos y en los manifiestos oficiales del partido sobre los principales acontecimientos políticos difundidos a la prensa. A diferencia de otras figuras políticas importantes del Perú republicano, Piérola no dejó libros ni ensayos sobre amplios temas de interés público. Su producción considerable de textos estaba totalmente centrada en ganar batallas políticas, derrotando una interminable cantidad de juicios contra sus adversarios políticos y convenciendo a la nación de sus esfuerzos incansables para crear una república virtuosa y efectiva. Tan importante para su aceptación por los grupos populares puede haber sido las demostraciones del partido cuidadosamente organizadas y las recepciones triunfales después de las campañas o al regresar de sus exiliados repetidos en el extranjero en el que su retrato se distribuiría en miles de copias de antemano. Tanto en textos como en rituales públicos, Piérola y su partido

destacaron la unidad entre el caudillo y el pueblo peruano. Utilizaron la propaganda política para fortalecer el atractivo de Piérola.

5.1.3. El Partido Demócrata

La construcción del Partido Demócrata fue un aspecto especial y central de la propaganda y la movilización necesarias para el éxito político en el Perú de finales del siglo XIX. El partido fue fundado el 2 de septiembre de 1884, como facción separatista del Partido Nacional, partido político que apoyaba al gobierno de facto del General Miguel Iglesias en el Convento Nacional (primer congreso de la posguerra). Los disidentes rechazaron la aprobación del Tratado de Ancón de 1883.

En su manifiesto público del 4 de septiembre, el nuevo partido -más allá de rechazar el Tratado de Ancón- pidió el fin de la guerra civil entre el gobierno de Iglesias y las fuerzas que siguieron al general Andrés Avelino Cáceres que intentaron expulsar a Iglesias y deshacer el tratado a través de un Campaña militar de estilo guerrillero. El manifiesto también pidió la convocación de una asamblea constituyente a través de elecciones directas que debían redactar una nueva constitución. En contraste con el sistema electoral de dos niveles basado en colegios electorales provinciales que todas las leyes electorales de la nación habían empleado hasta entonces, las elecciones directas para el Congreso y el presidente seguirían siendo un plato central del partido Demócrata de aquí en adelante. Piérola fue elegido como jefe del nuevo partido desde el principio. A los pocos días de su fundación, Piérola también lanzó el propio periódico partidista de Demócratas, *El País*. En el momento de su fundación, el nuevo partido no era más que un pequeño círculo de políticos - menos de veinte - leales a Piérola. El trabajo en serio para construir una organización nacional del partido parece haber comenzado sólo en enero de 1886, después de la victoria de la guerra civil de Cáceres, cuando Piérola regresó de otro exilio de cinco meses que le impuso el gobierno de Iglesias. En una atmósfera en la que tanto la prensa cacerista como la civilista lanzaron una campaña sostenida contra él por la corrupción, la malversación financiera y la

conspiración de una nueva revolución, Piérola y su pequeño círculo de seguidores emprendieron una masiva campaña de escritura de cartas, cara a cara y la movilización a través de los pocos periódicos que simpatizan con su causa para construir las células del partido en todas las provincias de la república.

Dadas las extraordinarias habilidades administrativas y organizativas de Piérola, así como su impulso misionero y su energía para “salvar al Perú”, a principios de 1890 el partido se había convertido en una organización con miles de miembros, cientos de células del partido local y muchos más simpatizantes a lo largo de las regiones costeras y montañosas del Perú.

Era un partido de arriba hacia abajo, donde la autoridad provenía de Piérola y del comité central hasta los comités departamentales. Las decisiones de política y estrategia fueron tomadas en gran parte por el propio Piérola, en consulta con sus aliados más cercanos. La función de las células partidarias era crear apoyo para esas posiciones en toda la República y movilizar a los simpatizantes tanto para las campañas electorales como para las campañas potenciales de la revolución armada.

En los primeros años de la construcción del partido, Piérola personalmente o el Comité Central en Lima escribiría a cientos de notables amistosamente al partido en una provincia o distrito dado que los cargarán con comités fundadores. Entonces se esperaba que estos nuevos partidarios contrataran a cinco nuevos miembros para el partido en su jurisdicción, y cada uno de estos cinco debían reclutar a cinco nuevos miembros: claramente la visión de un partido altamente centralizado y jerárquico. En 1889, Piérola escribió borradores de las Bases de organización del Partido Demócrata y una Declaración de principios del partido de cincuenta páginas ; después de que el comité central los aprobara con pequeños cambios de redacción, ambos fueron publicados y distribuidos a todos los miembros del partido y al público. Entre principios de 1886 y 1888, Piérola hizo abstención en las campañas electorales -especialmente en las elecciones presidenciales de junio de 1886- un plato central de Demócrata políticas partidarias. Argumentó que las fuerzas que entonces dominaban la escena política

peruana representaban el viejo y roto régimen basado en la fuerza y la corrupción y que unirse a la lucha política en ese momento sometería a los Demócratas a los mismos estándares podridos de sus enemigos. Su partido, que no se cansaba de proclamar, representaba una reforma radical del sistema político, basada en elecciones libres y justas y en el estado de derecho. Así, los Demócratas tendrían que esperar a entrar en la lucha por el poder político hasta que existiera un marco decente para las elecciones. Además, después de haber soportado siete años de guerra, ocupación y guerra civil, el Perú ahora no podía permitirse pasar por un polarizado ciclo electoral. En suma, el Partido Demócrata abnegadamente se abstendría de la política electoral, por el bien del país.

5.1.4. El Gobierno de Piérola (1895-1899)

Tras la caída del General Andrés Avelino Cáceres, después de una breve guerra civil en 1895, se convoca a elecciones generales para julio de ese mismo año. Gracias a la coalición entre el Partido Civil y Demócrata, el único candidato en dichos comicios fue Nicolás de Piérola.

Peter Klarén (2004) señala que Piérola entendió “que si el respaldo de la emergente oligarquía sería imposible gobernar” (pág. 255). Con la asociación se lograba un objetivo común “excluir al Ejército” de la política” (Pease y Romero 2013: 48), lo cual beneficiaba a ambos bandos. Por ello una de sus primeras medidas fue la profesionalización del ejército. Con ello los soldados dejaron de ser la guardia personal de los caudillos y pasaron a formar un corpus organizado subordinado al Ejecutivo. La reorganización de la Escuela de Chorrillos y la contratación de una misión francesa fueron hechas con ese objetivo en mente.

El primer gabinete fue liderado por Antonio Bentín, este gabinete cuyas principales figuras pertenecían al Partido Demócrata o le eran cercanos, no llegó ni a fin de año al ser censurado antes de fin de año. Se creó un nuevo Ministerio, el Ministerio de Fomento, con lo cual el Estado marcaba el inicio de una sistemática intervención estatal en el desarrollo social y económico

del país. No obstante hay que resaltar, que el primerísimo objetivo fue mantener presupuestos balanceados y libres de desudas, por lo que las inversiones serán discretas. Asimismo, Piérola hizo importantes esfuerzos por uniformizar el aparato tributario.

5.2. Guillermo Billinghurst: “El pan grande y los orígenes del populismo”

Guillermo Enrique Billinghurst Angulo nació en Arica el 27 de julio de 1851. Era hijo de Guillermo Eugenio Billinghurst Agrelo, natural de Buenos Aires; y Belisaria Angulo Tudela, (Arica, 1830–20/2/1866). Provenía del núcleo oligárquico de 1895, pero como acertadamente señala Sergio González (2000) Billinghurst fue un “hombre de frontera”. Nació en Arica y vivió su adolescencia y madurez en Iquique; estudió en Valparaíso e hizo su carrera política en Lima. Su pensamiento social y político fue también de frontera; comprometido con la participación de las emergentes clases populares y en oposición al sector hegemónico de la oligarquía peruana. De profundo espíritu nacionalista, fue uno de los más cercanos e importantes colaboradores de Nicolás de Piérola, a quien acompañó en sus actividades subversivas, así como en las demás acciones del Partido Demócrata. Participó en la intentona revolucionaria contra el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle.

El 24 de septiembre de 1912 asumió la Presidencia de la República Guillermo Billinghurst, electo para un período constitucional de 4 años (1912-1916). El Congreso lo controlaba la mayoría conformada por leguístas y civilistas.

Cabe precisar que el Poder Legislativo se renovaba por tercios cada dos años. Entre las principales obras del gobierno de Billinghurst podemos mencionar:

- Construyó viviendas económicas para la clase obrera.

- Aprobó el primer decreto sobre la Reglamentación de Huelgas (24/1/1913).
- Decretó la jornada de ocho horas para los trabajadores del Muelle y Dársena del Callao (10/3/1913).
- Creó la Sección Obrera, encargada de la organización de la estadística industrial y obrera, y la de reunir todas las informaciones concernientes a la producción de las industrias y de la agricultura.
- Estableció la Inspección General de Trabajo, encargada de las estadísticas laborales, el estudio de los salarios y las condiciones de vida de los obreros.
- Creó el departamento de Madre de Dios (Ley N° 1782 del 26/12/1912), compuesto de las provincias de Tahuamanu, Tambopata y Manu.
- Estableció la Compañía Recaudadora de Impuestos (Ley N° 1566, 28/3/1912).
- Se construyó el ferrocarril de Lima a Chilca.
- Mejoró los servicios portuarios del Callao.
- La Empresa de Agua Potable de Lima pasó a la administración directa del Estado.
- Estableció la enseñanza de Religión e Historia Sagrada en las escuelas del país.
- Estableció la Escuela de Enseñanza Doméstica.
- Buscó el acercamiento entre obreros peruanos y chilenos.

Bllinghurst fue alejándose de los leguistas, generándose un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo “no era que detestaba al Legislativo, sino que estaba contra ese Parlamento de mayoría civilista y leguista”. En horas de la noche del miércoles 23 de julio de 1913 la casa del doctor Rafael Villanueva, Presidente del Senado Nacional, sufrió un atentado con un petardo de dinamita, lo que originó heridas a un empleado y algunos daños materiales. Al día siguiente manifestantes gobiernistas ingresaron al local del Senado, colocándose en la zona de la barra y en los pasadizos interiores. Además, rodearon la casa de Villanueva, atacándolo a él y a su hijo Ernesto cuando salieron de su domicilio con rumbo a la sede legislativa, por lo cual

estos tuvieron que regresar a su casa. A pesar de la presencia hostil de los manifestantes, lograron ingresar a la sede de su Cámara los senadores Manuel C. Barrios, Severiano Bezada, Francisco P. del Barco, Abel Campos, César Canevaro, Mariano H. Cornejo, Nicanor Carmona, Juan E. Durand, Ricardo Floréz, Carlos A. Leguía, Pío Max Medina, M. Edmundo Montesinos, José Abel Montes, Antonio Miró Quesada de la Guerra, José G. Otero, Pablo M. Pizarro, Pedro Rojas Loayza, Clemente Revilla, Leoncio Samanez, Gonzalo Silva Santisteban, Amador F. del Solar, Germán Schereiber, J. Antonio Trelles, Agustín Tovar, David Torres Aguirre, Wenceslao Valera y José A. Valencia Pacheco. Fue llamado a la Cámara el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Gobierno, Aurelio Sousa –quien también era Senador–, el cual inmediatamente acudió. El Senador Tovar llamó la atención por el hecho de que la guardia del local se hubiese retirado. El doctor Sousa afirmó que el Gobierno era ajeno a estos hechos.

Los enfrentamientos del gobierno con el Congreso y la consiguiente ingobernabilidad impulsaron a Billinghurst a concebir la idea de disolver el Poder Legislativo y aplicar una reforma constitucional dirigida a la eliminación de la elección parlamentaria por tercios y su reemplazo por la renovación íntegra del Congreso, haciéndola coincidir con la elección presidencial. Mientras Billinghurst proyectaba la disolución del Congreso – que lo había elegido Presidente de la República– y la convocatoria a un plebiscito, adelantándose a este hecho el mariscal –entonces coronel– Óscar Raymundo Benavides Larrea lo depuso el 4 de febrero de 1914.

Entonces se formó una Junta de Gobierno, presidida por Benavides, con la anuencia del Congreso. Los leguístas, con el apoyo del Partido Liberal y en cumplimiento del mandato constitucional, confiaban en investir con la Jefatura del Estado al Primer Vicepresidente, Roberto Leguía. Sin embargo, Benavides, con el apoyo de los civilistas, dispuso la detención de numerosos parlamentarios leguístas, cambiando así la correlación de fuerzas y logrando una nueva mayoría, la que, reunida en el Palacio Legislativo, lo nombró Presidente Provisorio en la sesión del 15 de mayo de 1914. En la misma fecha, en la casa del ex Presidente Augusto B. Leguía, ubicada en la calle Pando, la mayoría parlamentaria proclamaba a Roberto Elías Leguía

Salcedo como Presidente de la República. Sin embargo, Roberto Leguía fue impedido de ejercer la Jefatura del Estado.

Billinghurst fue un autodidacta de amplia cultura, alimentada por su importante biblioteca personal, llegando, inclusive, a traducir algunos pasajes de William Shakespeare. Asimismo, fue el primero en hacer un análisis económico de la industria salitrera, señalando la importancia de los capitales peruanos, ingleses y chilenos.

Igualmente, se preocupó por la situación de los peruanos nacidos en Tarapacá. Publicó diversos libros, entre ellos: Rápida ojeada sobre la cuestión del salitre (1878); Compendio de la legislación municipal del Perú 1873-1877 (1878); Corona fúnebre de Alfonso Ugarte (1880); Reconocimiento militar del río Desaguadero y de la altiplanicie andina (1880); Estudio sobre la geografía de Tarapacá (1886); La condición legal de los peruanos nacidos en Tarapacá (1887); El abastecimiento de agua potable para el puerto de Iquique (1887); Los ferrocarriles salitreros de Tarapacá (1888); Los capitales salitreros de Tarapacá (1889); La irrigación de Tarapacá (1893); Reglamento de exploraciones agrícolas en la montaña (1898); Legislación sobre salitre y bórax en Tarapacá (1903); Documentos relativos al ferrocarril de Patillos (1908); Irrigación por medio de pozos artesianos (1909); Discurso programa (1912); y A la nación (1915).

El partir al exilio Billinghurst regresó a Arica, la ciudad de su nacimiento. El gobierno lo acusa de conspirar en su contra junto con Augusto Durand. Finalmente, el 28 de junio de 1915 Billinghurst falleció en el oasis de Pica... “un reducto de peruanidad tarapaqueña”. Fue enterrado en el cementerio de la ciudad junto a la tumba de su madre. El 20 de setiembre de 1916 el Congreso de la República, a través de la Resolución Legislativa Nº 2249, ordenó que sus restos fuesen trasladados a Lima, tributándoseles los honores correspondientes al cargo de Presidente de la República.

Al llegar sus restos a nuestro país tanto en el Callao como en Lima se produjeron imponentes manifestaciones de duelo. Sus restos se hallan actualmente en un mausoleo familiar en el Cementerio Presbítero Maestro.

Su pensamiento político estaba más acorde con el espíritu liberal decimonónico chileno que con el conservadurismo peruano.

Ya en la presidencia, impulsó y logró algunas de sus reformas propuestas, con el apoyo popular y enfrentado contra el Congreso. Por ello fue denominado por las masas populares como “primer obrero del Perú”.

Como señalan Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (2012) “la función del Senado era la de ser un garante de la dominación terrateniente. Y esto quedó en evidencia durante el Gobierno de Guillermo Billinghurst en donde los terratenientes, espacial y económicamente marginados, obstruyeron los avances del Ejecutivo y el grupo de plantadores y exportadores costeros: la representación parlamentaria en el Senado.

El blanco principal al modelo político de 1895 que sucedió a la Revolución de 1895 se centró en su incapacidad de crear vínculos cohesionadores capaces de evitar la ruptura del tejido social del país. Como recuerda Carmen Mc Evoy (2007) “Importantes intelectuales de la época, como Javier Prado, Alejandro Deustua, Alberto Ulloa y el mismo Víctor Andrés Belaunde coincidieron en señalar el profundo abismo existente, entre los impresionantes avances económicos exhibidos durante los años posteriores al gobierno de Pío Barón y la *vida moral* del país” (pág. 374). Se aludía al grave peligro que conllevaba para el bien de la “colectividad nacional” la ausencia de ideales, de reglas de conducta, y de un credo político y social capaz de detener el creciente proceso de polarización social que se vivía.

La llegada del segundo civilismo al poder dio inicio, paradójicamente, a un proceso de privatización de los espacios políticos. Esto en buena medida consecuencia directa de la Ley Electoral de 1896 que restringió

sensiblemente la participación ciudadana en las elecciones y a la neutralización o cooptación sistemática de todas las fuerzas políticas adversas al poder hegemónico. El civilismo pasó a ser un movimiento de élite, semejante a una tertulia de amigos, lo que lo hizo ineficaz para la reforma política que la sociedad peruana requería. En palabras de Carmen Mc Evoy (2007) este “neo-republicanismo civilista” del siglo XX rompió con el término con el cual se había identificado tradicionalmente, la democracia (pág. 376).

La privatización de la vida política experimentada en el país durante el temprano siglo XX fue de la mano del familiarismo que permeó a toda la sociedad peruana. En la medida que la política adquirió nuevas características y las vías de participación pública dejaron de tener un peso específico en la toma de decisiones, diferentes sectores de la sociedad peruana se refugiaron en la siempre tradicional y oportuna esfera familiar (Mc Evoy 2007: 391). Como señaló un contemporáneo de los hechos Joaquín Capelo, en su *Sociología de Lima*, obra en la cual resalta “la ausencia de lazos comunitarios entre los habitantes de la capital de la República” y “el rol fundamental que tenía la familia, la extendida o clánica, en la organización social de la ciudad”¹³⁷. En este esquema la escuela y la familia contribuyeron en fortalecer un comportamiento político que privilegiaba la sumisión pasiva ante la autoridad y la creación de redes clientelares para conectar a la élite política con las masas populares, constituyendo redes sutiles y efectivas en una sociedad tan desigual como fragmentada por aquellos años.

En la medida que se reducían los canales de participación política, las voces disidentes a este sistema canalizaron su descontento a través de los medios de comunicación escritos. En 1903, se funda el diario “La Prensa” y en 1905 se fusiona con el diario “El Tiempo”, esto se constituyó en un primer paso para en la forja de un espacio político capaz de confrontar mediante la discusión pública el comportamiento y la legitimidad del gobierno civilista. Es

¹³⁷ Capelo, Joaquín y Ricard Morse (1973) *Lima en 1900. Estudio crítico y antología*. Lima, Tomo I, pp. 36, 37 y 84.

así que un grupo de periodistas limeños y provincianos, con Alberto Ulloa¹³⁸ a la cabeza, fueron los responsables no sólo de promover las dos revoluciones, que conmovieron las estructuras políticas civilistas, sino de colaborar activamente en el renacer del discurso cívico-republicano del pasado.

La organización de “La Prensa” como arma de combate político permitió la interacción de un sector importante de intelectuales, comerciantes, industriales y políticos limeños y provincianos, en la creación de un núcleo de opinión pública, contestatario del poder oficial. Recalcando ante la colectividad peruana que en las decisiones nacionales concernientes al bienestar del país todos debían de tener una voz. En palabras de Ulloa era preciso tener en cuenta que el Perú “no era del civilismo exclusivamente, ni de la familia del señor Pardo”, sino de “muchas otras personas” cuyas “opiniones y aspiraciones” eran igualmente “legítimas”¹³⁹. Durante sus diez años de periodista (1904-1914) confrontó directamente el estilo monopólico de ejercer la política de los civilistas, abogando, en su lugar, por un proyecto nacional de tipo inclusivo.

Su estilo confrontacional, se apoderó del simbolismo, de lo que llama Carmen Mc Evoy (2007), “republicanismo-cívico” que el partido de gobierno intentaba utilizar a su favor, denunciando, al mismo tiempo, la existencia de una velada lucha de clases que un velado discurso político, que se preciaba de igualitario, intentaba esconder.

Este tipo de periodismo representado por Ulloa continuaba la tradición nacionalista y desarrollista inaugurada a mediados del siglo XIX y logró trasladar la discusión política de la esfera de lo privado, al campo del debate público. Ello permitió que las clases medias tuvieran un espacio y medio de

¹³⁸ Hijo de José Casimiro Ulloa (1829-1891) médico cirujano, escritor, político y una de las figuras más importantes de la medicina peruana. En febrero de 1880 fue nombrado por, el entonces presidente de Perú, Nicolás de Piérola, Cirujano en Jefe del Ejército del Perú durante la guerra con Chile. Fundador y director de la Gaceta médica de Lima, en 1885 contribuyó a la creación de la Academia Libre de Medicina y fue el primer peruano en ocuparse de la psiquiatría.

¹³⁹ Ulloa, Alberto (1945) *Reflexiones de un cualquiera*. Buenos Aires, p. 291.

expresión adecuado. Clases medias que crecían silenciosamente con los avances económicos experimentados por el país y que utilizaban el discurso cívico-republicano con la finalidad de presionar por demandas a las que creían tener derecho.

En 1912 un disidente del bloque coalicionista, Guillermo Billinghurst sacudió la escena política, poniéndose a la cabeza de un movimiento de descontento ciudadano que albergaba a sectores medios emergentes y a la clase trabajadora organizada. Las “Jornadas Cívicas” de 1912, reavivaron la recreación de la escena de la esfera pública y la movilización popular como armas de combate político, reavivó un reurbanismo radical que conectó con las masas y que atemorizó a la elite política y económica.

Tras el golpe de Estado, Billinghurst en su carta de despedida a la Nación, señaló que el sempiterno problema político por el que atravesaba el Perú, radicaba en la ausencia de los actores principales de la gesta republicana, “los ciudadanos”¹⁴⁰.

5.3. Luis M. Sánchez Cerro: Populismo de derecha y fascismo

Luis M. Sánchez Cerro, lideró el golpe de Estado que derrocó a Leguía en 1930. Con su llegada al poder dio la impresión que un nuevo ciclo de caudillismo se había iniciado. Nació en la provincia norteña de Piura, provenía de un estrato social humilde y era claramente mestizo. Como muchos jóvenes en su situación, vio en el Ejército una posibilidad de ascender socialmente y logró ser admitido en la Escuela Militar de Chorrillos cuando era aún adolescente. Su procedencia social y étnica le permitió granjearse el apoyo popular, especialmente de los sectores más pobres, quienes podían identificarse con los orígenes humildes de su juventud al igual que con su etnicidad. Afectuosamente era llamado el “cholo Sánchez Cerro”, en un momento en que la escena política era dominada por los acaudalados y oligarcas “blancos”.

¹⁴⁰ *El presidente Billinghurst a la Nación*. 1ra parte (Lima, 1915), p. 7

Participó en el exitoso golpe militar a Guillermo Billinghurst en 1914 y también tomó parte en el fallido intento de golpe a Augusto B. Leguía en 1921. Este hecho le valió el exilio a Europa, pasando la mayor parte en la Italia de Benito Mussolini en donde llegó a entrenar con el ejército. Esta experiencia influiría decisivamente en la orientación ideológica con la que creará su partido y la praxis política que pondrá en marcha, con una marcada tendencia fascista.

5.3.1. La construcción del héroe: Del golpe al gobierno transitorio (1930-1931)

Ya desde el *Manifiesto de Arequipa* (1930), la retórica de Sánchez Cerro invocaba a un grupo heterogéneo y pluriclasista:

“El pronunciamiento que acaba de efectuarse en Arequipa no es la obra de un partido, ni la hazaña de un grupo, ni la audacia de un caudillo; es la expresión genuina de un anhelo nacional fervoroso y unánime, largo tiempo reprimido por la Tiranía; pero convertido hoy al fin en realidad enérgica y regeneradora¹⁴¹”

“Vamos a moralizar primero y normalizar después la vida institucional y económica del Estado, para ello, hacemos hoy un supremo llamado a todos los hombres honrados del Perú, para derrocar a la tiranía más cínica que registrara nuestra Historia, para restaurar nuestros fundamentos constitucionales y hacernos dignos hijos de una nación libre¹⁴²”.

“Haremos de la honradez un verdadero culto nacional; por eso perseguiremos, sin dar tregua, hasta en sus últimos refugios, a la banda de repaces que enseñoraba hoy en la Administración Pública, ha amasado fortunas a costas del Erario, obligándoles, de grado o por fuerza, a devolver los dineros usurpados, y sancionando ejemplarmente sus delitos¹⁴³”.

Acabaremos para siempre con los peculados, las concesiones exclusivistas, las malversaciones y las rapiñas encubiertas, porque la principal causa de nuestra actual crisis económica reside en la falta de pureza en la *Administración* y de *honradez en el manejo de los fondos fiscales*. En lo futuro, para ocupar

¹⁴¹ *El mensaje cívico de José Luis Bustamante y Rivero*. Lima: Fundación M. J. Bustamante de la Fuente / Instituto del Sur, p. 239.

¹⁴² *Ibidem*, p. 241,

¹⁴³ *Ibidem*, p. 242.

puestos públicos, será necesario que los ciudadanos declaren públicamente sus bienes; y proyectaremos leyes sobre la moralización de la renta privada, a fin de poder reprimir con mano férrea el robo en cualquiera de sus formas¹⁴⁴.

Después del golpe a Leguía, asume la presidencia por unos días de agosto, el General Manuel María Ponce Brosseut, a él le sucede Luis M. Sánchez Cerro quién formó una Junta Militar, que duró poco tiempo, hasta febrero de 1931. A este gobernante suceden el Arzobispo de Lima, Monseñor Holguín, y luego el Presidente de la Corte Suprema, don Ricardo Leoncio Elías, que a la semana fue reemplazado por el comandante Gustavo A. Jiménez, quien será echado posteriormente, por una Junta presidida por David Samanez Ocampo. Todo esto en solo un mes, marzo de 1931.

CUADRO IX **PRESIDENTES DEL PERÚ (1930-1931)**

PRESIDENTE	DURACIÓN DEL MANDATO	CARGO
Manuel María Ponce Brosseut	25 de agosto de 1930-27 de agosto de 1930	General
Luis Miguel Sánchez Cerro	27 de agosto de 1930-1 de marzo 1931	Teniente Coronel
Mariano Holguín Maldonado	1° de marzo de 1931	Arzobispo de Lima
Ricardo Leoncio Elías	1° de marzo de 1931-5 de marzo de 1931	Presidente de la Corte Suprema
Gustavo A. Jiménez	5 de marzo de 1931-11 de marzo de 1931	Teniente coronel
David Samanez Ocampo	11 de marzo de 1931-18 de diciembre de 1931	Hacendado

Fuente: Pease y Romero (2013: 92).

Durante su breve periodo al mando del país se rodeó de antiguos asesores civilistas cuyo plan económico pretendía rescatar el modelo exportador (Klarén 2004: 331). La oligarquía a su vez veía en él, a alguien eficaz y capaz para controlar a las masas, en palabras de Dennis Gilbert (1982) la “agitación social del momento requería una represión más fuerte que le

¹⁴⁴ *Ibidem*.

proporcionable por los relativamente benignos gobierno de corte civilista (p.331). Aunque esto significaba una dependencia a los militares que los oligarcas no estaban dispuestos a aceptar tan fácilmente.

Como primeras medidas de corte popular, se eliminó la Ley de Conscripción Vial, se promulgaron el matrimonio civil y el divorcio ¹⁴⁵. También se aplicaron, en opinión de Henry Pease y Gonzalo Romero (2013) “políticas populistas” destinadas a construir bases de apoyo para un “largo mandato”. Se repartieron alimentos entre los más pobres en las ciudades, principalmente en la capital, buscando con ello asegurar la lealtad de los sectores populares. En su búsqueda del poder, Sánchez Cerro se acercó a ciertos sectores y se alejó de otros que posteriormente frenarán su ambición de perpetuarse en el poder.

A la par se suscitaron demostraciones públicas en contra de su gobierno. Estudiantes y Sindicatos, con el APRA a la cabeza, férreos críticos del régimen anterior, no estaban dispuestos a tolerar a un presidente proveniente del Ejército. El régimen reaccionó con una dura represión que solo agravó la confrontación.

Sánchez Cerro no tenía en aquellos momentos un liderazgo unánime y su gestión no estaba libre de cuestionamientos. Existía un abierto rechazo en muchos sectores hacia él, pero solo se hicieron abiertamente visibles en el momento en que anunció su interés de presentarse a las próximas elecciones como candidato, pero sin dejar de lado su rol como jefe del gobierno provisorio. Es decir, él mismo organizaría y sería responsable de las elecciones presidenciales en las cuales participaba como candidato. Ello despertó el rechazo de muchos sectores en apariencia simpatizantes con él, como lo eran: los militares, la Iglesia, y la oligarquía.

Existía un considerable descontento entre los generales por el hecho de tener que aceptar el mando de un subordinado en el palacio presidencial.

¹⁴⁵ Aunque después ambas tendrían que ser reafirmadas en el gobierno de Benavides.

Ello ya se había hecho evidente al momento de la designación del gabinete ministerial del gobierno provisorio. Y es que como señala Masterson (2001) Sánchez Cerro hizo un gran daño a la institución al quitar y reemplazar a aquellos que se le oponían. Sus enemigos dentro del ejército se rebelaron y le pusieron fin momentáneamente a sus ambiciones políticas.

CUADRO X
GABINETE DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE LUIS M. SANCHEZ
CERRO

MINISTERIO	MINISTRO	RANGO
Hacienda	Ricardo Llona	Coronel
Guerra	Alejandro Barco	Mayor
Fomento	Eulogio Castillo	Coronel
Relaciones Exteriores	Ernesto Montagne	Coronel
Gobierno	Gustavo A. Jiménez	Mayor
Justicia, Instrucción y Culto	Armando Sologuren	Comandante
Marina y Aviación	Carlos Roralde	Capitán de fragata

Fuente: Pease y Romero (2013: 91).

Tras la legislación del matrimonio y el divorcio, despertaron las críticas de la Iglesia Católica. Cercanos al gobierno defenestrado, el triste final de Leguía no fue algo que pudieran pasar por alto y junto con otros sectores que siguieron fielmente a Leguía se convirtieron en enemigos de Sánchez Cerro.

Frenada las pretensiones de Sánchez, se vio forzado a dar un paso al costado y posteriormente fue enviado al exilio en Francia. Antes de partir se dirigió a sus seguidores diciéndoles que volvería al Perú, y eventualmente al poder. Tras su partida, se sucedieron una serie de golpes y contragolpes, que llevaron a tener hasta cuatro presidentes en menos de dos semanas (Ver Cuadro...). Finalmente, se acordó que el Presidenta fuera David Samanez, hacendado y viejo pierolista.

La Junta de Samanez intentó la reorganización política del país; para lo cual nombra comisiones, una para que presente un Proyecto de Constitución presidida por el jurista Manuel Vicente Villarán y otra de Reforma de la ley

electoral. Al mismo tiempo, convoca a elecciones generales en octubre de ese año.

5.3.1. La fundación del Partido Unión Revolucionaria y la tendencia fascista

Se suscitó todo un “movimiento sanchecerrista”, como los denomina Tirso Molinari (2009), que se formó espontáneamente sustentándose en los clubes populares sanchecerristas de Lima y el interior del país, creados durante su breve estancia en el gobierno. Este movimiento fue muy importante en el retorno de Sánchez Cerro del exilio, hecho que se produjo el 2 de julio de 1931. Tras su regreso al país, Sánchez Cerro concentró sus esfuerzos en articular los diferentes clubes sanchecerristas, con miras las elecciones presidenciales y la promoción de la lista parlamentaria al Congreso Constituyente. Así se fundó el Partido Unión Revolucionaria (PUR) el 30 de julio de 1931, casi por propia iniciativa de su líder Luis M. Sánchez Cerro.

Como bien recuerdan Henry Pease y Gonzalo Romero (2013), Sánchez Cerro a diferencia de los apristas no tuvo tiempo ni la voluntad de preparar un partido organizado o un plan político detallado, y buscó más bien basar su campaña en su carisma. La estadía en Italia le hizo simpatizar con muchas ideas y estrategias del fascismo, pero no llegó a aceptar esta ideología en su totalidad. Solo en 1933 tras el asesinato de Sánchez Cerro, la UR empezó a imitar abiertamente costumbres de extrema derecha (Molinari 2009: 125 y ss.; y Pease y Romero 2013: 95).

El órgano periodístico oficial del sanchecerrismo, en 1931, fue "La Opinión". Entre sus redactores estuvieron Ernesto Byrne Valcárcel, Alfredo Herrera, Carlos Miró Quesada Laos, Pedro Ugarteche, José Carlos Llosa y Enrique Rojas Moreno.

Como sostienen Castillo (1991), Molinari (2009), y Pease y Romero (2013) la experiencia del urrismo en la política peruana, fue lo más cercano a un

liderazgo carismático en los términos que el concepto desarrolla y en atención al contexto histórico donde se suscita. Angelo Panebianco (1990) desarrolla algunas ideas para caracterizar a lo que él llama un “partido carismático”, es pertinente traer sus ideas a colación, porque será la UR, el ejemplo más característico de un partido carismático en nuestro país.

En primer lugar señala, el carácter “revolucionario” y “extraeconómico” de legitimación del carisma, porque este es lo “opuesto a la “ordinaria administración”, que se basa en la observación de las reglas y la tradición. Es la antítesis tanto del poder racional-legal (burocrático) como del poder tradicional. En sus palabras “la organización carismática vive en este mundo pero no es de este mundo” (Panebianco 1990: 268).

Da lugar a un tipo de organización que se funda exclusivamente en vínculos personales, en los lazos de lealtad que unen directamente a los discípulos con el líder. En opinión de Panebianco, lo que diferencia este tipo de relación social con los vínculos personales tradicionales, es que la lealtad es en este caso el fruto de “un estado de gracia”, de la “misión” que el líder está llamado a cumplir, según la opinión generalizada de sus discípulos. Es de resaltar que esta relación solo es posible de crear en un contexto con “desigualdad social anterior”, en donde existen ya relaciones de poder y pleitesía al líder. En el Perú de los años treinta con una profunda crisis social producto de un régimen oligárquico, Sánchez Cerro con su partido calzaron a la perfección con una población en busca de representación política. En ese contexto es que podemos traer a colación las palabras de Max Weber cuando señalaba que el carisma es “la única verdadera fuente del cambio social y político, la única fuerza auténticamente revolucionaria de la historia” (Panebianco 1990: 268-269).

Como tercera característica, la organización carismática sustituye, la estabilidad de las expectativas sobre la que basan tanto las organizaciones burocráticas como las tradicionales, por la “incertidumbre” y la “inestabilidad” más absolutas. La decisión del jefe y sus continuadas muestras de confianza hacia sus subordinados, son los únicos criterios de los que depende la

“estructura de las oportunidades” de los miembros de la organización y que inspiran su estructura jerárquica.

Siguiendo a Weber, Panebianco señala que el carisma desdeña, al menos, en una primera fase de la vida de la organización, las formas regulares de financiamiento. Por ello recurre a mecenazgos y/o captura de algún tipo de botín. En el caso del urrismo, podemos notar ello en la alianza que entabla con los civilistas se presenta esta característica. Los civilistas fueron desplazados gradualmente del poder durante el Ochenio, como grupo y clase social, estaban atemorizados de la fuerza electoral del APRA, y apoyaron económicamente a Sánchez Cerro. Además de ello, el diario *El Comercio*, vocero por aquellos años del civilismo, apoyó resueltamente la candidatura sanchecerrista así como José de la Riva-Agüero y Osma, antiguo fundador del Partido Nacional Democrático, manifestó su respaldo a Sánchez Cerro, y años después ocuparía un cargo dentro del aparato estatal en el gobierno urrista.

Finalmente, Panebianco señala lo transitorio e inestable del carisma, en sus términos “en cuanto a poder extraeconómico, tarde o temprano será absorbido bajo la presión de las exigencias administrativas (Panebianco 1990: 270). Es así, que ante la desaparición del líder carismático, al partido y sus adherentes solo les queda decidir entre dos posibilidades: la disolución o la “rutinización” (la objetivación) del carisma. En el caso que nos ocupa la UR, tras la muerte de Sánchez Cerro, se le presentó tal disyuntiva, el intento fue perpetuar su legado. Este desafío se suscitó en el contexto de las elecciones de 1936, en donde ya la UR bajo el liderazgo de Luis A. Flores, intentó mantener la unidad del partido, “objetivando” el carisma de Sánchez Cerro hacia la cúpula del partido, y en especial hacia Flores, quien quedó como el heredero legítimo del urrismo y de Sánchez Cerro. Como se aprecia en la portada de *Acción* del 10 de abril de 1935, el alma de Sánchez Cerro muestra el sendero luminoso a las multitudes urristas, la imagen de Luis A. Flores detrás del alma de su líder, señalan que ahora él continúa con su legado.

Figura 1



Acción, 10 de Abril de 1935.

Fuente: Molinari (2009: 305)

Es finalmente con Flores¹⁴⁶, que la UR se entiende a sí misma como fascista. Tal como lo quería Flores, la UR se convierte en una organización político-militar pero también, como fascista ortodoxo, Flores dota de una dimensión mística y sacrificial al urrismo, desde el cual la política queda ligada a la religiosidad del catolicismo popular, que compartían con intensidad las multitudes urristas.

El partido se convertiría con el tiempo en la segunda fuerza política popular después del APRA, pero la cancelación de los elecciones en 1936 y los posteriores acontecimientos, quietaron fuerza al movimiento mientras el

¹⁴⁶ En una entrevista concedida a Ricardo Muller, a la pregunta si “¿Fue usted fascista?”, contesta enfáticamente que “Por convicción y por temperamento”. Publicada en el suplemento dominical *Suceso* del diario *Correo*, 5 de mayo de 1968.

liderazgo carismático “objetivado” de su ya mítico líder no generaba adhesiones.

5.3.2. Las Elecciones de 1931

La elección se presentaba difícil para Sánchez Cerro pues su novel partido tenía que competir con la organización partidaria de bases de un aprismo radicalizado y sin competencias dentro de la izquierda, tras la prematura muerte de José Carlos Mariátegui y el cambio de dirección y estrategias de su partido, el Partido Socialista Peruano, que ahora bajo la dirección de Eudocio Ravines se convirtió en el Partido Comunista del Perú y hacía de la confrontación clasista, su principal estrategia ¹⁴⁷ y su peor elección. El liderazgo y arrastre popular de Víctor Raúl Haya de la Torre, daba la confianza a sus partidarios y simpatizantes de un triunfo electoral inminente en las venideras elecciones. Además, el partido de la estrella contaba con el apoyo del leguismo, quienes no perdonaban a Sánchez Cerro el golpe ni el triste final de su líder.

Pese a ello, la UR llegó a tener varias fuentes de apoyo, la mayoría de las cuales, se gestaron por la presencia de un espíritu antiaprista. Supo aprovecharse de este espíritu y presentarse como a sí mismo como “el candidato de la estabilidad” y “el patriotismo”, el único que podía enfrentarse a la avanzada socialista y comunista que representaban el APRA y el PCP. Con este discurso se ganó las simpatías y apoyo de la oligarquía y las clases medias.

Pero su principal base de apoyo eran las clases populares. Sánchez Cerro fue idolatrado por artesanos, desempleados, las mujeres de los mercados, es decir la gente del común. Quienes reprodujeron la leyenda de virilidad que lo rodeaba por su constante espíritu conspirativo, agresivo y de orador

¹⁴⁷ El partido de Mariátegui ya estaba en una profunda crisis antes de su muerte. Con la conducción de Ravines, se adoptan todas las propuestas provenientes de Moscú y del III Internacional, entre ellas estaba la de cambiar el nombre del partido de Socialista a Comunista. Erróneamente, Ravines y el PCP inician una serie de huelgas, seguros de una victoria en un Perú sacudido por la Gran Depresión, el capitalismo en esos años parecía haber fracasado (Klarén 2004: 333).

popular. Su profesión castrense, con grado de comandante, posición no encumbrada, sino más bien cercana de la tropa le daba esa necesaria cercanía con lo popular y la capacidad de movilización social que necesitaba ante el nuevo contexto de la política de masas.

Su lema era el “*Perú sobre todo*”, lo que demostraba su clara vocación nacionalista propia de un militar que toma el poder, y como respuesta a las influencias “foráneas” representadas por el aprismo y el comunismo. Con este sencillo uso retórico nacionalista removía la sensibilidad de las personas del común, que consideraban que tanto por su procedencia social como por el rango militar podría llevar a cabo y continuar con las políticas asistencialistas de su primer gobierno. También formaban parte de sus propuestas eliminar la corrupción, y mejorar los servicios de educación y salud.

Otro de los objetivos importantes de la UR era mantener el orden público, aspecto muy importante en la década del treinta, porque el caos político y social arreciaba. Se proponía devolver la paz al país, para lo cual el papel del Estado debía seguir creciendo. Defendía la exaltación de ciertos valores (patria, honradez, religión, valor y superación espiritual), que sin duda tendían a la creación de una mística, propia de los fascismos europeos de entonces. Por ello, el Estado debía asumir el control de la educación y de la prensa como medios para orientar a las masas y formarlas dentro de los valores que debía difundir. También se comprometía a respetar y promover la propiedad individual para la producción, cuando los otros partidos de orientación marxista la cuestionaban o hablaban de la desaparición de la propiedad privada.

Como bien han resaltado Pease y Romero (2013), los programas de UR y del APRA, no eran muy diferentes, al menos a primera vista. Pero si existía una diferencia fundamental, y es que el programa urrista no lidiaba con problemas estructurales, es decir, no hacían ninguna mención a nacionalizaciones de empresas o reformas agrarias como era sí lo hacía la agenda aprista. Muy por el contrario, proponía una visión “corporativista” de

la sociedad peruana, que demostraba la profunda influencia italiana y del estilo de gobierno fascista de Mussolini, en su pensamiento político. Según este pensamiento corporativista, cada sector de la sociedad peruana tenía un rol específico que efectuar para que el Perú pudiera progresar. Por ello si las clases medias y populares, cumplían su papel, obtendrían beneficios tangibles inmediatos, tales como mejores salarios, educación y salud. El indígena, largamente excluido de la sociedad peruana, sería aceptado como “verdadero ciudadano”. Los privilegiados de la cúspide de la estructura social recibirían del régimen políticas económicas cautelosas para reactivar la economía sin que ello conllevara a una radical redistribución de la riqueza.

Las campañas políticas fueron violentas porque las dos agrupaciones principales movían masas populares. Los insultos y las acusaciones hechas por ambos bandos eran predecibles y poco imaginativos. Los apristas acusaban a Sánchez Cerro de ser “títere de la oligarquía” que buscaba mantener al Perú esclavizado al capital extranjero. Mientras los urristas achacaban al APRA de no ser un partido nacional, sino que formaba parte de una conspiración internacional para fomentar la revolución socialista en el territorio peruano”. Llegó hasta haber asesinatos entre los simpatizantes de ambos bandos. Pese al clima de violencia previo a la elección, el día de la votación no se reportaron mayores desmanes.

Las elecciones al parecer fueron limpias, y Sánchez Cerro ganó con un cómodo margen de diferencia (Basdre 2005, Tomo XV: 148-149). Pero el partido aprista se negó a reconocer los resultados y admitir la derrota. La única posible explicación que encontraron fue el fraude electoral, porque la oligarquía jamás iba a permitir la llegada del APRA al poder. Víctor Raúl Haya de la Torre viajó a Trujillo, en donde se proclamó “Presidente moral del Perú” y se negó a reconocer la victoria de Sánchez Cerro. Lo cierto es que no hubo pruebas ni indicios de fraude por lo que los resultados fueron como se detallan en el siguiente cuadro.

CUADRO XI
RESULTADOS ELECTORALES DE 1931

ORGANIZACIÓN POLÍTICA	CANDIDATO	TOTAL DE VOTOS	PORCENTAJE	PORCENTAJE DE VOTOS EMITIDOS
Unión Revolucionaria (UR)	Luis M. Sánchez Cerro	152 149	50.746%	47.011%
Partido Aprista Peruano (APRA)	Víctor Raúl Haya de la Torre	106 088	35.583%	32.779%
Partido Descentralista (PD)	José María de la Jara y Ureta	21 950	7.321%	6.782%
Partido Constitucional Renovador del Perú	Antonio Osores	19 964	6.550%	6.068%
Votos Blancos				0%
Votos Nulos		23 818		7.352%
Total de Mesas: 0			Total de electores: 392 362	
Votos emitidos: 323 645			Participación: 82.490%	

Fuente: Pease y Romero (2013: 97).

5.3.3. La llegada al poder

Con la llegada al poder de Sánchez Cerro se evidenció la alianza entre la oligarquía y la UR, en el Estado Mayor sanchecerrista figuraban connotados civilistas como José Matías Manzanilla, Clemente Revilla, Eduardo Lanatta, así como a Luis A. Flores y Alfredo Herrera, Elías Lozada Benavente y Javier Calmell del Solar.

Las divisiones generadas en la campaña electoral se intensificaron durante los años de gobierno de Sánchez Cerro. El caos político llegó a tal magnitud que este periodo ha llegado a considerarse como el de una efectiva guerra civil. Lo cual no permitió avances políticos significativos, salvo la formulación de una nueva constitución promulgada en 1933¹⁴⁸.

Sánchez Cerro manifestó su intención de limpiar la Administración Pública y erradicar las prácticas corruptas del defenestrado gobierno de Leguía. Su

¹⁴⁸ En paralelo a las elecciones presidenciales se eligió a la Asamblea Constituyente, la cual tenía como propósito formular una nueva carta magna.

promesa de moralización se materializó en el apresamiento de algunas de las principales figuras del régimen leiguista, entre ellas el propio presidente Leguía y su hijo Juan, y en la confiscación de sus propiedades. En su mensaje pronunciado el 22 de agosto de 1931 le hablaba al país en los siguientes términos:

“No tengo rencores, ni me impulsa el odio, ni auspicio la persecución de nadie. Pero, *encarno* eso sí, la reacción ante la contra la inmoralidad administrativa [...] por eso soy *intransigente* con los hombres directamente responsables de las desgracias de nuestro país, y no admito relación alguna con ellos. Hay quienes predicán la guerra de clases, o el odio contra determinado grupo o familia de individuos. Yo que tengo el orgullo de *representar* la revolución, *limito mi repudio* a quienes delinquieron contra la patria [...] Los cómplices de la tiranía han buscado refugio en diversos grupos políticos, porque saben que junto a mí no tienen cabida¹⁴⁹”

En ciertos pasajes de su discurso se percibe un tono institucionalista como en las siguientes líneas:

“Es preciso que las libertades públicas se no queden a merced a cualquier mandón. Para asegurar su existencia perenne y su función adecuada y provechosa, hay que *cuidar* de que su *ejercicio* no puede hacer con fines anti-sociales. Quiere decir, que se conserven en toda su pureza apartando aquellos elementos extraños a su esencia que sean capaces de ocasionar perjuicios a la colectividad¹⁵⁰”.

En pleno contexto del “proceso revolucionario” iniciado con el alzamiento militar de Arequipa y con una finalidad moralizadora la Junta de Gobierno, acorde al Manifiesto de Arequipa creó en Lima por Decreto-Ley N° 7040 una institución con la prerrogativa principal del juzgamiento de aquellas personas que hayan lucrado con el Erario Nacional. A esta institución investigadora y punitiva se le denominó el “Tribunal de Sanción Nacional¹⁵¹” y fue integrado

¹⁴⁹ Ugarteche, Pedro (1970) *Sánchez Cerro. Papeles y recuerdos de un presidente del Perú*. Tomo II. Lima: Editorial Universitaria, p. 186.

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 188.

¹⁵¹ Si bien el Tribunal de Sanción ha sido mencionado en diversos libros de Historia e investigaciones políticas es aún muy poco lo que se ha escrito en concreto sobre él. Sobre el particular puede leerse con provecho de Portocarrero S., Felipe y Camacho S., Luis (2005). “Impulsos moralizadores: el caso del Tribunal de Sanción Nacional 1930-1931”. En Portocarrero S., Felipe (Ed.). *El pacto infame: estudios sobre la corrupción en el Perú*. Lima. Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, pp. 35-74 y de Carrasco, Christian (2014). *La Revolución de Chota a través del Tribunal de Sanción (setiembre de 1930 – mayo de 1931)*. Tesis de Licenciatura en Historia, Lima: UNMSM.

por el Coronel Enrique F. Ballesteros-Presidente, Dr. Gregorio Mercado-Fiscal Letrado, Dr. Adolfo Villagarcía-Vocal, Dr. Germán Aparicio Gómez Sánchez –Vocal, Ingeniero Rodolfo Laynes Lozada-Vocal, Mayor Armando Aguirre-Vocal, Dr. Pedro Bustamante Santisteban – Secretario Letrado y el Dr. Edilberto Boza-Relator. Este Tribunal presentó acusaciones devastadoras de “enriquecimiento ilícito” contra Leguía y sus ministros. Según un comentarista de la época Fred Morris, encargado de negocios británico en Lima, estas acusaciones dejarían en “ridículo al Perú ante el mundo, pero eran a pesar de todo ciertas¹⁵²”.

Pese a la retórica moralista de Sánchez Cerro, como recuerda Alfonso Quiroz (2013), su práctica política estuvo lejos de estar exenta de hechos de corrupción, de favoritismos y nepotismo, durante su breve dictadura, anterior a las elecciones, dio “empleo a su familia entera¹⁵³ y sus colaboradores probablemente hicieron lo mismo”. Los observadores diplomáticos de la época comentaban hechos como: la sospechosa moratoria otorgada al Banco del Perú y Londres en camino a la quiebra, y de que miembros del gabinete, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, se habían mudado a casas lujosas y mejorado su estilo de vida sin ganar un salario oficial acorde con ello (p. 318). Así el Tribunal de de Sanción se creaba:

“A fin de llevar a cabo en forma efectiva la labor de moralización del país emprendida por el actual Gobierno, es necesario realizar las investigaciones pertinentes para determinar la inversión dada a los fondos públicos por el régimen anterior, y establecer la debida responsabilidad sobre los ex gobernantes, los funcionarios y empleados públicos y los particulares que hayan defraudado al Fisco u obteniendo ganancias ilícitas con detrimento de los dineros del Estado¹⁵⁴”.

¹⁵² Citado en Quiroz 2013, p.316.

¹⁵³ El caso de de su hermano Pablo Ernesto y J. Hortensio es el más llamativo, pues era aún estudiante de medicina cuando fue nombrado directos de Salud Pública. De él se sospechaba que controlaba el tinglado ilegal antes explotado por Juan Leguía de la venta de opio, principalmente a los residentes chinos de Lima. Considerándosele la conexión con el juego, las drogas, la prostitución y otros intereses del crimen organizado que contribuyeron con dinero para promover las ambiciones políticas de su hermano (Quiroz 2013: 318).

¹⁵⁴ Anuario de la legislación Peruana. Leyes 6874-7475; 1930-1931 (AGN). Citado en Carrasco 2014, p. 75.

La retórica justiciera de salvaguardar el Erario Público y al Estado no iba de la mano con un análisis detallado del porqué de la “defraudación al fisco” u obtención de ganancias ilícitas. Se apelaba a principios morales, similares a los del Manifiesto de Arequipa, con el objetivo de justificar un conjunto de mecanismos de investigación, pero que en realidad trataban de instrumentos de persecución, amedrentamiento y represión contra todos aquellos que habían compartido el poder con Augusto B. Leguía.

El Decreto-Ley constataba de once puntos en donde se establecían los mecanismos de su funcionamiento, su organización, los tópicos de investigación que abarcará (las apropiaciones indebidas de inmuebles, muebles, valores o dinero y las comisiones ilícitas percibidas), el tipo de denuncia que podrán recibirse, implementada mediante la acción popular, quienes son las personas que debían colaborar con el Tribunal (ex funcionarios, ex empleados públicos, los particulares que hayan intervenido directa o indirectamente en operaciones con el fisco), el carácter inapelable de las sentencias, la duración del funcionamiento del Tribunal de Sanción Nacional (8 meses, a partir del 31 de agosto de 1930) que podrá ser prorrogado por disposición de la Junta de Gobierno, la prohibición de salida del país de los implicados antes de los 8 meses y del congelamiento de alguna actividad económica que tenga que ver con los bienes muebles e inmuebles de los investigados.

5.3.4. La lucha política

La negativa del APRA de reconocer la legitimidad de las elecciones y la actitud del jefe de Estado ante este rechazo generaron una inestabilidad política que se manifestó los límites institucionales y fuera de ellos. La Cámara de diputados fue el escenario principal de esta batalla. La UR había logrado obtener la mayoría de escaños, pero con solo 64 de estos, estaba lejos de tener una mayoría absoluta. Los apristas contaban con 23, mientras que los restantes, 58 estaban divididos entre el resto de partidos.

Los debates giraban en torno a las posibles soluciones para combatir la crisis causada por la Gran Depresión. Todas las propuestas apristas para ayudar a los sectores populares, sin embargo, fueron sistemáticamente rechazadas por la mayoría oficialista el Congreso. Esto hizo que el APRA asumiera una posición más beligerante, lo que a su vez produjo la enemistad de la mayoría de sus contrapartes independientes, quienes rápidamente empezaron a apoyar al gobierno en temas claves.

Con estas alianzas, se le permitió al gobierno suspender las libertades constitucionales, iniciándose así la persecución de varios apristas e incluso su expulsión del Congreso. Aquellos que estaban en desacuerdo con los métodos utilizados rápidamente cayeron en la cuenta que dicha persecución también podía ser dirigida a ellos.

Tras sufrir un intento de asesinato, Sánchez Cerro ordenó el arresto de Haya de la Torre. El líder aprista logró mantenerse oculto en la clandestinidad. Un grupo de simpatizantes apristas de la Marina de Guerra se amotinaron, siendo rápidamente derrotados y ejecutados, al poco tiempo se produjeron purgas en la institución. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue clausurada, porque en aquellos años el APRA ejercía una gran influencia entre el estudiantado. La medida incluso movilizó a estudiantes contrarios al APRA pero que estaban en contra de la intervención.

La violencia llegó a su clímax en junio de 1932 con la revolución de Trujillo. Los apristas lograron establecer alianzas con elementos antisanchezcerristas del ejército para llevar a cabo una revuelta que tendría alcance nacional. Lo que trajo como consecuencia que Haya de la Torre fuese arrestado y condenado a muerte. El 7 de julio, miembros del partido, obreros azucareros y soldados tomaron el control de la ciudad. Pero debido a que los apristas trujillanos temían la eminente ejecución de su líder, actuaron sin llegar a coordinar con el resto de las cédulas nacionales.

La insensatez de la rebelión fue confrontada de manera bárbara por el gobierno. La ciudad fue bombardeada sin piedad y sin considerar la vida de

aquellos civiles que no habían tenido nada que ver con la conspiración. Los apristas abandonaron rápidamente la ciudad, dejando en peligro las vidas de los policías y soldados que habían sido prisioneros, los cuales fueron asesinados salvajemente. Los apristas negarían su participación en estos hechos¹⁵⁵. El ejército, poco después, entró en la ciudad y arrestó a aquellos que consideraba responsables de la revuelta, quienes fueron ejecutados sumariamente en las ruinas de Chan Chan (Villanueva 1973: 212).

5.3.5. El asesinato de Sánchez Cerro

Tras tan nefastos acontecimientos, parecía inevitable una venganza. Esta llegó a través de un hecho no dilucidado del todo si fue planeado por la cúpula aprista o fue un hecho espontáneo de un simpatizante. En una inspección militar a nuevos reclutas en Lima, Sánchez Cerro fue atacado por un joven que, supuestamente, pertenecía al Partido Aprista. La bala del asesino no mató instantáneamente al presidente, pero aseguró su muerte poco después.

Para, Henry Pease y Gonzalo Romero (2013) “la atmósfera politizada de la década de 1930 puso demasiada presión para que un gobierno elegido pudiera funcionar en una sociedad donde las tradiciones democráticas eran débiles” (p. 100).

5.4. Fernando Belaunde Terry: El Pueblo lo hizo

Nació en el seno de una familia aristocrática de Arequipa, claro exponente de las élites peruanas con genealogía europea¹⁵⁶, hijo de Rafael Belaúnde Díez Canseco y Lucía Terry; nació en Lima el 7 de octubre de 1912.

¹⁵⁵ Estos hechos claificados por Guillermo Thorndike como “el año de la barbarie”, marcaría el inicio del odio de los militares hacia al APRA, que solo se disiparía hacia fines de siglo. Ninguno de los dos bandos personaría los excesos cometidos por el otro.

¹⁵⁶ En el ilustre árbol genealógico del futuro presidente aparecían numerosos regidores y políticos con ascendencia española (extremeña, vasca o andaluza), como el primer alcalde de Lima en el siglo XVI, Nicolás de Rivera, el cronista de la conquista Pedro Pizarro, el arzobispo Francisco Javier de Luna Pizarro, que fuera primer presidente del Congreso Constituyente del Perú, o el general Pedro Díez Canseco, presidente de la República en funciones en cuatro ocasiones entre 1863 y 1868 y que era su bisabuelo paterno.

Su conciencia cívica e inquietud política la cultivó desde temprana edad a través de su padre Rafael¹⁵⁷, y el hermano de éste, Víctor Andrés quienes se involucraron en política y en la década de los veinte sus actividades les acarrearón períodos de cárcel y exilio durante la dictadura de Augusto Leguía y Salcedo. La familia fue definitivamente desterrada a Francia en 1924 y allí recibió el joven Belaúnde, luego de empezar la primaria en el colegio limeño La Recoleta, toda su educación secundaria y preuniversitaria. En 1930 secundó a la familia en su decisión de instalarse en Estados Unidos, estudió en la Universidad de Miami, donde su padre estableció una cátedra de Derecho e Historia antes de ser nombrado ministro del Gobierno peruano por el general Óscar Benavides Larrea, y luego en la Universidad de Texas, por la que se licenció en Arquitectura en 1935.

Durante unos meses Belaúnde ejerció su profesión en México, en la firma *Whiting y Torres*, y a finales de 1936 regresó al Perú. Según su propio testimonio recogido por Enrique Chirinos Soto (1987) a su regreso al Perú se vinculó “cien por ciento” a su trabajo profesional; a “tareas gremiales como la Sociedad de Arquitectos, precursora del Colegio de Arquitectos”; donde fue “Secretario de la primera directiva presidida por el arquitecto Rafael Marquina”. Incursiona en el periodismo “fundando sin poner un centavo”, *El Arquitecto Peruano*, en 1937 (p. 26). Es a través de esta revista, de la *Asociación de Arquitectos del Perú* y el *Instituto de Urbanismo del Perú* que fundó y dirigió, los medios por los que divulgó las corrientes arquitectónicas del momento y sus nociones sobre ingeniería urbanística y el problema de la vivienda en el país. Asistió a congresos y convenciones de la disciplina e impartió clases en diversos centros de país y el extranjero.

¹⁵⁷ Durante el gobierno del dictador Óscar R. Benavides, fue designado embajador del Perú en México y Chile. Tras el exilio se integró plenamente en la campaña de Bustamante y Rivero. Incluso llegó a vocearse su nombre como candidato presidencial del Frente Democrático Nacional (FDN), al ser uno de los gestores para atraer partidos como el APRA y dar forma a una coalición que se opusiera a las pretensiones reeleccionistas de Pardo y Ugarteche. Aparentemente, su nominación recibió el veto de Haya de la Torre. (Gonzáles 2013: 163-164).

En 1943 se convirtió en catedrático de Urbanismo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Lima por invitación de Cristóbal de Losada y Puga; en 1950 se puso al frente del Departamento de Arquitectura de la Escuela de Ingenieros y en 1955 fue nombrado primer decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), centro que puso en marcha a partir de la citada Escuela de Ingenieros, y cuyos alumnos y profesores, con él supervisándolo todo como jefe de obras, levantaron personalmente.

En 1944, Belaunde Terry ingresaría a la vida política, apoyando la conformación del FDN representado por José Luis Bustamante y Rivero, agrupación política acida en Arequipa y que reunía a un importante grupo de figuras políticas tanto de Arequipa como de Lima, entre ellas: Julio Ernesto Portugal, José Gálvez, Manuel Bustamante de la Fuente, y Rafael Belaunde. Era una coalición muy heterogénea formada en oposición al reeleccionismo de Prado y Ugarteche como recuerda Gonzalo Portocarrero (1983):

“Se trata como veremos, de una entidad heterogénea en su composición aunque no circunstancial en su origen, cuya base de apoyo más firme fue el APRA (todavía ilegal) pero que incluía también algunas fuerzas menores (Partido Comunista) y un buen y prestigiado número de políticos independientes que, sin estar comprometidos con la oligarquía, eran bastante más conservadores que el APRA. A este último grupo, pese a su personalidad un tanto difusa, se le puede llamar reformismo moderado” (pág. 62)

De una profunda filiación a lo que llama Portocarrero (1983) una “corriente político-cultural de fuerte tradición arequipeña”, que se constituiría en una clase media nacional en las próximas décadas. Personajes de esta tradición moderada democrática serán: José Luis Bustamante y Rivero, Rafael Belaunde, Manuel Bustamante de la Fuente, Javier Belaunde, Julio Ernesto Portugal, Víctor Andrés Belaunde, Alberto Ulloa, José Gálvez, y, Jorge Basadre (pág. 62).

Era un grupo humano donde la imagen de Piérola estaba muy presente en sus vidas y el pierolismo subsistía como ideal guía para la acción desinteresada, la altura de fines, el anhelo de integrar al país, el catolicismo

militante, la visión benevolente del pueblo. José Luis Bustamante y Alberto Ulloa eran hijos de acérrimos pierolistas, hecho que determinó la gran admiración que siempre profesó hacia el “califa” el primero, y llevó al segundo a convertirse en uno de sus primeros y principales biógrafos. Rafael Belaunde fue secretario de los últimos años de Piérola. José Gálvez, “el poeta de la juventud” narra que su “pierolismo” nació súbitamente, un día en su niñez en que se encontró con el ya viejo caudillo, quien al saber el nombre de Gálvez le dijo: “Buen nombre, pero no olvides que los buenos nombres son sobre todo compromiso y responsabilidad¹⁵⁸”.

Elegido Bustamante y Rivero como presidente, padre e hijo formaron parte del gobierno. Rafael Belaunde fue nombrado primer ministro, cargo que desempeñó hasta 1947, luego se pasó a la oposición. Fernando Belaunde Terry fue elegido diputado por Lima pero su gestión se vio interrumpida el 29 de octubre de 1948 tras el golpe de Estado del general Manuel Apolinario Odría Amoretti que disolvió el Congreso. Retornado a las actividades académicas, en los ocho años siguientes Belaunde elevó su voz en diversas ocasiones para denunciar la dictadura de Odría y su artimaña electoral de 1950 para legitimarse en el poder.

En la búsqueda de una salida democrática emergió la candidatura presidencial de Fernando Belaunde Terry, quien aspiraba a agrupar a las nuevas clases medias antioligárquicas. Las actitudes audaces de Belaunde Terry, más que los actos de violencia política, hacían parte de lo que Bourricaud (1967) denominaba el “bello gesto”. Odría, a través del Jurado Nacional de Elecciones, pretendía excluir a Belaunde de la escena política, negándose a inscribirlo como candidato a la Presidencia de la República. Fue necesaria una gran manifestación callejera el 1 de junio de 1956, un ultimátum del candidato populista y duras refriegas con la policía para que la dictadura aceptara la candidatura del Frente de Juventudes, que posteriormente se transformó en Acción Popular. La fuerza de la candidatura de Belaunde Terry –quedó tercero en la carrera electoral pero con una alta

¹⁵⁸ “Conversaciones con Gálvez” en *Historia*, julio-setiembre, 1944, p. 263. Citado en Portocarrero 1983: 63, nota 2.

votación de 1956- provenía de su carácter carismático y del hecho de representar un sector de clase media que no tenía compromiso alguno ni con la oligarquía ni con la dictadura de Odría.

Este nuevo ciclo político, abierto a mediados de 1955, se cerró en junio de 1962 con un nuevo ultimátum de Fernando Belaunde al gobierno pradista, para que cese de apoyar un supuesto fraude electoral en favor del APRA. Aprovechando la acusación de fraude electoral de Belaunde contra el gobierno de Manuel Prado, los militares dieron el primer golpe institucional y antioligárquico del siglo XX el 18 de julio de 1962, siendo respaldado por algunos dirigentes de Acción Popular. El golpe se puso a sí mismo la duración de un año para el retorno a la democracia. En realidad, el primer y pasajero golpe reformista reordenó la escena electoral, impulsó algunos cambios significativos –la reforma agraria en La Convención y la creación del Instituto Nacional de Planificación- y dio el tiempo político necesario para que Acción Popular (AP) y la Democracia Cristiana (DC) formaran una alianza electoral, favoreciendo su triunfo en las elecciones generales de 1963. Pese a su carácter transitorio, este fue el primer golpe militar institucional y antioligárquico, una especie de prólogo del golpe del general Velasco Alvarado en 1968.

5.4.1. Nace Acción Popular

El 7 de junio de 1956 Fernando Belaunde fundó en Chincheros, departamento de Cusco, la Acción Popular (AP). Se definía como un partido democrático, nacionalista, humanista y cooperativista, e inclusive reivindicaba una actitud revolucionaria, antiimperialista e interclasista, una amalgama de nociones bastante *sui generis* que aspiraba articular una vía alternativa a cualquiera de las ideologías conocidas en América Latina.

A la par que daba a luz su partido, Belaunde dejaría plasmado en una serie de libros lo que sería su pensamiento político y social, en donde se conjugan sus preocupaciones por los déficits y las posibilidades del país. Constituyen una suerte de trilogía *La conquista del Perú por los peruanos* (1959), *Pueblo*

por pueblo (1960) y *El mestizaje de la economía* (1963). En estas obras Belaunde insta a los lectores a recuperar los valores y las formas de organización social del antiguo imperio inca, observado desde una perspectiva idealizada, a reencontrarse con las señas de identidad más propiamente nacionales depositadas en el espacio físico andino, y a diseñar un plan de acción económico que no se ciñera exclusivamente a la racionalidad liberal y que tuviera en cuenta las especificidades de la realidad peruana, por lo que concedía la máxima importancia a la planificación y la cooperación popular.

Su labor política de bases no pasó desapercibida para los detentadores del poder oligárquico, así que en mayo de 1959 Belaunde fue arrestado cuando se disponía a inaugurar la convención anual del partido en Arequipa, que el Gobierno no había autorizado. Fue recluido en el Frontón, y puesto en libertad doce días después. Pero intentó escaparse por mar a nado. Hecho que le generó más simpatías, y por lo que el gobierno de Prado tuvo que detener el juicio criminal que seguía contra él por la presión de sus adherentes en las calles, sumado al profundo malestar social por la crisis económica.

Ante esto, el triunfo de Belaunde en las elecciones del 10 junio de 1962 era inevitable, pero, con el 32.9% de los sufragios, Haya de la Torre le adelantó por menos de un punto porcentual y 14 000 votos, mientras que AP se le adjudicaron 78 escaños en la Cámara de Diputados. Se levantaron voces que señalaban fraude, Belaunde propuso formar una comisión cívica y el Ejército, exigió la suspensión de los comicios. A lo que Prado se negó.

Ante esta negativa, el 18 de julio los militares encabezados por Ricardo Pérez Godoy dieron un golpe de Estado y formaron una Junta Militar, la cual no mostró interés en permanecer más tiempo del necesario para convocar a nuevas elecciones. Cuando Pérez Godoy dio muestras de aferrarse al sillón presidencial, sus propios compañeros de la Junta le sustituyeron por el General Nicolás Lindley López.

5.4.2. Las elecciones de 1963

Las Fuerzas Armadas, tras el golpe de 1962, mantuvieron su palabra y las elecciones fueron convocadas para el 9 de junio del año siguiente. Aquella contienda electoral reunía a tres mismos candidatos de la elección anterior. Haya de la Torre fue una vez más nominado por el APRA, Odría participaría por la UNO y Belaunde haría lo mismo por AP. Las similitudes acababan ahí. Tanto el clima político como el resultado de los sufragios fueron diferentes. Tras un año de gobierno militar, bajo el cual importantes cambios se habían desarrollado, había una “creciente percepción de que la hora de una reforma agraria había llegado inexorablemente” (Klarén, 2004: 391). En otras palabras, los candidatos eran los mismos, pero las expectativas eran mayores.

Esta ausencia no se vio necesariamente reflejada en las campañas electorales de todos los candidatos. Por ejemplo, la UNO no elaboró plan alguno que incluyese la reforma agraria u otra como eje central y se limitó a repetir la táctica de las elecciones pasadas, la cual consistía en atacar al APRA. Sin embargo, estos métodos probaron ser menos efectivos que en 1962, especialmente si se considera el acuerdo al que este partido y el APRA habían llegado antes del golpe de Estado. Aparte de estos planes la UNO se presentaba como el único partido de la derecha.

En cuanto al APRA, algunos se sorprendieron cuando la mayoría eligió nuevamente como candidato a Haya de la Torre. Esta decisión no fue bien recibida por todos los miembros de la dirigencia apristas. El primero en demostrar su descontento fue Manuel Seoane (1900-1963), la segunda figura más importante del partido, quien tras perder la nominación contra Haya de la Torre, empezó a alejarse del Partido del Pueblo. Sus críticas hacía el líder histórico no solo se debían a la amargura de la derrota; él y otros consideraban genuinamente que el partido debía pasar por un proceso de renovación y que Haya de la Torre era una figura demasiado controversial. Por otro lado, Seoane, criticaba fuertemente la estrategia aprista de aliarse con la oligarquía para alcanzar el poder.

Estos miedos no solo eran manifestados por Seoane. Gran parte de la población consideraba que el golpe de 1962 no había ocurrido por indicios de fraude, sino por el rechazo de las Fuerzas Armadas hacia la alianza entre Odría y el APRA. No obstante ello, los generales siempre negaron que el golpe ocurrió por dichas razones. Pero estas declaraciones solo lograron aumentar la percepción de que el proceso democrático sólo existía debido a que las Fuerzas Armadas lo permitían. Se sabía que algunos de sus sectores apoyaban la elección de Belaunde, quien era visto como el reformista gradual que necesitaba el país.

El principal beneficiado, entonces, fue Belaunde. Sus oportunidades de alcanzar la presidencia habían mejorado durante el último año. No solo llevó a cabo una campaña descentralizada, en un momento en el que los problemas del interior del país parecían dominar el debate político nacional, sino que su programa reformista parecía más relevante en dichas circunstancias. En este contexto, se estableció una importante alianza con la DC, agrupación que a cambio de ciertos puestos ministeriales, incluyendo el de Agricultura, prometió no presentar candidato presidencial. Dado el escaso margen de derrota en 1962, el pacto aseguró que AP no perdiese votos frente a un partido ideológicamente similar

Las Fuerzas Armadas habían realizado una limpieza del padrón electoral durante su último año en el poder y alrededor de 2000 000 votantes fueron eliminados de sus listas. A pesar de esto, la cantidad de votos emitidos se mantuvo aproximadamente igual, puesto que hubo un menor porcentaje de ausentismos -1969 328 votos emitidos en 1962 y 1954 284 emitidos en 1963-. Tanto Haya de la Torre como Belaunde recibieron en total más votos que el año anterior, mientras que Odría recibió un menor número. Cuando se terminó de contar los resultados, Belaunde había logrado conseguir más del tercio necesario requerido por la Constitución para ser directamente elegido presidente.

CUADRO XII
Elecciones presidenciales de 1963

Organización política	Total de votos	Porcentaje de votos válidos	Porcentaje de votos emitidos
Fernando Belaunde Terry (Acción Popular)	708 662	39,054%	36,262%
Víctor Raúl Haya de la Torre (Partido Aprista Peruano)	623 501	34,361%	31,904%
Manuel A. Odría (Unión Nacional Odrista)	463 085	25,520%	23,696%
Mario SamaméBoggio (Unión del Pueblo Peruano)	19 320	1,065%	0,989%
Votos blancos	93 661		4,793%
Votos nulos	46 055		2,357%
Total de mesas: 0		Total de electores 2 070 718	
Votos emitidos: 1 954 284		Participación: 94,380%	

Fuente: Adaptado de Jurado Nacional de Elecciones (s.f.). Resultados electorales. INFOgob. Recuperado de <http://www.infogob.com.pe/Eleccion/ficha.aspx?IdEleccion=98&IdTab=2&IdGrupo=1>

5.4.3. El gobierno del presidente Belaunde (1963-1968)

Había considerables expectativas en cuanto a lo que lograría Belaunde como presidente, pero su agrupación AP-DC no logró obtener la mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso. En otras circunstancias, esto no implicaría mayores problemas, pues a través de las usuales negociaciones políticas se podría haber establecido algún tipo de gobierno funcional. Pero como representantes de la oligarquía, tanto el APRA como la UNO, hacían improbable cualquier intento por parte de Belaunde de acercarse a ellos con el programa reformista.

CUADRO
Configuración parlamentaria de 1963

Partido	Senadores	Diputados
AP-DC	20	50
APRA	18	58
UNO	7	27
Otros	5	5
Total	50	140

Fuente: Pease y Romero (2013: 207)

El Partido Aprista y la UNO formaron su propio bloque, el cual pasaría a ser llamado la “coalición APRA-UNO”. A pesar de las diferencias ideológicas entre ambos partidos y de la historia reciente entre sus dos líderes, la creación de esta coalición debería haber causado sorpresa. Ambos partidos habían trabajado juntos durante los últimos años. Tanto Haya de la Torre como Odría habían cooperado con Prado para hacer posible la Convivencia; por tanto, sus comienzos fueron una continuidad del Pacto de Monterrico. Más recientemente, el acuerdo entre el APRA y la UNO para elegir a Odría como presidente en 1962 demostraba que ambos cooperarían siempre y cuando hubiese un tercer enemigo. La oposición de la coalición probó ser tercamente eficaz. Se establecieron, por tanto, las bases para una larga y amarga batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo, lucha política que atravesaría a todos los Poderes del Estado.

La victoria de la alianza AP-DC en las elecciones municipales fue interpretada por muchos como un voto de confianza por parte de la población hacia el gobierno. Sin embargo, la coalición, a pesar de los resultados, o más bien debido a ellos, decidió dirigir su ataque contra el régimen. Se da entonces la primera de varias censuras, la del presidente del Consejo de Ministros y ministro de Gobierno y Policía, Óscar Trelles Montes (1904-1990). La excusa usada por la coalición fue que el gobierno no había tomado las medidas adecuadas para ponerle fin a las invasiones de tierra realizadas por cientos de miles de campesinos; es decir, no había enviado a las tropas para reprimirlos. Trelles fue señalado como el principal responsable. Debido a la mayoría que la coalición disfrutaba en el Congreso, la censura fue exitosa y Belaunde se vio obligado a recomponer el gabinete (Pease, 1977: 64).

El hecho de que el primer gabinete durara solo cinco meses fue una señal de lo que se avecinaba, al punto de que en la primera gestión de Belaunde hubo un total de siete gabinetes. Tras la censura de Trelles, un segundo gabinete fue conformado con Fernando Schwalb López-Aldana (1916-2002) a la cabeza.

CUADRO XIII
Lista de ministros censurados por la coalición APRA-UNO (1963-1966)

Ministro	Cartera	Fecha	Aprobado por
Julio Oscar Trelles Montes	Gobierno y Policía y Presidencia del Consejo	31-12-1963	Cámara de Diputados
Carlos Pestana Zevallos	Fomento	3-4-1964	Senado
Francisco Miró Quesada	Educación	1-10-1964	Cámara de Diputados
Víctor Ganoza Plaza	Agricultura	18-2-1965	Senado
Valentín Paniagua Corazao	Justicia	18-1-1966	Senado
José Navarro Grau	Educación	13-4-1966	Cámara de Diputados
Javier Alva Orlandini	Gobierno y Policía	27-10-1966	Cámara de Diputados
Miguel Dammert Muelle	Trabajo y Asuntos Indígenas	27-10-1966	Cámara de Diputados
Carlos Cueto Fernandini	Educación	29-12-1966	Senado
Luis Alayza Escardó	Gobierno y Policía	8-7-1967	Cámara de Diputados

Fuente: Díaz Muñoz (1997, p. 311)

El problema de la Reforma Agraria se hacía más urgente a medida que la toma de tierras y la lucha campesina se volvían más activas en el interior del país. Asimismo, las Fuerzas Armadas, de acuerdo con su nueva doctrina de que la seguridad interna dependía del desarrollo nacional, también consideraban a la reforma como un tema primordial. Por otro lado, para actores reformistas como AP y la DC, esta era necesaria para poder romper el poder de la oligarquía y modernizar el país. Por ende, Belaunde y su alianza política había prometido una verdadera y profunda reforma del agro durante la campaña electoral.

Sin embargo, el presidente tendría que lidiar con la oposición de la coalición, la cual usó todas las herramientas políticas para defender a los terratenientes. Incluso antes de que se pudiese aprobar una ley, la presión era tan considerable que el gabinete cedió en un punto crucial: cualquier ley de reforma agraria no incluiría a las haciendas agroexportadoras de la costa norte. La excepción supuestamente se debía a que, al ser industriales, estas tierras no eran ineficientes, pero en realidad fue por la presión política de la coalición APRA-UNO. El Partido Aprista, en su afán de mantener el apoyo

de la burguesía agroexportadora, insistió en este punto, pues sabía que la reforma podría afectar su base política, pues todavía dirigía la Federación de Trabajadores Azucareros. Así pues, termina siendo irónico que el APRA, partido que llegó a existir debido a su oposición a los grandes barones del azúcar, se haya convertido en su más acérrimo defensor.

Excluidas las grandes haciendas azucareras, la reforma agraria de Belaunde estaba principalmente dirigida a los grandes latifundios tradicionales de la tierra. Sin embargo, estos recibirían la protección de la coalición APRA-UNO, pues gran parte del apoyo recibido por Odría provenía de los terratenientes tradicionales. Por otro lado, el APRA, reacio a que el gobierno se llevara el crédito por una reforma largamente demandada por sus partidarios, buscaría su fracaso. Cuando se aprobó la ley 15037, esta fue obstruida directamente por la coalición y se diluyó a tal punto que incluyó varios artículos que permitían evadir eficazmente la reforma. Asimismo, la oposición se negó sistemáticamente a aprobar el dinero necesario para compensar las expropiaciones. Finalmente, cuando se creó el Consejo Nacional Agrario, órgano destinado a ejecutar la reforma, este termina siendo controlado por apristas y terratenientes, quienes sabotearon sus funciones.

La reforma agraria efectuada por Belaunde terminó siendo un fracaso debido a su limitado impacto. El total de tierras expropiadas hasta el treinta de setiembre de 1968 fue de 769 942,53 ha. A esa misma fecha había 214 286,45 ha con los trámites de expropiación terminados, pero sin financiación para concluir el proceso. En total se había beneficiado a 11 760 familias (1977b, pág.63).

Del mismo modo, las consecuencias políticas fueron considerables. La alianza AP-DC terminó debilitándose debido a que el presidente había claudicado en sus intentos de realizar la reforma. Gracias a la exitosa oposición, la coalición se vio fortalecida. Por su parte, las Fuerzas Armadas veían todo el proceso con creciente preocupación.

Hacia 1967 comenzaron las fisuras en la unión AP-DC, la coalición entorpecía todos sus proyectos e iniciativas, y finalmente tras la renuncia del gabinete Seaone, la alianza quedó oficialmente disuelta. Ante ello sin aliados y con una crisis económica en aumento, Belaunde se acerca al APRA con la esperanza de poder concluir su mandato si conseguía pactar con el bloque aprista un gabinete que le permita concluir su gran obra vial la “carretera marginal de la selva”. Se acordó un gabinete que tenía como premier a Oswaldo Hercillas y como ministro de Hacienda a Manuel Ulloa, dándosele poderes extraordinarios. Con este el APRA conseguía acabar con las reformas (en especial la de la reforma agraria), y dejar la responsabilidad al ejecutivo del manejo económico para superar la crisis, que avizoraban sería en base a medidas antipopulares. Esto le permitía reconstituirse como opción política de cara a las siguientes elecciones.

Pero esto trajo consigo el rompimiento de la coalición y la posterior desaparición del UNO como agrupación política.

El esfuerzo de Belaunde no rendiría frutos pues la poco clara negociación y firma del Acta de Talara, con International Petroleum Company (IPC) le dio el pretexto ideal a las fuerzas armadas para dar el golpe en 1968.

5.5. Velasco: La Voz de la Revolución

Juan Velasco Alvarado era un ejemplo vivo de que el ejército funcionaba como un eficaz ascensor social. Había nacido en Piura en 1910 en un hogar de clase media baja. Hizo sus primeros estudios en una escuela pública, enrolándose en 1928 en el ejército como soldado raso. Para esto viajó a Lima como “pavo” (pasajero clandestino) en un barco mercante que abordó en el puerto de Paita. Los requisitos sociales para ingresar a la Escuela de Oficiales se sorteaban más fácilmente cuando se había servido como soldado. Juan Velasco logró graduarse como subteniente en 1924 e inició desde entonces una exitosa carrera de oficial que lo llevó, tres décadas después, al más alto rango de las fuerzas armadas del país.

5.5.1. El golpe de 1968

Los militares que encabezaron el golpe de Estado de 1968 hicieron suya una concepción del país según la cual la cuestión central del Perú era la carencia de un grupo rector capaz de sostener un proceso de integración nacional y político de la sociedad peruana. Formados en el CAEM, que les proporcionó tanto una ideología nacionalista desarrollista como un espíritu común, poseían una visión crítica de la sociedad peruana y una visión amplia de la seguridad nacional. Para muchos de ellos, el espectro de la insurgencia requería un conjunto de reformas sociales, “una política general de desarrollo económico y social”, que suponía una cierta redistribución del ingreso.

Pero sobre todo, y paradójicamente, el gobierno militar de Velasco Alvarado pondría en práctica las medidas propugnadas por el APRA desde los años treinta: nacionalizaciones de empresas extranjeras, participación de los trabajadores en la propiedad y reforma agraria. Conjunto de procesos que formarán parte del consenso institucional de los militares (North, 1985), incluyendo una desconfianza hacia los políticos civiles, una clara orientación tecnocrática, la percepción de la necesidad de reformas para consolidar la seguridad interna, y un nacionalismo basado fundamentalmente en el patriotismo militar. Un consenso que, a pesar de ciertas discrepancias,⁹ unió las Fuerzas Armadas en torno del proyecto de crear una “democracia social con plena participación”; más simple, una versión castrense del modelo nacional-popular.

5.5.2. El desarrollo hacia dentro

El modelo de desarrollo hacia adentro El objetivo militar era lograr una reforma que permitiera eliminar la “dependencia externa” y la “dominación interna”, causantes de la “desunión nacional” y el “desencuentro” entre Pueblo y Fuerzas Armadas. Un objetivo que se basó en un diagnóstico del problema peruano, en términos similares a los que había enunciado el APRA, sobre todo en referencia a la penetración del capital extranjero: así, lo

que el Perú requería era un “desarrollo hacia adentro” mediante la erradicación de los enclaves y sus asociados. Un conjunto de reformas indispensables para asegurar el “autodesarrollo” del país, que haría posible el establecimiento de una “sociedad solidaria” bajo la tutela de un Estado militar. La reelaboración de la idea de defensa nacional se halló así en la base del proyecto militar (Stepan, 1978: 127-147).

No fue un gobierno plenamente corporativo, ya que en dicho caso Velasco Alvarado debía haber sido relevado en el cargo una vez que le correspondiese pasar al retiro al cumplir los 35 años de servicio en el ejército. Pero tampoco fue un gobierno totalmente personalista, ya que cada cuna de las tres armas en las que estaban divididas las fuerzas militares: el ejército, la marina y la aviación, recibió ciertas áreas de gobierno (ministerios) en las que podía manejarse con alguna autonomía.

5.5.3. Las Reformas

Tres grandes sectores fueron objeto de reforma. En primer lugar, se apuntó a una reelaboración de la presencia del capital extranjero dentro de la economía peruana, clarificando las nuevas condiciones de inversión, que asumieron formas diferentes según el sector económico, inversiones directas o empresas mixtas. Esto condujo a un incremento importante tanto de la inversión directa extranjera en el Perú entre 1972 y 1974 como del valor de las inversiones americanas, que pasaron de 692 millones de dólares en 1968 a 1.212 en 1975 (Portocarrero, 1978: 982), lo cual muestra que los vínculos entre el capital internacional y el gobierno militar estuvieron lejos de ser conflictivos, como pretendía la retórica del régimen (Guasti, 1985; Stallings, 1985).

En segundo lugar, se realizó la reforma agraria, sobre todo a través de medidas como la expropiación de las haciendas azucareras y de algodón, que fueron transformadas en grandes cooperativas dentro de un plan global que incluía la indemnización de los antiguos propietarios, la defensa de la pequeña y mediana propiedad, el impulso de las cooperativas y el aumento

de la producción. En el término económico el “gobierno revolucionario de la fuerza armada” realizó una importante redistribución de la propiedad y los ingresos. Los latifundios agrarios fueron expropiados a partir de una ley de reforma agraria aplicada desde 1969, que privó de su propiedad a los hacendados que tuviesen más de 50 hectáreas de tierras en la costa y 150 hectáreas de tierras en la sierra.

En tercer lugar, se llevó a cabo la nacionalización de la banca, en especial, la ley general de industrias, que implicaba la progresiva participación efectiva de los trabajadores en el capital de la empresa, gracias a la transferencia a la “comunidad industrial” (asalariados incluidos) del 15% de los beneficios anuales, para su reinversión obligatoria en la empresa hasta una suma equivalente al 50% del capital. En suma, el proyecto militar se propuso combinar la acumulación capitalista del Estado con la del sector privado, a fin de ampliar y homogeneizar el mercado interno, con la consiguiente integración económica y social. El resultado más contundente de las reformas en el aparato productivo fue la eliminación de la estructura terrateniente y la postergación de la tradicional burguesía agraria y comercial. Frente a ella, el Estado amplió y diversificó el aparato burocrático, pero también incrementó de manera importante su presencia en la inversión total, pasando de 16% en 1965, al 50% en 1975; su participación en el PIB pasó del 11% en 1968 al 25% en 1975 (Fitzgerald, 1981). Este conjunto de medidas tuvo, sin embargo, un alcance limitado en la redistribución del ingreso, pues ésta sólo habría operado dentro de cada sector reformado (y no entre ellos), y en el seno de cada uno de ellos habría beneficiado en proporción desigual los diferentes subsectores (Webb y Figueroa, 1975). Aun cuando la primera fase del régimen atravesó dificultades económicas, visibles en el déficit fiscal, los graves problemas de balanza de pagos y el peso creciente de la deuda externa, no fueron los factores de orden económico-financiero los que aceleraron su caída, sino los específicamente sociales.

5.5.4. La subordinación de los actores sociales

En lo que sin lugar a dudas constituye uno de los rasgos más característicos del modelo nacional-popular, el gobierno militar, que había logrado la cooptación de un buen número de representantes de la intelligentsia nacional, intentó a través del SINAMOS (Sistema Nacional de Movilización Social) ejercer el control de los actores sociales y subordinarlos a su política. A la Central de Trabajadores Peruanos se le contrapuso la Central de los Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), ligada al gobierno. Pero el SINAMOS, que se inició como uno de los organismos estatales de mayor apoyo, pronto entró en contradicción con el desarrollo político de la sociedad y con las tendencias más autoritarias del cuerpo militar, proceso que lo condujo a su paralización y su posterior “desactivación”. Desde sus comienzos, en efecto, el SINAMOS debía cumplir un rol contradictorio: por un lado, se encargaba de organizar a la población para acelerar las reformas propuestas por el gobierno, concentrando la hostilidad de las clases dominantes, de los organismos públicos y, en especial, de los servicios de inteligencia, sectores estos que nunca dejaron de sospechar que el SINAMOS pretendía rebasar el control militar.

Por otro lado, en la medida en que el SINAMOS procuraba desplazar a las organizaciones populares, también concentraba la oposición de las clases dominadas y de los militantes políticos. Con el tiempo este proceso dio lugar a un enfrentamiento entre sectores del sindicalismo y de la oficialidad, lo que se agravó cuando Morales Bermúdez tomó el poder, mediante golpe de Estado interno, en 1975. En suma, ante la incapacidad de organizar a la población de manera corporativista, el gobierno militar decidió quebrar la autonomía de las organizaciones populares, pero se encontró con la fuerte resistencia de éstas. Los servicios de inteligencia agregaron a sus habituales funciones la de detectar los enemigos “infiltrados” en el gobierno. La desconfianza de los militares hacia toda forma de movilización social autónoma incrementó su distanciamiento de la sociedad. Asimismo, a medida que se evidenciaba el fracaso de SINAMOS, la idea de crear un Partido de la Revolución Peruana encontró una fuerte oposición de la cúpula militar. El gobierno militar silenció, sin represión excesiva si lo comparamos con otras experiencias del Cono Sur, a los partidos políticos, sobre todo al

APRA y a la Acción Popular, a quienes culpaba, junto con la oligarquía y el imperialismo, de ser los causantes del atraso nacional. La visión de los militares se apoyaba en la idea de que las reformas emprendidas terminarían por distanciar a los sectores populares de los partidos tradicionales. El resultado fue la acentuación del carácter bonapartista del régimen y la consolidación de un gobierno que no lograba representarse más que a sí mismo (Cotler, 1978). El carácter bonapartista se correspondía con la naturaleza castrense del gobierno, su estructura jerárquica y autoritaria, que reproducía fielmente la división clasista y étnica de la sociedad peruana, a partir de la cual los sectores subalternos eran despojados de todo protagonismo político. Por otro lado, la desarticulación de la sociedad peruana, la débil estructuración política de la sociedad civil, así como la fuerte profesionalización del ejército, le otorgaron al gobierno militar una considerable autonomía. Pero, más allá de sus razones institucionales, la capacidad del gobierno militar de encauzar la movilización popular se encontró con un obstáculo mayor: la ausencia de un verdadero liderazgo carismático, como se registró en otras experiencias nacional-populares exitosas en el continente, capaz de producir, a través del fervor y la devoción hacia su persona, la compatibilidad entre sectores diversos.

5.5.5. El liderazgo

Debemos tener en cuenta dos impasses de naturaleza diferente respecto del liderazgo. El primero se refiere a las reglas de acceso al gobierno, subordinadas a las reglas de la jerarquía militar y por ende, a un determinado sistema de promoción. Con el objeto de reforzar el carácter institucional del gobierno, el Presidente debía ostentar el rango más alto en la jerarquía militar, lo cual suponía también la rotación del cargo en función de su pase a retiro. Sin embargo, cuando Velasco asumió las funciones de Presidente de la República, no se sometió a dicha regla y buscó su confirmación mediante el voto de los jefes militares, sin acogerse al retiro. El poder institucional de las Fuerzas Armadas tendió así a personalizarse, tanto más que, a medida que surgían tensiones entre conservadores y radicales en el seno del gobierno, el proceso fue acompañado por una centralización creciente de la decisión y por la extensión del rol de arbitraje del Presidente

(Bourricaud, 1970). Pero esta personalización no dio lugar a la emergencia de una jefatura carismática, y esto por razones tanto “estructurales” como en apariencia “aleatorias”. En primer lugar “estructurales”: la imposición de un jefe carismático habría exigido la constitución de un “partido” de masas capaz de asegurar la radicalización, movilización y encuadramiento necesarios: ahora bien, la desconfianza de los militares hacia la sociedad civil, como el temor de los sectores más “conservadores” del ejército de que la estructura escapase al control castrense impidieron la puesta en práctica de esta opción. Ciertamente, los discursos de Velasco, la “voz de la revolución”, tienen más de una resonancia populista, pero falta en ellos la puesta en escena populista y, sobre todo, la dramaturgia propia del líder: ambigüedad, paternalismo manipulador, la idea del sacrificio y de la traición. Elementos y recursos simbólicos que son, junto con los modelos de movilización o los resultados económicos, rasgos determinantes del éxito de un modelo nacional-popular. De ahí que si bien es cierto que el fracaso del GRFA se explica, en mucho, por las contradicciones existentes entre una política distributiva en el marco de un patrón de desarrollo basado en la concentración de ingresos y capital (Cotler, 1985: 59 y ss.), así como por la ausencia de un grupo local empresarial dinámico y un Estado experimentado y competente en el ámbito económico (Thorp, 1985); el fracaso se debió también a la incapacidad del gobierno militar por articular, realmente, los tres ejes del modelo nacional-popular. A esto hay que añadir las diferencias entre las dos fases del GRFA.

La “segunda fase”, resultado de la crisis política que desembocó en la caída de Velasco, significó la paulatina erradicación de las características nacional-populares de la “primera fase”. La reacción de los sectores populares, en especial los trabajadores del sector formal y los sectores medios asalariados, fue la de arremeter en contra del gobierno frente a sus medidas antipopulares. Por otro lado, los sectores dominantes y el capital multinacional siguieron oponiéndose al gobierno, por no descartar definitivamente la herencia nacional-popular. Ciertamente, Morales Bermúdez cambió el rumbo con relación a la primera fase, excluyendo toda veleidad de movilización popular, y atendiendo las demandas del poder económico

internacional. Pero, sin posibilidades de perpetuación, ampliamente contestado, el gobierno militar tras las movilizaciones de julio de 1977 (Sulmont, 1980), debió organizar una larga transición a la democracia.

5.6. Alan García Pérez: El futuro diferente

La primera aparición importante de Alan García fue al lado de Víctor Raúl Haya de la Torre, cuando éste inauguró su campaña hacia la Asamblea Constituyente. Ocurrió en un mitin en la Plaza San Martín de Lima. García, entonces de 29 años, era el orador escogido que antecedería a Haya. Fue toda una revelación. Como recuerda Carlos Reyna (2000) “el partido se había ido acostumbrando a los discursos serenos y hasta cansinos del jefe”, y a los discursos a veces también gritones y a veces simplemente grises de los líderes del entorno de Haya. Los líderes jóvenes de oratoria vibrante y efectiva estarían todos en la izquierda radical. Para los militantes apristas Alan García, aquella vez, pareció ser la reencarnación del Haya de los años veinte.

5.6.1. Un producto aprista

El joven líder era un producto aprista de los pies a la cabeza. Procedía de una familia en la que hombres y mujeres vivían una intensa militancia en el partido de Haya de la Torre. Su padre, una persona parca pero activa, había llegado a ser secretario de organización y era bastante conocido por Haya. Alan se afilió cuando era apenas un adolescente, a los 12 años, en un local del distrito de Barranco. A los 20, en 1969, ya formaba parte de una generación de jóvenes apristas con muchas razones para volver al lenguaje que utilizó el partido en sus orígenes. Entre estos jóvenes estaban, además de Alan García, Carlos Roca, Ilda Urizar, Fernando Arias, Javier Tantaleán Arbulú, César Vasquez Bazán, Óscar Morales y otros. A mediados de los setenta el más conocido era Carlos Roca. Luis Alva Castro, algo mayor que Alan García, también era muy joven en 1959 cuando vio de cerca como la mayoría de los jóvenes apristas trujillanos se fueron del partido resentidos por la desconcertante “convivencia”.

En búsqueda de un rumbo para su propia existencia como militantes, los jóvenes recurrieron a la propia ortodoxia. Comenzaron a circular reediciones artesanales del clásico olvidado *El antimperialismo y el APRA* y varios se aventuraron a criticar, en documentos clandestinos, las maniobras que había hecho el partido entre las décadas del cincuenta y sesenta. En la actividad pública, especialmente en los medios universitarios, los jóvenes apristas comenzaron a expresarse cada vez más en los términos antiimperialistas y radicales originales del partido.

Haya, a diferencia de otros líderes apristas, no criticó las reformas velasquistas desde una perspectiva conservadora. Muy por el contrario reclamó la filiación aprista de tales reformas y centró sus discursos en que éstas deberían hacerse en democracia. En la postura de Haya frente a las reformas de Velasco ya estaba implícito un nuevo viraje hacia una ubicación por lo menos de centro izquierda. Víctor Raúl, a inicios de los setenta, autorizó la reedición de *El antimperialismo y el APRA*, que no había vuelto a imprimirse desde 1931. Y, finalmente, lo más significativo, le abrió un importante espacio a los jóvenes apristas en la conducción partidaria. Seleccionó a un grupo de ellos y los puso a trabajar a su lado y de los dirigentes del partido. Hasta ese momento, los veteranos de la organización habían monopolizado el entorno de Haya y las jerarquías obedecían casi automáticamente el principio de antigüedad.

En 1977 Haya convenció al joven García a que se dedicara de una vez por todas a la actividad partidaria y le encargó la secretaría nacional de organización, un cargo que parecía demasiado peso para sus 28 años. Ese es el puesto que ocupaba cuando pronunció aquel discurso en la Plaza San Martín al lado del ya mítico líder aprista.

5.6.2. El Político

El desempeño de Alan como congresista fue más bien opaco y no destacó tampoco como constituyente. El parlamento no fue el centro de sus

preocupaciones partidarias sino su propio destino como líder, pues comenzó una campaña personal por hacerse de un lugar importante en la dirigencia del partido.

Desde el congreso de Trujillo Alan emerge como responsable de la comisión de ideología y política. Y es desde allí, al decir de Reyna (2000), donde trabaja en dos direcciones: 1) reubicar definitivamente al partido aprista en una posición de centro izquierda y 2) reconciliar a las facciones en pugna. Los discursos que pronuncia retoman el cuestionamiento a la oligarquía y al imperialismo y, en su línea de reconciliación, propone y obtiene que, en junio de 1981, la dirigencia aprista decreta una amnistía para que vuelvan los disidentes. A la luz de los hechos posteriores, notamos que desde esa época ya estaba buscando el cargo máximo del partido, la “Secretaría General”, para saltar de allí a la candidatura presidencial para las elecciones de 1985.

En setiembre de 1982 fue publicado su libro *El futuro diferente*. Obtiene la Secretaría General un mes después al derrotar a Carlos Enrique Melgar, un representante de la “generación intermedia”¹⁵⁹. En el discurso con el que asumió el cargo, manifestó: “Los que tomamos hoy la responsabilidad de dirigir el aprismo somos herederos y continuadores de la generación de 1920 (...) *somos la causa de la izquierda del pueblo*”.

Después de la elección, el PAP dio una imagen de unidad que contrastaba en mucho con los conflictos que afectaban a los otros partidos. El candidato aprista comenzó a desarrollar un efectivo discurso de apertura y de consenso, que era a la vez un mensaje de reivindicación nacional.

Como lo muestran las encuestas de entonces, la campaña de Alan García Pérez fue arrolladora. Tuvo la inteligencia de no cebarse con el fracaso del gobierno de Belaunde; lo fustigó, pero desde un discurso que reivindicaba al “pueblo trabajador”.

¹⁵⁹ Los llamados “los cuarentones”.

Una parte de la izquierda también fue dúctil frente a la imagen de Alan. Alfonso Barrantes, el candidato de Izquierda Unida (IU) y su competidor en 1985, pudo presentarse a una segunda vuelta pero no lo hizo, pensando que así evitaba una derrota aplastante. Es probable que pensara que el triunfo de Alan era, en cierto modo, la victoria de ideas parecidas a las suyas. Al parecer ambos se percibían como dos variantes de algo definido vagamente como “izquierda democrática”, una suerte de “social democracia” a la peruana. Barrantes reconoció el triunfo de García y se abstuvo de presentarse a una segunda vuelta.

Según una encuesta de Apoyo S.A. de diciembre de 1984, sólo el 6,6% de encuestados expresaban su decisión de “no votar de ninguna manera” por Alan García, mientras que el 43,5% manifestaba esa resistencia contra el candidato Javier Alva Orlandini de Acción Popular, y 21,5% contra Alfonso Barrantes de Izquierda Unida. En esa misma encuesta García tenía un 47,4% de preferencias electorales contra 21,3% de Barrantes¹⁶⁰.

5.6.3. La cultura política del Líder

En la cultura política del país, aún antes de que García asumiera el mando, ya existían elementos que presionaban a favor de un fuerte personalismo. Uno de ellos era el presidencialismo, que venía consolidándose desde 1980. En el presidencialismo del régimen constitucional el gobernante tiene una serie de atribuciones como la observación y el veto de las leyes, la iniciativa legislativa y la potestad de elaborar el presupuesto. El presidente también tiene la atribución de designar a todo su gabinete, que es responsable ante el Congreso, pero si éste retira sucesivamente su confianza a tres gabinetes, puede llamar a elecciones para un nuevo Congreso. En cambio, el Congreso no puede destituir al presidente excepto en casos sumamente graves.

También había un presidencialismo en el voto ya que una parte importante del electorado tendía a no votar por congresistas, lo cual, en el caso del

¹⁶⁰ *Perú Económico*. Lima, diciembre de 1984.

candidato elegido como presidente, significaba una gran brecha entre su votación y la muy rezagada votación de los congresistas de su lista. Ello creaba la imagen de un respaldo bastante más fuerte para el presidente que para el Congreso. Junto con esto existía una tendencia a que el voto por el candidato vencedor de la primera vuelta arrastrara la mayor proporción de votos por congresistas, lo cual le garantizaba una mayoría por lo menos relativa. Pero como entre 1978 y 1985 se daba una alta volatilidad del voto, lo que terminó ocurriendo fue el paso de una mayoría absoluta a otra, obteniéndose así una mayoría absoluta en el Congreso para el partido de gobierno.

Un factor de presidencialismo es el centralismo extremo del país. Al llegar García al gobierno, más del 95% del ingreso y del gasto público estaba a cargo del Ejecutivo, no había gobiernos regionales y los municipios tenían escasas atribuciones como gobiernos locales.

Pero, además, en los partidos existentes en el país había una viva herencia caudillista, con jefes fuertes y partidos débiles, que conduce al tema, aún en discusión, de si en el Perú existía o no un sistema de partidos y qué grado de consolidación tenía. Sin embargo, la mayoría de autores coincide en que tal sistema de partidos estaba apreciablemente lejos de su consolidación.

Para los cuadros y la masa aprista resultó providencial la aparición de Alan García. Él los rescató de una división y abrió paso a una generación que, con su liderazgo, tomó el control del partido sin que éste se escindiera. Pero la apariencia providencial de su papel, sus semejanzas oratorias con Haya y el éxito del candidato para llevarlos a la tierra prometida del gobierno, hacían del aprismo, otra vez, un partido disponible para el caudillismo.

Su fuerza estaba en su implantación social, bastante mayor que la de sus competidores. Y su debilidad era la ausencia de un encuadre partidario. Ante tal carencia, la fórmula de un frente y de un candidato independiente de los partidos resultaba salvadora en el corto plazo. Pero en 1985 todavía tenía que pasar muchas pruebas para consolidarse. Una de ellas precisamente

era la proclividad caudillista que estaba desarrollando el líder del frente, Alfonso Barrantes.

Como señaló un ex compañero de partido de García:

“Habían coincidido en él las gracias del caudillismo y de las instituciones. A los 36 años, sin mayor experiencia, el país le había entregado su confianza. Algo podía decirnos el fenómeno sobre la consistencia de nuestras instituciones¹⁶¹”.

La aparición de Alan fue providencial para devolverle a la organización los bríos que había perdido en las últimas décadas. Para muchos apristas, el triunfo de 1985 confirmaba que el papel de conductor ya tenía un dueño después de Haya. El destino del aprismo aparecía nuevamente subsumido en la suerte individual de un nuevo líder que comenzaba a hacerse, como Haya, incontestable dentro del partido. Alan era uno de los más destacados dirigentes del pequeño grupo de jóvenes que promovían una renovación ideológica del aprismo.

La historia política reciente en el Perú hablaba de partidos con jefes incuestionables en casi todos los casos y de gobiernos de figuras fuertes. La política ya era así en el Perú. En ese aspecto, Alan no la renovaba sino sólo la llevaba a un extremo. La regla del liderazgo individual, del conductor fuerte, había venido funcionando por encima de los contrapesos institucionales prescritos por la formalidad constitucional. “Si queremos cambiar al partido y al país, yo personalmente tendré que espolearlos”; Alan no pronunció esta frase pero sus actos sí la expresaron.

Otra razón coyuntural hacía aceptable la figura de un líder fuerte. El gobierno saliente dejaba al país con una recesión agravada por los desastres naturales y por la actividad terrorista de Sendero Luminoso. La industria nativa había sufrido las consecuencias de una abrupta apertura al mercado internacional, mientras que la excesiva inversión pública había agudizado el déficit fiscal. Buena parte de esa inversión se había financiado con crédito externo cuyo pago se convirtió en un serio problema. En el último año del

¹⁶¹ Barnechea, Alfredo (1995) *La República embrujada*. Lima: Santillana, p. 45.

gobierno precedente se había dejado de pagar la deuda, declarándose una virtual moratoria de facto⁵. Casos escandalosos de corrupción se agregaban a la inflación, el desempleo y el terrorismo que afectaban al país. Tal situación, prácticamente de emergencia, hacía que el Perú estuviera dispuesto para un liderazgo como el de García.

5.6.4. Los balconazos

El discurso desde el balcón cumplía varios objetivos. En primer lugar, promovía la ilusión de la comunicación directa, casi personal, entre el presidente y la masa; y hacía creer que se gobernaba con y para el pueblo. Jugaba, dentro de la memoria de los apristas, con el recuerdo del tribuno de plaza que fue Haya de la Torre. En ese sentido, validaba la condición de nuevo Haya que Alan quería consolidar dentro del APRA. Finalmente, no dejaba a los medios de lado, pues éstos igual le iban a dar sus próximas primeras planas, ya sea en la televisión o en la prensa escrita.

En definitiva, la meta más importante que cumplía el “balconazo” era servir a la construcción dentro del país y del aprismo de un liderazgo personalista: el de Alan García. En la misma línea se ubicaban otras formas de actuación personal en ese primer año: se aparecía en los mercados para inspeccionar los precios, en almacenes de empresas estatales para revisar sus activos, en panaderías para verificar la elaboración del “pan popular”, o incluso en terrenos invadidos por gentes sin techo, a fin de ofrecerles un lugar para su vivienda. Aludiendo a este estilo, algunos alegaron que era poco conveniente que el presidente se siguiera comportando como candidato. En realidad, García no estaba pensando en candidatura alguna sino apuntaba hacia un liderazgo individual perdurable, más allá de candidaturas coyunturales que además no estaban aún en agenda.

5.6.5. El triunfo electoral

Alan García, quien, tras su triunfo electoral en 1985 con 46% de los votos, se esforzó en poner en práctica una política nacional-popular clásica. En este

caso, las limitaciones de la experiencia fueron marcadas, por un lado, por las dificultades económicas y la inoportunidad de un modelo heterodoxo; por otro lado, por la crisis aguda del vínculo social que vivía la sociedad peruana. Ante una y otra, la actitud de Alan García fue el sobredimensionamiento de los rasgos simbólicos del líder populista: mientras en los hechos la viabilidad del modelo nacional-popular era cada vez menor, más nítida era la impronta de éste sobre la conducta y el discurso del líder. Para dar cuenta de este enunciado comenzaremos por presentar los contornos de las medidas económicas implementadas, luego, la fragilidad de las organizaciones sociales (para algunos incluso la “anomia” de la sociedad peruana), para concluir con una presentación del discurso del líder. El orden propuesto no es arbitrario: el conjunto de medidas puestas en práctica por el gobierno Aprista reposaba sobre la capacidad del líder de establecer alianzas tanto con la élite empresarial como con las mayorías nacionales. Su soledad y su ingreso en la impronta imaginaria del populismo están directamente relacionados con el fracaso de estas dos tentativas.

5.6.6. La heterodoxia nacionalista

Las primeras iniciativas del presidente, como es usual en el Perú, fueron anunciadas en su mensaje ante el Congreso cuando asumió la presidencia de la República. En adelante, cada mensaje vinculado a esa fecha suscitó rumores y una cierta ansiedad, especialmente entre políticos y empresarios.

En ese mensaje, al revés de lo que se venía haciendo desde mediados de los años setenta en el Perú, Alan anunció una estabilización y un crecimiento económicos basados en un punto de partida muy audaz: el crecimiento del consumo. Su plan de emergencia se situó en las antípodas de los planes aplicados desde 1974, cuando se inició la larga serie de ajustes y programas de estabilización que comenzaban por restringir el consumo. Habían transcurrido más de veinte años con ese tipo de ajustes que comprimían la economía de los trabajadores y del pueblo con resultados totalmente nulos e incluso funestos para los propios empresarios pues también se había reducido el mercado para sus productos.

En algún momento Alan explicó la simple lógica de su esquema económico: el aumento del consumo mediante una mejora gradual de los salarios reales llevaría a un alza en las ventas de las empresas y de los productores agrarios, y ésta, a su vez, incidiría en un aumento en las utilidades, lo que haría posible un aumento de la inversión, de la producción, de los puestos de trabajo y de la recaudación fiscal. El ciclo parecía ser capaz de repetirse hasta el infinito. Al inicio los grandes sacrificados de esta heterodoxia serían el propio Estado y las empresas estatales, pues los precios de sus servicios iban a ser reducidos y congelados. Pero luego vendría la reactivación que haría posible recuperar sus ingresos. La lógica de la heterodoxia parecía perfecta, pero tenía un eslabón crítico: la inversión privada. Alan apostaba que los empresarios iban a responder a sus mayores ventas necesariamente con un tipo de inversión productiva y no especulativa.

Un modelo económico imposible cuando García asume la presidencia en 1985, el ingreso per cápita del Perú era comparable al que existía a fines de los años sesenta, más de la mitad de la fuerza de trabajo estaba subempleada y la inflación se aproximaba al 200% anual. A este cuadro debemos añadir la situación de recesión interna y el peso de la deuda externa. A fin de superar estas dificultades, A. García implementó una política nacional-popular en una época en la cual otros países de la región renunciaban a ella. Según la opinión de sus asesores, el rotundo fracaso del neoliberalismo de Belaúnde exigía la aplicación de un “modelo heterodoxo”. En su estructura mínima, el proyecto apuntaba a crear las condiciones internas que permitirían a la economía ir hacia lo “externo”, pero cuidando de no asfixiar el circuito interno de acumulación. Para ello, era preciso poner en pie “una alianza política que diera sustento a esa acumulación interna-hacia-lo-externo” (Castillo 1992: 69). Y en la medida en que las áreas de acumulación externa y el sector fuerte de la minería dependían del Estado, la alianza tendía a establecerse con “los nuevos grupos económicos”, favorecidos por el largo proceso de sustitución de importaciones, los que fortalecidos desde el mercado interno, debían proyectarse hacia el sector externo (Durand, 1988).

Durante los dos primeros años, el modelo económico, así como la alianza política que lo sustentaba, generó la ampliación del consumo y la utilización creciente de la capacidad industrial ociosa. La respuesta de la economía se tradujo por una expansión sin precedentes de la producción: en 1986, el crecimiento del PIB fue de 9,5%, y de 7,8% en 1987. El empleo en el sector formal creció el 12%. Se redujo la inflación y los salarios reales aumentaron un 24% en dos años.

Pero el modelo requería grandes inversiones en actividades capaces de generar divisas. En efecto, y como lo señala uno de los principales asesores económicos de A. García, el economista argentino D. Carbonetto, la reactivación con estabilidad de costos produjo, como en otras experiencias nacional-populares (Dornbusch y Edwards, 1990), dos efectos previsibles: el primero, el agotamiento de la capacidad ociosa inicialmente disponible; el segundo, la alta dependencia de insumos y bienes de capital importados que condujo, a medida que el país crecía, a un aumento de las necesidades de divisas de importación. La disyuntiva era clara: se lograba generar en el sector privado un entusiasmo total en la nueva ruta del desarrollo, o en el mediano plazo el conjunto del proceso se ahogaría bajo la doble asfixia de la carencia de dólares y las limitaciones de la oferta interna (Carbonetto, 1990). Durante 1986 se celebraron concertaciones continuas con los grupos industriales (los entonces denominados “doce apóstoles”) para que invirtieran en empresas orientadas hacia la exportación. Los problemas surgieron en 1987, cuando un informe encomendado por el gobierno mostró que las empresas que más invertían (la inversión bruta fija había aumentado el 7%) eran aquellas orientadas al mercado interno, mientras que el sector privado orientado hacia el mercado externo se beneficiaba con el auge, pero no reinvertía. Sobre la base de estos estudios y ante el estrangulamiento evidente de la economía peruana, en julio de 1987, A. García anunció la estatización de las bancas comerciales y las compañías de seguro privadas. Tras estas medidas, la oposición política se reorganizó con la creación del FREDEMO y, sobre todo, el gobierno perdió el control de la economía. En lo político, el clivaje “banca privada o estatal” fue desplazado por el de “libertad

o dictadura”. En lo económico, los empresarios abandonaron todo proyecto de reinversión y orientaron una enorme masa de utilidades hacia el mercado paralelo del dólar. El fracaso de la concertación con los grupos económicos condujo así a una serie de dificultades: caída de la tasa de inversión, déficit fiscal a causa de la disminución de la recaudación fiscal, inflación, reducción del gasto real del gobierno central (Trillo y Vega, 1989).

5.6.7. Crisis del vínculo social y descomposición de los actores

Pero el fracaso de concertación “desde arriba” tuvo una prolongación en el fracaso de la conducción de “los de abajo”. La desagregación de los sectores populares en el Perú se tradujo por dos realidades opuestas. Por un lado, y a pesar de su debilidad, los trabajadores organizados alcanzaron, durante los primeros meses, un aumento cercano al 28%, ahí donde el gobierno sólo había previsto un 16%. Por otro lado, la transformación del tejido social, la rapidez del proceso de urbanización, la existencia de una izquierda política con un caudal del 30% a mediados de los ochenta, la cada vez más inquietante presencia rural y urbana de Sendero Luminoso, unido tanto a la débil alianza que Alan García poseía en el partido, obstaculizaron la consolidación de una estrategia de subordinación de los actores sociales a los dictados del Ejecutivo.¹⁷ A mediados de los ochenta se tornó manifiesta la incapacidad del Estado para responder a las demandas, productos del crecimiento demográfico, de la explosión de las expectativas, de un mayor acceso de las masas a la información, de una urbanización sin industrialización y de una crisis económica sin precedentes que produjo un problema de vacío de poder y de legitimidad. Esta situación agravó el contraste entre la fortaleza del liderazgo personal de A. García, por un lado, y las insuficiencias tanto del partido Aprista como de las organizaciones de la sociedad civil, por otro lado. La desconfianza de García hacia su propio partido y hacia sus militantes se vio alimentada por la escasa presencia del APRA entre los protagonistas de las luchas sociales urbanas desde los setenta: movimientos de pobladores y de estudiantes, nuevos sindicatos, trabajadores informales, grupos que constituían un espacio de afirmación y crecimiento de la izquierda marxista. Para A. García la renovación de la

alianza con los sectores populares dependía más del poder persuasivo del líder que del despliegue eficaz del aparato partidario. Además, el APRA había quedado al margen de este proceso, confinado a las capas medias que buscaban constituir un frente único “de clases medias, campesinas, obreros, intelectuales”, aspiración que pertenecía a la retórica del pasado. Alan García representaba a los sectores populares como sectores sociales marginales heterogéneos, con organizaciones intermedias débiles. Ciertamente, en las últimas décadas el Perú había sufrido importantes transformaciones que se continuaron bajo el gobierno de García y que condujeron a una “descampesinización sin proletarización” (López, 1992: 8). El hecho es conocido: la migración hacia las ciudades no se tradujo por una expansión de sectores “modernos” sino por un incremento vertiginoso del número de informales, lo cual acentuó el fenómeno de anomia y apatía política.

La fidelidad de los sectores populares a los partidos o agrupaciones de izquierda, así como su posibilidad de poner en práctica políticas autónomas parecían evanescentes o poco probables: de ahí que García haya creído posible revivir una política populista al partir de una relación directa con los sectores populares, a través de políticas sociales que trataron de apoyarse sobre la capacidad de acción local ya existente. Ahora bien, puesto que la designación de los actores participantes en la implementación de las políticas sociales era competencia del partido, un cambio de orientaciones suponía, en muchos casos, un cambio de los actores locales. Estos, sin embargo, resultaron celosos defensores de sus atribuciones y conocedores de los procedimientos y estrategias para negociar con las autoridades. Como lo señala acertadamente Romeo Grompone, el gobierno no podía comenzar como si los antecedentes, la memoria colectiva y las tradiciones organizativas de los pobladores no hubieran existido nunca o pudiera considerárselas como definitivamente perdidas en el pasado. Pero la razón final de esta estrategia política encarada por el APRA se encuentra tanto en la visión que del país poseía A. García, como de la manera como concebía su papel de conductor político. En fin, si las condiciones que favorecen el “regreso del líder” en América Latina ya estaban presentes en la sociedad

peruana desde mediados de los ochenta (Zermeño, 1989), estos fueron particularmente acentuados por la persona y la visión política de Alan García.

El sobreprotagonismo del líder El discurso de García presenta temas ya desarrollados por Haya de la Torre, aun cuando en el primero es posible observar una importante inflexión, luego de la firma del decreto de nacionalización de la banca en 1987. En efecto, si bien García retoma, en la primera etapa, el tema clásico del antiimperialismo (una de las banderas tradicionales del APRA), su objetivo era la “gran transformación”. La segunda etapa posee, a su vez, dos momentos: el de la lucha y el de la retirada. Pero en ambos períodos es dable observar una utilización estricta de los tópicos propios del lenguaje nacional-popular: en suma, de la promesa del cambio a la confesión del fracaso, a causa de la acción obstaculizadora de los poderosos. Durante estos dos momentos retóricos, A. García no logró separarse de una concepción unanimista de la política que supone la descalificación, más real que enunciativa, de las otras fuerzas sociales; visión que condujo, a medida que la crisis se acentuaba, al repliegue imaginario del líder sobre sí mismo. En un primer momento, García se presentaba como el heraldo de la Gran Transformación: el APRA no ha venido a “gerenciar la crisis” sino a “transformar el país”. Pero si su proyecto apuntaba a transformar las relaciones de poder, su discurso adoptaba un tono conciliador: “Soy candidato de APRA pero mi compromiso es con todos los peruanos”. Así, la campaña electoral fue lo suficientemente conciliatoria como para ganar el apoyo de la clase empresarial y media. Sin embargo, ya en esta etapa se perciben elementos discursivos que remiten, imaginariamente, al sacrificio del líder: “En verdad te digo que vamos a caminar el árido desierto de la prueba histórica. Sufriremos muchas dificultades, pero yo estaré a tu lado como un soldado más, como un trabajador más, como un ambulante más, quizá como un muerto más”. Sobre todo, se afirma el carácter profético del líder: “Hablo en nombre de los viejos héroes y las vastas multitudes. Hablo en nombre de quien no está pero que me señaló el camino. Llegaremos nosotros y nuestros hijos, te digo, a esa tierra prometida, a la conquista del pan nuestro y la libertad”.

Este discurso encuentra su prolongación en una práctica presidencial, a saber, los “balconazos”, aquellas reuniones “espontáneas” de masas al pie del Palacio de Gobierno, en las cuales se vislumbra, socio-estéticamente, la dinámica de lo político para A. García: un grupo de individuos que escuchan, pasivamente, la Palabra del líder, único verdadero actor de la escena política. Pero tras el proyecto de nacionalización de la banca y la reacción que ella suscita, el discurso “conciliador” desaparece, y cobra centralidad el conflicto entre el “pueblo” y los poderosos (Birnbaum, 1979): “En nuestra patria hay un millón 200 mil familias, campesinas y comuneras, en nuestra patria hay un millón 200 mil familias desempleadas o subempleadas, en nuestra patria hay 300 mil familias dueñas de pequeña y mediana industria. Y frente a todo ello hay 4 poderosos grupos que, estos días, han hecho público su poder y su influencia, en la ardorosa defensa de sus grandes intereses”. A medida que se profundizaba el enfrentamiento, A. García ampliaba el grupo de los “enemigos del pueblo”: la contraposición sería cada vez más entre un pueblo laborioso, vejado y explotado por siglos, y los industriales, los cuales, a pesar de haber sido favorecidos por el gobierno, habían decidido no invertir en el país. Sin embargo, incluso en los momentos más álgidos de la lucha política, la actitud “conciliadora” de Alan García permanece como una constante: el extremismo verbal va acompañado por la conciencia de que existen ciertos límites que deben ser respetados. Sobre todo, y a medida que se confirmaban las dificultades, García iba deslizándose cada vez más por la pendiente discursiva del autosacrificio, que hacia la lógica del exterminio del enemigo político: “Yo puedo caer, pero sé que ustedes no me van a olvidar (...)”. En resumen, el fracaso del triángulo nacional-popular en el caso de A. García hace referencia, paradójicamente, a una acentuación de sus rasgos característicos: modelo económico, tipo de vinculación subordinada de los actores sociales, rol protagónico del líder. En verdad, la hipertrofia de estas dimensiones provino de la incapacidad del gobierno de establecer un vínculo político con los grupos organizados o de contribuir a la emergencia de actores sociales. La descomposición del tejido social y la imposibilidad de estructurar y de mediar acuerdos entre actores sociales constituidos, se encuentra en la base del descalabro del último intento populista peruano.

CAPÍTULO 6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL POPULISMO PERUANO

6.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados Presentación de resultados

En esta exposición hemos abordado el populismo siguiendo la perspectiva de Ernesto Laclau (2004) en *La razón populista*, entendiéndolo como una forma de construir lo político. Desde esta perspectiva amplia hemos considerado al populismo como un fenómeno cuya manifestación en nuestro país concuerda con la de la región apareciendo con los partidos de masas de la década de los años treinta del siglo XX. Sin embargo, por las características de nuestro país tiene antecedentes previos en los regímenes de Nicolás de Piérola y Guillermo Billinghurst, que siguieron en buena cuenta la tradición caudillista miliar.

6.2. Presentación de resultados

6.2.1. El populismo como producto de la democracia

El populismo no lo hemos entendido ni expresado en esta investigación como antagonista u opositor de la democracia sino como uno de sus posibles resultados. Lo que tienen en común las experiencias que aquí hemos reunido como posibles expresiones populistas es que sirven como medio para articular demandas muy heterogéneas de actores políticos postergados por un sistema político básicamente oligarca, pero que no obstante ello, es un sistema que explícitamente reconoce al pueblo como detentador de la soberanía y a la democracia como una fuente de legitimidad para el ejercicio del poder.

En esta medida las estrategias de los gobiernos estudiados estuvieron orientadas en apelar a la voluntad popular como legitimador de las políticas llevadas a cabo. Con excepción del régimen velasquista, el resto de gobiernos apeló a la democracia como garante de estabilidad y sistema de gobierno que permita la ampliación de derechos. Es interesante, que por contradictorio que pueda parecer, la experiencia reformista de Velasco contribuyó a la organización partidaria para las futuras elecciones tras la salida de los militares del poder. Los rasgos populistas que se relacionan con el régimen de Velasco, deben ser entendidos en las circunstancias en que la democracia peruana previa al golpe están marcadas por la incompetencia y corrupción tanto de civiles como de militares. En ese sentido los intentos del régimen estuvieron dirigidos a dar las soluciones a los problemas sociales del país desde el uso del poder directo que no pudo dar la democracia de los civiles.

6.2.2. La importancia del diseño institucional

Los liderazgos populistas se gestan por la preexistencia de una sociedad desigualdad y poco inclusiva, que no logra satisfacer las necesidades vitales de la población ni les permite construir vínculos identitarios con sus conciudadanos. En el caso peruano, el diseño institucional hasta antes de los años ochenta, era excesivamente excluyente, creado y mantenido así por la elite, para excluir del espacio público a las masas populares. Adicionalmente, la ingeniería constitucional en el país reforzó el poder presidencialista, y lo dotó de mucho protagonismo hasta las primeras décadas de los años noventa. Con estas características, no es de sorprender la recurrencia de la aparición de líderes y partidos de corte populista (sean así o solo retórica) en un sistema político de por si incompleto e incapaz de brindar una ciudadanía completa a los integrantes de la comunidad política.

Si bien la recurrencia de caudillos políticos en el siglo XX peruano se ha explicado de una manera muy general y simplificada en la historiografía peruanista recurriendo a señalar la existencia de una tradición caudillista y/o

autoritaria, poco énfasis se ha prestado a las condicionantes del diseño institucional. Dentro del juego político la discrecionalidad de la que goza el presidente durante la pasada centuria, es producto del poco desarrollo institucional y la ciudadanía, por ello la fuerte presión de grupos de interés y de actores políticos básicamente económicos y regionales, impidieron la consolidación tanto de legislaciones como de instituciones. En estas circunstancias es que se crea un diseño institucional flexible y tolerante, que permite el protagonismo personal del gobernante por encima de las instituciones. Y de alguna manera genera un estado de conflictividad entre los poderes del estado que refuerzan el protagonismo del líder, y más cuando el presidente goza de un fuerte carisma entre las masas populares.

6.2.3. La construcción del pueblo

Uno de los elementos más importantes para los liderazgos populistas es la creación del llamado “pueblo populista”. La experiencia europea y norteamericana nos dice que sus expresiones de populismo se remitían a un pasado glorioso, la comunidad política originaria. En América Latina, lo que persigue el populismo no es una nostalgia por el pasado sino una auténtica creación, una búsqueda de orden. Ante este escenario el discurso integrador de los líderes populistas peruanos apuntaron a ello a proyectar “el futuro diferente”, e invocar al pueblo elegido a la movilización como fue la estrategia partidaria de apristas y urristas.

Así los diferentes gobiernos que hemos analizado buscaron la unidad. Billinghurst recurría al pueblo obrero como modelo arquetípico de desarrollo para el país, Sánchez Cerro al pueblo urrista como ente capaz de moralizar al país, Belaunde hablaba de “conquistar el Perú por los peruanos” y tuvo en las obras viales su principal medio para conseguir la anhelada unidad, Velasco a través del corporativismo buscaba la unidad del pueblo en la revolución de las Fuerzas Armadas, y García, a través de un mensaje ecléctico, a través de una amalgama extraña entre pensamiento de izquierda y keynesianismo, integrar al Estado, los ciudadanos y el empresariado.

El pueblo era un depositario de sabiduría y virtud en sus discursos, lo eran siempre que se amoldaran a los ideales y propuestas que estos líderes esbozaban y planteaban.

6.3.4. No todo reformismo es populismo

A nivel de discurso se presta a confusión relacionar toda alusión al pueblo como populismo, y eso en cierta manera es lo que ocurrió en la historiografía del populismo en nuestro país. Pero en el concepto de populismo con que trabajamos buscamos añadir dos factores que son obviados por el magnetismo hacia el líder que existe en los estudios sobre el populismo. En primer lugar el populismo para que sea populismo debe de alguna manera subvertir el diseño y orden institucional y poder efectivamente aplicarlos al capitalizar su arrastre popular en política efectiva. En esta línea de ideas las condiciones materiales que rodearon a Piérola, Billinghurst y Belaunde difícilmente pueden ubicarlos en esa línea. Adicionalmente y no por ello menos importante, y de hecho es mucho más importante, el populismo cumple una función democratizadora en la sociedad que no debe confundirse con asistencialismo. El asistencialismo depende de la buena disposición del gobierno y se produce en cualquier tipo de régimen, el populismo al presentarse en sistemas políticos restringidos y de democracias de baja intensidad, crean derechos que son exigibles al Estado. Esta característica en materia laboral, al cambiar el requisito de prueba de tres años a tres meses para que le trabajador pueda adquirir estabilidad laboral, es lo que hace a Alan García el modelo perfecto de populismo en nuestro país.

6.2.5. La verdadera herencia del caudillismo el corporativismo

El corporativismo es una característica básica del populismo en nuestro país, tanto los antecesores como Piérola y Billinghurst tenían esta idea, era también la propuesta de Sánchez Cerro que basó su estrategia en el

corporativismo de filiación fascista italiano. El régimen de las FF. AA. no fue tan corporativista como podría pensarse pues de haberlo sido Velasco debió pasar el retiro al cumplir 35 años de servicio, pero si fue un ingrediente sustancial de su programa político. A su modo y al adoptar el modelo heterodoxo de inspiración keynesiana. Alan García fue corporativista también, pues asumía que la sociedad estaba conformada por grupos heterogéneos con intereses muchas veces contradictorios que necesitaban integrarse.

En esas condiciones el populismo pudo prosperar como una estrategia discursiva y política que podía calar en las masas populares porque de alguna manera cumplía las promesas incumplidas de la democracia de bienestar, desarrollo material, derechos y ciudadanía para todos. Promesa incumplida no por la sociedad, que abrazó la democracia como sistema política, sino por la clase dirigente de todas las tiendas políticas, que no respondieron a las “expectativas” de la sociedad puesta en la democracia, pese a que la sociedad como tal tuvo desde el siglo XIX una tendencia a la asociación cívica. Por ello a nuestro entender el siglo XX, está marcado por la recurrencia de populismos y líderes populistas, que buscan ser un paliativo a la desigualdad estructural de su sistema. Y en donde curiosamente es el populismo a la vez síntoma, patología y paliativo de la crisis políticas del siglo XX peruano.

CONCLUSIONES

1. Los antecedentes históricos del populismo como el bonaportismo francés, el movimiento *narodnik* ruso, y el partido del pueblo en Norteamérica, demuestran el carácter moderno del populismo. El populismo históricamente y en la práctica no es incompatible con la democracia. Pues solo puede presentarse en sociedades que han reconocido al pueblo como detentador del poder político y la soberanía.
2. El triunfo del neoliberalismo trajo consigo la reconceptualización del populismo, y pasó a ser visto sobretodo en sus aspectos negativos. Teniendo como referente inmediato el fracaso del gobierno aprista, se enfocó con especial interés el colapso del modelo económico heterodoxo y los riesgos del excesivo protagonismo del presidente respecto a las instituciones políticas.
3. Con la consolidación dentro de la academia latinoamericana del concepto de neopopulismo, se procedió a conectar el populismo histórico de las décadas del cuarenta al sesenta con los nuevos liderazgos neoliberales de derecha aparecidos en los noventa, como los de Saúl Menem en Argentina; Collor de Mello en Brasil; Abdalá Bucaram en Ecuador, y Alberto Fujimori en Perú. Sin embargo, estos liderazgos “neopopulistas” únicamente tenían de afinidad con el populismo histórico el uso retórico, pues la necesaria base social que dio origen a los populismo estaban destruidas en los años noventa y básicamente lo que se denominaba neopopulismo en la región era la mera aplicación de la agenda liberal con su programa asistencialista focalizada a los sectores más pobres de la población.
4. El populismo en nuestro país tiene una necesaria connotación de ampliación de derechos ciudadanos en la mayoría de experiencias gubernamentales que han sido relacionadas con esta denominación y

que aquí analizamos. Su recurrencia en nuestro país se debe a la aún precaria institucionalización del Estado y la frustración de las masas populares frente a las promesas incumplidas de la elite política de una vida democrática y el acceso a derechos ciudadanos que garanticen el bienestar general.

5. El populismo surge como una estrategia política válida para los actores políticos postergados en dos dimensiones. A nivel de elites políticas postergadas que aspiran llegar al poder para transformar la sociedad de manera radical con cambios estructurales (al menos a nivel de discurso) y elites políticas reformistas que moderadamente intentan conciliar las disputas y mantener el orden social (a veces recurriendo a la represión). En el caso peruano, los casos analizados, se encuentran en el segundo grupo. Pero hay que precisar, que ante la aparente radicalidad de su discurso, algunos perseguían fines reformistas (el caso del Gobierno Revolucionario de las FF. AA.), y algunos pretendieron emprender reformas estructurales pero se vieron imposibilitados por la fuerza del resto de actores políticos (Gullliermo Billinghamurst, Fernando Belaunde Terry y Alan García). A nivel de demandas sociales insatisfechas, el populismo permitía satisfacer demandas apremiantes de la sociedad, a la par que se crean derechos exigibles al Estado. Es esta característica la que la diferencia del mero asistencialismo, pues este último no necesariamente genera derechos.
6. El tratamiento historiográfico del populismo en nuestro país tiene un corte abrupto en la década de los años noventa de la pasada centuria por los acontecimientos económicos y políticos suscitados. La tradición sociológica estructuralista y la post marxista, desarrolladas en los años ochenta quedaron desechadas con el triunfo del neoliberalismo. Con ello intelectualmente el país quedo relegado del debate internacional de la región sobre el populismo y sus implicancias.

7. Las características del populismo peruano en buena medida están marcadas por el caudillismo, que creó un estilo político, difícil de revertir y que tuvo que ser recreado por los mismos civiles para abrir el espacio político dominado por los militares. El Gobierno de Nicolás de Piérola, fue el modelo paradigmático de ello, y su estilo político perdurará a través del siglo XX. Guillermo Billinghurst fue muy cercano a Piérola y en buena cuenta el éxito de Billinghurst se debió en parte a la reproducción de las formas políticas del liderazgo del califa. La presencia de muchos pierolistas en el entorno de Luis M. Sánchez Cerro reforzaron el estilo caudillista del mandatario y el perfil autoritario que después Luis A. Durand impondrá en la UR. Fernando Belaunde Terry manifestaba abiertamente su admiración por el califa y en muchos aspectos recreó a su manera su estilo político. El mismo Víctor Raúl Haya de la Torre, fue cercano a Guillermo Billinghurst a quién le profesó su respeto y admiración, adoptando indirectamente el estilo político del califa con el cual instruirá al prodigio del APRA, Alan García Pérez.
8. Esto no nos debe inducir a error y llevarnos a concluir que existe una tradición autoritaria únicamente. A la par de esta “tradición autoritaria” existía una tradición asociacionista en el Perú del siglo XIX e inicios del siglo XX. La cual se vio atacada y aminorada por la reacción oligarca que en vista a la inusitada apertura democrática de las constituciones posteriores a Cádiz, reaccionó y tuvo como aliado, inesperado, a Nicolás de Piérola, que redujo el espacio político y limitó la participación política con la reforma 1896.

BIBLIOGRAFÍA

Libros, Tesis y Artículos:

Abad Cisneros, Angelica (2011-2012) *¿Qué es el Neopopulismo? Replanteamiento conceptual para una investigación empírica*. Documento de Trabajo. Instituto Iberoamérica. Universidad de Salamanca.

Aboy Carlés, Gerardo (2010) "Las dos Caras de Jano: acerca de la compleja relación entre populismo e instituciones políticas. *Pensamento Plural*, nº 7.

Aboy Carlés, Gerardo (2014) "El nuevo debate sobre el populismo y sus raíces en la transición democrática: el caso argentino", en *Colombia Internacional*, nº 82, pp. 23-50.

Adrianzén, Alberto (2011) *Apogeo y crisis de la izquierda peruana. Hablan de sus protagonistas*. Lima: IDEA / Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya.

Adrianzén, Alberto (1990b) *Pensamiento político peruano 1930 - 1968*. Lima: DESCO.

Adrianzén, Alberto (1990a) "Estado y sociedad: señores, masas y ciudadanos", en *Estado y sociedad: relaciones peligrosas*. Lima: DESCO, pp. 13-42.

Adrianzén, Carlos Alberto (2010) "De Soto y la (im)posible apuesta por un neoliberalismo popular". En *Cultura Política en el Perú*. Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales, pp. 95-108.

Aguilar Gil, Roisida (2002) *Las elecciones de hace un siglo: La Junta Electoral Nacional de 1896-1912*. Documento de Trabajo 4. Lima: ONPE.

Aguinis, Marcos (2005) "Patéticos populismos" [en línea] *Letras Libres*, nº 42, pp. 16-19. <http://www.letraslibres.com/pdfesp/57877>

Aibar Gaete, Julio coord. (2008) "Sobre alquimistas e imaginadores. Populismo y Nación". En De la Torre, Carlos y Enrique Peruzzotti (eds.) *El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina*. Quito, FLACSO, pp. 161-185.

Aibar Gaete, Julio y Valle de Bethencourt, Paula (2013) "Populismo y organicismo: ¿un encuentro natural?" en VÁSQUEZ, Daniel y Julio AIBAR, *Procesos políticos de América Latina. Una lectura crítica del neoliberalismo*. México DF: FLACSO, pp. 261-293.

Aljovín de Losada (2016) "Ocho verdades sobre las elecciones decimonónicas en el Perú", en Aragón, Jorge ed. *Participación, competencia y representación política*. Lima: IEP / JNE / Escuela Electoral y de Gobernabilidad, pp. 69-80.

Aljovín de Losada, Cristóbal (2010b) "El imaginario político en torno a las elecciones: Perú 1808-1870" en *Elecciones*, v. 9, n.º 10, pp. 217-239.

Aljovín de Losada, Cristóbal (2010a) "Entre la unidad y la pluralidad: El concepto de partido-facción en el Perú 1770-1870" en *Bulletin de l'Institut Française de Etudes Andines*, nº 1, tomo 39, pp. 63-84.

Aljovín de Losada, Cristóbal (2006) "Campaña electoral y la imagen del líder (Perú 1827-1879)" en Calderón, María Teresa & Clement Thibaud (coords.). *Las revoluciones en el mundo Atlántico*. Bogotá: Taurus Historia.

Aljovín de Losada, Cristóbal (2000) *Caudillos y constituciones. Perú: 1821-1845*. Lima: PUCP / FCE.

Aljovín de Losada, Cristóbal. y N. Jacobsen (2007) *Cultura política en los Andes (1750-1950)*. Lima: UNMSM-IFEA.

Aljovín de Losada, Cristóbal y Sinesio López, eds. (2005) *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Aljovín de Losada, Cristóbal y Francisco Núñez (2006) "Ensayo bibliográfico: las elecciones peruanas decimonónicas" en *Elecciones*, nº 6, pp. 219-242.

Alvarado Chávez, Mariana (2009) La invención del etnocacerismo: populismo radical en el Perú. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencia Política con mención en Política Comparada. Lima: PUCP [en línea]
<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1148>

Anderson, Benedict (1992) *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: FCE.

Andrade, Eduardo (s/f) "La soberanía popular" [en línea]
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/956/17.pdf>

Ansaldi, Waldo y Verónica Giordano (2012) *América Latina. La construcción del orden. Tomo I. De la colonia a la disolución de la dominación oligárquica*. Buenos Aires: Ariel.

Ansaldi, Waldo (2004 – 2005) “¿Clase social o categoría política? Una propuesta para conceptualizar el término oligarquía en América Latina” [en línea]. *Anales*, Nueva Época, n° 7-8, pp. 157-169. www.humgu.se.

Ansaldi, Waldo (2001) “La democracia en América Latina, más cerca de la precariedad que de la fortaleza”. *Socialismo*, n° 19, pp. 23-54.

Ansaldi, Waldo (1991) “Frívola y casquivana, guante de hierro en mano de seda. Una propuesta para conceptualizar el término en oligarquía en América Latina”. *Socialismo y Participación*, n° 56, pp. 15-20.

Ardity, Benjamín (2010) “El populismo como periferia interna de la política democrática”. En *La política en los tiempos del liberalismo: diferencia, populismo, revolución, emancipación*. Barcelona: Gedisa, pp. 121-158.

Arteta, Aurelio (2003) “Moral y política”, en ARTETA, Aurelio, GARCÍA Elena y MÁIZ, Ramón. *Teoría política: poder, moral, democracia*. Madrid: Alianza Editorial, pp. 116-136.

Barker, Florence (1970) *Belaundismo: as a populist movement*. Lima

Barr, Robert (2003) “The Persistence of Neopopulism in Peru? From Fujimori to Toledo” en *Third World Quarterly*, n° 24 (6), pp. 1161-1178.

Barrera Bernuy, Javier (2004) “Las elecciones de 1912; La Guerra de los panes”, en *Historia Total*, n° 1, pp. 109-128.

Barrera Ramírez, Víctor Andrés (2008) Estrategias discursivas de descalificación: el caso del populismo. Un estudio de filosofía política [en línea]. Trabajo para obtener el Título de Politólogo. Santa Fe de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis80.pdf>

Barros, Sebastián (2006) “Inclusión radical y conflicto en la constitución del pueblo populista”. *CONfines* n°2-3, pp. 65-73.

Basadre, Jorge (1980) *Elecciones y centralismo en el Perú (Apuntes para un esquema histórico)*. Lima: Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico.

Basadre, Jorge (1978 [1943]) “Crónica Nacional: En torno al Perú de 1900-1939”. En *Apertura. Textos sobre temas de Historia, Educación, Cultura y Política, escritos entre 1924 y 1977*. Lima: Ediciones Taller.

- Bazán Pantoja, Renato (2000) "El fracaso del proyecto populista de Billinghurst". *Ukupacha*, nº 2, pp. 101-108.
- Beltrán Gómez, Híjar (2008) "La ciencia política en el Perú: El inicio de su institucionalización". *Ciencias Políticas y Sociales*, vol. L, nº 204, pp. 41-55.
- Blanchard, Peter (1977) "A populist precursor: Guillermo Billinghurst". *Latin American Studies*, vol. 9, nº 2, pp. 251-273.
- Bobbio, Norberto (1996) *Derecha e izquierda. Razones y significaciones de una distinción política*. Madrid: Taurus.
- Bobbio, Norberto (2006) *La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Año académico 1975-1976*. México DF: FCE.
- Bonilla, Heraclio y Paul W. Drake, comp. (1989) *El APRA de la ideología a la praxis*. Lima: Centro Latino Americano de Historia Económica y Social
- Boggio, María Rosa; Romero, Fernando y Juan Ansión (1991) *El pueblo es así y asá (Lógicas culturales en el voto popular)*. Lima: Instituto de Política Popular / Democracia y Socialismo.
- Boron, Atilio A. (2012) "¿Una nueva era populista en América Latina" en MÁRQUEZ Restrepo, Martha; Pastrana Buelvas y Guillermo Hoyos Vásquez, *El eterno regreso del populismo en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana / CLACSO, pp. 131-158.
- Brenes Barahona, Amelia (2011) "Estrategias conceptuales sobre populismo: un estado de la cuestión". *Revista de derecho electoral*, nº 11.
- Candela Jiménez, Emilio Iván (2013) El régimen de Óscar R. Benavides (1933-1939) ¿una experiencia populista?. Definiciones y nuevos planteamientos en torno a su accionar político. [en línea] <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4622>
- Candela Jiménez, Emilio Iván (2011) "La Acción Patriótica: un movimiento doctrinario en una época polarizada (1935-1936)". *Elecciones*, v. 10, nº 11, pp. 165-194.
- Candela Jiménez, Emilio Iván (2009) Entre la incompreensión y el sectarismo: Análisis del proceso político de la campaña electoral de 1936. Tesis de Licenciatura en Historia. Lima: PUCP.

Candela Jiménez, Emilio Iván (2004) “El tiempo de los discursos heroicos. La nueva dinámica política en el Perú y Latinoamérica en los germinales años treinta”, en *Boletín del Instituto Riva-Agüero* (BIRA), N° 31, pp. 155-178.

Caravedo Molinari, Baltazar (2014b) *Energía social y liderazgo transformador. A propósito del ADN de la sociedad peruana*. Lima: Universidad del Pacífico.

Caravedo Molinari, Baltazar (2014a) *Sistemas, Energía Social y Factor Liderazgo Perú 1912-2012*. Tesis para optar el grado de Doctor en Sociología, PUCP.

Cardoso, Eliana y Ann Helwege (1993) *La economía latinoamericana. Diversidad, tendencias y conflictos*. México: FCE. Capítulo VIII El Populismo, pp. 211-239.

Carnetti, Elias (2001) *Masa y poder*. Barcelona: Alianza Editorial.

Carrasco, Christian (2008) “¿Y después del asesinato, qué sucedió? Prensa y nuevas elecciones (1934-1935)”. En Morán, Daniel; Aguirre, María y Frank Huamaní. *Lima a través de la prensa*, pp. 97-122.

Castañeda, Jorge (2006) “The Rise of Populism and the Left in Latin America”. *Foreign Affairs* (May – June).

Castañón, Adolfo (2006) “Populismo: una voz de origen literario”. *Istor*, Año VI, n° 25, pp. 130-131.

Castillo Ochoa, Manuel (1992) *La estructura astillada (Crisis, acumulación y actores sociales)*. Lima: DESCO.

Castillo Ochoa, Manuel (1990) “El populismo conservador. Sánchez Cerro y la Unión Revolucionaria. En ADRIANZÉN, Alberto. *Pensamiento político peruano 1930 – 1968*, Lima: DESCO, pp. 47-76.

Casullo, María Esperanza (2013) “Liberal, radical, populista y clientelar: tres visiones sobre la relación entre sociedad civil y estado en Latinoamérica”. En *Perspectivas sobre el estado. Las políticas públicas y la gestión*, Año 1, n° 1, pp. 97-111.

Cerbino, Mauro (2012) “Postmarxismo, discurso y populismo Un diálogo con Ernesto Laclau”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. n° 44, pp. 127-144.

Chamosa, Oscar (2013) “Populismo: crítica a la utilidad de un concepto peyorativo” [en línea]. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Coloquios, Puesto en línea el 10 febrero 2013, consultado el 18 diciembre 2013. <http://nuevomundo.revues.org/64836>

Chaupis, José (2012) *El califa en su laberinto: Esperanza y tragedia del régimen pierolista (1879-1881)*. Lima: UNMSM / Seminario de Historia Rural Andina (SHRA-UNMSM).

Chaupis, José (2008 – 2009) “En defensa de la alianza: Piérola y Bolivia durante la guerra del Pacífico”. *Historias – Revista de la Asociación de Historia, Sociología y Ecología*. nº 3 - 4, pp. 99-117.

Chaupis, José (2007) “El proyecto político de Nicolás de Piérola (1879-1881)”. *Historias-Revista de la Asociación de Historia, Sociología y Ecología*, nº 2, pp. 93-109.

Cheresky, Isidoro (2011) “Ciudadanía y democracia continua” en Cheresky, Isidoro. *Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina*. Buenos Aires: Prometeto Libros / CLACSO, pp. 141-185.

Chirinos Soto, Enrique (1966) *Vidas paralelas: Vivanco y Piérola*. Lima: P. L. Villanueva.

Chiaramonti, Gabriela (2009) “La redefinición de los actores y la geografía política en el Perú a finales del siglo XIX”. *Historia*, nº 42, Vol. II, pp. 329-370.

Chiaramonti, Gabriela (2004) “Los nudos del sufragio: un problema de gobernabilidad republicana”. En MC EVOY, Carmen. *La experiencia burguesa en el Perú (1840-1949)*. Frankfurt: Vervuert-Iberoamericana, pp. 285-307.

Chiaramonti, Gabriela (2000a) “Buscando al ciudadano virtuoso. El censo peruano de 1876 en el proyecto político de Manuel Pardo”. En CARMAGNANI, Marcello. *Constitucionalismo y orden liberal. América Latina, 1850 – 1920*. Torino: Otto Editore, pp. 9-50.

Chiaramonti, Gabriela (1995) “Andes o nación: La reforma de 1896 en Perú”. En ANNINO, Antonio (Coord.). *Historia de las elecciones en iberoamericano, siglo XIX*. Buenos IRES: FCE, pp. 315-346.

Chocano, Magdalena (2006) “Caudillaje y militarismo en la tradición interpretativa de la historiografía peruana” en *Iberoamericana*, Vol. VI, Nº 22, pp. 7-21.

Contreras, Carlos (2009) *Crisis y reforma fiscal en el Perú, 1873-1915: del Estado rentista al estado oligárquico*. México.

Contreras, Carlos (2004) *El aprendizaje del Capitalismo. Estudios de historia económica y social del Perú Republicano*. Lima: IEP.

Coronado del Valle, Jaime (1984) *El gobierno en Billinghurst y la emergencia de la clase obrera 1912-1914*. Lima: UNMSM / Facultad de Ciencias Sociales UNMSM.

Cosamalón, Jesús A. (2004) "El lado oscuro de la luna. Un ensayo acerca de los sectores populares limeños en el siglo XIX". En MC EVOY, Carmen. *La experiencia burguesa en el Perú (1840-1949)*. Frankfurt: Vervuert-Iberoamericana, pp. 151-192.

Cotler, Julio (1969) *El populismo militar como modelo de desarrollo nacional: el caso peruano*. Lima: IEP.

Crabtree, John (2000) "Populisms old and new: the Peruvian case" en *Latin American Research*, Vol. 19, pp. 163-176.

Crabtree, John (1998) *Neopopulism and the Fujimori Phenomenon*. London: University of London.

Crabtree, John (1997) "Populismo y Neopopulismo" en *Apuntes* nº 40, pp. 97-109.

Crabtree, John (1992) *Alan García en el poder. Perú 1985-1990*. Lima: PEISA.

Critchley, Simon y Oliver Marchart, comps., (2008) *Laclau. Aproximaciones críticas a su obra*. México: FCE.

Cuda, Emilce; Merlin, Nora; y Sandra Mansilla (2013) "Populismo, misticismo y psicoanálisis" en *Religión e incidencia pública*, nº 1, pp. 61-86.

Dargent, Eduardo (2009) *Demócratas precarios. Élite y debilidad democrática en el Perú y América Latina*. Lima: IEP.

De la Torre, Carlos y Enrique Peruzzotti, eds. (2008) *El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina*. Quito: FLACSO.

De la Torre, Carlos (1994) "Los significados ambiguos de los populismos latinoamericanos" en Álvarez Junco, José y Ricardo González Leandri (comps.), *El populismo en España y América*, Madrid: Catriel.

Del Águila Peralta, Alicia (2013) *La ciudadanía corporativa. Política, constituciones y sufragio en el Perú (1821-1896)*. Lima: IEP.

Del Águila Peralta, Alicia (2011) "Voto indígena y ciudadanía corporativa en el Perú, siglo XIX". *Elecciones*, Vol. 10, n.º 11, pp. 91-117.

Del Águila Peralta, Alicia (2009) "El otro desborde popular: el voto analfabeto, los nuevos ciudadanos y la 'crisis' del sistema de partidos peruanos". *Elecciones*, Vol. 8, n.º 9, pp. 39-59.

Del Águila Peralta, Alicia (1997) *Callejones y mansiones. Espacios de opinión pública y redes sociales y políticas en Lima del 900*. Lima: PUCP.

Delgado, Santiago (2004) "Sobre el concepto y el estudio del liderazgo político", en *Psicología Política*, N° 29, pp. 7-29.

Delsol, Chantal (2015) *Populismos. Una defensa de lo indefendible*. Barcelona: Ariel.

Demélas, Danielle (2003b) "Pactismo y constitucionalismo en los Andes" en ANNINO, Antonio y François-Xavier GUERRA (Coords.) *Inventando la Nación. Siglo XIX*. México: FCE, pp. 593-612.

Demélas, Danielle (2003a) "Estado y actores colectivos. El caso de los Andes" en ANNINO, Antonio y François-Xavier GUERRA (Coords.) *Inventando la Nación. Siglo XIX*. México: FCE, pp. 345-378.

Deusdad, Blanca (2003) "El concepto de liderazgo político carismático: Populismo e identidades", en *Opción*, Vol. 19, N° 41, pp. 9-35.

Devoto, Erick (2013) "*El Artesano*: Las principales ideas del primer periódico obrero del Perú y su relación con el primer civilismo" en *Nueva corónica*, n° 2, pp. 601-623.

Díaz, Ali (2007) La política tributaria en el Perú de 1930 a 1948. De los impuestos indirectos a los impuestos directos. Tesis de Licenciatura en Economía. Lima: PUCP [en línea] <http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/1205/Ali%20Milagros%20D%C3%ADaz%20G%C3%A1lvez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Drinot, Paulo (2016) *La seducción de la clase obrera. Trabajadores, raza y la formación del Estado Peruano*. Lima: Ministerio de Cultura del Perú / IEP.

Drinot, Paulo (2001) "El comité sanchezcerrista de Magdalena del Mar, un ensayo de microhistoria política", *Revista del Archivo General de la Nación*, n° 23, pp. 333-353.

Dornbusch, Rudiger y Sebastián Edwards (1992) "La macroeconomía del populismo" en *Macroeconomía del populismo en América Latina*. México DF: FCE, pp. 15-46.

Duárez, Jorge Luis y Fernando Munguía (2013) "Límites y aperturas del neoliberalismo en Perú y México" en VÁSQUEZ, Daniel y Julio AIBAR, *Procesos políticos de América Latina. Una lectura crítica del neoliberalismo*. México DF: FLACSO, pp. 21-65.

Dulanto, Jorge (1947) *Nicolás de Piérola*. Lima: Compañía de impresiones y publicidad.

Duran, Carlos (2006) *El re(s)to populista. Política y Populismo en América Latina* [en línea]. Tesis para optar al grado de Maestro en Ciencias Sociales. México: FLACSO. http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/medios/tesis/duran_c.pdf

Durand, Francisco (1989) "Alan García y los Empresarios: Alianza y Conflicto". En Bonilla, Heraclio y Paul W. Drake (comp.), *El APRA de la ideología y la praxis*, pp. 263 – 292.

Durand, Francisco (1988) *La burguesía peruana: Los primeros industriales / Alan García y los empresarios*. Lima: DESCO.

Dussel, Enrique (2009) *Política de la Liberación. Volumen II. Arquitectónica*. Madrid: Trotta.

Dussel, Enrique (2007) *Política de la Liberación. Volumen I. Historia mundial y crítica*. Madrid: Trotta.

Easton, David (1996 [1965]) *Esquema para el análisis político*. Buenos Aires: Amorrortu.

Eguiguren, Francisco (2007) *La responsabilidad del Presidente. Razones para una reforma constitucional*. Lima: PUCP.

Elster, Jon (1991) *El cemento de la sociedad*. Barcelona: Gedisa.

Entrena, Francisco (1996) "Los populismos y la formación del Estado – Nación en América Latina", en *Anuario de Estudios Americanos*, vol. LIII, tomo 1, pp. 101-121.

Escalante, Fernando (2002) *Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la república mexicana. –Tratado de moral pública–*. México: El Colegio de México.

Espinoza, Juan (2001 [1855]) *Diccionario para el pueblo*. Estudio preliminar y edición de Carmen Mc Evoy. Lima: IRA / University of The South – Sewanee.

Faletto, Enzo (1985) "Sobre populismo y socialismo" en *Opciones*, nº 7.

Fernández, Arturo (2006) "El populismo latinoamericano: realidades y fantasmas" en *Colección*, nº 17, pp. 13-34.

Fernández Fontenoy, Carlos, Coord. (1995) *Sociedad, partidos y Estado en el Perú. Estudios sobre la crisis y el cambio*. Lima: Universidad de Lima.

Figuerola, Carlos y Octavio H. Moreno (2008) "Populismo: la nueva *bestia negra* en América Latina. La visión reaccionaria del cambio político actual" en *Bajo el volcán*, nº 13, pp. 25-45.

Flóres-Galindo, Alberto (1999 [2013]) "La tradición autoritaria. Violencia y democracia en el Perú", en Porotoarrero, Gonzalo (ed.) *Sombras coloniales y globalización en el Perú de hoy*. Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, pp. 19-55.

Flóres-Galindo, Alberto (1980) *La agonía de Mariátegui. La polémica con la KOMINTERN*. Lima: DESCO.

Forment, Carlos A. (2012) *La formación de la sociedad civil y la democracia en el Perú*. Lima: PUCP.

Franco, Carlos (1990) "La plebe urbana, el populismo y la imagen de *Alumbramiento*", en *Socialismo y Participación*, nº 52.

Franco, Carlos (1989b) *El Perú de los 90: un camino posible*. Lima: CEDEP.

Franco, Carlos (1989a) *Deuda y dependencia. Diálogos con el enfoque y propuestas de Alan García*. Lima: Deso S.A.

Freidenberg, Flavia (2006) *La tentación populista: una vía al poder en América Latina*. Madrid: Editorial Síntesis.

Freidenberg, Flavia (2011) "Los nuevos liderazgos populistas y la democracia en América Latina" en *LASAForum*, Vol. XLII, nº 3, pp. 9-11.

Fuentes, Atanasio (1881) *Ramillete o Repertorio de los más piramidables Documentos oficiales del Gobierno Dictatorio con Una Parodia al Lado en vil verso redactada por Fray Benito Encalada Montestruque y Maldonado*. Lima: Imprenta del Universo, de Carlos Prince.

Gamboa, César Leonidas (2009) "Rastreado la participación indígena: *Pueblo de peruanos* en la legislación electoral del siglo XIX" en: *Elecciones*, v. 8, nº 9, pp. 61-86.

Gamboa, César (2005) "Los procesos electorales decimonónicos: los órganos y los procedimientos electorales. Perú, 1822-1896" en ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal y Sinesio LÓPEZ (eds.). *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo*. Lima: IEP, pp. 179-228.

Gamboa, César (2003) "¿Excepciones al modelo electoral gaditano?: Las elecciones directas en el Perú del siglo XIX" en *Elecciones*, nº 2, pp. 169-200.

Garavito, Hugo (1986) *El Santo Hereje. Mariano Amezaga y el radicalismo anticlerical en el Perú del siglo XIX*. Lima: El Virrey.

García Belaunde, Domingo (1988) "Sinopsis de la normatividad electoral peruana", en VV. AA. *Legislación electoral comparada. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay*. Costa Rica: Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), pp.311-346.

García Belaunde, Domingo (1989) "El constitucionalismo peruano en la presente centuria", en *Derecho*, N° 43-44, Lima, 1989-90, [en línea] <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/703/7.pdf>

García-Bryce Weinstein, Íñigo (2008) *República con ciudadanos: los artesanos de Lima, 1821-1879*. Lima: IEP.

García Jordán, Pilar (1993) *Iglesia y poder en el Perú contemporáneo 1821-1919*. Cuzco: Centro Bartolomé de las Casas (CBC).

García Jurado, Roberto (2012) "Sobre el concepto de populismo". *Estudios*, n° 103, vol. X, pp. 7-31.

García Llorens, Mariel (2010) "El discurso del perro del hortelano y las articulaciones actuales entre política y medios de comunicación en el Perú" en PORTOCARRERO, Gonzalo; UBILLUZ, Juan Carlos y Víctor VICH. *Cultura Política en el Perú*. Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales, pp. 127-142.

García Pérez, Alan (1989) *El desarme financiero. Pueblo y deuda en América Latina*. Lima: Emisa editores.

Garfías, Marcos (2013) "El uso de la categoría *fascista* en América Latina. Intelectuales y regímenes militares en los años setenta". *Nueva corónica*, n° 2, pp. 841-853.

Gargurevich, Juan (2009) "Palma y Fuentes, enemistad histórica" en Velázquez Castro, Marcel. *La república de papel. Política e imaginación social en la prensa peruana del siglo XIX* Lima: UCH, pp. 193-208.

Germani, Gino (1977) *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*. México.

Ghita, Ionescu (1969) *Populismo, sus significados y características nacionales*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Giddens, Anthony (1996) *Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales*. Madrid: Crítica.

Giesecke, Margarita (1978) *Masas urbanas y rebelión en la Historia. Golpe de Estado: Lima 1872*. Lima: Cedhip.

Gómez-Rada, Carlos Alberto (s/f) "Liderazgo: conceptos, teorías y hallazgos relevantes", en *Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología*, Vol. 2, N° 26, pp. 61-77.

Gonzáles de Olarte, Efraín y Lilian Samané (1991) *El péndulo peruano. Políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1990*. Lima: Consorcio de Investigación económica / IEP.

González, Osmar (2013) "Fernando Belaunde Terry y la democracia en tiempos difíciles", en Guevara, Mesías comp. *Homenaje a Fernando Belaunde Terry a 100 años de su nacimiento*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, pp.157-176.

Gonzales, Osmar (2009) "Guillermo E. Billinghurst: Transfronterizo y multifacético" en *Socialismo y Participación*, n° 107, pp. 43-52.

Gonzalez, Osmar (2007) "Los orígenes del populismo latinoamericano. Una mirada diferente" en *Cuadernos del CENDES*, Año 24, n° 66, pp. 75-104.

Gonzales, Osmar (2005) *Los orígenes del populismo en el Perú. El gobierno de Guillermo E. Billinghurst (1912-1914)*. Lima: Biblioteca Nacional del Perú.

Gonzales, Osmar (1999) *Señales sin respuesta. Los zorros y el pensamiento socialista en el Perú 1968-1989*. Lima: Ediciones PREAL.

González Calleja, Eduardo (1994) "La derecha latinoamericana en busca de un modelo fascista: la limitada influencia del falangismo en el Perú (1936-1945)" en *Revista Complutense de Historia de América*. n° 20, pp. 229-255.

González Miranda, Sergio (2000) "Guillermo Billinghurst Angulo: una biografía regional" [en línea], *Revista de Ciencias Sociales*, Universidad Arturo Prat, n° 10, pp. 4-22.
www.revistacienciasociales.cl/archivos/revista10/word/revista10_articulo1.doc

González Prada, Manuel (1969) *Figuras y Figurones*. Lima: Librería y Distribuidora Bendezú.

González Prada, Manuel (1978) *Sobre el militarismo (antología). Bajo el oprobio*. Presentación y selección de Bruno Podesta. Lima: Editorial Horizonte.

Gootenberg, Paul (1998) *Imaginar el desarrollo. Las ideas económicas en el Perú postcolonial*. Lima: IEP / BCR.

Gratius, Susanne (2007) *La "tercera ola populista" de América Latina*. Working Paper / Documento de Trabajo, Octubre N° 45. Madrid: FRIDE.

Grueso V., Delfín (2010) "Populismo, reeleccionismo y bonapartismo. Una mirada al populismo a través del Estado de opinión", *El Hombre y la Máquina*, N° 35, julio-diciembre, pp. 27-38.

Guerra Martinière, Margarita (1972) "El caudillismo y su influencia en la política peruana", en *Enseñanza de la Historia*, N° 3.

Guerra, Francois-Xavier (2012d) "Hacia una nueva historia política: actores sociales y actores políticos" en *Figuras de la modernidad hispanoamericana. Siglos XIX-XX*. Bogotá: Taurus / Universidad Externado de Colombia, pp. 19-39.

Guerra, Francois-Xavier (2012c) "El pueblo soberano: fundamento y lógica de una ficción (países hispánicos del siglo XIX)" en *Figuras de la modernidad hispanoamericana. Siglos XIX-XX*. Bogotá: Taurus / Universidad Externado de Colombia, pp. 41-83.

Guerra, Francois-Xavier (2012b) "Los orígenes socioculturales del caciquismo" en *Figuras de la modernidad hispanoamericana. Siglos XIX-XX*. Bogotá: Taurus / Universidad Externado de Colombia, pp. 85-106.

Guerra, Francois-Xavier (2012a) "*Voces del pueblo*. Redes de comunicación y orígenes de la opinión en el mundo hispánico" en *Figuras de la modernidad hispanoamericana. Siglos XIX-XX*. Bogotá: Taurus / Universidad Externado de Colombia, pp. 157-190.

Guerra, Margarita (1972) "El caudillismo y su influencia en la política peruana" en *Enseñanza de la Historia*, N° 3, Lima: IRA, pp. 11-16.

Gutiérrez, Daniel (2011) "Ernesto Laclau: El populismo y sus avatares" en *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, N° 40, pp. 151-168.

Guzmán Napurí, Christian (2002) *Las relaciones de Gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento*. Lima: PUCP.

Heater, Derek (2007) *Ciudadanía. Una breve historia*. Madrid: Alianza Editorial.

Hermet, Guy (2003) "El populismo como concepto" en *Revista de Ciencia Política*, N° 23 (1), pp. 5-18.

Hernández, Ivo y Héctor Hurtado (2010) *El populismo. Una aproximación a un problema de la democracia de todos los tiempos*. Cuadernos de Ciencias Sociales 156. San José: FLACSO.

Hobsbawm, Eric (1998a) *La era de la Revolución, 1789-1848*. Buenos Aires: Crítica.

Hobsbawm, Eric (1998b) *Historia del Siglo XX*. Buenos Aires: Crítica.

Houwen, Tim (2011) *The non-European roots of the concept of populism*. Sussex European Institute, University of Sussex and Radboud Universiteit Nijmegen. Working Paper No 120 [en línea] <https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sei-working-paper-no-120.pdf&site=266>

Huamán, María Josefina (1974) *El APRA de 1930 a 1945: ¿movimiento populista?*. Tesis de Bachillerato en Sociología. Lima: PUCP.

Huiza, José Luis (1998) *From the República Aristocrática to pan grande: Guillermo Billinghurst and populist politics in early twentieth century Peru*. Tesis de Ph. D. University of Miami.

Hurtado, Héctor (2010) "Aproximación a un concepto *esencial* de populismo" en *Temas de coyuntura*, n° 62, pp. 11-36.

Hurtado, Héctor (2009) *El populismo. Construcción de imágenes y símbolos. Aproximación al gobierno de Hugo Chávez*. Tesis de Magíster en Ciencias Políticas. Universidad Simón Bolívar

Ianni, O. (1991) "Una Apreciación Estructuralista Crítica del Populismo en Latinoamérica" en *Estudios Políticos*, n° 6.

Ianni, O. (1984) *La formación del Estado populista en América Latina*. Ciudad de México: Era.

Iglesias, Esteban (2012) "Partidos políticos y movimientos sociales. Modalidades y transformación de la acción política durante el siglo XX" en: *Elecciones*, v. 11, n.º 12, pp. 11-34.

Iguíñez, Javier (1989) "Evaluación crítica de la Política Económica bajo García: Balance a los tres años de gobierno" en Bonilla, Heraclio y Paul W. Drake, *El APRA de la ideología y la praxis*, pp. 367 – 402.

Ingunza, Elizabeth (2013) *El tren de la codicia. Una historia real de ferrocarriles. Poder y desengaño en el Perú*. Lima: Edívalo.

Ibarra, Hernán (2008) "El bonapartismo como liderazgo político", en *Ecuador debate*, N° 73, pp. 41-46. [en línea] <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4120/1/RFLACSO-ED73-03-Ibarra.pdf>

Ionescu, G. y E., Gellner, comp. (1969) *Populism. Its Meaning and National Characteristics*. Londres: Macmillan

Ipola, Emilio de (2009) "La última utopía. Reflexiones sobre la teoría del populismo de Ernesto Laclau". En Claudia Hilb (compiladora): *El político y el científico. Ensayos en homenaje a Juan Carlos Portantiero*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Ipola, Emilio de (1989) "Ruptura y continuidad. Claves para un balance de las interpretaciones del peronismo", en *Desarrollo Económico*, vol. 29, nº 115.

Ipola, Emilio de (1987) *Ideología y discurso populista*. Ciudad de México: Plaza y Valdés.

Ipola, Emilio de (1979) "Populismo e ideología (A propósito de Ernesto Laclau: Política e ideología en la teoría marxista)". *Revista Mexicana de Sociología*, nº 41 (3), pp. 925-960.

Ipola, Emilio de y Juan Carlos Portantiero (1981 [1989]) "Lo nacional-popular y los populismos realmente existentes" en *Investigaciones políticas*. Buenos Aires, Nueva Visión.

Jacobsen, Nils (2014) "Populism Avant La Lettre in Peru: Rebuilding Power in Nicolás de Piérola's Mid-Career, 1884–1895", en *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, N° 51, pp. 35-58.

Jurado Nacional de Elecciones (2013) *80 años de elecciones presidenciales en el Perú 1931-2011*. Lima: JNE.

Klaiber, Jeffrey S.J. (2008) "El miedo al APRA" en Rosas Lauro, Claudia (ed.) *El miedo en el Perú. Siglos XVI al XX*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP / SIDEA, pp. 257-264.

Knight, Alan (2005) *Revolución, Democracia y Populismo en América Latina*. Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario.

Kristal, Efraín (1991) *Una visión urbana de los andes. Génesis y desarrollo del Indigenismo en el Perú: 1848-1930*. Lima: Instituto de Apoyo de Agrario.

Landa, César (1999) "La evolución Constitucional del Perú contemporáneo", en *Cátedra*, N° 5, Lima, pp. 176-183. [en línea] [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/05C7CB4D527A6EB505257718005DD7D8/\\$FILE/19_La_evoluci%C3%B3n_constitucional_del_Per%C3%BA_contempor%C3%A1neo.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/05C7CB4D527A6EB505257718005DD7D8/$FILE/19_La_evoluci%C3%B3n_constitucional_del_Per%C3%BA_contempor%C3%A1neo.pdf)

Laclau, Ernesto (2009) "Populismo: ¿Qué nos dice el nombre?", en PANIZZA, Francisco (comp.) *El populismo como espejo de la democracia*. México: FCE, pp. 51-70.

Laclau, Ernesto (2006) "La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana", *Nueva Sociedad* 205. pp. 56-61.

Laclau, Ernesto (2005) *La razón populista* Buenos Aires: FCE.

Laclau, Ernesto (1987) "Populismo y transformación del imaginario político en América Latina", en *Boletín de Estudios Latinoamericanos y el Caribe*, n° 42.

Laclau, Ernesto (1986) *Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo*. México: Siglo XXI.

Lanzaro, Jorge (2006) *La tercera ola de las izquierdas latinoamericanas: Entre el populismo y la socialdemocracia: Apuntes para una agenda de investigación*. Montevideo: Instituto de Ciencia Política, Universidad de la República.

Leceta, Humberto (2001) Las multitudes políticas de Lima y Callao de 1912 y la elección de Guillermo Billinghurst. Tesis para optar el Grado Académico de Doctor en Historia. Lima: PUCP.

Leiva, Lourdes (1997) Pensamiento político de Nicolás de Piérola durante su gobierno constitucional (1895–1899). Tesis para optar por el Grado académico de Magister en Historia. Lima: PUCP.

Leiva, Lourdes (1995) *Nicolás de Piérola*. Lima: Editorial BRASA.

Lenin, Vladimir I. (1973b) "¿A qué herencia renunciamos?", en *Obras*. Tomo I. Moscú: Ed. Progreso, pp. 165-182.

Lenin, Vladimir I. (1973a) "Quienes son *los amigos del pueblo* y como luchan contra los socialdemócratas". En *Obras*. Tomo I. Moscú: Ed. Progreso, pp. 11-93.

Lindholm, Charles (2001) *Carisma. Análisis del fenómeno carismático y su relación con la conducta humana y los cambios sociales*. Barcelona: Gedisa.

Lodola, Germán (2004) "Neopopulismo y compensaciones a los perdedores del cambio económico en América Latina", en *Diálogo Político* (Junio).

López-Chau, Alfonso (1988) *Los laberintos de la crisis. Dos años de gobierno aprista*. Lima: UNI - Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales – Posgrado / CONCYTEC.

López, Sinesio (2012) *La desigualdad económica y la política (Aproximaciones conceptuales)*. Lima: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP.

López, Sinesio (1997) *Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: Instituto de Diálogo y Propuestas (IDS).

López, Sinesio (1991) *El dios mortal. Estado, sociedad y político en el Perú del siglo XX*. Lima: Instituto Democracia y Socialismo.

López Martínez, Héctor (2001) *Ciento cincuenta años de elecciones en el Perú. Los comicios de 1851*. Lima: Editora Logos E.I.R.L.

Lynch, John (1992) *Caudillos in Spanish America Revolution 1800-1850*. Oxford: Clarendon Press.

Lynch, Nicolás (2014) *Cholificación, república y democracia. El destino negado del Perú*. Lima: OtraMirada.

Lynch, Nicolás (2009) *El argumento democrático sobre América Latina. La excepcionalidad peruana en perspectiva comparada*. Lima: UNMSM, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales

Lynch, Nicolás (2000) *Política y antipolítica en el Perú*. Lima: Desco.

Lynch, Nicolás (1999) *Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los independientes. Perú, 1980-1992*. Lima: UNMSM, Fondo Editorial.

Lynch, Nicolás (1992) *La transición conservadora: Movimiento social y democracia en el Perú, 1975–1978*. Lima: El Zorro de Abajo.

Mackinnon, Moira y Mario Alberto PETRONE (1998) "Los complejos de la cenicienta". En *Populismo y neopopulismo, el problema de la Cenicienta*. Buenos Aires, Eudeba.

Manrique, Nelson (2012 [2011]) "Los justos título de la guerra. De Ginés de Sepúlveda a los PPKausas", en Rosas Laura, Claudia (ed.) *"Nosotros también somos peruanos". La marginación en el Perú. Siglos XVI al XXI*. Lima: PUCP, pp. 187-219.

Manrique, Nelson (2009) *Usted fue aprista. Bases para una historia crítica del APRA*. Lima: PUCP / CLACSO.

Mansilla, H. (2010) "Populismo y cultura política en la América Andina" en *Trayectorias*, Vol. 12, nº 30.

Mansilla, H. (2009) "Notas introductorias sobre el populismo y la cultura política en el área andina de América Latina" en *Araucaria*, Año 11, Nº 22, pp. 85-98.

Márquez, Martha; Pastrana, Eduardo y Guillermo Hoyos (2012) *El eterno regreso del populismo en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana / CLACSO.

Marshall, Pablo (2010) "La soberanía popular como fundamento del orden estatal y como principio constitucional", en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, Vol. XXXV, pp. 245 – 286.

Martín Sánchez, Juan (1996) "Perú Chino a Chino: Discusión inicial en torno al líder populista y la nueva política", en *Socialismo y Participación*, nº 75, pp. 93-106.

Martuccelli Danilo y Maristella Svampa (2007) "Las asignaturas pendientes del modelo nacional-popular. El caso peruano", en González, Jorge Enrique ed. *Nación y nacionalismo en América Latina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO.

Marx, Karl ([1852]) *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*.

Mastromauro, Ricardo (1998) "El crecimiento de las economías de exportación, la crisis de 1930 y el surgimiento del populismo en América Latina" en *Contribuciones*. Vol. 15. nº 58.

Mayorga, René (1995) *Antipolítica y Neopopulismo*. La Paz: Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios.

Mees, Ludger y Xosé Núñez; coords. (2012) *Nacidos para mandar. Liderazgo, política y poder. Perspectivas comparadas*. Madrid: Tecnos.

Melo, Julián (2014) “Los tiempos del populismo. Devenir de una categoría polisémica” en *Colombia internacional*, N° 82, pp. 71-98.

Melo, Julián (2011) “Hegemonía populista, ¿hay otra? Nota de interpretación sobre populismo y hegemonía en la obra de Ernesto Laclau” en *Identidades*, Año 1, n° 1, pp. 48-69.

Mendoza, Thelmy (2015) La comunidad política en el siglo XX y el rol del periodismo escrito en la producción de significados. Tesis para optar el grado de Magíster en Sociología. Lima: PUCP [en línea]
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5936/MENDOZA_MICHILO_T_THELMY MARIA DEL CARMEN COMUNIDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Molina, Julàn y Vedia Grosser (2008) “La construcción del *pueblo*, según Laclau” en *La lámpara de Diógenes*, n° 16-17, pp. 137-157.

Mujica Gallo, Manuel y Enrique Chirinos Soto (1964) *Castilla y Piérola. Biblioteca Hombres de Perú*. Lima: Ed. Universitaria.

Mc McIntock, Cynthia (1994) “Presidents, Messiahs and Constitutional Breakdown in Peru”, en Linz, Juan y Arturo Valenzuela eds. *The failure of Presidential Democracy. Comparative Perspectives*. Baltimore y Londres: The John Hopkins University Press.

Mc Evoy, Carmen (2012) “La República en armas: política, *ciudadanía armada* y elecciones en el Perú, 1871-1872” en: *Elecciones*, v. 11, n.º 12, pp. 265-298.

Mc Evoy, Carmen (2007) *Homo politicus. Manuel Pardo, la política peruana y sus dilemas, 1871-1878*. Lima: PUCP / IRA / ONPE.

Mc Evoy, Carmen (2001 [1855]) “Introducción” en ESPINOZA, Juan. *Diccionario para el pueblo*. Estudio preliminar y edición de Carmen Mc Evoy. Lima: IRA / University of The South – Sewanee.

Mc Evoy, Carmen (1999) *Forjando la nación. Ensayos de historia republicana*. Lima: IRA / The University of the South, Sewanee.

Mc Evoy, Carmen (1997) *La Utopía Republicana. Ideales y realidades en la formación de la Cultura Política Peruana (1871-1919)*. Lima: PUCP.

Mc Evoy, Carmen (1994) *Un proyecto nacional en el siglo XIX. Manuel Pardo y su visión del Perú*. Lima: PUCP.

Medina, Carlos (2003) *Populismo y Neopopulismo. Elementos para una Categorización de Diferencias*. Bogotá: Universidad Nacional, 2003.

Mejía Quintana, Óscar (2012) "Populismo, estado autoritario y democracia radial en América Latina" en Márquez, Martha; Pastrana ,Eduardo y Guillermo Hoyos, *El eterno regreso del populismo en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana / CLACSO, pp. 35-68.

Meléndez, Carlos (2012) *La soledad de la política. Transformaciones estructurales, Intermediación política y conflictos sociales en el Perú (2000-2012)*. Lima: Mitin.

Meléndez, Carlos y Alberto Vergara (2010) *La iniciación de la política. El Perú político en perspectiva comparada*. Lima: PUCP.

Méndez, Cecilia (2006) "Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglos XIX al XX", en *Iconos*. Revista de Ciencias Sociales. N° 26, pp. 17-34 [en línea] http://www.flacso.org.ec/docs/i26_mendez2.pdf

Miro Quesada Laos, Carlos (1961) *Autopsia de los partidos políticos*. Lima: Ediciones Páginas Peruanas.

Molinari, Tirso (2009) *El fascismo en el Perú. La Unión Revolucionaria 1931-1936*. Lima: UNMSM Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.

Molinari, Tirso (2004) *La Unión Revolucionaria 1931-1939. Una aproximación a la historia del fascismo en el Perú*. Tesis para optar el Grado de Magister en Historia. Lima: PUCP [en línea]
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/129/MOLINARI_MORALES_TIRSO_UNION_REVOLUCIONARIA.pdf.txt;jsessionid=C913BA77D41A14D95B996248E91EAE5D?sequence=2

Molinari, Tirso (1998) "El Carisma: Una aproximación desde la teoría sociológica clásica y del psicoanálisis", en *Revista de Sociología*, Vol. X, N° 10, pp. 203-227.

Molinari, Tirso (1996) *Formación del Partido Unión Revolucionaria, crisis política y proceso electoral 1931. Una aproximación al movimiento sanchecerrista*. Tesis de Magister en Sociólogo. Lima: PUCP.

Monge, Carlos (1989) "La Práctica Política Aprista como respuesta a la Crisis de los 80" en Bonilla, Heraclio y Paul W. Drake, *El APRA de la ideología y la praxis*, pp. 127-152.

Morales, F. (1998) "Forma jurídica de estado en el constitucionalismo peruano del siglo XIX", en *Pensamiento constitucional*, N° 4, Lima, pp. 329-350 [en línea] <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3309>

Morán, Daniel (2010) "La causa de los rebeldes no es la causa de la América. El concepto político de pueblo/pueblos durante las guerras de independencia", en *Tiempos Modernos*, Vol. 7, N° 21 [en línea] <http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/196/289>.

Mouffe, Chantal (1999) *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós.

Mouffe, Chantal (1998) *Deconstrucción y pragmatismo*. Buenos Aires: Paidós.

Novoa, Mauricio (2004) "La *civitas inconclusa*: ideas sobre la soberanía de la nación 1860-1900" en McEvoy, Carmen. *La experiencia burguesa en el Perú (1840-1949)*. Frankfurt: Vervuert-Iberoamericana, pp. 267-284.

Nohlen, Dieter (2011) "Conferencia Magistral: El contexto en el análisis politológico", en Pease, Henry y Giofanni Peirano ed. *La democracia y sus instituciones en debate. V Seminario de Reforma del Estado*. Lima: PUCP, pp. 22-45.

Nugent, Guillermo (2010) *El orden tutelar. Sobre las formas de autoridad en América Latina*. Lima: DESCO / CLACSO.

Nun, José (2000) *Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?* México DF: FCE.

Núñez, Francisco (2014) "Democracia y Ciudadanía en el Perú. Una aproximación desde la Historia Conceptual. 1808-1896". Proyecto de Investigación, Instituto de Investigaciones Científicas – Universidad de Lima (IDIC) [en línea] http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/research/files/presentacion_de_informe_final_43.pdf

Núñez, Cayetano y María Núñez (2005) "Los orígenes de las grandes corrientes ideológicas latinoamericanas: el socialismo, el nacionalismo y el populismo" en *Boletín de la Facultad de Derecho*, nº 26, pp. 291-333.

O'phelan, Scarlett (2008) "La construcción del miedo a la plebe en el siglo XVIII a través de las rebeliones sociales" en Rosas, Claudia (ed.) *El miedo en el Perú. Siglos XVI al XX*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP / SIDEA, pp. 123-138.

O'phelan, Scarlett (2002) "Ciudadanía y etnicidad en las Cortes de Cádiz." en *Elecciones*, vol. 1, nº 1. pp. 165-185.

Olivera, G. (2005) "Revisitando el síntoma del *populismo*", en *Metapolítica*, 44 (9), pp.51-58.

Otálora, Rosalvina (2010) "The danger of populism. Macroeconomic populism in Latin America, is Colombia the exception?" en *Prolegómenos*, Vol. XIII, nº 26, Julio – Diciembre.

Orjuela, Luis (2012) "La compleja y ambigua repolitización de América Latina" en Márquez, Martha; Pastrana, Eduardo y Guillermo Hoyos, *El eterno regreso del populismo en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana / CLACSO, pp. 199-219.

Palmer, David (1980) *Peru: The authoritarian Tradition*. Nueva York: Praeger.

Panfichi, Aldo y Omar Coronel (2012) "Cambios en los vínculos entre la sociedad y el estado en el Perú: 1968-2008" en PLAZA, Orlando. *Cambios sociales en el Perú 1968-2008. Homenaje a Denis Sulmont*. 2da Edición, Lima: PUCP, pp. 73-105.

Panfichi, Aldo y Cynthia Sanborn (1997) "Fujimori y las raíces del neopopulismo" en TUESTA, Fernando (Ed.), *Los enigmas del poder: Fujimori 1990-1996*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

Panfichi, Aldo y Cynthia Sanborn (1995) "Democracia y neopopulismo en el Perú contemporáneo". *Márgenes*, año VIII, nº 13/14: 43-67.

Panizza, Francisco, Comp. (2009) *El populismo como espejo de la democracia*. México: FCE.

Paramio, Ludolfo (2006) "Giro a la izquierda y regreso del populismo" en *Nueva Sociedad*, nº 205, pp. 62 – 74.

Pérez-Liñán, Aníbal y Laura Wills-Otero (2009) "La evolución de los regímenes políticos y el sistema electoral en Latinoamérica" en *Elecciones*, v. 8, nº 9, pp. 237-263.

Patiño, Luis (2007) "El neopopulismo en el contexto de la democracia latinoamericana" en *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, Vol. 37, nº 106, pp. 239-261.

Pease, Henry (1988) *Democracia y precariedad bajo el populismo aprista*. Lima: DESCO.

Pease, Henry (1987) "El populismo aprista: ni reformas, ni revolución." *Quehacer*, nº 47: 44-50.

Pease, Henry y Gonzalo Romero (2013) *La política en el Perú del siglo XX*. Lima: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP / Fondo Editorial del PUCP.

Peralta, Víctor (2011) "Un recorrido accidentado. La ley electoral de 1896". En Revista Argumentos, año 5, n.º 1 [en línea] http://web.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_cont=1086 ISSN 2076-7722

Pereyra, Guillermo (2012) "Límites y posibilidades del discurso populista", en *Utopía y Praxis Latinoamericana*, año 17, nº 58, pp. 11-26.

Petrone, Mario (2006) "El Populismo en la Historia", en *Cuadernos de Estudios Latino-Americanos*, N° 2, pp.17-47 [en línea] <http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/2314/1/17-47.pdf>.

Philip, George (1998) "The new populism, presidentialism and market-orientated reform in Spanish South America" en *Government and Opposition*, Vol. 33, nº 1.

Phule, Hans Jürgen (1987) "Populismo en América Latina". En *Revista de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile*, volumen IX.

Piérola, Nicolás de ([1889] 1950) *Partido Demócrata. Doctrinas de D. Nicolás de Piérola. Declaración de principios*. Lima.

Planas, Pedro (1994) *La república autocrática*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

Poblete, Mario (2006) *Populismo en Latinoamérica. Ensayo de Sociología Comparada*. Tesis de Grado de Magíster en Sociología. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile [en línea] <https://mariopoblete.files.wordpress.com/2009/06/populismo-latinoamericano-ensayo-de-sociologia-comparada.pdf>

Portocarrero, Gonzalo (2012) "¿Del mito revolucionario al mito del desarrollo humano?" en *Profetas del odio. Raíces culturales y líderes del Sendero Luminoso*. Lima: PUCP, pp. 239-251.

Portocarrero, Gonzalo (2006) "Caudillismo y Oligarquía" en *Libros y Artes. Revista de Cultura de la Biblioteca Nacional del Perú*, nº 16-17.

Portocarrero, Gonzalo (1987) "Conservadurismo, liberalismo y democracia en el Perú del siglo XIX" en ADRIÁNZEN, Alberto (ed.) *Pensamiento político peruano*, Lima: Desco, pp. 85-98.

Portocarrero, Gonzalo (1982) "La oligarquía frente a la reivindicación democrática (las opciones de la derecha en las elecciones de 1936" en *Apuntes*, nº 12, pp. 61-73.

Postel, Charles (2007) *The populist vision*. New Cork: Oxford University Press.

Quijano, Aníbal (1999) "Populismo y fujimorismo", en Burbana de Lara, Felipe. *El fantasma el populismo. Aproximación a un tema (siempre) actual*. Quito: Editorial Nueva Sociedad, pp. 171-205.

Quijano, Aníbal (1985) *Imperialismo, clases sociales y estado en el Perú 1890-1930*. 2da Edición. Lima: Mosca Azul Editores.

Quintero, Rafael (2004) *Nueva crítica al populismo*. Quito: Abya – Yala.

Quiroz, Alfonso (2013) *Historia de la corrupción en el Perú*. 1ra reimpresión. Lima: IEP / IDL.

Quiroz, María Teresa (1986) El Partido Aprista y su organización 1930-1933. Tesis para optar el grado de Magíster en Sociología. Lima: PUCP.

Ragas, José (2008) "Las urnas temibles. Elecciones, miedo y control en el Perú republicano, 1810-1931" en ROSAS LAURO, Claudia (ed.) *El miedo en el Perú. Siglos XVI al XX*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP / SIDEA, pp. 233-256.

Ragas, José (2006) "Clío en las urnas. La historiografía electoral sobre el Perú. Estado de la cuestión y guía bibliográfica (1810-1930)" en *Elecciones*, vol. 5, nº 6, pp. 243-272.

Reano, Ariana (2012) "Los populismo realmente existentes repensar la relación entre populismo y democracia a partir de dos experiencias latinoamericanas contemporáneas" en *Pensamiento Plural*, nº 10, pp. 59-88.

Rénique, José Luis (2015) *Incendiar la pradera. Un ensayo sobre la Revolución en el Perú*. Lima: La Siniestra.

Retamozo, Martín (2012) "Democracias y populismos en América del Sur: Otra perspectiva. Un comentario a «La democracia en América Latina: la alternativa entre populismo y democracia deliberativa» de Osvaldo Guariglia" en *ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política*, nº 47, pp. 615-632.

Retamozo, Martín (2006) "Populismo y teoría política: de una teoría hacia una epistemología del populismo para América Latina" en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 12, nº 2, pp. 95-113.

Reyna, Carlos (2000) *La anunciación de Fujimori. Alan García 1985-1990*. Lima: Desco. [en línea] <http://lanic.utexas.edu/project/laoap/desco/desco00001.pdf>

Roberts, Kenneth M. (1995) "Neoliberalism and the transformation of populism in Latin America. The Peruvian case" en *World Politics*, nº 48.

Roberts, Kenneth M. (2006) "Populism, Political Conflict, and Grass-Roots Organization in Latin America: A Comparison of Fujimori and Chávez" en: *Comparative Politics*, 38 (2), pp.127-148.

Rodriguez-Castelo, Ruby (1991) Análisis crítico de la noción *populismo* en la literatura [en línea]. Tesis para la obtención del grado de Maestro en Ciencias Políticas con Mención en Políticas Comparadas de los Países Andinos. Quito: FLACSO.
<http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/364/3/TFLACSO-1991RRC.pdf>

Roncagliolo, Rafael (1980) *¿Quién ganó? Elecciones 1931-1980*. Lima: Desco.

Rosanvallon, Pierre (2006) "La historia de la palabra "democracia" en la época moderna" [traducción del francés de Isidro Vanegas], en *Estudios Políticos*, Nº 28, pp. 9-28 [en línea]
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/28/01%20rosanvallon.pdf>

Rosanvallon, Pierre (1999) *La consagración del ciudadano. Historia del sufragio universal en Francia*. México: Instituto Mora.

Rosas Lauro, Claudia. ed. (2008) *El miedo en el Perú. Siglos XVI al XX*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP / SIDEA.

Roseberry, William (2002) "Hegemonía y lenguaje contencioso" en Joseph, Gilbert M. y Nugent, Daniel. *Aspectos cotidianos de la formación del estado*. México: ERA, pp. 213-226.

Rosseau, Stephanie (2012) *Mujeres y ciudadanía. Las paradojas del neopopulismo en el Perú de los noventa*. Lima: IEP.

Rossi, Miguel Ángel (2012) "El controvertido concepto de democracia en Aristóteles" en Márquez Restrepo, Martha; Pastrana Buelvas y Guillermo Hoyos Vásquez, *El eterno regreso del populismo en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana / CLACSO, pp. 19-34.

Rudé, George 2009 [1964] *La multitud en la historia. Las disputas populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848*. Madrid: Siglo XXI.

Ruíz, Rafael (2014) La influencia liberal en el pensamiento constitucional peruano y en las constituciones del siglo XX. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho Constitucional Lima: PUCP [en línea]
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5792/RUIZ_HIDALGO_RAF

[AEL_INFLUENCIA_LIBERAL.pdf;jsessionid=4703628DFB773C70A2FB6E0AB7D07E42?sequence=1](https://www.repositorio.cepal.org/bitstream/handle/4703628DFB773C70A2FB6E0AB7D07E42?sequence=1)

Ruíz, Augusto (2001) *La multitud, las subsistencias y el trabajo. Lima, 1890-1920*. Lima: PUCP.

Ruiz Valerio, José (2006) “¿La lógica del populismo o el populismo bajo otra lógica? Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica”, en *CONfines* 2/3, pp. 103-107.

Salinas Sàncchez, Alejandro (2014) *La época del “pan grande” Billinghurst presidente 1912-1914*. Lima: UNMSM / Seminario de Historia Rural Andina (SHRA-UNMSM).

Salinas Sàncchez, Alejandro (2013) *Polos opuestos: salarios y costos de vida 1821-1879*. Lima: UNMSM / Seminario de Historia Rural Andina (SHRA-UNMSM).

Salinas Sàncchez, Alejandro (2012) *El califato de Piérola 1895-1899*. Lima: UNMSM / Seminario de Historia Rural Andina (SHRA-UNMSM).

Salinas Sàncchez, Alejandro (2003) *Caudillos, partidos políticos y nacionalismo en el Perú / 1850-1879*. Lima: UNMSM / Seminario de Historia Rural Andina (SHRA-UNMSM).

Sanborn, Cynthia (1989) “El APRA en un contexto, 1968-1988” en BONILLA, Heraclio y Paul W. Drake, *El APRA de la ideología y la praxis*, pp. 91-125.

Sanborn, Cynthia (1991) *The democratic left and the persistence of populism in Peru: 1975-1991*. Tesis doctoral en la especialidad de gobierno. Cambridge: Harvard University.

Sardón, José Luis (1994) *Estado, política y gobierno*. Lima: Universidad del Pacífico.

Sarmiento, Jorge Antonio (2015) *Implicancias de la Reforma Agraria en el campesinado y la desarticulación conflictiva: El caso de Antapampa*. Tesis para optar el Grado de Licenciatura en Historia. Lima: UNMSM.

Savarino, Franco (2006) “Populismo: perspectivas europeas y latinoamericanas”, en *Espiral*, Estudios sobre Estado y Sociedad Vol. XIII nº 37, pp. 77-94.

Sayer, Derek (2002) “Formas cotidianas de formación del estado: algunos comentarios disidentes acerca de la *hegemonía*” en JOSEPH, Gilbert M. y NUGENT, Daniel. *Aspectos cotidianos de la formación del estado*. México: ERA, pp. 227-238.

Schamis, Hector E. (2006) "A "Left Turn" in Latin America? Populism, Socialism, and Democratic Institutions" en *Journal of Democracy*, 17(4): 20-34.

Schuldt, Jürgen (1986) "Desinflación y reestructuración económica en el Perú, 1986-86" en VV. AA. *Inflación cero*, Bogotá: Editorial Oveja Negra, pp. 119-203.

Selligson, Mitchell (2007) "The Rise of Populism and the Left in Latin America", en *Journal of Democracy*, nº 18.

Sotelo, Ignacio (1977) "Modelos de explicación del militarismo latinoamericano: una interpretación histórica" en *Papers: Revista de Sociología*, nº 7, pp. 65-89.

Stallings, Barbara (1989) "Autodestrucción de una Iniciativa Positiva: La Política de la deuda peruana bajo Alan García" en Bonilla, Heraclio y Paul W. Drake, *El APRA de la ideología y la praxis*, pp. 293-320.

Sobrevilla, Natalia (2011) "Elecciones y conflicto en la historia del Perú" en *Elecciones*, v. 10, n.º 11, pp. 9-32.

Soriano de García-Pelayo, Graciela (1990) "Aproximaciones al personalismo político Hispanoamericano del siglo XIX", en *Revista del Centra de Estudios Constitucionales*, Nº 7, pp. 203-218.

Sosa de León, Mireya (2004) "Populismo y Getulismo en el Brasil de Getulio Vargas, 1930-1945/1950-1954", *Tierra Firme*, Vol. 22, Nº 88 [en línea] http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079829682004000400005&lng=es&nrm=is

Stein, Steve (1983) "La sociedad oligárquica: cultura popular y política popular en los comienzos del siglo XX en Lima", en Franco, Carlos (Coord.) *El Perú de Velasco*. Tomo I. Lima: CEDEP, pp. 99-123.

Stein, Steve (1980) *Populism in Perú. The emergence of the Masses and the Politics of Social Control*. Madison: Wisconsin Press.

Stoessel, Soledad (2010) Las categorías de hegemonía, antagonismo y populismo en la teoría política contemporánea. Una aproximación desde los estudios postmarxistas de Ernesto Laclau [en línea]. Tesina para la Licenciatura en Sociología. Universidad Nacional de la Plata. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.528/te.528.pdf>

Taguieff, P. (1996) "Las ciencias políticas frente al populismo: De un espejismo conceptual a un problema real", en *Populismo posmoderno*, AA. VV. Quilmes: Universidad de Quilmes, pp. 29- 79.

Tamariz Lucar, Domingo (1995) *Historia del poder elecciones y golpes de estado en el Perú*. Lima: J. Campodónico.

Tantaleán Arbulú, Javier (1989) "Política Económica del Aprismo" en Bonilla, Heraclio y Paul W. Drake, *El APRA de la ideología y la praxis*, pp. 201-214.

Tantaleán Arbulú, Javier (1983) *Política económico-financiera y la formación del estado: Siglo XIX*. Lima: CEDEP.

Tella, Torcuato di (1965) "Populismo y reforma en América Latina", en *Desarrollo Económico*, nº 16.

Thompson, E. P. (1979b) "La economía *moral* de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII" en *Tradición, revuelta y conciencia de clases. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Barcelona: Crítica, pp. 62-134.

Thompson, E. P. (1979a) "La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿Lucha de clases sin clases?" en *Tradición, revuelta y conciencia de clases. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Barcelona: Crítica, pp. 13-61.

Thwaites Rey, Mabel (2012) *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas*. Santiago de Chile: Editorial ARCIS / CLACSO.

Torrejón, Luis Alberto (2010) *Rebeldes republicanos: la turba urbana de 1912*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

Torrejón, Luis Alberto (2006) Lima 1912: Estudio social de un motín urbano. Tesis para optar al Título de Licenciado en Historia. Lima: PUCP.

Torrejón, Luis Alberto (1995) "Lima 1912: El caso de un motín popular urbano", en Panfichi, Aldo y Felipe Portocarrero (eds.) *Mundos interiores: Lima 1850-1950*. Lima: Universidad del Pacífico, pp. 315-339

Torres Arancivia, Eduardo (2010) *La voz de nuestra historia. El poder de la oratoria civil y religiosa en el Perú (siglos XVI-XIX)*. Lima: UPC.

Torres Arancivia, Eduardo (2007) *Buscando un rey: el autoritarismo en la historia del Perú, siglos XVI-XXI*. Lima: PUCP.

Trazegnies, Fernando de (1979) *La idea de derecho en el Perú Republicano del siglo XIX*. Lima: PUCP.

Trazegnies, Fernando de (1987) "La genealogía del derecho peruano. Los juegos de trueques y préstamos" en ADRIÁNZEN, Alberto (ed.) *Pensamiento político peruano*, Lima: Desco, pp. 99-133.

Tuesta Soldevilla, Fernando (2002) "La investigación sobre elecciones: un balance necesario" en *Elecciones*, v. 1, nº 1, pp. 21-40.

Ubillúz, Juan Carlos (2010) "La política del síntoma. De la democracia radical al populismo (y de vuelta a la lucha de clases)" en Portocarrero, Gonzalo; Ubillúz, Juan Carlos y Víctor Vich. *Cultura Política en el Perú*. Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales, pp. 291-317.

Ulloa, Alberto (1981) *Nicolás de Piérola*. Lima: Editorial Minerva. CCSS F 3447 U36

Valenzuela, Macarena (2009) "El enfoque teórico conceptual de los populismos en América Latina" en *Estudios Avanzados*, nº 12, pp. 105-123.

Valle-Riestra, Javier (1988) *La responsabilidad constitucional del Jefe de Estado*. Lima: Editorial Labrusa S.A.

Vallés, Josep M. (2007) *Ciencia política. Una introducción*. Barcelona: Ariel.

Vargas Haya, Héctor (2005) *Perú: 184 años de corrupción e impunidad*. Lima: Editorial Rocío.

Vargas Haya, Héctor (1994) *Frustración, democracia y corrupción en el Perú*. Lima: Editorial Milla Batres.

Vásquez Torres, Henry (2009) "La seguridad nacional y totalitarismo, el resurgimiento del populismo, *Revista Diálogo de Saberes*, pp. 141-155.

Vega, Facundo (2006) "¿Populismo *resemantizado*? Variaciones del sentido Ernesto Laclau: *La razón populista*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, 312 páginas", en *Astrolabio. Revista internacional de filosofía*, nº 3, pp. 116-122.

Vega Centeno, Imelda (1999) "El desborde aprista: 1985-1990", en Burbana de Lara, Felipe. *El fantasma el populismo. Aproximación a un tema (siempre) actual*. Quito: Editorial Nueva Sociedad, pp. 207-226.

Vega Centeno, Imelda (1994) *Simbólica y política (Perú 1978-1993)*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

Vergalita, Esteban (2007) "Devenires de la teoría del populismo: Marxismo, Postestructuralismo y Pragmatismo en Ernesto Laclau" en LÉRTORA MENDOZA, Celina (Coord.) *Evolución de las ideas filosóficas: 1980-2005. XIII Jornadas de pensamiento filosófico argentino*. Buenos Aires: FEPAI, pp. 36-46.

Vergara, Alberto (2015) "Olas y tornados: apuntes sobre el uso de la historia de la democratización en América Latina", en Tanaka, Martín y Eduardo Dergent. *¿Qué implica hacer ciencia política desde el Sur y desde el Norte*. Lima: Escuela de Gobierno y e Políticas Públicas de la PUCP.

Velásquez Silva, David (2013) La reforma militar y el gobierno de Nicolás de Piérola. El Ejército moderno y la construcción del Estado peruano. Tesis para optar el grado académico de magíster en Historia. Lima: UNMSM [en línea] <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/3391>

Venturi, Franco (1970) *El populismo ruso*. Madrid.

Vergara, Alberto (2013) *Ciudadanos sin república. ¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana?*. Lima: Editorial Planeta.

Vergara, Alberto (2007) *Ni amnésicos ni irracionales. Las elecciones peruanas de 2006 en perspectiva histórica*. Lima: Solar Central de Proyectos.

Viguera, Aníbal (1993) "Populismo y neopopulismo en América Latina" en *Revista Mexicana de Sociología*, nº 55 (3), pp. 49-66.

Vilas, Carlos M. (2004) "¿Populismos Reciclados o Neoliberalismo a Secas?", en *Los Nuevos Populismos y la Movilización Social*. Bogotá: Observatorio Andino.

Vilas, Carlos M. (1994) *La Democratización fundamental. El populismo en América Latina*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Vilas, Carlos M. (1988) "El populismo latinoamericano: un enfoque estructural" en: *Desarrollo Económico*, 28 (111), pp. 323-352.

Villavicencio, Susana (2012) "El pueblo de la democracia, forma y contenido de la experiencia populista" en Márquez Restrepo, Martha; Pastrana Buelvas y Guillermo Hoyos

Vásquez, *El eterno regreso del populismo en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana / CLACSO, pp. 223-235.

VV.AA. (1987) *El Perú heterodoxo. Un modelo económico*. Lima: Instituto Nacional de Planificación.

VV. AA. (2004) *Repensar el populismo*. Serie *Diálogos*. Quito: Centro Andino de Acción Popular –CAAP.

Waisbord, Silvio (2013) *Vox populista. Medios, periodismo, democracia*. Barcelona: Editorial Gedisa.

Walicki, Andrzej (1971) *Populismo y Marxismo en Rusia*. Barcelona: Editorial Estela.

Weffort, F. y Aníbal Quijano (1973) *Populismo, marginalización y dependencia: Ensayos de interpretación sociológica*. San José de Costa Rica: Universitaria Centroamericana.

Weffort, F. y Aníbal Quijano (1968) "Clases populares y desarrollo social (contribución al estudio del *populismo*) en *Revista paraguaya de Sociología*, 5, nº 3, pp. 62-154.

Werz. Nikolaus (2012) "Populismo y democracia en América Latina" Márquez Restrepo, Martha; Pastrana Buelvas y Guillermo Hoyos Vásquez, *El eterno regreso del populismo en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana / CLACSO, pp. 181-197.

Weyland, Kurt (2004) "Clarificando un concepto *el populismo en el estudio de la política latinoamericana*" en VV. AA. *Releer los populismo*, pp. 9-50.

Weyland, Kurt (2001) "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics", en *Comparative Politics*, nº 34 (1), pp. 1-22.

Weyland, Kurt (1999) "Neoliberal populism in Latin America and eastern Europe", *Comparative Political Studies*, Vol. 31, nº 4.

Weyland, Kurt (1998) "Swallowing the Bitter Pill: Sources of Popular Support for Neoliberal Reform in Latin America". *Comparative Political Studies*, Vol. 31, nº 5.

Weyland, Kurt (1997) "Neopopulismo y neoliberalismo en América Latina: Afinidades inesperadas", *Pretextos*, N°10, pp. 7-43.

Whipple, Pablo (2013b) *La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano*. Lima: IEP / Centro de Investigación Diego Barros Arana / Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile / Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Zanatta, Loris (2008) "El populismo, entre religión y política. Sobre las raíces históricas del antiliberalismo en América Latina" [en línea] http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=175

Zanatta, Loris (2014) *El populismo*. Buenos Aires: Katz.

Zapata Antonio (1995) *El joven Belaunde. Historia de la revista El Arquitecto Peruana*. Lima Editorial Minerva.

Zermeño, Sergio (1993) "Populismo y 'neopopulismo' en América Latina". *Revista Mexicana de Sociología*, nº 3.

Zizek, Slavoj (2011) *En defensa de causas perdidas*. Madrid: Akal.

Zizek, Slavoj (2001) *El sublime objeto de la ideología*. México: Siglo XXI.